

Itinerario de la Esperanza y el Desconcierto

Ensayos sobre Política, Sociedad y Democracia en Bolivia

Franco Gamboa Rocabado

La Paz, **Muela del Diablo Editores**, Enero de 2001

Índice

Introducción	p. 5
1. La Perspectiva Profunda:	
Mirando Una Vez Más a La Revolución Nacional De 1952	p. 8
2. Los Problemas De La Recuperación Democrática:	
Las Encrucijadas Del Sistema Político En Bolivia	p. 97
3. La Utopía De No Ser Pobres:	
Cómo Las Políticas Sociales Se Someten Al Ajuste Liberal	p. 114
4. El Katarismo:	
Mitos, Utopías y Preguntas sin Respuestas	p. 170
5. Víctor Hugo Cárdenas:	
El Indio Cartesiano	p. 177
6. Declive y Caída De La Izquierda En Bolivia:	
La Imposibilidad De Alternativas Revolucionarias	p. 187
7. El Valor de Criticar y El Apocamiento De Los Intelectuales	p. 190
8. Poniendo En Escena La Dramatización Política:	
Los Medios De Comunicación Como Nuevos Actores Políticos	p. 195
9. La Travesía Del Desencanto:	
Los Jóvenes Frente a La Política y Al Escepticismo	p. 210
10. La Incertidumbre Actual:	
Bolivia y Su Liberalismo Ambiguo	p. 233
11. Reconfigurando La Práctica Política:	
El Nuevo Perfil Para Solucionar Problemas Concretos	p. 236
12. El Mercado Mundial y Su Imprescindible Abordaje Más Allá Del Riesgo	p. 240
13. La Irrupción Del Nuevo Individualismo:	
Enfrentando Lo Inevitable Sin Mesías Ni Utopías Colectivas	p. 245

En política se vive siempre sobre un volcán. Hay que estar preparados para súbitas convulsiones y erupciones. En todos los momentos críticos de la vida social del hombre, las fuerzas racionales que resisten al resurgimiento de las viejas concepciones míticas, pierden la seguridad en sí mismas. En estos momentos, se presenta de nuevo la ocasión del mito. Pues el mito no ha sido realmente derrotado y subyugado. Sigue siempre ahí, acechando en la tiniebla, esperando su hora y su oportunidad.

Ernst Cassirer, *El Mito del Estado*

Introducción

Reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo implica la posibilidad de hacer un alto en el camino y esforzarnos por mirar con sensatez los acontecimientos más importantes en la historia de Bolivia. En este intento, encontramos que nuestra realidad está fuertemente influenciada por la pobreza, la diversidad étnica y los errores cometidos durante momentos cruciales como la Revolución de 1952, la subordinación frente a las condiciones actuales del ajuste estructural en los años 80, las visiones míticas provenientes del Katarismo, los retos y encrucijadas de nuestro sistema democrático, el escepticismo, las enormes exigencias de una economía de mercado, el poder ejercido por los medios de comunicación, y la progresiva desaparición de utopías de cambio social en los 90. El lugar que tenemos en el mundo nos pone de frente a nuestra herencia histórica en donde encontramos un extraño itinerario de desconcierto, duda y esperanza.

Los 13 ensayos que a continuación se presentan quieren ser un aporte para explicar cuáles son las condiciones políticas, sociales, culturales y económicas que más han marcado nuestras vidas durante los últimos 20 años. Cómo y en qué condiciones nos aprestamos a ingresar al siglo XXI, de qué manera se concibió nuestra modernización y cuáles son los problemas irresueltos que todavía necesitamos encarar responsablemente. ¿Estamos preparados para el cambio y para desterrar viejos hábitos?

En este recorrido reflexionamos sobre la pobreza como el núcleo de nuestra mayor angustia y frustración, pues las estadísticas y los indicadores económicos decepcionantes han mandado al traste todo sueño de modernización y desarrollo. En los escaparates del país, hoy día aparecen en primer plano el atraso, la dependencia, una mentalidad todavía estatal, y la asfixiante incapacidad que nos impide competir con otros países en una economía mundializada.

Cuando nacimos como República, el Siglo de las Luces y los ideales políticos de la Revolución Francesa habían acicalado los núcleos guerrilleros del viejo Alto Perú para dar muerte a la Corona española. Nuestro nuevo Estado rápidamente se organizó en medio de gérmenes malignos e intereses mezquinos que dieron lugar a la “dramática insurgencia en Bolivia”. Traiciones, conspiraciones para repartirse el poder y la formación de nuevas logias cuyo propósito era proseguir con la explotación colonial, esta vez, sobre la base de un dominio oligárquico criollo, pronto mostraron que fundar y construir un país son tareas tremendamente contradictorias y dolorosas.

Comenzando el siglo XX, la tragedia de haber parido un país nos lanzó, vengativa, contra otra dramática erupción: los obstáculos al desarrollo. Las tensiones giraron en torno al problema de las masas indígenas, pues para algunos la raza se convertía en un lastre de modernización. Sin embargo, otros apuntaban a la discriminación y al surgimiento de un Estado parroquial, como la traba fundamental para el desarrollo. La inequidad y el sojuzgamiento entre compatriotas desarmaron, desde un comienzo, nuestra posibilidad de alcanzar una modernización de corte europeo o norteamericano.

Desde 1825, diferentes protagonistas se enfrentaron con los dilemas del desarrollo en Bolivia. Los patriarcas de la plata construyeron un emporio, solamente para el Occidente del país. Su decadencia dio paso después a los Barones del estaño que, a su vez, se convirtieron en otra oligarquía que tampoco pudo asumir la modernización con justicia y equidad. La hegemonía de los Barones del estaño fue quebrada por la nacionalización de las minas y el azote de la Revolución de abril.

A mediados del siglo XX, la Revolución del 52 configuró un Estado que habría de regir intensamente por 30 años en medio de conflictos y degeneraciones autoritarias. Todo con el fin

de madurar una burguesía nacional que también, se suponía, nos permitiría alcanzar el desarrollo. ¡Desarrollo! Maldita palabra que de tanto repetirla ya produce náuseas.

Patriarcas plateros, oligarcas estañíferos y burguesía nacional amamantada por el Estado terminaron trasladando el problema del desarrollo y la modernización al ático de los objetos inservibles de nuestra sociedad. Hoy confrontamos tantos problemas como si jamás hubiésemos intentado construir nuestra nación o remontar nuestras crisis.

El modelo de desarrollo proveniente del 52 se destruyó por su propio peso: deuda externa, improductividad, Estado obeso y deforme, crisis fiscal e incapacidad para transformarse o adaptarse a los cambios desde adentro. La modernización, a través de la sustitución de importaciones, subvenciones estatales y el proyecto de una burguesía, cayó destruida, junto con los restos de gobiernos dictatoriales y populistas, y como consecuencia de la corrupción e ineficiencia estructural.

Actualmente, apenas intentamos subsistir como náufragos nadando en medio de los tormentos de la democracia, los ajustes estructurales y una serie de medidas que son regidas por los organismos internacionales y la permanente dependencia de la cooperación extranjera. ¿De qué manera y cómo podemos tratar de rescatar al país de tres cuartos de siglo con miseria, despropósito e intentos fallidos de modernización? ¿En qué momento se estropeó nuestro país? La respuesta es tajante: todo es demasiado incierto.

Seamos sinceros y dejemos los embauques. Hemos perdido una serie de oportunidades y desperdiciado tantos recursos, esfuerzos e ilusiones en los últimos 20 años que, tal vez, lo único que podemos lograr como país es otorgar a las masas pobres un estatus de seres humanos y satisfacer sus necesidades mínimas, además de intentar mirarnos a los ojos una vez más,

reconocer nuestros errores y recapacitar interminablemente sobre lo que nos queda de responsabilidad para con nosotros mismos.

1. La Perspectiva Profunda: Mirando Una Vez

Más a La Revolución Nacional De 1952

La Revolución Nacional o Revolución de Abril de 1952 constituyó el acontecimiento histórico más importante de la segunda mitad del siglo XX. No sólo porque fue un hecho político de masas sin parangón hasta la actualidad, sino porque terminó destruyendo toda una estructura de poder que se desarrolló desde la fundación de la República, extendiéndose, además, como un proyecto de largo plazo hasta bien entrada la década de los años ochenta, momento en el que se agotó y entró en decadencia.

Como lo afirman algunos analistas, la Revolución del 9 de abril fue un acto moderno y como todo acto moderno va a ser continuamente resignificado o reinterpretado en la historia. Va a ser resignificado porque todo momento histórico trata de buscar sentido a su acontecer resignificando lo que sucedió antes. La Revolución Nacional como un hecho moderno en la historia de Bolivia nos permite comprender aquellos horizontes por los cuales transitaron nuestros anhelos de modernización a través de diferentes procesos de *ruptura*. La modernidad traída por la Revolución abrió un período de *escisión*. Por un lado se dio paso al trauma y la violencia como los principales recursos para dejar de ser una sociedad atrasada, rural y oligárquica; por otro lado, la Revolución se vio frente a las exigencias por construir un porvenir inédito. Asimismo, el tiempo de la Revolución Nacional fue también el de los efectos perversos o no previstos, el tiempo político de la discordia irreconciliable, personalismo, prebendalismo, autoritarismo, degeneración militar y turbios hábitos en el manejo del poder que todavía se practican hasta ahora.

Este concepto de la Revolución como acontecimiento moderno y como escisión nos obliga a mirar de frente las condiciones socio-políticas y económicas que llevaron a determinados actores políticos a actuar de determinada manera, a provocar consecuencias específicas y, por lo tanto, a transmitir una herencia histórica que nos estimula a resignificar constatemente nuestro pasado. Las características y efectos que tuvo la Revolución Nacional permitirán resignificar lo que entendemos por modernización, desarrollo y transformación de la sociedad boliviana, así como poner atención en nuestras frustraciones y errores cuyo impacto aún marcan nuestra perspectiva para proyectarnos hacia el futuro.

Al volver a mirar la Revolución Nacional es importante partir de la descomposición del modelo liberal que imperó en Bolivia a comienzos de 1900. De esta manera, se hará un análisis político sobre las condiciones en que fueron socavadas las bases de modernización liberal, para dar paso a una nueva estructura de poder y a un nuevo rediseño del Estado boliviano caracterizado como *centralista* y *totalizador*. Con la Revolución de abril, los conflictos políticos fueron reorientados hacia una nueva mirada nacional, instaurándose un Estado providencial y autoritario. En consecuencia, se responderá a las siguientes interrogantes: ¿cuáles fueron los desequilibrios entre el Estado boliviano y sus regiones, desde los comienzos de siglo hasta el advenimiento de la Revolución de abril de 1952? ¿Cómo pueden caracterizarse los conflictos entre el Estado y los municipios o poderes locales del país, a partir de una visión donde imperaban diferentes reivindicaciones autonomistas que reclamaban las regiones? Finalmente, ¿cuáles fueron las condiciones políticas que estableció la Revolución de abril para rearticular un nuevo centralismo nacional que hiciera posible la refundación del Estado, abriendo el paso para la posibilidad de construir una nueva élite económica y política?

La Revolución Nacional se impuso como un *peso controlador* sobre todo el país y conformó una situación de “*colonización estatal*”¹ bajo la égida del nacionalismo revolucionario, ideología y práctica políticas que, con sus contradicciones y aciertos, dominó toda la estructura del poder en Bolivia entre 1952 y la década de los 80.

La gestación, desenvolvimiento y contradicciones que tuvo la Revolución de abril, representan un momento de modernización en la historia cultural del país, porque al mismo tiempo que se combatió contra la dominación de una oligarquía de carácter señorial y orientada hacia un capitalismo extractivo², la Revolución Nacional se conectó con otros tres actos modernos de nuestra historia: en primer lugar, con las reformas liberales de principios del siglo XX; en segundo lugar, con la crisis de hegemonía y legitimidad de la oligarquía estañífera-feudal; y en tercer lugar, con la búsqueda de una industrialización acelerada cuya crisis desembocó en la democracia de los años 80, volcando la mirada una vez más hacia las reivindicaciones de los poderes regionales. El análisis de los resultados de la Revolución permitirá ver cómo nuestros proyectos de desarrollo estuvieron sometidos al vaivén entre *desarrollo nacional* subordinado a un Estado centralista, y *desarrollo regional* orientado hacia una descentralización y demandas por mayor democratización del poder.

¹ Cfr. SANJINÉS, Javier. **Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia**, ILDIS-BHN, La Paz, 1992.

² Se entiende por **capitalismo extractivo** aquella estructura económica que se orientaba hacia el mercado mundial de minerales y estaba bajo el control de un conjunto de empresarios privados propietarios de capital y medios de producción, quienes contrataban fuerza de trabajo obrera, otorgando un salario y estableciendo relaciones sociales de producción desiguales, en la medida que el objetivo final de los empresarios mineros era la obtención de altas tasas de ganancia y su conexión con otras economías transnacionales, dentro del capitalismo internacional como sistema-mundo. Cfr. WALLERSTEIN, Immanuel. **El capitalismo histórico**, Siglo XXI, México, 1989.

El contexto inicial: de los conflictos entre el Estado y las regiones, a la crisis del modelo liberal

Desde que se fundara la República, las tensiones entre el nuevo Estado boliviano – sometido a una serie de ambiciones de poder provenientes de distintos caudillos militares– y las demandas autonomistas emergentes de las identidades regionales, fueron una marca que atravesaría la historia nacional hasta nuestros días. Los diferentes caudillos que habían peleado junto a los ejércitos libertarios, pronto se vieron enfrentados con una heterogeneidad enorme al interior de la nueva República de Bolivia. En estas circunstancias, los caudillos eran mediadores, *intermediarios entre dos mundos*, entre aquel que configuraba la tradición colonial con su sistema político de referencias grupales, fuertemente vertical y orientado hacia un linaje aristocrático, y la *modernidad de igualdad de ciudadanía* a la que aspiraban las élites ilustradas, por lo menos en teoría, según los postulados de la ilustración francesa o la democracia norteamericana que se irradiaron con cierta fuerza luego de la independencia³.

El Estado boliviano era débil y las pugnas entre republiquetas permanente, de tal manera que la única estrategia política de estabilidad en los primeros años después de la independencia fue la lógica del *pacto o tregua* a la que podían llegar los líderes militares; sin embargo, tal estrategia no tardó en ser contradictoria y vacilante. O se sancionaba una constitución política que configurara un Estado centralista y enérgico, o se instauraba un *poder disociado* donde las autonomías regionales asumirían una administración independiente en lo económico y político, tal vez de una manera similar al modelo federal norteamericano.

³ Cfr. RODRÍGUEZ OSTRÍA, Gustavo. **Estado y municipio en Bolivia**, Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Secretaría Nacional de Participación Popular, La Paz, 1995, p. 34 y ss.

Entre 1910 y 1920 se optó por la primera alternativa: construir la nación y el Estado, tratando de centralizar el poder al máximo, lo cual daba lugar a un fenómeno con dos características. Primero, “un Estado que para responder a su mayor estratificación interna y creciente diferenciación cualitativa en sus tareas, demandaba funciones más abarcativas”⁴. Segundo, surgió una nueva complejidad que, poco a poco, iba adquiriendo notoriedad política: la *gestión municipal* que, al mismo tiempo, todavía no se diferenciaba de la administración regional.

El Estado, a escala central, debía otorgar, sobre todo, articulación geográfica para explotar las riquezas naturales en beneficio de un desarrollo integral y moderno. Entretanto, en el ámbito local o municipal cobraban fuerza las voces que buscaban consolidar un sistema urbano donde la participación política de las élites letradas sea el principal instrumento de acción, puesto que solamente una minoría letrada podía orientar el desarrollo de la República, sobre la base de fuertes vínculos con la naciente economía minera del estaño y con la expansión de las haciendas rurales. De ahí que las haciendas apoyaran a un Estado fuerte que no cuestione la servidumbre indígena, ni tampoco la posibilidad de considerar derechos civiles y políticos para grandes sectores de la sociedad boliviana considerados ignorantes y subordinados al poder de un patrón. Así se iba construyendo una visión sobre el manejo del poder y la configuración del Estado que siempre promovió la exclusión de las masas indígenas, hecho que al mismo tiempo impedía conformar un proceso de unidad nacional.

Luego de la Guerra Civil de 1898, el Estado quedó bajo el control de los liberales quienes, contradictoriamente, se negaron a poner en práctica sus propuestas federalistas, asumiendo más bien una concepción *centralista del poder*, con cierto temor para reconocer las

⁴ Idem., ob. cit., p. 52.

demandas municipalistas de orientación autónoma. Durante las primeras dos décadas y media del siglo XX, los ferrocarriles fueron aquella expresión práctica del centralismo y la modernización propugnados por los presidentes José Manuel Pando e Ismael Montes. Por un lado, los ferrocarriles constituyeron el proyecto moderno más importante llevado a cabo por el Estado y, por otro, la manifestación de un desequilibrio entre diferentes regiones, ya que tales ferrocarriles se convirtieron en la llave de *acceso* o *encierro* que tenían diversos departamentos bolivianos para conectarse con el mercado interno y externo; por lo tanto, el ferrocarril acabó siendo el centro de la disputa interregional. Mientras La Paz y Oruro pugnaban por vincularse con el mercado mundial para exportar con mayor facilidad sus minerales, Cochabamba y Santa Cruz, hacían lo propio tratando de enviar su producción agrícola a las zonas andinas. Dentro de este nuevo molde de dominación liberal, el sur y oriente del país quedarían postergados hasta la llegada de la revolución nacional que, como se verá más adelante, presionarían para abrir otra posibilidad de vertebración caminera, sobre la base de otro proyecto económico articulado al desarrollo de una burguesía agroindustrial en Santa Cruz.

El modelo liberal: contradicciones y agotamiento

Lo que en Bolivia se conoció como la dominación oligárquica, debe entenderse como aquel proceso de transformación e influencia según los criterios puestos en marcha por los liberales para la modernización del país. A comienzos del siglo XX, el Estado se organizó como un conjunto de estructuras oligárquico-liberales donde tuvo lugar un proceso de modernización bastante contradictorio. Como sostiene Irma Lorini, “el nuevo modelo estaba afincado en el surgimiento de enclaves productivos capitalistas, como fue el caso de la explotación de la plata; años más tarde, la de la goma y la del estaño, que permitieron el desenvolvimiento de nuevas

fuentes y fuerzas productivas en la economía boliviana, a la vez que viabilizaron la incorporación de Bolivia al mercado internacional y la modernización de la infraestructura referida al sistema de comunicaciones y transportes; asimismo, el avance de la estructura latifundista mantuvo muchas características no capitalistas en su trato con la tierra y el indígena”⁵. El proceso de modernización estuvo subordinado a estructuras feudales, a enclaves capitalistas apenas eficientes y a una discriminación racial que claramente dividía a Bolivia en dos: blancos e indios.

El modelo liberal en Bolivia buscó abolir la comunidad indígena y el ayllu para dar lugar al avance del mercado y, a la vez, favorecer la expansión de la hacienda. Todo este conjunto de fenómenos estuvo acompañado por la formación de una élite de poder conservadora, alrededor de la cual se organizó la élite política y el sistema tradicional de partidos, como el conservador, liberal y republicano.

El Partido Liberal se desarrolló en Bolivia de 1899 a 1920. Sus pilares de sustentación fueron la producción y exportación de materias primas, construcción de infraestructura de comunicación y transportes, además del fomento de la educación general y la doctrina según la cual debía crearse un Estado Constitucional con una eficiente administración pública. Las bases económicas para el desarrollo del programa liberal boliviano estuvieron dirigidas a la producción de minerales, especialmente del estaño, así como a la estimulación del sector exportador en este rubro. El desarrollo de esta forma monoprodutora incidió en la economía boliviana para que se iniciara un proceso de dependencia del mercado internacional, el cual determinaba el alza o baja de los precios. Sin embargo, la historia fiscal de la época se caracterizó por una estructura

⁵ LORINI, Irma. **El movimiento socialista “embrionario” en Bolivia 1920 - 1939**. Los Amigos del Libro. La Paz. pp. 57-58

deficiente de ingresos, por un sistema desordenado de gastos y por una ausencia o mala dirección de las inversiones públicas.

Es así como la política fiscal boliviana de los gobiernos liberales se caracterizó por el desorden, la agravación en la situación presupuestaria llena de déficits, el aumento del gasto público, y la aparición de la deuda externa. Estos factores negativos no crearon un ambiente propicio para las inversiones y, por lo tanto, la economía boliviana quedó reducida a su actividad monoprodutora y monoexportadora de minerales. En este sentido, las aspiraciones por crear un Estado moderno y federal bajo principios liberales – que promueva la participación de todas las clases sociales en Bolivia – en la práctica quedó en simples enunciados porque persistió una dominación oligárquica y excluyente. La tradición conservadora en el pensamiento de la élite boliviana había demostrado, una vez más, estar más arraigada que todos los principios y la doctrina liberales, de tal modo que cualquier discusión sobre la modernización boliviana representaba algo inútil y por demás incompresible.

Este tipo de pensamiento de la élite gobernante boliviana no cambiará la forma de hacer política en el país, a pesar de la formación de nuevos partidos políticos. El liberalismo boliviano no concretó la federalización del país, ni tampoco modernizó la estructura productiva porque su discurso quedó atrapado en los rezagos históricos de la explotación indígena y la incapacidad para ampliar la ciudadanía política y democratizar las estructuras sociales.

El fervor minero que mostraron los liberales ante el crecimiento de la producción de estaño en las regiones del norte, centro y sur de la Cordillera de los Andes, se convirtió solamente en una ambición para consolidar el poder económico y la administración estatal para las élites del occidente del país, cuyo enclave de dominación y de burocracia estatal estaba situado en el departamento de La Paz. Finalmente, la misma élite gobernante se quebró en dos

fracciones al interior de las filas liberales: los llamados “doctrinarios” o “pacifistas” a la cabeza de Ismael Montes, y los “federalistas” o “puritanos” a la cabeza de Lucio Pérez Velasco.

El principal error de los liberales estuvo en continuar con la política conservadora de comienzos de la república, en seguir con las actividades comerciales e industriales bajo los mismos indicadores del nepotismo feudal, y en no haber podido abrir las puertas del desarrollo a los intereses de la Nación como una comunidad pactada entre blancos e indígenas.

A pesar de que la política ferroviaria en el país trató de estimular un Estado integrado, persistió una distribución desigual de privilegios y recursos entre todas las regiones de Bolivia. Si bien la minería del estaño adquirió una importancia financiera internacional, el ingreso boliviano hacia el mercado internacional fue desfavorable por la casi primitiva política comercial con la que contaba el país, y por la subordinación de enormes masas indígenas al poder los terratenientes, lo cual hacía que el propio mercado interno del país sea demasiado estrecho y sin un funcionamiento real como lo exigía un modelo capitalista de producción.

La pérdida del Litoral boliviano tuvo una enorme incidencia en la economía del país. Sin una salida hacia el océano Pacífico las exportaciones mineras tenían que someterse a las exigencias chilenas por la nueva situación de mediterraneidad. Por consiguiente, durante la administración liberal en Bolivia, los presupuestos del gobierno llegaron a cifras inferiores a los 10 millones de bolivianos, cifra menor a la fortuna de algunos industriales y mineros; es decir, el Estado no podía acumular riqueza. De esta incapacidad proviene el surgimiento de políticas latifundistas donde el problema agrario adquirió una importancia relevante porque así se podían cargar los déficits del Estado liberal sobre las espaldas de los indígenas sometidos a través del cobro de impuestos⁶.

⁶ Cfr. ALBARRACIN. Juan. **El Poder Minero**, URQUIZO, La Paz, 1972, p. 54.

Este conjunto de visiones parroquiales, conservadoras y antidemocráticas fue lo que llevó a debilitar la unidad e influencia política de los liberales. El empobrecimiento del Estado sobrevino y el descontrol gubernamental también porque la política liberal no logró conformar una burocracia estatal acorde con la doctrina, apareciendo muy pronto la evasión impositiva, que equivalía a la práctica de contrabando y a la falta de control estatal sobre la minería.

Los magnates mineros y aquellos políticos instalados en el centro del país, disponían no sólo de las ricas minas de estaño, sino también del privilegio del poder. Por esta razón no tuvieron ningún interés en ordenar y construir un Tesoro General de la Nación a través de disposiciones tributarias, la reducción de las patentes mineras y el reconocimiento social a los trabajadores. La corrupción burocrática se encontraba en todas las oficinas de recaudaciones para el Estado⁷. Asimismo, había empresas privadas con capitales chilenos y norteamericanos que, desde 1905, no pagaban impuestos sobre utilidades, ni sobre derechos de exportación. En consecuencia, las empresas extranjeras, la débil estructura institucional del Estado, la exclusión social y la desarticulación regional en Bolivia, postergaban permanentemente la modernización boliviana, dejando una dura derrota para el país y los gobiernos liberales hasta 1920.

Asimismo, es importante llamar la atención sobre los conflictos entre el Estado y sus regiones de 1900 a 1950, así como sobre la consolidación hegemónica de los mineros del estaño. Nuestra República nació sobre una estructura económica, social y cultural profundamente heterogénea, acrecentada todavía más por las condiciones de dispersión geográfica del poder, razón por la cual algunos intelectuales como Badía Malagrida calificaron a Bolivia como un *absurdo geográfico*. Esta tesis, antes de ser una crítica geopolítica, era una tajante observación sobre la vocación que debería tener el nuevo Estado boliviano: imponer su poder contra viento y

⁷ Idem., p. 147.

marea o, inevitablemente, desaparecer frente al potencial autónomo regional que hablaba con propia voz al interior del país. Este fue – y todavía es – el dilema de nuestra Nación, que se expresa como la posibilidad de consolidar un *Estado fuerte*, pero también urgido por mantener sus específicas *autonomías regionales*.

El proyecto de modernización liberal había dado los principales pasos en la configuración estatal, instalando una estructura de poder cuya sede política era La Paz y articulando todos sus cimientos económicos en torno a la minería productora de estaño. El primer eje del nuevo proyecto estatal y económico del liberalismo boliviano había confiado su suerte en el sistema basado en la extracción y exportación de estaño. Los nuevos jefes pusieron todo su empeño para apostar por el mercado libre, la iniciativa privada y el Estado centralista, sobre todo cuando se trataba de defender los intereses de las regiones mineras, constituyéndose en una estructura de dominación y en una nueva oligarquía: los barones del estaño.

Un segundo eje del proyecto modernizador liberal ensambló la economía minera estañífera con un sistema agrícola que funcionaba basándose en cultivos de subsistencia, o bien poniendo en marcha una actividad comercial regionalizada bajo el poder de la gran hacienda terrateniente, cuyo funcionamiento poseía un régimen de *castas* muy estricto, asentado en la explotación del indígena convertido en pongo de hacienda, en la medida que el indio era comprado o vendido como parte de toda la tierra, llegando a ser parte del patrimonio que ostentaba el patrón terrateniente.

El país se había definido claramente como un Estado liberal orientado hacia el mercado mundial, a través de un capitalismo extractivo monoprodutor de estaño, al mismo tiempo que se centralizaba en su interior para consolidar el poder de las élites paceñas. Dichas élites pactaron con el poder feudal del mundo rural para estructurar un *dominio colonial interno* sobre las

masas indígenas y definir un Estado que trate de imponer su soberanía “conquistando” el noroeste y todo el este del país. Esto equivalía también a “civilizar la República” a partir de criterios positivistas europeos y mediante una política de colonización señorial; es decir, solamente las castas superiores blancas podían construir la modernización nacional. Así, el país se había conformado sobre la base de un molde partido entre dos: la Bolivia minera que manipulaba a la burocracia estatal, y la Bolivia feudal de piel blanca que controlaba las haciendas.

El eje geográfico compuesto por las regiones de La Paz, Oruro y Potosí, mantenía vínculos funcionales con las regiones de Cochabamba y Santa Cruz. El resto territorial estaba subordinado al modelo económico minero, al poder verticalista y a una subsistencia según sus capacidades regionales o de acuerdo con las potencialidades de los patrones feudales. “En estas circunstancias, cuando la escasez de recursos exigía una maximización de los mismos, los Concejos Municipales hicieron entre 1906 y 1925 las veces de portadores de las demandas regionales, principalmente de los departamentos ubicados fuera del radio de acción minera. Sus voces airadas, en un papel que hoy atribuiríamos a los Comités Cívicos, sirvieron para frenar y torcer el curso netamente centralista y exportador del Estado, dominado por los intereses mineros afincados en La Paz, obligándole a mirar al *interior* depauperado que él mismo había contribuido a crear. Quizá entonces como nunca antes se corroboró aquella máxima que tanto había gustado a los mentores del poder local decimonónico: *descentralización equivalía en la Bolivia de los 10's ó 20's a régimen municipal fuerte y autónomo*”⁸.

⁸ RODRÍGUEZ OSTRÍA, Gustavo. **Estado y municipio en Bolivia**, ob. cit., p. 53. Del mismo autor, consultar también sus importantes apreciaciones sobre la tensión entre lo central y lo regional en: **Poder central y proyecto regional. Cochabamba y Santa Cruz en los siglos XIX y XX**, ILDIS-INADES, Cochabamba, 1993.

Si bien la nueva estructura de poder liberal gozó de buena salud con los dividendos de la minería, no pudo construir un Estado lo suficientemente legitimado como para incorporar a todas las regiones o a todos los estratos sociales dentro del proyecto de modernización. Dicho proyecto era entendido solamente como una sociedad de corte occidental con la mirada puesta en los usos y hábitos europeos favoreciendo, además, al mercado internacional, en la medida que, supuestamente, los réditos económicos del liberalismo generarían, después, posibilidades adecuadas para el resto del país. Sin embargo, la mentalidad modernizadora no cedía un milímetro cuando se trataba de considerar a las masas indígenas del área rural como ciudadanos de segunda categoría, porque el modelo liberal de sociedad, Estado y mercado, era exclusividad de la raza blanca, las regiones mineras y los ciudadanos varones, con una renta determinada, según sus derechos censitarios. La educación comenzó a ser una prioridad para el Estado pero como una estrategia para purificar al país de las influencias indígenas; así, la educación a cargo del Estado supuestamente transmitiría los cánones de modernización de las naciones exitosas como las europeas o norteamericana. Por lo tanto, el Estado debía contratar a expertos extranjeros como el belga Georges Rouma con el propósito de sustituir la “barbarie” por una “civilización”.

Por otra parte, el Estado liberal continuó asediado por los municipios urbanos que condensaban las identidades regionales y, por lo tanto, nunca fue visto como el poder omnímodo al cual todos debían someterse sin contemplaciones. Todo lo contrario, fue interpelado y amenazado en su poder e influencia por el poder municipal. Si bien a comienzos del siglo XX el régimen municipal no podía ser considerado como un sucedáneo efectivo de la descentralización para que el ámbito departamental cobre fuerza contundente, es reconocible que las tendencias federalistas buscaban un verdadero autogobierno, en una escala mayor que la localidad o

provincia para construir poderes regionales, pues constataban que el poder del Estado nacional moderno no significaba sino la imagen de una institución débil e ineficaz.

Empero, la visión liberal “(...) tuvo el paradójico precio de desechar en la arena política lo que habían conseguido con las armas en la mano después de la Guerra Civil de 1898. El tema del federalismo prácticamente se archivó y los conflictos entre el Ejecutivo y las regiones del interior desfavorecidas, fueron mediados por los Municipios, convertidos nuevamente en factores de resistencia frente a los avances centralistas y a la desidia de su poder”⁹.

Como lo sostiene el historiador boliviano Gustavo Rodríguez, en casi toda la historia nacional, desde su fundación hasta la crisis del modelo oligárquico minero que desemboca en la Revolución de abril, es muy clara una íntima y persistente conexión entre poder local y poder regional, o mejor dicho, entre los Municipios y Asambleas Departamentales o Estados Federados, que se convierten en los prototipos político-administrativos a los que invocaban las élites de corte descentralista y federado para romper con el monopolio del departamento de La Paz o minero de dominación, caracterizado por su exclusión y una visión política que en el fondo era incapaz de modernizarse. Simultáneamente, toda la pompa doctrinaria liberal quedaba seriamente cuestionada con sólo mirar las condiciones del indígena y las demandas regionales por mejores oportunidades.

Así persistieron las discusiones sobre cómo modernizar el Estado boliviano con vocación descentralizadora. Uno de los principales propagadores del municipalismo fue el militante

⁹ Idem., ob. cit., p. 61. El mismo Rodríguez Ostria también afirma que “(...) hasta 1871 prácticamente la única forma de descentralización puesta en la agenda política fueron los Municipios. Aunque nunca se pensó en convertirlos en verdaderos órganos de poder regional y crear a su amparo, en contraposición al poder central, una red de municipios que expresara la potencialidad de las elites locales”, (p. 61). Lo más conflictivo fue que el Estado modernizador liberal no logró abatir las reivindicaciones

republicano Daniel Salamanca –que después asumiría la presidencia de la República entre 1931 y 1934– junto con el liberal Ismael Vásquez; ambos fueron férreos propagandistas de la autonomía municipal y la descentralización administrativa o el federalismo. “Salamanca llegó incluso a presentar en 1921 (...) una enmienda constitucional descentralizadora, la misma que con leves modificaciones fue aprobada en el Referéndum de 1931, que estableció una reforma que transfería a las Asambleas Departamentales y Prefecturas designadas por el Presidente a propuesta de la Asamblea, parte del poder antes en manos del gobierno central”¹⁰.

La estructura de poder liberal no fue capaz de superar los conflictos entre el Estado y las regiones. Su identidad más uniforme, que habría de prolongarse hasta la reforma agraria de 1953, estaba plantada en un arraigado *racismo*, pues junto a las pugnas regionales y al desequilibrio de poderes e influencias en el ámbito nacional, la explotación del *indio* –término cargado de menosprecio– hacía que toda división de la sociedad en clases sociales correspondiera, en los hechos, prácticamente a las divisiones de raza, determinadas fundamentalmente por el lenguaje materno y la fisonomía. La vestimenta y ocupación también eran otros factores de discriminación donde se destruían las propuestas de modernización liberal y occidental, permitiéndose más bien que una minoría de la población sea considerada blanca por residir en las ciudades principales, hablar español y vestir ropa europea¹¹.

municipalistas (regionales), ni tampoco democratizar los beneficios de su modelo económico.

¹⁰ RODRÍGUEZ OSTRÍA, Gustavo. **Estado y municipio...**, ob. cit., p. 62.

¹¹ Cfr. DUNKERLEY, James. **Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982**, Quipus, La Paz, 1987. Además, es útil revisar dos textos centrales para analizar la dominación colonial y la resistencia campesina desde la década de los años treinta hasta la revolución de abril: RIVERA, Silvia. **Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua de Bolivia 1900-1980**, CSUTCB-Hisbol, La Paz, 1984. DANDLER, Jorge. **Sindicalismo campesino en Bolivia. Cambios estructurales en Ucureña 1935-1952**, CERES, Cochabamba, 1983.

La cultura de raza blanca era susceptible de manipulación, haciendo referencia, sobre todo, a la élite gobernante o a la pretensión de establecer una herencia europea. Esta cultura estableció una distinción, con mano de hierro, entre masas indígenas y élites blancas, ocultando el mestizaje hasta en los estratos más altos del sistema social. La estructura del poder había partido de principios intransigentes, tanto desde el punto de vista económico, como de la administración del Estado y la propia cultura, alimentando un peligroso darwinismo social, concepción ideológica donde los indígenas eran considerados como seres de menor capacidad mental, moral y humana¹².

Los primeros diez años del siglo XX habían transcurrido en medio de expectativas de modernización y una fragmentación del territorio nacional, lo cual hacía que se refuerzan los particularismos locales que se convertirían en un intenso regionalismo asentado en una economía bastante heterogénea, sobre todo de subsistencia, mientras que el mayor empuje estaba anclado en la economía minera. Al ingresar al siglo XX, Bolivia contaba con una población de 1.600.000 habitantes y una superficie territorial de 1.822.331 kilómetros cuadrados. En estas condiciones, la densidad demográfica por kilómetro cuadrado era sumamente baja porque alcanzaba a 0.87 habitantes. La preponderancia de población rural daba lugar a un dominio de la gran propiedad donde los terratenientes producían para un mercado interno muy pequeño. El país era, sin duda, una nación joven y casi vacía, concentrando la mayor densidad en la zona occidental y matizada

¹² El **darwinismo social** fue una doctrina de carácter antropológico que mezclaba tesis del positivismo francés y de la selección natural en la evolución de las especies, para concluir que existen razas superiores y otras inferiores en la evolución de toda sociedad. Entre sus principales defensores en Bolivia, destaca Gabriel René Moreno. Sobre el tema consultar la obra de: VASQUEZ-MACHICADO, Humberto. **Los precursores de la sociología boliviana**, Don Bosco, La Paz, 1991.

por pequeños centros mineros y urbanos. El 20 por ciento vivía en áreas urbanas de más de 5.000 personas, totalizando 321.027 habitantes, de los cuales 160.000 habitaban en las capitales¹³.

La población económicamente activa llegaba a 1.060.000 habitantes que, de acuerdo con la labor económica, se dividía de la siguiente manera: 530.128 habitantes (lo que significa el 50.1 por ciento) se encontraban en la agricultura; 353.041 personas (es decir, el 33,3 por ciento) representaban la mano de obra artesanal; sin embargo, es muy probable que muchos de éstos combinaban su oficio con tareas agrícolas en el área rural; 32.921 pobladores (un 3,1 por ciento) estaban dedicados al pastoreo, mientras que 3.753 trabajaban como arrieros. A esto deben agregarse 55.521 tenderos, de los que, probablemente, 300 eran al por mayor o pertenecientes a grandes casas comerciales.

En el fondo, Bolivia no había modernizado su aparato productivo con el que nació a la vida republicana en 1825 y, por lo tanto, estaba aún en un período de transición de los viejos resabios arcaicos hacia la articulación de un mercado interno y de nuevos sectores económicos que hicieran del país una nación integrada y capitalista. El término *moderno* se identificaba con una meta gubernamental y económica: la construcción de ferrocarriles. El ferrocarril constituía la ambición de modernidad más notoria, sobre todo, cuando se hablaba del Presidente Aniceto Arce, al propio tiempo que los ferrocarriles eran una pieza fundamental para el traslado de mineral hacia el océano pacífico, por lo que los intereses mineros – de la plata primero y después del estaño – alentaban con rigor la construcción de vías férreas, inclusive antes que una modernización de sus propias estructuras productivas e industriales.

¹³ Cfr. PEREZ TORRICO, Alexis. "Economía boliviana (1890-1910)"; en: BOLIVIA A FINES DEL SIGLO XIX, NUEVA ECONOMIA, La Paz, julio de 1998.

Lo destacable de la actividad económica fue que el sector artesanal, algo que se acercaba a una especie de proto-industria, daba ocupación al 33,3 por ciento de la población económicamente activa, destacándose las hilanderías e hilanderos con el 39,4 por ciento, de 353.041 artesanos. Las tejedoras concentraban al 31,5 por ciento y las costureras al 13,5 por ciento¹⁴.

El sector minero tenía alrededor de 12.000 asalariados junto a cerca de 200 propietarios. A esto deben añadirse 6.538 profesionales y 18.732 propietarios quienes vivían solamente de sus rentas. La tasa de escolaridad era muy baja, pues sobre una población en edad escolar de 204.475 niños, sólo estaban matriculados 23.558; es decir, apenas el 11,5 por ciento. A esta cifra se suman 2.347 estudiantes en el ciclo secundario y 743 en la universidad pública.

Paralelamente a la extracción de plata también se producía estaño, bismuto, cobre, bórax y, por supuesto, goma. Más tarde se incorporaron el wólfram y zinc; la minería continuaba siendo el sector más requerido desde la colonia, en tanto que la actividad agrícola siempre fue una economía al margen de la contabilidad republicana, lo cual no quiere decir que las haciendas tenían poco peso específico en la configuración económica o en el monopolio de enormes masas indígenas dominadas por una estructura de poder discriminatoria.

A comienzos del siglo XX, el ahorro interno era escaso, pues los depósitos bancarios solamente llegaban a la suma de 16 millones de bolivianos. Solamente existía un camino para obtener crédito: hipotecar bienes inmuebles o tierras. Las inversiones, con excepción de las realizadas en la empresa minera Huanchaca en la década de los años 70 del siglo XIX, se estancaron a comienzos del XX y, por lo tanto, las utilidades mineras fueron transferidas a la compra de tierras, bienes inmuebles y artículos suntuarios con la finalidad de proteger el capital

¹⁴ Idem. PEREZ TORRICO, Alexis. "Economía boliviana (1890-1910)".

y obtener diversos créditos. La estructura productiva boliviana seguía siendo estrecha en la primera parte del siglo XX, pues no había muchas opciones de inversión. Al mismo tiempo, se carecía casi completamente de una mentalidad de inversión y riesgo para capitalizar muchas empresas; la clase oligárquica que concentraba la riqueza siempre se quejaba de la falta de capital y trabajo. La mano de obra existente provenía de las comunidades siendo estacional y barata, además de presentar muchas barreras para su proletarización. A pesar de una mano de obra barata, los costos de producción en la minería eran sumamente altos; aún así, el sector minero representaba el único rubro del que el aparato estatal podía obtener utilidades e intentar redistribuir la escasa riqueza en todo el país.

En los primeros diez años del siglo XX, la posición privilegiada del estaño era indiscutible en la escala de las exportaciones. Teniendo al ferrocarril y a minerales de alta ley como los provenientes de la Mina del Balcón en el departamento de Oruro, no había necesidad de concentrar el mineral. Similar situación ocurría en la mina de Patiño donde los concentrados del nuevo magnate tenían una ley del 20 por ciento. Así, Bolivia no tenía otra cosa que exportar los minerales, sobre todo hacia Europa, su principal mercado.

Haciendo un balance de los logros y fracasos en la gestión administrativa y en los cambios que se produjeron en la sociedad, podemos decir que durante los primeros treinta años del siglo XX, el país había conseguido instalar un ferrocarril con destino a los puertos del Pacífico; sin embargo, este ferrocarril no pudo integrar al conjunto de regiones geográficas, por lo cual se mantuvieron las desigualdades regionales, así como la incapacidad del Estado para establecer una sólida legitimidad. Se desarrollaron servicios en algunas ciudades, lo que equivalía a modernizar las urbes con una imitación de estilo europeo. Hubo crecimiento urbano, se establecieron caminos en una red de 1.500 kilómetros para coches y carretas; se tendieron

3.630 kilómetros de telégrafo, de los cuales 2.800 pertenecían al sector privado. En cuanto a la instalación de capitales, se puede afirmar que en Bolivia había cinco compañías inglesas, cuatro francesas y tres paceñas dedicadas a la extracción del oro; cuatro empresas tenían intereses en el cobre de Corocoro y dos centenas en el estaño y la plata¹⁵.

Pese a la existencia de adversidades como la pérdida de una salida al Pacífico, las oligarquías del estaño y de las haciendas estaban convencidas de que los, supuestamente, abundantes recursos naturales de diferentes regiones geográficas del país (muchas de las cuales eran inexploradas) habían de llevar a la República por el camino de la civilización y que, además, lo único que debía hacerse era poner *orden* con el objeto de que el capital extranjero llegue al país.

Asimismo, había una especie de euforia por la llegada del ferrocarril, abrigando la esperanza de que el estaño escalaría precios expectables llevando a Bolivia hacia una situación incomparable en relación con los demás países del continente. De esta manera, el proyecto liberal debía estimular las exportaciones, instalar servicios y adquirir todo lo necesario para satisfacer a la población urbana. Sin embargo, el gran obstáculo fue que los liberales no pretendieron, para nada, brindar atención a las regiones o abrir la posibilidad de su desarrollo local.¹⁶

A su vez, los liberales de comienzos del siglo XX no comprendían –o entendían mal– la lógica del capitalismo, los ciclos económicos tendientes a las crisis que tenían lugar en la economía mundial, los problemas o exigencias que planteaba la industrialización y tampoco

¹⁵ Cfr. PACHECO TORRICO, Napoleón Mario. “El *metal del diablo*: eje de la economía boliviana”; en LA ECONOMIA BOLIVIANA ENTRE 1900 Y 1930, NUEVA ECONOMIA, La Paz, agosto de 1999.

¹⁶ Cfr. ARGUEDAS, Alcides. **Historia general de Bolivia (el proceso de la nacionalidad), 1809–1921**, Arnó Hermanos Editores, La Paz, 1922.

poseían una comprensión cabal sobre el papel que desempeñaba la formación de una bolsa de valores. La acumulación de riqueza era entendida como explotación única de estaño, manutención rígida de una fuerza de trabajo indígena como servidumbre, y la ostentación de modos de vida occidentales o patrones de consumo suntuarios que caracterizaban a las ambiciones de la clase alta.

El gran error del proyecto liberal de los primeros veinte años del siglo XX, fue observar muy poco la realidad interna, pensando que las influencias venidas del extranjero habrían de estimular a las fuerzas internas. Por lo tanto, la lógica económica y política estaba sometida a una suerte de inercia o falta de proyección futura a través de un *objetivo propio* y nacional. En gran medida, la mirada hacia el exterior que caracterizó a la oligarquía del siglo XX era un criterio imitativo y acrítico en cuanto a la adopción de leyes, políticas públicas, corrientes literarias, tendencias ideológicas o giros idiomáticos.

La crisis y los años de depresión que marcaron profundamente la década de los años treinta, pusieron en vilo al proyecto liberal y a la economía del estaño. El exceso de confianza en los recursos mineros destapó una vulnerabilidad desde todo punto de vista local, regional y nacional. Sin embargo, la posterior y lenta recuperación de los precios internacionales del estaño borraron todo recuerdo de tal advertencia o, más bien, hizo que la oligarquía se convirtiera en una “élite intransigente”, pues al convivir con los problemas estructurales del país se negaba a reconocerlos para instaurar reformas estructurales.

¿Qué fue lo que no pudo resolverse hasta la entrada de una nueva crisis como la Guerra del Chaco? Primero, el latifundio improductivo y la servidumbre bajo la forma del pongueaje, la aguda pobreza indígena y la mala distribución del ingreso. La oligarquía no tenía interés en superar las relaciones serviles. Todos los esfuerzos estaban volcados hacia la minería; sin

embargo, en este sector los salarios también eran magros entre los trabajadores y, por lo tanto, la capacidad de consumo de las grandes mayorías del país era sumamente pequeña, lo cual daba lugar a un mercado interno pequeño y de poca importancia para dar un salto hacia un capitalismo real o para alcanzar una verdadera industria.

De esta manera, puede decirse que la población boliviana vivía, al mismo tiempo, al margen de la minería estañífera, a pesar de ella y sometida a la misma. Las regiones continuaron aisladas porque el Estado difícilmente podía controlar sus fronteras, existiendo grandes sectores de la población que desconocían su identidad nacional como bolivianos. A esto podemos sumar que dicho Estado gastaba más del 70 por ciento en una burocracia civil-militar, quedándole muy poco para atender sus requerimientos inmediatos como servicios, gastos sociales, deuda interna y otros. Inclusive no había adquirido la capacidad de construir su legitimidad manteniéndose a distancia del influjo de una serie de grupos de presión que intentaban dar golpes de Estado y sembrar el caos político. Por lo tanto, el Estado mantenía una debilidad institucional y política sin lograr un reconocimiento interno. Su poder centralista era utilizado para controlar las reivindicaciones regionales, someter a la población indígena pero no para evitar la fuga de capitales. Lo poco que quedaba de los réditos mineros controlados por los barones del estaño, se destinaba a los salarios del proletariado minero. Bolivia no había conseguido construir un Estado nacional, por el contrario, su dependencia se acentuaba y su crisis política amenazaba con terminar en una desintegración, quedando como única opción de control, el empleo de la fuerza para contrarrestar las asonadas golpistas.

Sin embargo, es importante citar a otros historiadores como Manuel E. Contreras C., para quien la economía minera hizo los mejores esfuerzos por modernizarse y escapar a la crisis política, las amenazas de la depresión internacional o los golpes de la Guerra del Chaco. La

depresión de 1929 requirió de un cambio en la política monetaria y fiscal del país. Ya en 1931, después de que los británicos abandonaran el patrón oro, Bolivia también lo desestimó suspendiendo, además, el pago de su deuda externa. Por una parte, el Estado boliviano debía fijar la tasa de cambio y, por otra, al no poder recurrir al crédito externo, debía encontrar la manera de solventar sus constantes déficits presupuestarios. Además, financiar la Guerra del Chaco fue un estímulo adicional para una mayor intervención del Estado en la economía¹⁷, lo cual acrecentó enormemente la desesperación de sectores políticos radicales para demandar un aparato burocrático de corte militar pues, se decía, había que enfrentar la guerra con dignidad, así como asumir posiciones de suma cero para imponerse en el orden interno.

La minería estañífera se perfilaba hacia un horizonte importante a pesar de todo y su comportamiento estuvo sujeto al escrutinio público. Aún cuando los grandes barones del estaño monopolizaban todo movimiento económico, oficialismo y oposición debatían públicamente las funciones estatales respecto de la economía, las orientaciones de la política estañífera y las ambiciones de ciertos grupos de presión nacionalistas que buscaban acceder a puestos de poder.

En la década de los años treinta, Bolivia respondió a las nuevas tendencias de la demanda internacional con una imagen de Estado interventor en la economía. El desarrollo de la economía, además de descansar sobre el crecimiento de la industria del estaño, se amplió hacia el sector de pequeñas empresas industriales, estructurándose de tal manera que logró salir airoso de los problemas que trajeron la Gran Depresión y la Guerra del Chaco. A pesar de las visiones pesimistas y apocalípticas en la mayoría de los casos, a finales de 1930, el sector minero ingresaba en la década de los cuarenta con grandes posibilidades. Si bien había decaído la ley de

¹⁷ Cfr. CONTRERAS C., Manuel E. "Bolivia en la década del treinta"; en: LOS AÑOS DE DEPRESIÓN, LA CRISIS, LA GUERRA DEL CHACO Y LA MARCHA AL ORIENTE, NUEVA ECONOMIA, La Paz, septiembre de 1999.

los yacimientos, la mano de obra se había hecho mucho más cara y la situación impositiva era más exigente que a principios de siglo. La minería estañífera esperaba que, a través de un tipo de cambio adecuado pudiera mejorar su situación. Contrariamente a lo que algunos historiadores sostienen, Contreras afirma que se había llevado a cabo importantes inversiones en minería y, en la medida en que hubiera seguridades sobre el destino de las inversiones y la demanda internacional lo permitiera, existía la posibilidad de un nuevo despegue con fuerza, como luego lo demostró la influencia y demandas provenientes de la Segunda Guerra Mundial.¹⁸

Si bien la Segunda Guerra Mundial alimentó una recuperación de la economía del estaño, Contreras no sopesa bien la turbulencia política que el país sufrió entre 1940 y 1951, pues la descomposición del sistema político mantuvo en zozobra la ejecución de inversiones estratégicas, además de que los gobiernos desde Germán Busch hasta Gualberto Villarroel, se debatían entre el desconcierto y la búsqueda de un orden político sólido que nunca llegó. La crisis política en el ámbito interno, sistemáticamente terminó promoviendo acciones violentas como la única manera para imponer voluntades contradictorias de todo tipo.

Las acciones llevadas a cabo por los barones del estaño tampoco cambiaron en nada la disposición de estas condiciones, pues reorientaron su proyecto económico con la mirada puesta en el ámbito internacional. Además, como lo afirma precisamente el politólogo James M. Malloy, los ingredientes simbólicos de un supuesto Estado nacional moderno se contradecían con su dependencia del estaño y del mercado mundial. Paralelamente, Bolivia estaba fracturada en dos ámbitos sobre los que se estructuró el proyecto de modernización liberal: un *sistema nacional* contrapuesto a otro *sistema local*¹⁹.

¹⁸ Idem. CONTRERAS C., Manuel E. "Bolivia en la década del treinta".

¹⁹ Cfr. MALLOY, James. **Bolivia: la revolución inconclusa**, CERES, La Paz, 1989, p. 46.

El sistema nacional se afincaba en lo que llegó a constituir el Super Estado minero. Dicho sistema fue creando dos ejes que chocaban entre sí. Por una parte despuntaba el eje donde predominaba la industria estañífera que representaba, a su vez, a la tecnología de punta en aquella época con una organización urbana y una orientación internacional. “Durante la década de 1920 la propiedad se consolidó bajo el control de tres consorcios gigantes: Simón Patiño, Carlos Aramayo y Mauricio Hochschild, a quienes correspondía más del ochenta por ciento de la producción y, entre ellas, la empresa Patiño era de lejos la más grande. El veinte por ciento restante estaba en manos de una serie de compañías pequeñas y medianas cuyo funcionamiento utilizaba un limitado nivel de tecnología moderna. El elemento verdaderamente moderno de la industria estaba controlado por los Tres Grandes”²⁰.

Por otra parte, y en oposición al sistema nacional del estaño, aparecía el eje o sistema local sustentado en un régimen feudal, atomizado en su organización y regional en su orientación. Esta estructura atomizada se distinguía por una sólida identificación regional y por la presencia de circuitos locales de mercado, factores que contribuyeron a reforzar con mayor rigidez el aislamiento entre las haciendas, así como entre éstas y las minas. Este sistema local era, en el fondo, el sistema de desequilibrios regionales que después pasarían a ser los centros del debate político.

El resultado inmediato de esta estructura de poder apuntó hacia una dirección problemática: la industria estañífera boliviana afianzó sus lazos e intereses más fuertemente con el ámbito internacional – fruto de la demanda y las condiciones de mercado transnacionales – dejando de lado otro tipo de contacto con el resto del país o con las demandas regionales.

²⁰ Idem., ob. cit., p. 49.

Simultáneamente, el sistema nacional de los barones potentados, no sólo se diferenciaba del sistema local, sino que lo hacía a su costa, pues el retraso de éste se debió en gran medida al tipo de desarrollo del primero. El modelo de desarrollo, por lo tanto, era profundamente desigual; a esto se sumó, a finales de la década de los años treinta, el hecho de que las grandes minas se estaban agotando. “Las compañías no exploraron nuevas fuentes de mineral y la tasa de inversión en las plantas existentes disminuía. Para Bolivia el costo de producción se hizo muy alto y su posición competitiva fue deteriorándose rápidamente”²¹. El modelo liberal, su estructura de poder minero y su sociedad de castas habían llegado al límite de sus alternativas.

Lo que agravó mucho más esta situación de exclusiones permanentes, fue que el modelo económico solamente de carácter extractivo, estuvo demasiado supeditado a las crisis y fluctuaciones del capitalismo mundial, pues la bonanza económica, junto con los ensueños liberales a veces extremadamente ingenuos, mostró indicadores de estancamiento después de la debacle mundial de 1929, causando problemas en la estructura social boliviana donde, quienes habían logrado mayor estatus o mejores condiciones de ascenso social para asegurarse una posición, encontraban desde 1929 serios obstáculos recesivos y pocas opciones de cambio²². El país estaba totalmente a merced de su industria minera y, por lo tanto, quedó muy evidente que “en Bolivia *nunca hubo una modernización generalizada y tampoco se alcanzó base alguna para un desarrollo autosuficiente*. El resultado (...) fue un inmovilismo histórico y un país

²¹ Idem., ob. cit., p. 47.

²² La crisis internacional de 1929 se caracterizó por una recesión mundial y una fuerte discusión sobre la función del Estado en la regulación de los procesos productivos y económicos. Durante la época, el debate sobre la crisis giró en torno a la irrupción del llamado capitalismo de Estado que se desarrolla entre los años veinte y treinta, expresándose, asimismo, los enfrentamientos entre la teoría catastrofista de la Internacional Comunista, el pensamiento económico de John Maynard Keynes y la problemática del intervencionismo estatal. Cfr. MARRAMAIO, Giacomo. **Lo político y las transformaciones. Crítica del capitalismo e ideologías de la crisis entre los años 20 y 30**, Cuadernos de Pasado y Presente, 95, México, 1982.

dividido que no era ni totalmente moderno ni totalmente tradicional, pero tampoco estaba pasando por un período de transición, pues no iba a ninguna parte. Estaba inmóvil, petrificado y en franco retroceso. Estas contradicciones generaron presiones internas, las que, a su vez, condujeron a demandas de cambio cada vez más fuertes”²³.

Las raíces del régimen liberal oligárquico, minero y terrateniente, confrontaban serios problemas agrupados en los siguientes núcleos críticos:

- a) Incapacidad para promover la creación de un capitalismo de Estado que pueda desarrollar una burocracia estatal, encargada de la gestión de nuevos procesos productivos para diversificar la economía boliviana a fin de evitar los golpes del mercado mundial.
- b) Incapacidad para redistribuir los beneficios económicos del modelo productivo, y para ordenar el conjunto de las relaciones sociales del país, caracterizadas por la inmovilidad social y la negativa para ampliar las bases de legitimidad del Estado y de sus élites.
- c) Centralización del poder en un empresariado minero situado en el occidente del país, con altos niveles de productividad y altas tasas de ganancia, invertidas en su mayor parte fuera de Bolivia.
- d) Incapacidad para promover la generación de una burguesía agrícola que modernice el área rural. Absoluto control terrateniente, explotación colonial indígena sin posibilidad de estimular procesos de transformación.

²³ MALLOY, James. **Bolivia: la revolución inconclusa**, ob. cit., p. 50.

- e) Estructura agraria con el predominio de la servidumbre para el señor feudal dueño de la tierra, y manifiesta incapacidad para liberar fuerza de trabajo que posibilite modernizar las haciendas.
- f) Desde el punto de vista de la estructura social, el proletariado minero creció con la incorporación de un subproletariado semicampesino, sectores sociales donde la politización socialista comenzaba a radicalizarse. Esta radicalización fue fundamental cuando se gestaba la situación revolucionaria, sobre todo entre 1946 y 1952.
- g) Deterioro del artesanado tradicional y emergencia de un subproletariado urbano, orientado hacia las pequeñas empresas familiares por cuenta propia, producción de servicios e inserción en el sector fabril.
- h) La identidad nacional y el conjunto de tensiones entre el Estado y las regiones, se van configurando de acuerdo con exigencias que demandaban el reconocimiento de un *referente plural* que respete a las regiones. La forma de intervención del Estado en las sociedades regionales estaba condicionada por el centralismo que, hasta la Revolución del 52, seguirá presente como una pugna estratégica ligada a las características socio-espaciales de cada región.

En resumen, la estructura del poder oligárquico de 1900 a 1950 ya no podía responder a las necesidades nacionales respecto a quién o quiénes podrían ser los actores sociales con posibilidades de enfrentar los desafíos que planteaban los procesos de modernización de acuerdo con un nuevo sentido histórico. La modernización liberal no pudo construir un consenso político en torno a la estabilidad e institucionalidad. El régimen había llegado a una crisis del Estado y a la destrucción de toda una época cultural.

La formación de clases políticas y la búsqueda de una identidad político-ideológica para transformar la sociedad

La crisis política que estaba afectando a tres sectores de la sociedad: terratenientes, mineros e indios. De los cuales los dos primeros estuvieron comprometidos con los errores cometidos en las diferentes gestiones gubernamentales. La legitimidad del poder de los liberales se había puesto en duda por cómo manejaban el sistema electoral en el país – del 100% de población, sólo sufragaban el 1%, quedando al margen un 80 a 90% de analfabetos (indios), que no tenían el derecho al sufragio²⁴ – y cómo habían enfrentado la frustrada modernización económica. Desde comienzos de 1915 los sectores que habían estado involucrados con los negocios del magnate minero Simón I. Patiño, y que eran miembros del Partido Liberal, se vieron en la necesidad de organizar Convenciones Nacionales para contrarrestar la oposición de su disidencia, convertida ahora en Partido Republicano.

La ideología de los republicanos no era distinta a la de los liberales, pero sí contaban con una propuesta programática electoral diferente, como la recuperación del voto, la restitución de una abstracta dignidad nacional, la independencia de los poderes legislativo y judicial, la reducción de la deuda pública, la reducción del peso impositivo, y la lucha contra la corrupción.

Al mismo tiempo, debido a la expansión de las haciendas en la segunda década del Siglo XX, empezaron a organizarse grupos de sectores mestizos e indios que trataron de enfrentarse contra la ocupación de sus territorios, produciéndose grandes conflictos y revueltas que más adelante desembocaron la formación de sindicatos.

²⁴ Ibid., p.215

En este período también surgieron partidos minoritarios quienes por primera vez discutían problemas sobre el conflicto de clases en Bolivia. Asimismo, llegaron influencias del marxismo latinoamericano que estimularían la formación de movimientos comunistas en América de Sur, recurriendo, sobre todo, al apoyo de fracciones universitarias.

Así surgió una clase media urbana que se formó alrededor de los antiguos artesanos y comerciantes de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro. Fue el crecimiento de las importaciones de manufactura lo que favoreció un desarrollo del comercio intermedio y pequeño afincado en la nueva “clase media” boliviana que debió su participación política gracias al apoyo del Partido Liberal; sin embargo, la clase media también demandaba mayor coherencia y renovación al liberalismo, expresando descontentos políticos.

No obstante, la sociedad republicana de la década del 20, sostiene Juan Albarracín, fue la prolongación horizontal de la sociedad liberal. Los partidos liberal y republicano que cubrieron la primera mitad del Siglo XX no habían fomentado la ruptura del sistema social boliviano en su base productiva minera y en su estructura política, sino que practicaban la persistencia del status quo, sobre todo para evitar una democratización plena de la estructural social liberando al indio de la dominación hacendística²⁵.

Para Albarracín, la época republicana vivió una sociedad convulsionada por las desiguales relaciones entre la minería nacional y la internacional, además de un crecimiento perverso de la dependencia que el Estado boliviano tenía respecto de la voluntad política de los grandes mineros del estaño. Los gobiernos republicanos que administraron la nación durante tres décadas en precarias situaciones financieras y políticas, fueron regímenes institucionalmente

²⁵ ALBARRACIN, Juan. **Bolivia: el desentrañamiento del estaño**, AKAPANA, La Paz, 1983, pp. 9 - 10

inestables que tuvieron que acudir al uso de la violencia legítima e ilegítima. Aparentemente, afirma Albarracín: “los republicanos representaban a los intereses de la oligarquía rural y también de los mineros bolivianos. En realidad, los partidos republicanos no eran estrictamente mineros ni terratenientes, sino políticos vinculados a ellos”²⁶.

Esta “clase política” que intermediaba al país con los mineros, terratenientes y comerciantes ocasionó una fragilidad política y gubernamental que condujo el destino de la nación por caminos totalmente inciertos. La burocracia republicana, bajo las modalidades políticas en las que se organizó el país, subsistió con el 3% de los derechos de exportación que pagaban las empresas mineras para su sustento. Una base económica ínfima que hacía imposible cualquier política específica en materia de desarrollo y modernización.

Formalmente, la elección de presidentes constituía el único instrumento para asegurar la legalidad republicana; sin embargo, todos los presidentes eran elegidos en eventos electorales donde “el constitucionalismo republicano no era limpio, sino sujeto a la visa minera (...) que organizaba el gobierno usando procedimientos electorales poco transparentes”²⁷. En realidad, los procesos electorales en los primeros 50 años de la historia de Bolivia no pueden ser considerados como eventos democráticos, sino solamente como prácticas políticas que trataban de organizar una nación sobre la base de una minoría letrada y en medio de mucha incertidumbre sobre los fundamentos económicos y políticos para consolidar al país.

Las elecciones entre 1920 y 1950, dieron lugar a los gobiernos republicanos integrados por una “clase política” al servicio de la minería, capaces de aglutinar dentro de la burocracia al

²⁶ Idem., p. 12

²⁷ Idem., p. 19.

funcionarismo, comerciantes, religiosos, militares, artesanos, etc. a través de procesos de estratificación alrededor de negocios con el Estado. El tráfico de puestos públicos, manejo de influencias y el establecimiento de una partidocracia temerosa de cambiar el orden de cosas, en el fondo, no logró superar los problemas más profundos del país.

Si bien la vida política del país se hizo mucho más compleja, los conflictos entre los sectores sociales dominantes y aquellos dominados, se multiplicaron. Dentro de los sectores medios, uno de los grupos que más se destacó por su intensa participación en la vida política de esos años fue el estudiantil universitario. Su movilización empezó a tomar cuerpo, especialmente en la segunda mitad de la década de los años veinte. Sin embargo, una vez que los universitarios tomaron conciencia de lo que significaba la débil administración gubernamental, el movimiento estudiantil empezó a manifestar una posición altamente radical en la cual se condenaba la política intervencionista de la hegemonía norteamericana en el ámbito internacional, expresando una mezcla de ideologías altamente beligerantes con propuestas marxistas de transformación social en el ámbito interno boliviano.

En el centro del movimiento estudiantil se encontraron representadas tendencias políticas que iban desde la posición liberal hasta posturas comunistas. La tendencia liberal estuvo representada, en esos años, por la Federación de Estudiantes de Sucre. En La Paz coexistía una actitud nacionalista que en un principio no estaba muy diferenciada de las posiciones del sistema tradicional boliviano. Así fue surgiendo el nacionalismo como reacción ideológica frente a las influencias externas, organizado alrededor de tendencias indigenistas y socialistas antisistema. En Cochabamba, la actuación estudiantil estuvo, de principio más definida, además de que sus miembros se organizaron alrededor de un núcleo marxista, entre los que figuraban Ricardo Anaya, Arturo Urquidi, José Quiroga y José Antonio Arze.

Para 1928, en Bolivia se gestó el movimiento de reforma universitaria, diez años después del movimiento en la Argentina. El primer Congreso de la Federación Universitaria Boliviana (FUB) se realizó en 1928 en Cochabamba. El movimiento estudiantil se caracterizó por ser radical. Los estudiantes proclamaron una efectiva alianza entre proletarios manuales e intelectuales, crearon comités obreros y estudiantiles de solidaridad, apoyaron la emancipación del indio, la gremialización de maestros y la institucionalización de universidades populares. En realidad, los estudiantes pensaban que la universidad debía ser la antena más sensible a las causas renovadoras. Por otro lado, la FUB condenaba las campañas políticas partidistas, oponiéndose a la política caudillista. En cuanto a la modernización de la estructura económica y financiera en Bolivia, los universitarios proponían socializar la propiedad privada, nacionalizar las minas y el petróleo, el fraccionamiento obligatorio del latifundio y la dotación de tierras a los indios, el fomento de la industria suprimiendo monopolios, la reglamentación completa del trabajo, y una estatización progresiva de las fuentes de riqueza.

Para la década de los 30, el conflicto político se orientó hacia la discusión sobre cómo resolver el problema del indio utilizando el recurso de la reforma agraria. En cuanto a la gestión constitucional y legislativa, los universitarios exigían separar la Iglesia del Estado, el funcionamiento de un parlamento gremial que limite el absolutismo del poder ejecutivo, la autonomía del poder judicial, además de la autonomía del poder universitario. Así, el movimiento estudiantil al radicalizarse en su conjunto, jugó un rol político importante de oposición total al status quo. Es importante destacar que en el seno del movimiento estudiantil participarían los futuros dirigentes socialistas, marxistas y nacionalistas de la izquierda boliviana que habrían de actuar intensamente a partir de la década de los 40 y durante la Revolución Nacional.

La universidad boliviana y el movimiento socialista embrionario, levantaron consignas destinadas a crear una conciencia colectiva para la lucha contra la servidumbre indígena, la unión de proletarios e intelectuales, la lucha contra el imperialismo y la quiebra definitiva de todo el sistema creado por los liberales, sobre todo a través de un instrumento que después pasó a ser la principal medida de cualquier movilización: la violencia.

El movimiento socialista embrionario y la aparición de una nueva corriente ideológica llegaron a Bolivia basándose en corrientes europeas como el anarquismo y el marxismo, ideologías que calaron muy profundo en algunas élites intelectuales bolivianas, alcanzando influencia política y social en diferentes organizaciones de artesanos y en la conformación de partidos políticos modernos, sobre todo porque ansiosamente buscaban alternativas para salir del modelo liberal. Las corrientes como el anarquismo, socialismo y comunismo, incidieron en la vida política y social boliviana, convirtiéndose en pensamiento radical y a la vez utópico de la época liberal.

Las distintas corrientes ideológicas al interior del movimiento estudiantil ayudaron bastante para la formulación de actitudes nacionalistas radicales, elaboradas por intelectuales con formación universitaria, quienes después conformarían el núcleo central del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), a través de una mezcla entre activismo violento, radicalización de trabajadores mineros y el empuje de una propuesta ideológica: la “alianza de clases” que, después, súbitamente articuló todas las acciones de protesta para romper con el sistema. El hecho de interpelar a los sectores descontentos de la élite intelectual, los trabajadores mineros y las masas indígenas mediante la alianza de clases, posibilitó el embrión político que desembocaría en la Revolución de 1952; obviamente luego de que el terreno estuviera abonado

por el fracaso de las élites gobernantes y el desplome de un sueño modernizador cuyas raíces se pudrieron dentro del proyecto liberal.

La Crisis del Estado, las reivindicaciones regionales y la situación revolucionaria

Esta sección desarrollará las explicaciones a partir de lo que se denomina los “aceleradores” de la situación revolucionaria, haciendo un diagnóstico sobre la crisis del Estado oligárquico y el nacimiento de una nueva política de masas que asumió a la violencia como el método político para abrir una nueva brecha histórica.

El viejo orden político, social y cultural no tardó en ser precipitado al fango con un nuevo error de la oligarquía: la Guerra del Chaco contra el Paraguay. Teóricamente, la guerra fue considerada como una buena apuesta, porque ¿qué resistencia podía ofrecer un país pequeño y atrasado como el Paraguay frente a Bolivia, país relativamente industrializado, predilección del capitalismo mundial por sus materias primas mineras, y cuyo ejército fue entrenado por altos oficiales alemanes? Cuando se constató que Paraguay podía vencer al país, como ocurrió realmente, la humillación sufrida por las clases medias, sectores intelectuales y militantes radicales comunistas, inició un proceso histórico para disputar con rigor el poder del Estado, destituir a la oligarquía y aplastar al ejército.

La Guerra del Chaco marcará los siguientes veinte años después de 1935, porque muestra el fracaso de un grupo de intelectuales y políticos que creían viable una salida del país hacia el mar Atlántico. Durante las décadas de los años veinte y treinta, Paraguay consideraba posible encontrar petróleo en las arenas del Chaco boliviano; era un país pobre, sin mucha riqueza en

recursos naturales, sin salida al mar como Bolivia, viendo la alternativa de alcanzar el desarrollo y éxito económico conquistando el Chaco a través de acciones expansionistas.

A esto también debe agregarse que la celebración de los tratados de Lima en 1929, donde Chile y Perú destruyeron las aspiraciones bolivianas para tener acceso al Pacífico, motivó que algunos políticos nacionales propongan orientar todos los esfuerzos rumbo al Atlántico. Si los tratados de Tacna y Arica pusieron un cerrojo diplomático al país, cancelando una puerta en el Pacífico, hombres como Daniel Salamanca afirmaron con profunda convicción que el éxito boliviano radicaba en la conquista de territorios, abriendo senda hacia el río Paraguay. Bolivia ocuparía un supuesto país pobre y llegaría a una nueva ventana marítima. Tal abstracción teórica desató una guerra en medio de incertidumbres y ruinas militares permanentes. Los perdedores aparecieron en ambos bandos. Paraguay no encontró los yacimientos de petróleo y Bolivia no pudo imponerse frente a un enemigo que resultó ser más fuerte; por lo tanto, la política exterior de la oligarquía minero-feudal se había deslizado por el precipicio de mitos y creencias sin subsistencia.

Durante la guerra, el presidente Daniel Salamanca se vio obligado a iniciar un proceso dinámico de movilización de masas, sobre todo campesinas, con el propósito de enfrentar a las necesidades militares. De esta manera, la movilización de tropas se convirtió en una cruzada nacionalista. Este intento por sublimar los sacrificios que demandaba una guerra, fomentó el fervor patriótico y el chauvinismo. Para muchos historiadores, como Roberto Querejazu Calvo o René Arze Aguirre, la Guerra del Chaco fue la primera guerra nacional boliviana y el primer esfuerzo verdaderamente abarcador de todo el país. El nacionalismo extremista germinó con mayor fuerza entre los intelectuales y profesionales de clase media que se habían convertido en

críticos del régimen oligárquico cuya imposibilidad de brindar alternativas dinamizadoras a la economía y al Estado, aceleró un sentimiento de frustración con la guerra.²⁸

Los profesionales y militares de clase media descubrieron a los otros pedazos del país en las masas indígenas y en la soledad de los campos de batalla donde la enorme mayoría de soldados rasos no sabían por qué ni para qué estaban allí. Por lo tanto, las concepciones integracionistas y el nacionalismo exaltado se transformaron en banderas de una nueva generación de intelectuales y militares de rango medio que habrían de llegar a disputar el poder después de derrocar al presidente Salamanca.

La Guerra del Chaco puede ser considerada solamente como un *acelerador* de la situación revolucionaria a partir 1936, en la medida en que el propio Estado boliviano había demostrado, mucho más antes del conflicto bélico, los indicadores de descomposición. La depresión de 1929 marcó una llaga difícil de sanar ocasionando una baja del 60 por ciento en los precios del estaño, reduciendo las exportaciones en un 70 por ciento para 1933. En realidad, el período que va de 1929 a 1933 presentó los indicadores más desastrosos para el modelo liberal del estaño, pues las exportaciones bolivianas disminuyeron de 47.087 a 14.957 toneladas; los precios de los artículos domésticos experimentaron un alza, los salarios de los empleados públicos se contrajeron y creció el desempleo; la deuda pública se hizo ingobernable y en julio de 1931 el país tuvo que declararse en mora, ingresando en la lista internacional como una nación financieramente desconfiable.²⁹ La crisis del Estado oligárquico ya no podía responder, ni

²⁸ Cfr. ARZE AGUIRRE, René. **Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco**, CERES, La Paz, 1987.

²⁹ Para analizar las relaciones entre el conjunto de influencias internacionales y los esfuerzos del país para hacer frente a éstas, consultar: GARCIA ARGANARÁS, Fernando. **Razón de Estado y el empate histórico boliviano: 1952-1982. La economía política de la modernización boliviana**; Los Amigos del Libro-Mala Yerba Editores, Cochabamba, 1993. Para este autor, "la revolución de 1952 puso fin a la oligarquía minera y terrateniente que

a las demandas políticas internas de un país desarticulado y acosado por los desequilibrios regionales, ni tampoco acomodarse a las nuevas reglas del juego internacional.

El estancamiento de las exportaciones mineras, de la agricultura y de la incipiente industria durante la década de los años 40 tenía un hilo conductor común: la falta de capitales de inversión. “El capital, sin embargo, sólo puede ser invertido en una economía donde el trabajo, la tierra y hasta el dinero mismo pueden ser comprados y vendidos en mercados donde la oferta de bienes y servicios, a un determinado precio, es igual a la demanda, a dicho precio”³⁰. El país no estaba en condiciones de modernizarse para atraer la inversión de capitales y, de pronto, toda estrategia política terminaba aplacada por una insistente sentencia: la destrucción del orden oligárquico terrateniente y feudal.

En 1942, un intento de solución a la crisis económica fue la formulación del *Plan Bohan*, elaborado por una misión norteamericana cuyo objetivo fue proponer un programa de desarrollo económico consistente en abrir la zona de Santa Cruz para producir azúcar, arroz, carne, algodón, etc., con el propósito de sustituir las importaciones de estos productos. La creación de este nuevo polo de acumulación, recién tuvo lugar con la Revolución de abril, pues el Plan Bohan fue truncado en su ejecución por la profunda crisis de Estado que asfixió al país a partir de 1945.

prosperó durante la **fase de declinación de la hegemonía británica** y los imperialismos competitivos (1875-1944)”, p. 17.

Para otro analista económico como Fernando Baptista Gumucio: “los gobiernos bolivianos enfrentaron un desplazamiento de la economía nacional del área esterlina hacia el área del dólar americano. La crisis económica que coincide con el cambio político del liberalismo hacia el republicano saavedrista, era en el plano mundial el resultado inmediato de un ajuste postbélico [después de la Primera Guerra Mundial] de las reglas del juego en el comercio mundial”, p. 42; en: BAPTISTA GUMUCIO, Fernando. **Estrategia nacional para la deuda externa**; Siglo Ltda., La Paz, 1984.

³⁰ GARCIA ARGANARÁS, Fernando. **Razón de Estado...**, ob. cit., p. 58.

El desastre del Chaco desencadenó el nacimiento de nuevas concepciones polarizantes, entre las que destacaban los planteamientos revolucionarios comunistas y el nacionalismo, a través de un Estado totalizador. De esta manera, el nacionalismo boliviano encontró eco en sectores del ejército descontentos con la oligarquía, provocando, además, un antiliberalismo extremista. Al libre mercado se opuso el sueño de la planificación; a las libertades individuales, la organización corporativa; a las demandas descentralizadoras y exigencias regionales que persistían después de la guerra del Chaco, se opuso el Estado fuertemente centralizado.

Frente a la crisis económica, la oligarquía estañífera optó por negociar intercambios desiguales con el mercado internacional, cediendo ante la presión norteamericana, y manteniendo un Estado gendarme afincado en el occidente del país. Las visiones extremistas postularon recuperar el poder del Estado para los bolivianos con un fuerte énfasis centralista y un nuevo ingrediente: que sea capaz de abarcar e integrar a todo el país. Si bien el centralismo no era algo nuevo dentro del debate político, sí lo fueron las tesis nacionalistas que presionaban para entronizar un Estado autoritario.

Tal como lo afirma el historiador James Dunkerley, “la época de la posguerra fue testigo de una explosión de sentimiento popular, aquel que es tan inherente a las crisis políticas (...). En este caso se trataba de un sentimiento muy específicamente determinado de traición, sufrimiento compartido, visión maniqueísta de cobardía y heroísmo, división generacional y desplazamiento ideológico mezclados por el trauma colectivo de la derrota en el Chaco. Estos elementos (...) se combinaron para erosionar la hegemonía liberal y su sentido más amplio del orden de cosas, construyendo la matriz dentro de la cual cobraron forma las nuevas ideas políticas nacionalistas radicales”³¹.

³¹ DUNKERLEY, James. **Rebelión en las venas...**, ob. cit., p. 37.

Estos son los antecedentes que se levantan como telón de fondo para desatar la revolución que destruyó las viejas estructuras de poder. Por lo tanto, la legitimidad política del Estado liberal y del gobierno oligárquico quedó completamente debilitada a partir de 1946. Sin embargo, como se verá más adelante, la Revolución Nacional no pudo articular inmediatamente un nuevo poder estatal, pues éste se vio rebasado por una serie de caudillos y caciques, cuya personalidad se impuso, en gran medida, con mayor preponderancia sobre la recomposición de un nuevo orden cultural, económico y político.

La crisis del Estado que enfrentó la oligarquía tuvo un rasgo distintivo fundamental: un sistema político cuya legitimación radicaba en la ausencia de participación y en el inmovilismo económico. Las razones que alentaron esta actitud radical en las élites gobernantes, descansaban en una definitiva falta de crecimiento económico que pudiera democratizar la distribución de la riqueza minera y en un manifiesto rechazo para incorporar a la población dentro de una comunidad Nación-Estado. Teóricamente, el Estado era soberano en todo el país pero el verdadero control estatal terminaba generalmente al interior de los límites urbanos. En consecuencia, uno de los prerrequisitos para la relativa estabilidad política del sistema fue la pasividad y marginalidad de gran parte de la población no ciudadana, en la medida en que se descartó por completo el concepto de ciudadanía imperante en las democracias occidentales de Europa o Norteamérica, el cual exigía amplias bases sociales de legitimación del Estado y una participación política con derechos plenos.

En el caso boliviano, las élites que habían surgido a comienzos del siglo XX, mostraban una continuidad lineal y sumamente drástica entre riqueza, raza, poder político y participación. Dichas élites se conectaban con lo que vino a denominarse el sistema nacional, construido sobre la base del sistema estañífero y sustentado en la aquiescencia de los Tres Grandes barones del

estaño. Las decadentes élites que organizaron su poder en torno al control terrateniente, habían sido arrinconadas hacia el sistema local, de raíz feudal y colonialista.

En este sentido, el sistema político no reconoció otra forma de legitimidad que proseguir con el *método censitario* para la acción y participación políticas; es decir, la base ciudadana solamente tomaba en cuenta a los varones que sabían leer, escribir y poseían cierto linaje, propiedades como tierras o importantes puestos administrativo-burocráticos dentro del Estado, alcanzando a mostrar ante la sociedad un monto determinado de renta. Este modelo censitario descartaba la acumulación de rentas provenientes de ser empleado/a doméstico/a.

El Estado así concebido, tendió a confundirse con el sistema nacional y fue progresivamente sometido a una pugna de facciones entre las élites ligadas al mundo terrateniente, aquellas relacionadas con la minería del estaño y otras comunicadas con los partidos políticos liberales, republicanos y conservadores de comienzos de siglo. Esta estructura social estuvo compuesta por un grupo amalgamado con intereses estañíferos, donde la antigua oligarquía del sur estaba siendo desplazada por un grupo originado en la clase profesional y administrativa urbana. El ejemplo más notable de esa nueva dinámica fue Simón I. Patiño, un mestizo pobre y despreciado que creó el imperio estañífero más poderoso del mundo.

La consolidación de los Tres Grandes barones del estaño dio lugar al surgimiento de una presión de intereses privados y corporativos para definir el rumbo que debía tener la política y la orientación del Estado boliviano. Aunque no puede decirse que los Tres Grandes impusieron, desde un comienzo, sus aspiraciones sobre un Estado marioneta, su poder determinó el rumbo de una serie de decisiones que ya no podían responder a otro tipo de demandas sociales, pues todo estaba restringido a los intereses económicos de una minoría, desconocida y ajena para los

indígenas de hacienda, así como para las regiones que no eran funcionales al proyecto económico del eje minero.

La exclusión sistemática generada por el propio Estado, la crisis de legitimidad que enfrentaba el sistema político y la lucha de facciones entre la élite gobernante para acceder a puestos importantes o para generar su propia riqueza a costa del Estado sobre la base del patronazgo o el clientelismo político, fue muy bien aprovechada por la injerencia empresarial de Patiño, Aramayo y Hochschild. Esta nueva élite representaba un auténtico grupo de intereses moderno que buscaba su vinculación estratégica con el mercado mundial del estaño, sin atender mucho a su necesidad de participar directa o indirectamente en el manejo del aparato estatal³².

Asimismo, muchos profesionales jóvenes, sobre todo abogados e ingenieros mineros, comenzaron a conformar un estamento funcional ligado a la nueva élite minera, por lo que surgió una subélite que fue logrando ascender en la escala social en la medida en que defendía los intereses privados del sector minero de los Superbarones. Otros, en cambio, querían conquistar puestos burocráticos en la administración pública que cumpliesen un papel efectivo para satisfacer al poder económico de los magnates del estaño.

Consolidado el poder económico de las empresas privadas pertenecientes a Patiño, Hochschild y Aramayo, importaba muy poco cualquier debate ideológico sobre la modernización del país, la ampliación democrática de la ciudadanía política o la liberación mercantil de fuerza

³² Un **grupo de interés** puede ser definido como "(...) grupos organizados que persiguen fines definidos con bastante claridad, por lo que una forma evidente de clasificarlos es con arreglo a las características de sus objetivos (...). Los grupos de interés difieren en términos de clientela. Algunos grupos representan los intereses de un grupo o sector de la sociedad bastante bien definidos, mientras que otros grupos no tienen más clientela comparable que el conjunto de los ciudadanos"; por lo tanto, el grupo de interés constituirá una estrategia de presión política, tanto para copar espacios de decisión, como para ejercer el poder si se diera la oportunidad; en: DOWSE E., Robert y HUGHES A. John. **Sociología política**, Alianza Universidad, Madrid, 1982, pp. 467-468.

trabajo indígena en las haciendas. El Estado perdía pertinencia, a medida que el sistema económico adoptaba una forma definida: vocación exportadora, monoprodutora y articuladora de un espacio geográfico exclusivamente occidental, con una cabeza política en La Paz. Los barones del estaño fijaron el control definitivo, tanto de la riqueza como de su posición social, creándose con ello un problema de circulación y ascenso de nuevas élites, tanto horizontal como verticalmente.

A comienzos de la década de los años treinta surgió un factor de importante trascendencia para que los barones del estaño influencien más decididamente en el aparato del Estado anquilosado, porque en 1930 fue firmado un acuerdo mundial entre todos los países productores de estaño, asignándose a cada país una cuota de producción, y a los distintos gobiernos el poder de distribuirla al interior de sus respectivos territorios. Con esto, el gobierno boliviano asumía mucho poder y responsabilidad para el control de los asuntos internos del empresariado estañífero. En este momento, fue entonces cuando se inició una abierta y estrecha vinculación de los magnates del estaño con el gobierno. Sin embargo, esta presión fue solamente para cumplir un objetivo estrictamente empresarial, orientando todo tipo de decisiones en materia de política económica hacia la maximización de ganancias productivas. No interesó para nada la modernización del Estado ni su apertura democrática o su mejoramiento institucional.

En consecuencia, el sistema político no tuvo ninguna alternativa de crecer fuera de la lógica extractiva y económica del estaño, o más allá de la política señorial de exclusiones sistemáticas. La torta económica también dejó de expandirse pues era privilegio de los barones del estaño y del sector de mineros medianos y pequeños relacionados con las grandes empresas. Los elementos del poder económico – la propiedad de tierras y minas sobre todo –, tendían a permanecer invariablemente en pocas manos, lo cual acumuló conflictos, no solamente para

quienes aspiraban a ascender (clase media profesional y pequeños propietarios fuera del sistema minero), sino también para grupos superiores; es decir, para facciones de la misma élite gobernante que no podían generar una base autónoma de riqueza sino era colonizando el Estado y siendo funcionarios de la burguesía estañífera. La base económica mostró rasgos estáticos y el mapa político no permitía ninguna circulación democrática de élites.

El Estado había perdido su esencia nuclear, ser el regulador de las relaciones sociales y estructurador de una legitimidad que se extienda por todo el límite geográfico que tiene un país. Su acción se reducía a sentar soberanía dentro de los márgenes del sistema nacional: la esfera de influencia del empresariado minero. Esto ahondó también la desazón del sistema local de las haciendas, cuyas aspiraciones regionales vieron con rencor su exclusión del debate político y de la toma de decisiones históricas. Todo era, desde aquel momento, facultad y atribución del modelo productivo minero.

Desde la perspectiva regional, y de los micro-poderes municipales, la crisis del Estado tuvo especiales connotaciones. El cambio más significativo entre 1936 y 1937, “(...) consistió en introducir la figura de un alcalde rentado, electo por mayoría absoluta de votos por un Colegio Electoral designado por dos años por el Departamento Consultivo del Municipio en cuestión (...) los alcaldes se tornaban así en figuras centrales de la nueva Municipalidad, ya que se hallaban encargados de todas las funciones que correspondían a los antiguos Consejos y Juntas Municipales”³³. Es a través de estas acciones compensatorias que las élites regionales intentaron poner un dique de contención frente a la destrucción del Estado nacional oligárquico, cuya descomposición fue aminorada por los municipios con mayor capacidad administrativa al interior de las ciudades que iban creciendo y complejizándose. Al mismo tiempo, dichos

³³ RODRÍGUEZ OSTRIA, Gustavo. **Estado y municipio en Bolivia**, ob. cit., p. 64.

municipios pretendían rearticular las demandas regionales de todos los departamentos y de las áreas rurales, generando una lógica política más circunscrita a los intereses de la ciudad o la región, antes que su sometimiento automático al sistema nacional donde las decisiones ya estaban tomadas y cerradas.

Luego de la Guerra del Chaco, el presidente Germán Busch, quien asumió la presidencia entre el 17 de julio de 1937 hasta el 23 de agosto de 1939, convocó a una Convención Nacional en 1938 con el objetivo de sancionar una nueva Constitución Política y dar otra orientación jurídica al funcionamiento del Estado. En dicha Convención se cambiaron los basamentos liberales de la vieja Constitución de 1880, introduciéndose el concepto de responsabilidad social del Estado, de tal suerte que, de ser considerado un mero gendarme liberal, éste fue elevado al grado de protector y regulador de la sociedad civil, así como de la economía nacional. Uno de los resultados inmediatos de esta medida fue marginar, de hecho, toda demanda regional específica, negándose cualquier forma de descentralización por considerársela como atentatoria a la integridad nacional. Asimismo, se mantuvo, como fue la práctica desde los años 20, la elección de un alcalde nombrado directamente por el presidente de la República.

Al comenzar la tumultuosa década de los años 40, los intereses nacionales debían ser la prioridad por encima, inclusive, de la viabilidad de una democracia de corte directo como eran las demandas locales del municipio. El nacionalismo integrador que fomentó la defensa de un Estado centralista, condenaba también al asableísmo inútil que podía florecer en la democracia municipal, descartándose la posibilidad de politizar a las regiones. Empero, el poder municipal sobrevivió hasta 1942, época en la que éste definió claramente su organización central: por un lado, presentaba un ámbito ejecutivo, rentado y nombrado por el presidente; por otro, existía un

nivel legislativo y fiscalizador expresado en la Asamblea del Concejo Deliberante, nombrada por voto popular y con un trabajo ad honorem.

La crisis del Estado oligárquico entró en una fase de transición e incertidumbre, perfilándose, sin embargo, hacia un Estado autoritativo en sus funciones para hacerse cargo de toda la sociedad como una comunidad cohesionada. Al tratar de encontrar una salida a la crisis del Estado, durante la década de los 40 se intentó doblegar al poder regional, municipalista y descentralista. Pero el municipio pervivió como una alternativa local para hacer frente a la crisis nacional, peleando por plantar su propia identidad y mejorando su estructura burocrática a través de la instauración de ámbitos ejecutivos y legislativos muy similares a los del Estado central. Así, la nueva fisonomía del Estado boliviano durante la postguerra, trató de conjugar el principio de soberanía popular – buscando recuperar legitimidad con los gobiernos militares autonombrados como socialismos o nacionalismos de Estado, desde David Toro y Germán Busch, hasta Gualberto Villarroel – con el principio de eficiencia administrativa en las municipalidades.

La Convención Nacional de 1945 llevada a cabo por el presidente Villarroel reintrodujo el debate de los municipios y el poder de las regiones. Se mantuvo la división entre ejecutivo y legislativo para hacer eficaces las tareas de toda Alcaldía; una vez más el alcalde era elegido por el presidente pero de una terna presentada por el Concejo Deliberante elegido por voto popular. Después del derrocamiento de Villarroel en 1946, el país había ingresado en una fase de guerra civil, sobre todo debido a la efervescencia revolucionaria nunca antes vista en las minas. La violencia, el concepto y la práctica de la revolución en esta época, denominada el sexenio – 1946 a 1952 – se convirtieron en algo que debía definirse mediante el poder, la destrucción del Estado y el empleo, con mayor frecuencia, de la fuerza. Durante el sexenio, la oligarquía intentó

apaciguar los enfrentamientos y estallidos revolucionarios volcando la mirada hacia los poderes locales, pues el Estado como institución nacional estaba en constante deslegitimación y acoso por parte de partidos políticos radicales como el Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR); de esta manera, el presidente Enrique Hertzog (1947-1949) sancionó otra modificación constitucional donde respetaba la división entre ámbitos legislativo y ejecutivo para los municipios y donde el poder municipal solamente podía descansar en los electores. El Consejo y las Juntas Municipales debían ser elegidos por voto directo para una gestión de dos años y, a su vez, elegir al Alcalde como máxima autoridad local que se extendía virtualmente hacia toda la región.

Las reformas electorales de Hertzog pronto cambiaron de rumbo, pues cuando se trataba del poder central, la manipulación del voto y la presión de la oligarquía para no incorporar a nuevas fuerzas sociales fueron una marca que iba a extenderse hasta las elecciones presidenciales de 1951, año en que el MNR obtuvo la primera mayoría relativa. El régimen oligárquico anuló aquél proceso electoral, reavivando el descontento local, regional y nacional hacia un sistema político de exclusiones políticas, desatándose la insurrección del 9 de abril de 1952.

El inacabado proceso de unificación de las nociones de República, Estado, Nación, Región y Pueblo, que entraron en una profunda crisis durante los primeros treinta años del siglo XX, chocaron permanentemente con la mentalidad restringida y excluyente de una oligarquía, que si bien logró mantenerse en el poder hasta 1951, estuvo asediada por la inestabilidad política, pues ésta fue la revelación de ausencias hegemónicas e incapacidades de liderazgo orgánico de las fuerzas sociales que, si en unos casos no acabaron de morir con la llegada de la Revolución Nacional, en otros casos tampoco terminaron de nacer como tales, en la medida que el poder del Estado quedó atrapado en una disyuntiva: reconocer a los poderes locales y regionales como la

materia prima para refundar la República, u homogeneizar todo desde la acción del Estado-Nación abarcador.

La Revolución de abril dio una respuesta radical instalando un poder central y enalteciendo el mito del Estado totalizador como el marco de control para una nueva etapa histórica. En Bolivia, el poder regional siempre fue inestable, pues durante los primeros cincuenta años del siglo XX, las diferentes sociedades regionales no lograron afianzar su hegemonía, pues cuando parecía lograrse una democratización entre poder estatal y regional, éste fue transitorio, dejando amplios márgenes para un redespliegue autoritario que buscaba imponerse desde el Estado.

La Revolución Nacional y las fases del nuevo Estado

La Revolución Nacional boliviana que tuvo lugar entre el 9 y 11 de abril de 1952, puede ser conceptualizada como una situación de guerra interna, “(...) cuyas consecuencias son: a) redistribución de la capacidad de influencia de los grupos en los mecanismos autoritarios de una sociedad; b) exclusión de todo acceso futuro al poder para aquellos grupos que previamente gozaban de un alto grado de autoridad; c) redefinición de los conceptos y principios de autoridad de la sociedad; y d) redefinición de las metas que generalmente persigue la autoridad gubernamental”³⁴.

La crisis del Estado oligárquico desembocó en una situación ingobernable donde la tradicional élite del poder no podía resolver su crisis de legitimidad mediante los valores y modelos ideológicos imperantes durante el régimen liberal que había nacido a principios del

³⁴ MALLOY, James M. **Bolivia: la revolución inconclusa...**, ob. cit., p. 16.

siglo XX. Por esto mismo, existía una profunda crisis ideológica de los grupos de poder mineros y terratenientes, los cuales no planteaban alternativas viables de cambio social o económico. En consecuencia, dicha crisis ideológica se convirtió en una crisis de autoridad entre 1936 y 1950, ya que las grandes masas se habían desprendido definitivamente de las ideologías tradicionales.

La vieja élite en el poder se transformó en una élite intransigente que buscaba aliviar cualquier crisis política a través de la violencia. Las bases sociales del régimen se negaron a reconocer la autoridad de los sucesivos gobiernos oligárquicos de José Luis Tejada Sorzano (1934-1936), Carlos Quintanilla (1939-1940), Enrique Peñaranda (1940-1943), Tomás Monje Gutiérrez (1946-1947), Enrique Hertzog (1947-1949), Mamerto Urriolagoitia (1949-1951) y Hugo Ballivián (1951-1952). Un interregno de gobiernos reformistas bajo el mando de las logias militares que conformaron el grupo de interés Razón de Patria (RADEPA), nacido después de la Guerra del Chaco, fueron los regímenes de David Toro (1936-1937), Germán Busch (1937-1939) y Gualberto Villarroel (1943-1946), quienes tampoco mejoraron la insuficiencia hegemónica de los liderazgos presidenciales. Esta ausencia de alternativas factibles de gobierno condujo a una irremediable incapacidad para construir un orden político.

Por otra parte, la Revolución de abril estalló en momentos donde era muy débil la mediación entre el Estado y la sociedad civil, de tal manera que los grupos radicalizados, comunistas y nacionalistas, organizados en las principales ciudades de Bolivia como La Paz y Cochabamba, comenzaron a enardecerse para asediar directamente al poder estatal, hecho que alcanzó su clímax con la movilización armada de mineros, fabriles, universitarios, artesanos y clase media. Los enfrentamientos del 9 al 11 de abril vencieron al ejército y la policía, capturándose armamento y declarándose rápidamente el poder popular cuya expresión más viva fueron las milicias obreras, que después se extendieron hacia la conformación de milicias

campesinas, constituyéndose lo que bien denominó el historiador James Dunkerley, como una verdadera rebelión desde las venas más profundas de la sociedad boliviana.

La movilización de masas bajo el comando del MNR y de los mineros que habían fundado la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organización obrera con una formación política definida y sumamente compacta, impulsaron la necesidad de reorganizar el Estado, en función de *utilizarlo* para fomentar el desarrollo económico, distribuir democráticamente la riqueza, democratizar la participación política y liberar al campesinado de la explotación feudal, en medio de un comportamiento revolucionario que exigía, de inmediato, la nacionalización de las minas y la reforma agraria como las metas que instaurarían una nueva época.

Al analizarse los antecedentes políticos de la Revolución Nacional, siempre surge la pregunta en torno a ¿por qué fue el MNR el partido hegemónico durante y después de la insurrección? ¿Dónde quedaron los objetivos e iniciativas radicales marxistas que apuntaban hacia una revolución más extremista en busca del comunismo? Al respecto, es importante anotar que fue el MNR quien toma la iniciativa de crear la FSTMB en junio de 1944, pues en aquel momento era un socio menor durante el gobierno del presidente Gualberto Villarroel. Aun a pesar de que el patrocinio del partido entre 1944 y 1950 no alcanzó una fase crucial echando raíces profundas en el movimiento obrero, el MNR se valió de éste para sustentar una nueva base de legitimidad en el primer gobierno revolucionario de Víctor Paz Estenssoro (1952-1956), éste aceptó incorporar a cuatro ministros, como cuota de representación obrera al interior de su gabinete, y se cobijó detrás del respaldo dado por las milicias obreras para frenar las tendencias

derechistas del propio MNR que se negaban a ejecutar las reformas estructurales como nacionalizar las minas y dar paso a la reforma agraria³⁵.

El MNR fue acumulando capital político a través de su fuerza verbal y de la propaganda parlamentaria de un grupo de destacados intelectuales jóvenes veteranos de la Guerra del Chaco, quienes buscaban convertirse en una contra-élite desde su época de conspiradores políticos durante el gobierno del presidente David Toro. Esta nueva generación aumentó sus adeptos corporativistas a través de una amplia orientación anti-oligárquica. Su nacionalismo exacerbado los llevó a cuestionar al Estado en su conjunto y a plantear un análisis de la realidad, valiéndose del marxismo como método de interpretación, así como llevando adelante un pragmatismo político, sobre todo a partir de la alianza de clases por intermedio de un proceso de movilización de masas donde destacaban: el endiosamiento del Estado como aquel factor principal para transformar la sociedad y la economía desde arriba; una tesis racial que enaltecía la homogeneización de la cultura nacional a consecuencia del mestizaje; el desarrollo de la noción de Pueblo a partir del policlasismo, y el tributo incondicional hacia una noción abstracta como el Estado-Nación.

Para uno de los fundadores del MNR como Augusto Céspedes, los gestores de este partido eran “hombres jóvenes que casi todos por su situación económica correspondían a la modesta clase media, por su origen y particularidades intelectuales y espirituales representaban

³⁵ Los primeros cuatro ministros que ingresaron al poder como exigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), fueron: Juan Lechín, en la cartera de Minas y Petróleo; Germán Butrón como Ministro de Trabajo; Angel Gómez García como Ministro de Transportes y Comunicaciones, y Ñuflo Chávez, titular del Ministerio de Asuntos Campesinos.

la más florida élite de la República”³⁶. El núcleo del partido giraba en torno a Carlos Montenegro, Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arze, José Cuadros Quiroga, Germán Monroy Block, Fernando Iturralde, Raúl Molina Gutiérrez, Jorge T. Lavadenz, Alberto López, Rafael Otazo, Rigoberto Armaza Lopera, Rodolfo Costas, Augusto Céspedes, Alvaro Pérez del Castillo, Gastón Velasco, Alfonso Gumucio, Adrián Barrenechea, a los que, más tarde, se unirían Juan Lechín Oquendo y Ñuflo Chávez Ortiz.

Uno de los ideólogos más importantes del partido, Walter Guevara, afirmaba que en Bolivia era inviable una revolución de carácter comunista porque “si los obreros bolivianos siguieran ciegamente las consignas comunistas que reciben, debieran organizar la revolución contra la burguesía que los explota. ¿Quiénes explotan a la mayoría de los obreros bolivianos? Las grandes empresas mineras y algunas empresas ferroviarias cuyos beneficiarios no viven en Bolivia. ¿Contra qué burguesía podría entonces dirigirse su revolución? ¿Pretenden alcanzar a los accionistas que viven en Londres, Nueva York o Buenos Aires? [Por lo tanto], se puede y se debe nacionalizar las minas, pero ello sólo es posible de hacer en escala nacional y no como una reivindicación de la clase obrera. Se trata de problemas que afectan a toda la Nación como un todo y no exclusivamente a una de sus clases. Por lo demás, la Revolución Nacional puede lograr en este caso lo que no podría ni siquiera plantear la revolución de clase”³⁷.

³⁶ CÉSPEDES, Augusto. **El dictador suicida. (40 años de historia de Bolivia)**, Juventud, La Paz, 1987, p. 263 y ss. Consultar, además: ANTEZANA ERGUETA, Luis. **Historia secreta del MNR, 1943-1946**, vol. II, Juventud, La Paz, 1988.

³⁷ GUEVARA ARZE, Walter. “Manifiesto a los campesinos de Ayopaya”; en: **Bases para replantear la revolución nacional**, Juventud, La Paz, 1988.

El sociólogo boliviano René Zavaleta Mercado, desde su óptica marxista, afirmaba que “la implicación de las tesis de Guevara abarcaba (...) a todos los sectores no proletarios del régimen [durante el dominio de la oligarquía minero-feudal]. Era un supuesto [del MNR] el advertir que el propio desarrollo de las fuerzas productivas, tácito en el impacto revolucionario, **convocaba a un desarrollo conjunto**, paralelo e **intercorrespondiente de la burguesía y el proletariado** y que debía hablarse por tanto de **revolución**

Estas condiciones ideológicas y políticas convirtieron al MNR en un partido hegemónico, superando toda posibilidad de participación proveniente de otras fuerzas de izquierda o del conservadurismo derechista como aquel de Falange Socialista Boliviana (FSB), el partido más importante de oposición al MNR hasta la década de los 60. Sin embargo, lo que parecía ser una portentosa estrategia de convocatoria y convergencia masiva – como la alianza de clases o el pragmatismo para adaptarse a las necesidades de cada coyuntura política – se convirtió después en el eje de su inestabilidad como partido dentro del Estado y en el manejo mismo del poder, puesto que “(...) las diferencias ideológicas y de orientación dentro del movimiento eran tan enormes, que los enfrentamientos que tuvieron lugar después de la insurrección fueron particularmente encarnizados. Esto se debió a una serie peculiar de circunstancias que, después de 1946, hicieron del MNR una especie de imán que atrajo a todas las tendencias opositoras, tanto de derecha como de izquierda, reformistas como revolucionarias. Al extremo de que, en 1951, el movimiento fue una mezcla heterogénea de orientaciones y posiciones contradictorias”³⁸.

El MNR nunca fue un partido unificado, sino una verdadera máquina burocrática contradictoria. La tendencia del líder, Víctor Paz Estenssoro, siempre aconsejó moderación para no deslizarse hacia el socialismo, al mismo tiempo que hizo innumerables negociaciones de emergencia en el ámbito diplomático con los Estados Unidos, cuyo objetivo era despejar las dudas sobre una revolución comunista en Bolivia. Por otra parte, la influencia obrera, a la cabeza de Juan Lechín Oquendo, tenía muy claro que las reformas estructurales debían ser arrancadas a

nacional”; en: ZAVALETA MERCADO, René. “La revolución democrática de 1952 y las tendencias sociológicas emergentes”; en: **Clases sociales y conocimiento**, Los Amigos del Libro, La Paz, 1988, pp. 32-33.

³⁸ MALLOY, James M. **Bolivia: la revolución...**, ob. cit., p. 279.

cualquier costo, aunque no existiera una claridad estratégica sobre el curso posterior de la política económica en torno a la nacionalización de las minas o la modernización industrial boliviana. Los dirigentes obreros plantearon una posición muy cercana a la Tesis de Pulacayo, donde – en términos políticos – debía apoyarse la revolución burguesa para que el desarrollo capitalista sea evidente y completo, porque después era inevitable su superación, fruto de las contradicciones insuperables del imperialismo y de la crisis mundial del sistema capitalista. Estos términos filosófico políticos no pudieron lograr una actitud concertadora con las otras tendencias.

El panorama final desembocó en cambiantes y vacilantes realidades tácticas que obligaron al MNR a adaptarse a las tumultuosas condiciones políticas de la Revolución. Asimismo, el partido no fue otra cosa sino una organización autoritaria con un alto grado de violencia, cuyos componentes debían ser administrados con mucho utilitarismo político para lograr un desarrollo equilibrado en medio de tanta presión popular y crisis política. Con estos propósitos pero, ante todo, para que el MNR monopolizara el poder, las tendencias de Paz Estenssoro, Siles Suazo, Guevara Arze y del mismo Lechín Oquendo, estaban dispuestas a realizar todo tipo de ajuste y concesiones que la realidad táctica demandara, para después distanciarse de muchas áreas conflictivas, pero siempre luchando por mantener la situación dentro de ciertos límites definidos por el núcleo dirigencial del MNR. Las nuevas élites políticas que capturaron el aparato del Estado durante la revolución eran íntegramente militantes del MNR, además de representar fracciones regionales bien definidas, provenientes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Para realizar una interpretación política de las reformas estructurales llevadas a cabo durante la Revolución Nacional, plantearemos las fases identificadas por el sociólogo René Zavaleta Mercado; dichas fases constituyen los ciclos del nuevo Estado que nació en 1952³⁹:

a) **Fase hegemónica de masas.** Donde el proletariado minero liderizó la revolución, el ejército de represión fue el mismo pueblo armado que presiona sobre la cúpula del MNR para llevar adelante el carácter de las medidas radicales, cerrando el paso, definitivamente, a toda posibilidad de resurgimiento de la agonizante élite minera terrateniente. Además, durante esta primera fase, la Revolución Nacional procuró articular un país cultural e ideológicamente, a condición de fortalecer una identificación con el partido revolucionario: el MNR, y con lo que postulaban sus principales dirigentes e intelectuales, entre los que se destacaron aquellos que representaban el ala izquierda del partido: Juan Lechín, Germán Butrón y Ñuflo Chávez. Si bien se propugnó el reconocimiento de una Nación, los acontecimientos objetivos obligaron al partido a apaciguar el proceso, solamente como un medio para evitar que se desate una guerra civil prolongada que tendía a radicalizar todavía más las conductas con las masas convertidas en milicias obreras y campesinas.

De esta manera, se tuvo que reordenar el poder del Estado, establecer un nuevo principio de legitimidad para las nuevas autoridades, burocracias y élites triunfantes, cuidando también que las masas no ingresen en un peligroso estado de desenfreno. Sin embargo, en este esfuerzo el propio Estado se vio debilitado por dos razones: primero porque la radicalización revolucionaria impidió identificar cuáles serían los nuevos parámetros

³⁹ Cfr. ZAVALETA MERCADO, René. "La revolución democrática de 1952...", ob. cit.

políticos de reforma estatal; segundo, porque el MNR trató de identificarse con el mismo Estado, utilizándolo como espacio de manipulación, represión y patrimonialismo, razón por la cual tampoco hubo ocasión de reformar al Estado dentro de los marcos de una nueva estructura institucional, pues todo estaba atrapado al interior de cálculos pragmáticos y acciones prebendales.

- b) **Fase semi-bonapartista del poder.** Donde el modelo estatal concebido por el MNR y la coyuntura política efervescente entre 1952 y 1956, cae presa de la fragmentación y el caudillismo con un fuerte peso de distintas *personalidades*. Así, la Revolución Nacional se vio obligada a rechazar toda presión regionalista o demandas departamentales específicas. El regionalismo representaba la amenaza de muchos notables locales para recuperar su dominación tradicional que estaba siendo destruida por las medidas revolucionarias. La concesión de autonomía local o la negociación con las demandas regionales conllevaba el riesgo de devolver, en ciertas regiones, el poder a una clase política desplazada. El fuerte centralismo que exigió la Revolución del 52 se mantuvo hasta la caída del MNR en 1964, profundizándose con los gobiernos militares, cuya única razón de poder fue la violencia para articular las regiones al Estado.

Reordenamiento del Estado y centralismo político después de 1952: Hasta dónde llegaron las reformas estructurales

El triunfo de la Revolución demandó rápidamente la nacionalización de las minas, aunque el núcleo histórico del MNR, conformado por Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo y Walter Guevara Arze, se había manifestado a favor de una transición que evitara una

confrontación directa con los barones del estaño. Por lo tanto, en una primera instancia el partido se negaba a extremar medidas, sobre todo porque estaban conscientes de la dependencia internacional respecto de los Estados Unidos, país que era visto como la fuente financiera más importante y como aquel apoyo táctico para el largo plazo en función de conseguir capitales de inversión y ejecutar la modernización económica, diversificándola. Víctor Paz y Walter Guevara se rehusaron a ser identificados con políticos comunistas y a convertir la revolución en una república de soviets; al mismo tiempo, Paz Estenssoro sabía que si no contaba con el apoyo de las milicias obreras, podía ser rebasado por el ala derechista y conservadora del partido, lo cual tendería hacia una guerra civil de peligrosas consecuencias debido a posibles enfrentamientos violentos entre el movimiento obrero y grupos conservadores de clase media. Desde el inicio de la primera gestión presidencial de Paz Estenssoro (1952-1956), el liderazgo del MNR favoreció una decidida orientación del régimen más compatible con el multilateralismo emergente, cuya cabeza era el poder norteamericano, y con las fuentes de financiamiento que aquél prometía⁴⁰. Si bien Paz Estenssoro no buscaba medidas radicales, utilizó el Estado y sus recursos como un espacio para otorgar concesiones y controlar facciones, inclusive a costa de poner en riesgo la futura estabilidad económica que el proceso de modernización y desarrollo necesitaban.

Contradictoriamente, el MNR, después de la insurrección victoriosa, justificó su existencia y liderazgo político, no solamente a través de la revolución armada, sino

⁴⁰ Cfr. GARCÍA ARGÑARÁS, Fernando. **Razón de Estado...**, ob. cit. Para este autor, "cada Estado media entre el orden mundial de su época y una determinada sociedad civil (...) la fase hegemónica de la paz americana [en la década de los 50] se caracterizó por la predominancia de fuentes multilaterales de crédito y el control multilateral garantizado por el peso económico, militar y político de los Estados Unidos, que estaba consagrado en las instituciones de Bretton Woods. La insurrección de abril concluyó con el proceso de desacoplamiento del Estado oligárquico; el plan estabilizador Eder de 1956, dio el mayor paso hacia un nuevo acomodo [por el gobierno revolucionario hacia el equilibrio con los intereses de los Estados Unidos]", pp. 121-122.

fundamentalmente en referencia a la *continuidad* de la legitimidad constitucional. En las primeras declaraciones de los líderes del partido se hizo una constante mención al derecho del MNR de asumir el poder porque había sido el vencedor de las elecciones en 1951; tal derecho habría sido usurpado por la *oligarquía*, desatándose la revolución. Sin embargo, esto expresa claramente cómo el MNR, una vez en el poder, trataba por todos los medios de equilibrarse entre radicalización y pragmatismo para lograr estabilidad; este vaivén también debilitó al Estado como institución y tuvo serias consecuencias cuando intervino en la economía para hacerse cargo del desarrollo, degenerando en corrupción e ineficacia.

La justificación constitucional para el ejercicio del poder a la cual apeló el MNR hacía ver que “en el ámbito político formal, *no hubo idea de ruptura radical con el pasado*; y el hecho de que el gobierno revolucionario no redactara una nueva Constitución hasta 1961 no fue mera coincidencia. Por consiguiente, aunque el nuevo gobierno expresó una intención revolucionaria – o cuando menos reformista – hacia las esferas sociales y económica, basaba su autoridad en normas políticas tradicionales y en la Constitución vigente”⁴¹. Al mismo tiempo, la tendencia centrista del MNR aspiraba a construir una Nación-Estado moderna y desarrollada, postulando la creación de una burguesía capitalista protegida o estimulada desde el Estado. Hubo un deseo explícito por parte de Paz Estenssoro de ser el conductor de dicha tarea, empleando un pragmatismo sin límites para ejecutar su planteamiento económico.

Dentro del partido, cada vez adquirieron mayor notoriedad las tres grandes tendencias que marcaron toda confrontación política hasta la caída del gobierno en 1964. La primera puede ser catalogada como ala izquierdista, liderada por Juan Lechín, jefe máximo de la FSTMB, cuya

⁴¹ MALLOY, James. **Bolivia: la revolución inconclusa**, ob. cit., p. 221.

conducta política era abiertamente revolucionaria y con una cercanía muy fuerte hacia el movimiento obrero, sobre todo hacia el sector minero; la segunda ala fue denominada pragmática y conciliadora, donde destacaban las figuras de Víctor Paz, Hernán Siles y Walter Guevara; la tercera ala fue considerada como aquella tendencia derechista que, sin un liderazgo específico, presionó sobre el presidente para evitar los excesos comunistas de la FSTMB.

El movimiento obrero, sin embargo, poseía las armas en la mano, lo que equivalía a tener el poder real para convertir sus doctrinas radicales en cambios efectivos de largo alcance. Con este contenido se fundó la Central Obrera Boliviana (COB) el 16 de abril de 1952, bajo el mando de un ministro obrero en su secretaría ejecutiva: Juan Lechín. La COB articuló a todos los trabajadores del país: obreros mineros, fabriles, artesanos, profesionales, técnicos e inclusive estudiantes universitarios y campesinos. En realidad, fue este poder real parido por la sociedad civil quien determinó romper con la cultura tradicional de los barones del estaño y con la dominación terrateniente en el área rural. Las reformas estructurales llegaron a ejecutarse porque el movimiento obrero agrupado en la COB *extirpó* al gobierno la Ley del Sufragio Universal, la Nacionalización de las Minas el 2 de julio de 1952 – fundándose, además, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) el 2 de octubre del mismo año – y la Reforma Agraria, declarada el 3 de agosto de 1953.

Durante esta época el poder de la COB y de los mineros era tal que también consiguieron ingresar a un *co-gobierno* con Paz Estenssoro de 1952 a 1956, poniendo en práctica un poder de veto en el directorio de la empresa estatal COMIBOL. Cuando ésta se creó, los sindicatos mineros representaban verdaderos centros de poder, cuyo respaldo fundamental descansaba en las milicias asentadas en los campamentos mineros. Quienes realmente llevaron el liderazgo durante las reformas estructurales fueron los dirigentes del sindicato y el control obrero que,

poco después, se extendió hacia el control campesino. De hecho, dicho poder sindical en los ámbitos locales era de tal magnitud que podían actuar independientemente de la COB y del MNR si así lo deseaban, aún a pesar de haber jurado lealtad al partido y al presidente. Por consiguiente, la transformación estructural más inmediata en la configuración del poder y en el modelo de gobierno después de la Revolución Nacional, fue el surgimiento contundente del sector obrero como un núcleo clave de poder. La COB concentró una base de apoyo superior a la del partido del que oficialmente formaba parte, lo que dejó traslucir que el MNR asumió oficialmente el poder y la principal responsabilidad del gobierno estatal; en cambio la COB se constituyó en un actor político sin rival capaz de iniciativa y veto con relación al poder central. Es decir, tuvo poder de gobierno y una parte importante de la responsabilidad en el carácter y orientación del manejo económico, sobre todo en cuanto al intervencionismo estatal desde COMIBOL⁴². Una vez alcanzadas las reformas estructurales, la COB representó al verdadero gobierno de los obreros en todo Bolivia y, por lo tanto, empleó su poder para manipular también la economía nacional, de tal manera que cualquier movilización sindical o huelga, rápidamente adquiriría un contenido político global, afectando seriamente a la estructura económica en su conjunto.

Empero, la radicalidad de los sindicatos mineros y el carácter de las reformas estructurales no dieron lugar a una COB totalmente homogénea y monolítica. Todo lo contrario, esta poderosa institución no tenía mucha unidad, cayendo víctima de dubitaciones teórico-ideológicas en torno a los postulados marxistas, trotskistas y maoístas. Sus discusiones políticas solían referirse a los problemas de transición hacia el capitalismo y a la maduración de

⁴² Para un detallado análisis político sobre el papel de la COB desde 1952 hasta la década de los 80, consultar: LAZARTE, Jorge. **Movimiento obrero y**

condiciones burguesas para después desarrollar aquella auténtica conciencia de clase que les permitiese – casi automáticamente – conquistar la siguiente fase de una revolución proletaria. Esto tal vez explique por qué la COB no se apoderó directamente de la Revolución de abril como propugnaron algunos sectores trotskistas ligados a Guillermo Lora, entonces importante líder y teórico trotskista minero. Las contradicciones de la COB siempre terminaban en una disyuntiva: apoyar al MNR mientras se consoliden las condiciones capitalistas o asumir una iniciativa política independiente hasta las últimas consecuencias. Tal disyuntiva sería una especie de marca constante en las acciones mineras durante los treinta años posteriores a la Revolución.

Desde 1952, el ambiente político en Bolivia dio como resultado dos tipos básicos de conflicto. En el primero tuvo lugar una lucha ideológica donde el tema central apuntaba hacia los problemas del desarrollo y el futuro de la realidad económica en Bolivia; dentro de esta lucha, la clave del conflicto fue quién habría de jugar el *papel principal* en la redefinición y reconstrucción de la economía y toda la sociedad. Esta fue la hoguera que ardía en la división entre izquierda, centro y derecha al interior del MNR, así como durante las mortíferas luchas entre caudillos revolucionarios que proliferaron en Santa Cruz, en el campesinado cochabambino y en las áreas mineras cuando las milicias obreras desencadenaban las tensiones del poder entre 1952 y 1964.

El segundo tipo de conflicto político fue una lucha respecto de las angustiosas demandas sobre *recursos económicos* para financiar los cambios estructurales; lucha en torno a qué, cuándo, cómo y, nuevamente, quién. La obtención de recursos cayó también en el agujero de la distribución inmediata de prebendas revolucionarias. “El conflicto ideológico, la movilización,

un volumen mayor de demandas y un excedente distribuible limitado constituyeron los primeros problemas que encaró la política post insurreccional”⁴³.

La COB enfrentó graves problemas en torno a la posición que debía adoptar de cara al MNR y frente a la tentación de arrebatarse la revolución a este partido. Sin embargo, las amenazas contrarrevolucionarias obligaron al núcleo del MNR a propender, tácticamente, hacia la izquierda cuando se trataba de asustar a la oposición con los desfiles de milicias obreras y campesinas; de esta manera, la COB mantuvo su posición de veto y control obrero en las minas aunque no supo desplazar al MNR definitivamente del poder, tal vez por lo que el investigador Jorge Lazarte denominó como el carácter *mixto* de la COB. Es decir, fue un actor social y político al mismo tiempo. Como actor social, la COB era aglutinante, contestataria y mediadora, pero como actor político debía plantear un proyecto alternativo de sociedad que en los hechos significaba el socialismo. Fue esta doble faceta en su identidad – casi ambigua en el momento de capturar el poder en vivo y directo – lo que impidió a la COB saltar hacia el socialismo durante el proceso revolucionario, en la medida en que su carácter de actor social también la obligaba a negociar espacios y demandas con sectores de clase media, campesinos y otras élites. El papel de la COB como actor social evitó un comportamiento totalmente intransigente a favor de una dictadura del proletariado a como dé lugar.

Durante esta fase, caracterizada como una hegemonía de masas acaudilladas por la COB, el MNR logró viabilizar su política económica tratando de aislar las amenazas obreras para impulsar una modernización capitalista. Así, todo apuntó hacia el alumbramiento de una *burguesía nacional* bajo la *protección del Estado*, y hacia la identificación de otras fuentes de

⁴³ MALLOY, James. **Bolivia: la revolución...**, ob. cit., p. 333. A las mismas conclusiones llegan James Dunkerley, René Zavaleta y Jean Pierre Lavaud, de este último autor consultar: “Hacia una interpretación de la inestabilidad

explotación de recursos naturales más allá de la minería estañífera. Las decisiones políticas se tomaron identificando al petróleo como otro eje económico, y mirando a la región de Santa Cruz como el polo de desarrollo, funcional a la modernización estatal entre 1952 y 1964. Paz Estenssoro fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la empresa estatal que debía ser financiada, inicialmente por el Estado a través de flujos económicos provenientes de COMIBOL.

El nuevo modelo económico utilizó a la economía minera como el basamento para contentar, tanto a las demandas radicales del movimiento obrero con poder de veto crucial y, a su vez, para subvencionar la instalación de yacimientos petroleros, potenciando un polo regional de desarrollo en el oriente boliviano. Sin embargo, “la temprana falta de rentabilidad de COMIBOL fue probablemente determinada por la política económica general del MNR, diseñada más para impulsar la diversificación, especialmente a favor de la industria petrolera, que para revivir aquella del estaño (...). Con el gobierno movimientista, más de 100 millones de dólares fueron transferidos de COMIBOL a YPFB. La diversificación era correcta y muy deseable en teoría, pero pésimamente administrada en la práctica”⁴⁴.

La COB y el movimiento sindical minero utilizaron su facultad de co-gobierno y veto político en la administración de COMIBOL, explotando las subvenciones estatales a su favor cuando así lo determinaban sus congresos políticos. En un momento se despidió a la totalidad de los mineros pagándoseles beneficios sociales, para después recontratarlos nuevamente bajo el consentimiento de dos ministros cobistas como Germán Butrón y Juan Lechín, cuyo vaivén para

política en Bolivia. (1952–1980)”; en: ESTADO Y SOCIEDAD, REVISTA BOLIVIANA DE CIENCIAS SOCIALES, Año 3, No. 4, La Paz, FLACSO, diciembre de 1987.

⁴⁴ DUNKERLEY, James. **Rebelión en las venas...**, ob. cit., p. 65.; ver también BEDREGAL, Guillermo. **La Comibol, una historia épica**, Los Amigos del Libro, La Paz, 1998.

satisfacer al movimiento obrero trataba de equilibrarse con las decisiones del MNR por asumir una visión tecnocrática de la economía.

Asimismo, es importante indicar que ambas acciones políticas, tanto de la COB como del MNR, no habrían sido posibles si estos actores no hubieran colonizado el aparato estatal como realmente lo hicieron. El Estado se convirtió en la llave maestra para financiar los excesos revolucionarios, estimular a la sociedad civil para que viva a costa de aquél, reprimir a la oposición política, y conducir el proceso modernizador mediante “planes de desarrollo” que fomentaron el intervencionismo estatal en la economía hasta el límite de lo absurdo.

El *modelo económico* de la Revolución Nacional se estructuró de la siguiente manera:

- a) La nacionalización de la gran minería y la Reforma Agraria crearon las bases económicas que posibilitaron redistribuir el ingreso de forma tal, que este aspecto llegó a constituir un objetivo muy codiciado, sobre todo por el ala centrista del MNR. La redistribución debía ir junto a la creación de una burguesía nacional, razón por la que el Estado constituía el eje del proceso económico y político para orientar, en el largo plazo, el poder y la propia revolución.
- b) En gran medida, se siguieron las directrices establecidas por el Plan Bohan de 1940. El planteamiento de Walter Guevara⁴⁵ – entonces Ministro de Relaciones Exteriores pero, en el fondo, artífice de la política económica modernizadora del gobierno de Paz Estenssoro – fue dar prioridad al desarrollo de la agricultura comercial, relegando el desarrollo industrial basándose en la instalación de hornos de fundición para minerales. Los requerimientos financieros de la nueva política

⁴⁵ Cfr. GUEVARA ARZE, Walter. **Plan inmediato de política económica de la Revolución Nacional**, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia, La Paz, 1955.

económica no fueron plenamente satisfechos por el crédito externo, por lo que la única forma de financiar la importación de maquinaria, insumos y materias primas, necesarias para la sustitución de importaciones, era a través del excedente que generaba la minería estatal. Las reducidas posibilidades de generación de divisas –en el corto y mediano plazo– por parte de la agroindustria, confirmaron todavía más que la minería era quien debía producir las divisas y cubrir los servicios de la deuda externa.

Roberto Jordán Pando, ex responsable de la Junta Nacional de Planeamiento en el período de elaboración del Plan Decenal (1962-1971), afirmó que entre 1952 y 1961, Bolivia no tuvo acceso al mercado internacional de capitales, sino hasta 1961, que es cuando los Estados Unidos, dentro del marco de la Alianza para el Progreso, aceptaron conceder financiamiento por 80 millones de dólares.⁴⁶

- c) El modelo económico tenía dos finalidades. Primero, la ejecución de un estilo de desarrollo, afincado en la sustitución de importaciones y en la incorporación del departamento de Santa Cruz al conjunto de la economía nacional. Segundo, la redistribución del ingreso. Sin embargo, recién en 1962 pudo plantearse –como objetivo en cuanto a política social– elevar el nivel de vida de la población⁴⁷. Para lograr la sustitución de importaciones era fundamental captar el excedente minero y estimular la generación de empleo a través del intervencionismo estatal.

⁴⁶ Cfr. PACHECO, Mario Napoleón y LAZARTE, Jorge. **Bolivia: economía y sociedad 1982-1985**, CEDLA, Programa de Ajuste Estructural, Serie: Estudios e Investigaciones, La Paz, 1992.

⁴⁷ Cfr. Este habría sido uno de los objetivos del **Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1962-1971**, La Paz, 1962.

- d) Los principales instrumentos de política económica giraban en torno de políticas cambiarias, políticas tributarias y transferencia de utilidades.
- e) Dentro de la estrategia de transferencia de utilidades, a la COMIBOL se le asignó la función de financiar el proceso de diversificación económica. La distribución y el uso del excedente minero fueron dirigidos hacia tres canales: inversión directa, construcción de infraestructura básica, y financiamiento de créditos para el desarrollo. Dentro de esta lógica, los dólares generados por la minería eran sistemáticamente distribuidos desde el Estado hacia ciertos grupos empresariales que, supuestamente, fortalecerían la nueva agroindustria; sin embargo, tales dólares sirvieron al mismo tiempo para que el MNR satisfaga muchas ambiciones económicas de sus dirigentes más importantes o de aquellos cuadros partidarios que tuvieron una actuación central para consolidar el poder autoritario del partido y la revolución.

Las divisas entregadas desde el gobierno pronto se convirtieron en una política económica populista y corrompida, pues muchos grupos favorecidos, incluyendo los empresariales, vendían las divisas, compradas a muy bajo costo dentro del Estado, a precios exorbitantes aprovechando una política cambiaria flexible o sometida a los vaivenes de la hiperinflación que comenzó a desarrollarse durante la ejecución de las reformas estructurales. La creación de fortunas era inmediata, pero el MNR estaba convencido de que tales actitudes favorecían también la acumulación de capital y riqueza, necesarias para construir una burguesía moderna, supuestamente, con la suficiente capacidad para desarrollar la estructura económica que el Estado estaba apadrinando.

- f) Las principales inversiones directas se realizaron en el sector petrolero y en la construcción de infraestructura caminera. Las inversiones estatales en YPFB fueron importantes, pues entre 1952 y 1956, las divisas alcanzaron a 42,7 millones de dólares.
- g) En materia de apertura regional, fue importante construir la carretera Cochabamba-Santa Cruz, además de las construidas en el norte de este departamento. Estos proyectos de infraestructura fueron financiados con crédito externo. La concesión de créditos de desarrollo fue dirigida, principalmente, hacia la agricultura cruceña.
- h) Para favorecer al sector industrial se otorgaron créditos administrados por el Banco Central con tasas internas diferenciales. La industria se benefició porque las compras estatales le dieron preferencia, con el ánimo de fortalecer a una burguesía revolucionaria.
- i) Finalmente, el modelo económico de la Revolución estaba afincado estratégicamente sobre un proteccionismo de largo plazo que debía posibilitar el funcionamiento de un nuevo estilo de desarrollo. El proteccionismo fue la principal herramienta para modificar la estructura productiva.

Al rastrear las políticas revolucionarias y el conjunto de relaciones entre política económica e intervencionismo estatal, es importante afirmar que todas las medidas fueron escogidas por el liderazgo político de la Revolución: el MNR y la COB. Este liderazgo tenía inusuales oportunidades frente a las que no hubo casi ninguna restricción política o técnica. Por lo tanto, no fue difícil para dicho liderazgo comportarse como un benevolente guardián social. La elección de las políticas económicas fue dicatada por los mitos, creencias y temores de aquel

liderazgo político, detrás del cual frecuentemente existía el consentimiento de la sociedad civil boliviana que reconocía en tal liderazgo a una élite modernizante.

Los conflictos de la política post insurreccional fueron la lucha ideológica respecto a cómo diseñar la modernización del país, y la redistribución de riqueza desde el Estado. Estos conflictos se resolvieron por medio de una estrategia impulsada por el grupo centrista-pragmático del MNR: neutralizar los factores de presión provenientes de la COB en momento de crisis y radicalización, aceptando la subida de salarios y entregando *subvenciones* mediante el sistema de pulperías, incluso corriendo el riesgo de descapitalizar a COMIBOL y al propio Estado. Dicho centro pragmático consiguió amplio respaldo del campesinado, pagando, a su vez, el alto precio de convivir con un *caudillismo campesino* que, para finales de 1953, estaba ampliamente armado⁴⁸. La conciliación de Paz Estenssoro entre 1952 y 1956, así como las negociaciones de Hernán Siles, presidente de Bolivia entre 1956 y 1960, también mantuvieron seguidores en los centros urbanos, lo cual no sólo precisaba de medidas realistas para redistribuir la riqueza en una situación de crisis, sino que alentaba permanentemente una imagen populista donde los favores clientelares se canalizaban al calor de un *Estado prarrimonializado*.

Así se fue construyendo el mito del *Estado Totalizador*, convertido en un padre filantrópico al que había de extraérsele, por la fuerza o la negociación, los recursos escasos del modelo de acumulación que, finalmente, se transformaron en la razón de ser de cualquier discordia política, movilizándose fácilmente a las masas hacia acciones violentas para conseguir cualquier cosa del Estado. El Estado que nació de la Revolución Nacional oscilaba entre las presiones internas que buscaban darle una orientación prebendal y reformista, y las acciones para

⁴⁸ La ch'ampa guerra entre los dirigentes campesinos Miguel Veizaga y José Rojas representó el acontecimiento más violento dentro de la pugna entre caudillos durante 1959.

acomodarse a las exigencias internacionales determinadas por los Estados Unidos y por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes miraban vigilantes los desenlaces, insuficiencias y extremos de la modernización boliviana.

Después del triunfo de la Revolución Nacional, las masas con fusiles pronto reclamaron un *poder articulador* que democratice la distribución de riqueza, nutriendo el mito del Estado Nacional Benefactor. En este caso, el mito se transformó en un deseo colectivo personificado en los líderes de la revolución: Paz Estenssoro, Juan Lechín, Ñuflo Chávez, José Rojas, Miguel Veizaga, los hermanos Sandóval Morón en Santa Cruz, Ruben Julio en Pando y parte del Beni y, posteriormente, representado en los caudillos militares como René Barrientos, Alfredo Ovando o Juan José Tórrez. La personalidad de estos caudillos se convirtió en otra de las coordenadas fundamentales durante los conflictos por la dominación, de tal manera que el vínculo entre grupos, facciones y personalidad constituyó el problema más trascendental para el manejo del poder en Bolivia después del 52, convirtiéndose, además, en aquel objetivo que debía ser controlado en diferentes regiones, paralelamente al proceso de recomposición estatal.

Fue esta mezcla entre caudillos ambiciosos, aparato estatal disponible, actitud intervencionista en la economía, corrupción y deseo frenético de modernización, lo que, paradójicamente, también fue debilitando al Estado Totalizador aún a pesar de que éste trataba por todos los medios de reconstruirse con mucho poder y abundante autoritarismo violento.

Los mitos políticos nacidos de la Revolución emprendieron la tarea de cambiar a los hombres y a toda la cultura nacional, para así poder regular y determinar sus actos. Estos mitos hicieron lo mismo que la serpiente cuando trata de paralizar a sus víctimas antes de atacarlas, sin ofrecer ninguna resistencia seria. De pronto, el Estado, política, economía y toda la sociedad

boliviana estaban vencidos y dominados antes de que se percataran de lo que realmente había ocurrido y del futuro costo que había que pagar.

Los medios habituales de opresión política no bastaron para producir este efecto, sino que se complementaron con el deseo de toda una nación por *autoconvencerse* de que con la Revolución podían alcanzar un nuevo Estado industrializado que llevaría a toda la sociedad hacia la modernización de estilo europeo o norteamericano. “El nivel de cultura política anterior a 1952 (...), fue reemplazado por un sistema, en el cual la conciencia política crítica fue transformada en la capacidad de identificarse con las metas y prácticas del Estado y en el cual las marchas multitudinarias suplían el genuino diálogo político. [Los distintos gobiernos desde la Revolución de abril hasta su descomposición militar de finales de los 60 y toda la década del 70], estaban marcados por una combinación híbrida de antiimperialismo retórico y autoritarismo práctico, que tampoco fue cuestionado por sus sectores izquierdistas, (...) lo que imprimió al régimen el estigma permanente de totalitario y despótico”⁴⁹.

En la matriz de dominación creada por el modelo revolucionario, “(...) el Estado tendrá la conducción negociada de los procesos de acumulación y comunicación, interviniendo tanto en el mundo de la producción como en el de la cultura. El modelo se dirigió a que el Estado sea percibido como un ámbito de integración y compromiso, capaz de actuar por encima de los intereses de las diferentes clases y grupos sociales”⁵⁰. Por lo tanto, el Estado Totalizador operaba

⁴⁹ MANSILLA, H.C.F. “Una nota crítica sobre la revolución nacional de 1952”; en: **La cultura del autoritarismo ante los desafíos del presente. Ensayos sobre una teoría crítica de la modernización**, CEBEM, La Paz, 1991, p. 98. Este autor, asimismo, afirma: “Las modificaciones que han tenido lugar en Bolivia a partir de 1952 marcan un importante corte en la historia del país, separando una época de carácter eminentemente *tradicional* de una etapa *modernizante* claramente concebida para el objetivo de un adelantamiento acelerado (...)”, p. 94.

⁵⁰ SANJINÉS, Javier. **Literatura contemporánea y grotesco social en Bolivia**, ob. cit., p. 86.

como una estructura organizadora y distribuidora de servicios, a la par que dirimidora de conflictos reivindicativos, conquista caudillista y distorsión militar que fomentó las dictaduras militares en los 60 y 70. De esta manera, el uso de sus facultades distributivas le permitía no solamente confirmar su capacidad legitimadora para imponerla sobre la sociedad boliviana, sino ampliarla hacia una función que producía toda una *cultura nacional* identificada con el Estado, donde se satisfacían las demandas sociales de diferentes fuerzas que concurrían al compromiso con la revolución, prebendalismo, clientelismo y modernización.

Estado Totalizador y persistencia de conflictos regionales

Tanto el caudillismo como la irrupción del Estado Totalizador fueron los efectos políticos de aquella coyuntura que precipitó una mayor disgregación del poder, en un período convulsivo marcado por fisuras entre el MNR, la COB y el movimiento campesino que, sin una participación directa en el poder, también hizo tambalear las decisiones políticas al autoperibirse como una milicia de ajusticiamiento popular. Durante el segundo gobierno de la Revolución, Hernán Siles intentó revertir la dispersión del poder a través del nombramiento directo de interventores para dirigir los principales comandos del partido.

El resultado fue una centralización del poder mucho más fuerte entre 1956 y 1960, no sólo para controlar el aparato estatal, sino también para poner en marcha un programa de ajustes macro-económicos cuyo objetivo principal fue vencer la hiperinflación que socavó al país desde 1952. El Plan Estabilizador de 1956, sacramentado con el nombre de un alto funcionario del FMI, John Eder, conjugó “(...) los intereses del gobierno boliviano abocado al desarrollo del capitalismo de Estado, con los intereses estadounidenses de robustecer al régimen boliviano

como una alternativa reformista al socialismo. La política de asistencia jugó un papel central en este proceso. La reforma agraria había ocasionado desarticulaciones en el suministro alimentario, lo que condujo a una dependencia de las donaciones por parte de los Estados Unidos, que se sumaron a la asistencia financiera para cubrir los déficits fiscales y la asistencia técnica”⁵¹. La administración de Siles tenía como misión superar la crisis económica y desplazar definitivamente a la COB del co-gobierno, además de patrocinar un burocratismo irreversible al interior del Estado patrimonializado, en tanto que se buscaba concentrar el poder, cada vez más en manos de la dirigencia nacional del MNR.

El lugar de mayor tensión entre autoridades centrales y locales fue Santa Cruz, donde imperaba un fuerte regionalismo. El MNR se negó a otorgar poder a las regiones y municipios de todo el país, fomentando la afiliación incondicional para enaltecer el poder del MNR como partido monopolítico, lo cual equivalía a converger nuevamente en el Estado central.

Las pugnas interregionales se atenuaron con algunas acciones para diversificar la economía, sobre todo porque Santa Cruz y Beni ingresaron a formar parte de una estrategia nacional de desarrollo. Sin embargo, se mantuvo latente una reivindicación política que reclamaba poder autónomo en los ámbitos regional-municipales, pues todo hacía ver que las políticas económicas de la Revolución Nacional eran una estrategia que se orientaba hacia la consolidación del Estado burocrático centralista.

Para 1956, el Estado revolucionario se había convertido en el actor central de cualquier proceso de cambio. Además de ampliar sus actividades hacia diferentes sectores productivos a través de las nacionalizaciones, se reservó el derecho de tomar cualquier decisión respecto de las

⁵¹ GARCÍA ARGANARÁS, Fernando. **Razón de Estado...**, ob. cit., p. 124 y ss.

orientaciones del desarrollo por medio de mecanismos altamente centralizados y nada participativos, imponiendo su hegemonía a distintos grupos sociales y a las diferentes regiones.

Este Estado Totalizador definió quiénes iban a ser los polos de crecimiento y los de estancamiento, reorganizó el espacio geográfico, la orientación de las inversiones, construcción de caminos y apertura de mercados. El resultado político fue la identificación de un nuevo eje de desarrollo que giraba alrededor de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz donde se reúne la actividad económica, política y social más dinámica hasta el día de hoy. Opuesto a dicho eje se presentan los departamentos con menos posibilidades para insertarse dentro del modelo estatal del 52.

La posibilidad de poner en práctica otros cambios radicales como la descentralización para otorgar poder a las regiones, hizo que el MNR desvíe todas las polémicas en torno a la construcción del Estado Nacional y la unidad, ésta debía adquirir mayor preponderancia política antes que cualquier presión proveniente de los poderes locales, a los cuales se negó identidad plena porque, tanto el MNR como la COB y el mismo campesinado, terminaron por afianzar el centralismo del Estado Totalizador. Además, “(...) el regionalismo representaba, en algunos casos, un intento de notables locales para recuperar su dominación tradicional amenazada por las medidas, a veces de corte revolucionario, tomadas por el gobierno central. La concesión de autonomía local conllevaba el riesgo de devolver en ciertas regiones el poder a una clase política desplazada; [por lo tanto], (...) la Revolución de 1952, se propuso llevar a término la construcción de la nación y el fortalecimiento del Estado central, apoyada en el pueblo, definido como unidad abstracta, al margen de especificidades sociales, culturales o regionales, cuyo fin

era combatir bajo la conducción del partido revolucionario a los adversarios de la nación en el plano interno y externo”⁵².

El resultado de esta concepción política fue consolidar el eje de dominación ubicado en el centro geográfico del país. En este eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz representan los polos de mayor atracción para la población y la economía; al mismo tiempo, es en este eje donde tienen lugar las presiones por el control de las orientaciones del desarrollo desde 1952 hasta el presente, y donde está el mayor peso específico en la participación regional respecto del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Durante la consolidación del Estado Totalizador, fueron muy nítidos los siguientes elementos constitutivos de un nuevo modelo de dominación post-revolucionario:

- a) Instauración de una élite económica y política que modernizó al país en dos sentidos: primero, dotándole de una estructura productiva capitalista, con una economía diversificada y con un Estado que protegiera y estimulara la formación de una burguesía nacional que operaba sin restricciones al constituirse un importante sector capitalista de Estado; segundo, articulando, cultural e ideológicamente a una Nación que permitiera reproducir un país homogéneo y controlado en todos sus departamentos; de aquí proviene la estrategia política para negar independencia al conjunto de poderes regionales porque, además, el intento ideológico de homogeneización representaba un mecanismo de control sobre el

⁵² ROMERO PITTARI, Salvador. “El nuevo regionalismo”; en: ESTADO Y SOCIEDAD, REVISTA BOLIVIANA DE CIENCIAS SOCIALES, Año 5, No. 6, La Paz FLACSO, primer trimestre de 1989. Un análisis más pormenorizado sobre la configuración de los poderes regionales desde comienzos de siglo, se encuentra en: ROCA, José Luis. **Fisonomía del regionalismo boliviano**, Los Amigos del Libro, La Paz, 1980.

caudillismo que se había transformado en bonapartismo regional; es decir, en aquella *personalización del poder* al interior de los espacios locales.

- b) Ampliación del área territorial donde tenía lugar la influencia estatal. El Estado se convirtió en una fuerza de articulación nacional mediante la integración económica y política de grandes zonas que antes eran periféricas como Santa Cruz y Beni.
- c) Expansión de la legitimidad estatal mediante el uso de la violencia, diversos mecanismos autoritarios, y prebendalismo estatal. Dicha expansión de legitimidad se tradujo en la incorporación del campesinado al funcionamiento del sistema político.
- d) Reconstitución del aparato represivo del Estado, con la creación de un nuevo ejército para neutralizar el poder de las milicias obreras y campesinas.
- e) Constitución y desarrollo de un núcleo burocrático estatal que se convirtió en un caldo de cultivo para el caudillismo que terminó por corromper a gran parte de los líderes nacionalistas, derechistas e izquierdistas, ligados a la administración de diferentes gobiernos entre 1952 y 1982.

El momento presente: del Estado totalizador revolucionario al Estado neoliberal

Las insuficiencias del Estado revolucionario se avivaron con mucho esplendor durante los gobiernos militares que surgieron después de la caída del MNR en 1964, llegando a una crisis inaguantable durante la transición democrática del gobierno de Hernán Siles Suazo con la Unidad Democrática y Popular (UDP) entre 1982 y 1985. Este año marca el final de toda una época

insurreccional que nació en 1952. Desde que la transición democrática tuviera lugar, Bolivia confrontó nuevos problemas políticos: destruir las huellas dejadas por la Revolución Nacional, poner en funcionamiento los ajustes estructurales y emprender un difícil equilibrio entre democracia representativa y economía de libre mercado. Estas nuevas condiciones provocan hoy día permanentes desencuentros entre el Estado y la sociedad civil, lo cual tiene un enorme influjo sobre el tipo de democracia que podría consolidarse en el próximo milenio, o también sobre un posible fracaso de la misma en el largo plazo.

La crisis del Estado del 52 muestra que éste se volvió progresivamente incapaz de “(...) promulgar regulaciones para la vida social que sean eficaces a lo largo de sus jurisdicciones y de sus sistemas de estratificación. Las provincias o distritos situados en la periferia de los centros urbanos nacionales, normalmente más duramente afectados por las crisis económicas y dotados de burocracias más débiles, crearon (o reforzaron) sistemas locales de poder que tendieron a llegar a extremos de conducción personalista, abierta a toda suerte de prácticas violentas o arbitrarias”⁵³. El Estado Totalizador de la Revolución acabó siendo víctima de sus propios sueños omnipotentes, pues a pesar de su impulso político radical, no supo protegerse del patrimonialismo que infectó con prebendalismo y corrupción sus proyecciones futuras, revelándose también incapaz para solucionar la persistente pobreza y modernización incompleta o deforme en Bolivia.

Hoy día, toda estrategia apunta hacia el desmantelamiento del Estado del 52, porque la crisis del Estado desencadena, al mismo tiempo, la crítica del mismo. El neoliberalismo que se implantó con las reformas estructurales desde 1985 no sólo denunció el estatismo, sino que condenó toda

⁵³ O'DONNELL, Guillermo. "Estado, democratización y ciudadanía"; en NUEVA SOCIEDAD, No. 128, noviembre-diciembre de 1993, p. 70. Consultar también LAZARTE, Jorge. "Los problemas de la reforma y la modernización del Estado en Bolivia"; en: ILDIS, CÁMARA DE DIPUTADOS. **Debate sobre la reforma del Estado. Aspectos básicos de la reforma del Estado**, ILDIS, La Paz, 1991.

intervención estatal como consustancialmente nefasta. Sin embargo, este ataque olvida que el impulso estatal a la modernización industrial, agraria, educacional, etc. que pudo conquistarse con la Revolución de abril, creó las bases de cualquier estrategia de desarrollo hasta la fecha; y, sobre todo, el actual neoliberalismo olvida que la intervención del Estado respondió a una voluntad mayoritaria que es el criterio legítimo de la acción política en democracia, voluntad que se reflejó abiertamente en las políticas post-insurreccionales entre 1952 y 1964⁵⁴.

De lo que ahora se trata es de la reforma del Estado democrático, a partir de una crítica a los efectos perversos del Estado del 52. Dicha crítica deberá tomar en cuenta tres elementos centrales para su desarrollo:

- a) La dimensión del Estado como conjunto de burocracias capaces de cumplir con sus obligaciones con una eficiencia razonable, por lo que será importante la refundación de un Estado *magro*; es decir, un conjunto compacto y menos poderoso de órganos públicos con la suficiente capacidad de crear bases firmes para la democracia, resolviendo progresivamente las desigualdades sociales, y generando un crecimiento económico que sobreviva ante los retos de la economía mundial. Como las políticas neoliberales presionan para empequeñecer al Estado, es necesario decir que el antónimo políticamente recomendable de grande no es pequeño, sino magro⁵⁵.
- b) Una segunda dimensión tiene que ver con la eficacia de la ley. La eficacia del Estado de derecho deberá conquistar una nueva cultura ciudadana de respeto al individuo libertario, con derechos plenos a la participación política, a la fiscalización del poder y a

⁵⁴ Sobre la confrontación entre Estado y mercado en el ámbito latinoamericano, ver: LECHNER, Norbert. "El debate sobre Estado y mercado"; en: NUEVA SOCIEDAD, No. 121, septiembre-octubre de 1992.

⁵⁵ Cfr. PORTANTIERO, Juan Carlos. "La múltiple transformación del Estado Latinoamericano"; en: NUEVA SOCIEDAD, No. 104, 1989.

la representación; de lo contrario, la eficacia de la ley seguirá siendo perforada por el autoritarismo, los sobornos y la corrupción que expanden procesos de “privatización de los espacios públicos”, donde el funcionario político cree tener entre manos una concesión susceptible de ser usufructuada para beneficio personal. El resultado inmediato de este fenómeno es la posible neofeudalización de la soberanía estatal, del poder y la política, pues aún con la democracia representativa y el liberalismo económico, podría evaporarse la dimensión pública del Estado si existe la alternativa de colonizar el aparato estatal después de las elecciones.

- c) Otra dimensión problemática para la reforma del Estado es su eficacia simbólica, es decir, la credibilidad en el alegato de que el aparato estatal orienta sus decisiones buscando cohesión y bien común, algo que se logró con la ideología del Nacionalismo Revolucionario, aún a pesar de su ruina y posterior degeneración. El actual Estado neoliberal pierde habilidad para producir acción hegemónica en beneficio de la integración social. ¿Qué estrategia política plausible podría cohesionar a una sociedad fuertemente heterogénea y diferenciada, de modo que la diversidad de valores, intereses y etnias pueda desarrollarse como pluralidad, fortaleciendo a la democracia representativa y evitando conducir a la desarticulación social?⁵⁶

Estas tareas políticas, todavía pendientes a las puertas del siglo XXI, estimulan las amenazas de expansión de lo que el investigador argentino Guillermo O’Donnell, denominó como *democracias delegativas*, las cuales se definen por “(...) una concepción y práctica del poder Ejecutivo que presupone que éste tiene derecho, delegado por el electorado, de hacer lo que le

⁵⁶ Cfr. LECHNER, Norbert. **Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política**, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1990.

parezca adecuado para un país (...), las democracias delegativas son inherentemente hostiles a los patrones de representación normales en las democracias establecidas, a la creación y fortalecimiento de instituciones políticas y, especialmente, a lo que se denomina responsabilidad horizontal; [es decir], al control cotidiano de la validez y la legalidad del Ejecutivo por parte de otros organismos públicos que son razonablemente autónomos del mismo (...). Una democracia delegativa tiende a despolitizar la población –excepto durante los breves momentos en los cuales demanda su apoyo electoral– y actualmente coexiste con períodos de severas crisis económicas”⁵⁷.

Las democracias delegativas parecen caracterizar y convivir con los intentos neoliberales por reducir el tamaño y los déficits del Estado como burocracia que, como un efecto no deseado, también van destruyendo el Estado como ley y a su legitimación ideológica. Para una democracia delegativa, la relación conflictiva entre mercado y Estado es visualizada como aquella tensión de *suma cero*, donde el avance de un elemento, necesariamente implica el retroceso del otro. Por el momento, quien ha ganado el mayor número de partidas en el tablero neoliberal contemporáneo ha sido el mercado que pone en permanente jaque mate al Estado democrático boliviano, erigido sobre los restos del Estado Revolucionario del 52.

La actual democracia boliviana puso en marcha procesos de reforma y modernización de su sistema político, obteniendo resultados loables; es decir, posibilitó la reforma en las reglas del juego democrático mejorando su sistema electoral, Constitución Política o ley de partidos políticos. Sin embargo, ningún conjunto de reglas alcanza para redefinir las prácticas concretas de una cultura política donde el Estado no consigue volver a sintonizarse con la sociedad civil, y donde el sistema presidencialista de gobierno pretende perpetuar la lógica de las democracias delegativas⁵⁸.

⁵⁷ O'DONNELL, Guillermo, art. cit., pp. 64-65.

⁵⁸ Cfr. LIPSET, Seymour Martin. "La posición central de la cultura política",

Efectivamente, el Estado del 52 ya es un recuerdo de cara hacia el siglo XXI, pero si queremos revertir los actuales obstáculos para la consolidación de nuestra democracia, será fundamental repensar el concepto mismo de Estado en Bolivia, de orden colectivo democrático y plural, así como de acción política racional. Una reforma del Estado debería apuntar, no a más o menos Estado, sino a otro Estado que cultive la eficacia, legitimidad y respaldo ciudadano, donde se consiga una reconversión productiva, susceptible de competir internacionalmente y de ofrecer el mayor bienestar a la población. Por lo demás, las lecciones provenientes de intentos épicos como aquellos que dejó la Revolución del 52 señalan claramente que el peor vicio fue pensar en términos absolutos y fundamentalistas. Por lo tanto, sería un despropósito cruzar el puente del fundamentalismo estatal de hace 50 años, hacia el fundamentalismo contemporáneo del mercado.

Los desafíos en el mediano plazo: ¿problemas del desarrollo regional o problemas del desarrollo nacional?

El desenvolvimiento de las transformaciones estructurales en Bolivia después de la Revolución Nacional definió un modelo de desarrollo que fomentó la inequidad en el desarrollo de las diferentes regiones de Bolivia, y desalojó la posibilidad de una auténtica democratización y un uso racional de los recursos económicos. Si bien el Estado Totalizador inauguró una nueva etapa histórica, no logró manejar la heterogeneidad social, regional y étnica de todo el país, pues rápidamente fue urgido a mirar la crisis que tenía lugar en las regiones que demandaban

EL DIARIO, La Paz, 13 de agosto de 1990; asimismo, para el debate nacional ver también: FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, PNUD, FUNDACIÓN MILENIO. **Agenda nacional de gobernabilidad democrática**, PNUD-ILDIS-MILENIO, La Paz, 1997.

autonomía relativa. Las desigualdades regionales pervivieron a pesar de las transformaciones estructurales y los esfuerzos del Estado Nacional.

Las reivindicaciones regionales no solamente irrumpieron desde los departamentos afectados por el modelo económico de la Revolución, sino que brotaron inclusive en aquellas zonas donde los gobiernos revolucionarios de 1952 a 1964 invirtieron enormes cantidades de capital como Santa Cruz. No es que solamente Chuquisaca, Pando, Beni o Tarija se vieron en una situación de desventaja por la superioridad del eje central compuesto por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, sino que la identidad nacional, después de los sacudones revolucionarios fue naciendo de hechos políticos, como la influencia del Estado Totalizador, así como de las demandas por mayor poder regional y por reconocimiento étnico en espacios geográficos que exigían ir más allá de la Nación.

Así nacieron los *movimientos sociales regionales* que son entendidos como una acción del conjunto de clases que conforman una sociedad regional, reivindicando y luchando durante un largo período de tiempo por metas de desarrollo regional, modernización e identidad cultural o política en contra del Estado central. Luego de la Revolución, los conflictos políticos tuvieron diferente significación e intensidad, pues no solamente posibilitaron una pugna entre la COB, la nueva élite partidaria del MNR o sectores conservadores que resurgieron con el ejército, sino que también brotaron los conflictos regionales que se expresan en la oposición región-nación. Dicha oposición plantea relaciones de enfrentamiento entre identidades regionales particulares y la identidad nacional homogénea que propugnó la Revolución.

Los conflictos políticos y sociales provenientes de las regiones, combinaron un reconocimiento al poder central del Estado Totalizador, con una exigencia por satisfacer sus demandas locales, lo cual implicaba la necesidad de una ejecución de políticas estatales, cada vez más *consensuada*; no solamente por el poder que tenían algunos caudillos locales, sino porque la

Revolución Nacional se encontró con que los problemas del desarrollo están íntimamente ligados a procesos transformación, donde el papel de los *intereses regionales* es muy importante.

Después de la Revolución, Bolivia dejó de ser un país desvertebrado con zonas aisladas para convertirse en un sistema nacional interdependiente, ya que existen zonas cuya dinámica económica o productiva está subordinada a la de otras, pero con un permanente problema: el aparato estatal reprodujo nuevamente un conjunto de desigualdades y desequilibrios regionales a pesar de las reformas estructurales.

El relacionamiento entre las diferentes regiones se presentó como un obstáculo para imponer un control absoluto por parte del Estado Totalizador, razón por la que el núcleo de su modelo de desarrollo terminó siendo insatisfactorio para el conjunto de los poderes regionales. Por ello mismo, actualmente los principales actores están representados por las Asambleas Departamentales, Comités Cívicos, Prefecturas y Municipios, cuyo protagonismo apunta hacia la *planificación descentralizada*.

Sin embargo, a pesar del enorme potencial democratizador que trajeron los movimientos sociales regionales, también es importante afirmar que existen especiales conflictos al interior de las mismas regiones, como los que actualmente están ocurriendo entre las provincias y su sede departamental porque las capitales de departamento, por ser centros urbanos de dinámica económica y política más intensa, tienden a acaparar los beneficios que reciben del Estado central, ya sea a través de impuestos, la coparticipación tributaria o los recursos naturales explotados en su mismo territorio.

Las implicaciones e intereses que arden silenciosamente en las regiones, aparecen con mayor fuerza por intermedio de los municipios, tanto urbanos como rurales. Sin embargo, está por verse de qué manera y en qué medida estos municipios podrán llegar a una feliz convivencia

con las Prefecturas, apostando también por un desarrollo integral en todos los departamentos. El desarrollo regional de los nueve departamentos de Bolivia, depende de las voluntades políticas que los actores y los movimientos sociales regionales desenvuelvan. Éstos deberán replantear qué significa el desarrollo y la modernización en cada uno de sus departamentos, cultivando, a su vez, recursos de poder y autogobierno, más allá de las influencias históricas que dejaron la Revolución y el Estado Totalizador. Se trata, en última instancia, de que una agenda estratégica para la descentralización permita construir sólidos *poderes regionales* en Bolivia.

Si compartimos las proposiciones del experto chileno en planificación regional, Sergio Boisier, los retos para impulsar una auténtica región radican en potenciar su capacidad de auto-organización, “transformando una comunidad inanimada, segmentada por intereses sectoriales, poco perceptiva de su identificación territorial y en definitiva, pasiva, en otra, organizada, cohesionada, consciente de la identidad sociedad-región, capaz de movilizarse tras proyectos colectivos, es decir, capaz de transformarse en un sujeto de su propio desarrollo”⁵⁹. Si la descentralización permite contruir regiones que sean protagonistas de su propio desarrollo y de su propio poder, definitivamente impulsarían el resurgimiento de las regiones; en caso contrario, es posible que los vicios criticados en el poder central vuelvan a repetirse en micro-espacios de caciquismo regional.

¿Qué significa construir una región y dotarse de los recursos institucionales, humanos y financieros para descentralizar labores políticas, económicas y sociales? ¿Qué representa la descentralización para la gobernabilidad de nuestra actual democracia que apenas empieza a

⁵⁹ BOISIER, Sergio. “La construcción social del regionalismo latinoamericano (escenas, discursos y actores)” ; en: REVISTA DEL CLAD, REFORMA Y DEMOCRACIA, No. 2, julio de 1994, p. 193. Del mismo autor, consultar también: “El difícil arte de hacer región” ; en: BLANES, José (comp.). **El reto de la planificación descentralizada**, CEBEM, La Paz, 1991.

consolidarse, una vez dejado atrás el viejo Estado del 52? ¿En qué condiciones la descentralización será gobernable? ¿La representación de intereses regionales al interior de Prefecturas y Municipios sería manejable?

Durante la puesta en marcha de una descentralización con protagonismo regional, tanto el Estado central como el sistema de partidos tendrán como reto el *transferir e intercambiar* porciones de *poder y autoridad* con todas las regiones, impulsando, al mismo tiempo, cierto espíritu de unidad y soberanía nacional. De cualquier manera, también está por verse el nivel y grado de coordinación entre el Estado, regiones, partidos, asambleas departamentales y participación popular semi-directa.

Lo nacional y lo regional-departamental son dos procesos simultáneos e interdependientes. La polémica en torno a la identidad nacional boliviana está inserta en la dinámica de uno de los principales problemas del poder y la reforma del Estado en Bolivia: la relación conflictiva entre democracia, transformación social, superación de la pobreza y desarrollo regional.

Por otra parte, delimitar y conceptualizar a las regiones no se refiere a la identificación de los mapas de división político-administrativa departamentales, sino a detectar tres dimensiones: a) económica, donde se condensan las redes del mercado; b) político-institucional, que se orienta hacia las exigencias que demanda la consolidación democrática; y c) sociológica, donde debe ponerse atención a la diversidad multiétnica en Bolivia. Estos tres elementos hacen un *todo integral* donde la idea de desarrollo regional se asocia a un proceso de cambio socioeconómico de largo aliento que debe ser capaz, además, de producir poder y decisiones cuya finalidad última es el progreso de las regiones descentralizadas.

La nueva vitalidad política que tendría nuestro país con polos de poder local como los municipios, así como con el poder regional de las prefecturas, promoverá la participación de actores sociales regionales quienes, a través de la descentralización, tendrán en sus manos la

responsabilidad de imaginar y diseñar sus correspondientes proyectos políticos y culturales en cada uno de los departamentos de Bolivia. Con la descentralización, el desarrollo nacional dependerá de la confluencia de dichos proyectos regionales y de cómo éstos puedan convivir con el Estado central a largo plazo.

Durante la puesta en práctica de las principales políticas descentralizadas de desarrollo, habrá que buscar un conjunto de equilibrios macro-sociales desde el Estado central, combinados con estrategias que intenten corregir las desigualdades inter-regionales. Es posible que en esta búsqueda, la acción de organizaciones de base regionales, a través de su participación política, sea de vital importancia.

En este esfuerzo ya se dieron los primeros pasos con la promulgación de la Ley de Participación Popular, sancionada en abril de 1994 por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta ley intenta corregir la tradición vertical del Estado Totalizador, otorgando una descentralización económica y administrativa para fortalecer los municipios, sean urbanos o rurales. La Participación Popular pretende fortalecer el desarrollo de las economías de base campesina, a través de una diversidad de acciones de desarrollo rural que permitan canalizar demandas diferenciadas de los distintos sectores de la población rural, articulando estrategias productivas precisas.

A partir de una vinculación entre distintas estrategias de desarrollo rural y la Ley de Participación Popular, la planificación participativa municipal constituye un proceso de amplia movilización social para organizar y gestionar el desarrollo, enfrentar la pobreza rural, asignar y garantizar el uso eficiente de los recursos de inversión y la provisión de servicios, operativizando las políticas de equidad e integralidad para un desarrollo más equitativo.

La Participación Popular define al municipio como el espacio apropiado para conectar la representación popular con la administración pública del Estado central. En este sentido, se transfieren nuevas competencias a los municipios, junto con los correspondientes recursos financieros. La ley permite distribuir, de acuerdo a un cálculo per cápita, los recursos de coparticipación para corregir las pasadas desigualdades en la asignación de recursos de gasto e inversión. Así se eliminaron las Corporaciones de Desarrollo – viejos órganos burocráticos del Estado Totalizador que se fundaron en la década del 60 – para que sean las Prefecturas quienes se concentren en la administración de las regalías departamentales, debiendo atender con esos recursos la inversión en infraestructura física, planificación regional y asistencia a los municipios con quienes debe concertar para articular un proceso de desarrollo regional de corto y largo plazo.

Los gobiernos locales deben demostrar su contribución eficaz para combatir la pobreza, promover un desarrollo integral y, sobre todo, someterse a la fiscalización y a examen directo, mediante un trabajo mano a mano con organizaciones populares. La descentralización administrativa junto a la Participación Popular puede ser efectivamente un instrumento para democratizar el poder, los recursos y las oportunidades globales en materia de desarrollo regional. Sin embargo, independientemente de la aprobación de nuevas leyes, se requiere mucha capacidad política para consensuar acciones entre todas las regiones, construyendo, asimismo, una voluntad nacional que haga gobernable y plausible la descentralización dentro de los marcos de una reforma del Estado en Bolivia.

El éxito de la descentralización en Bolivia está fuertemente ligado a las previsiones por lograr una institucionalidad regional para la ejecución de políticas. El desafío radica en cómo reproducir al Estado desde las regiones, no al Estado Totalizador y autoritario que rigió el patrón de acumulación y cultura política a partir del 52, sino reproducir a *otro* Estado eficiente que ejecute

políticas específicas de desarrollo para todos los grupos sociales de distintas regiones. Es decir, se requiere de la organización y preparación de una estructura institucional departamental, junto con una compacta voluntad política que reciba las competencias del nivel central; aquí, las Prefecturas, necesariamente, deberán modernizarse y aspirar a la máxima eficacia, pues uno de sus objetivos será insuflar de vitalidad regional a los departamentos, estableciendo instituciones estratégicas. La descentralización, como parte de una reforma estatal, obliga a que las Prefecturas ejecuten inversiones productivas de largo aliento para los departamentos, actuando con un amplio criterio de justicia substantiva, evitando todo tipo de privilegios y promoviendo un sentido de globalidad.

La descentralización en Bolivia exige fortalecer y racionalizar al máximo la administración prefectural generando una capacidad institucional regional sostenible, tanto desde el ámbito público como privado. El nivel deliberativo de las Asambleas Departamentales deberá forzar a que sus representantes tengan una amplia capacidad planificadora y negociadora, evitando repetir las calamidades del Estado Central; es decir, verborrea inútil y favoritismos que tiendan a congelar cualquier logro solamente para las ciudades principales.

Una vez descentralizado el país, es importante preguntarse ¿cuál será la estrategia prefectural en materia de modernización institucional? ¿Cuáles podrían ser los planes de inversión en el mediano y largo plazo? ¿Cuáles serían los instrumentos operativos y las estrategias regionales de desarrollo sostenible que podrían ejecutar los poderes regionales?

Actualmente, la matriz institucional de cualquier departamento muestra un conjunto de instituciones aisladas e inorgánicas entre sí, ejecutando programas que en la mayor parte de los casos se superponen o contradicen, repitiendo acciones sin evaluación de resultados, concentrando los beneficios en las ciudades-capital y generando grandes vacíos o pequeños remiendos en los lugares alejados. Las Prefecturas todavía no poseen mecanismos institucionales que garanticen la

unidad de acción y una autoridad con capacidad de dirección que organice al conjunto departamental. El peligro inmediato de estas deficiencias es la irracionalidad en el uso de los recursos financieros e institucionales del sector público, y la persistencia de un Estado central que no puede corregir los desequilibrios interregionales.

El proceso de descentralización tendrá que enfrentar un conjunto de metas sobre la base de estrategias realistas. Por ahora el clima es incierto pues no sabemos cómo reaccionarán los actores sociales y políticos una vez que asuman a conciencia una verdadera reforma estatal para superar años de malos hábitos heredados de la Revolución Nacional. Tampoco sabemos cuán solvente será un consenso político entre el gobierno central, sistema de partidos en su conjunto, comités cívicos, etnias, organizaciones populares y gobiernos locales ¿Cuán serias y viables serán las políticas de desarrollo y modernización regional? Nuestro país cambiará profundamente con una descentralización que otorgue *poder* y decisiones políticas autónomas para las regiones, ya que desde la instauración del Estado del 52 hasta el advenimiento de la democracia, en Bolivia siempre está presente la posibilidad de un nuevo liderazgo regional con amplias posibilidades de generar inéditas sociedades regionales-departamentales.

El desarrollo regional en Bolivia debería concebirse como un proceso de cambio social sostenido e incremental, cuya finalidad última es el progreso de sus regiones. Más concretamente, el desarrollo regional presupone crecimiento económico dentro de un marco estratégico nacional, y que las Prefecturas de departamento, así como los municipios, se esfuercen por lograr:

- a) Mayor autonomía decisional.
- b) Creciente capacidad regional de captación y reinversión del excedente.
- c) Creciente proceso de inclusión social.

d) Creciente percepción colectiva de pertenencia regional.

En este sentido, las regiones podrían organizar a sus agentes sociales e institucionales para proyectar un horizonte político que posibilite a cada región jugar un nuevo papel en el desarrollo boliviano, fomentar la producción para la exportación, invertir en capital humano, lo que significa fortalecer las escuelas, colegios y universidades, prever el uso adecuado de los recursos naturales y, lo más determinante, modernizar las instituciones públicas y privadas con el propósito de consolidar un proceso transformador para la eficacia institucional, competitividad y profundización democrática.

2. Los Problemas De La Recuperación Democrática:

Las Encrucijadas Del Sistema Político En Bolivia

El nuevo orden político en Bolivia se liga con la puesta en marcha de los programas de ajuste estructural (PAE), de acuerdo con un neoliberalismo que neutraliza y destruye las raíces del Estado populista y benefactor implantado desde 1952.

El círculo vicioso de ingobernabilidad que caracterizó al gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), de octubre 1982 a mayo de 1985, desnudó completamente los problemas irresueltos del Estado revolucionario de 1952. Esta matriz histórico-política había determinado el entrecruzamiento de lo social y lo político, haciendo que el Estado se encuentre asediado permanentemente por la sociedad civil, sobre todo entre 1964 y 1978. Las principales razones para que esto ocurriera pueden resumirse así:

- a) Ausencia de una estructura de mediación entre Estado y sociedad;
- b) Déficit creciente de legitimidad y autoridad política estatales;
- c) Fragmentación de las fuerzas políticas que actuaban sobre la base de una operación perversa de presión corporativa y excluyente;
- d) Lógica militar o de guerra en el enfrentamiento de los actores políticos fundamentales: movimiento obrero y fuerzas armadas;
- e) El uso de la fuerza y la violencia como el único recurso para resguardar el viejo orden político;
- f) Agotamiento del rol populista y distributivo del Estado providencial del 52. Fruto de la hiperinflación galopante a partir de 1982, el déficit fiscal era incontrolable, las exigencias de pago de la deuda externa y la caída de los precios internacionales del estaño que destruyeron la

posibilidad de generar excedentes económicos y acumulación de capital, echaron por la borda todo el aparato productivo del país⁶⁰.

La situación de desorden social, incertidumbre y pavor latente a partir de octubre de 1982, hizo que los actores políticos y sociales pongan en el centro de la tormenta el cómo solucionar la crisis política y económica sin traumatizar los marcos de la democracia representativa. El recurso táctico fue un acuerdo político entre las fuerzas parlamentarias de oposición, Acción Democrática Nacionalista (ADN) y MNR; el partido de Jaime Paz Zamora, quien fuera Vicepresidente el 82, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); los empresarios privados; y la Iglesia Católica. Estas fuerzas acordaron recortar en un año el período presidencial de Siles Suazo y convocar a elecciones generales para junio de 1985.

La estrategia socio-política del nuevo gobierno se orientaría en una sola dirección: reimplantar el orden. El deseo de orden durante la recuperación democrática fue muy fuerte porque el peligro de caos era verosímil. Una vez agotado el Estado Revolucionario con la crisis entre 1982 y 1985, la ciudadanía sentía amenazado su *sentido del orden*, o sea, lo que hace inteligible la vida en sociedad y su lugar en ella. Estaba atemorizada por la pérdida del viejo mapa político del 52, de tal manera que buscaba uno nuevo para estructurar nuevamente sus posibilidades y salir adelante. Cuando todo parecía posible en medio del caos de la UDP, la demanda para que llegue un nuevo poder adquirió el esplendor de un halo divino.

Las medidas adoptadas por el nuevo presidente, Víctor Paz Estenssoro, viejo líder del 52 y elegido, paradójicamente, para destruir lo que él mismo había contribuido a crear, no sólo se

⁶⁰ Entre los estudios más relevantes sobre la crisis de gobierno de la UDP y los desafíos que debió enfrentar la democracia de 1985 en adelante, ver LAZARTE, Jorge. **Bolivia: certezas e incertidumbres de la democracia**, vol. I, Los Amigos del Libro-ILDIS, La Paz, 1993. MAYORGA, René. **¿De la anomia política al orden democrático? Democracia, Estado y movimiento sindical**, CEBEM, La Paz, 1991.

encaminaron hacia la reducción del déficit fiscal, el control de la hiperinflación y la gobernabilidad de las principales variables macroeconómicas, sino, ante todo, hacia la restauración de la gobernabilidad del Estado. Tal como lo afirma Jorge Lazarte, el reordenamiento de la sociedad logrado por el decreto de ajuste 21060, poseía una matriz que entretejía un nuevo orden político, cuyo eje giraba en torno a la fundación de un Estado más político que económico, el cual se inscribía, además, dentro de las reglas de juego de una democracia representativa.

La democracia, que parecía ser una barca a la deriva durante los duros momentos de inestabilidad en el gobierno de la UDP, se vio beneficiada por los siguientes elementos:

- a) Se recuperó el poder y autoridad para el Estado;
- b) El ejercicio del orden supuso legalidad y normatividad obligatoria para todos los ciudadanos; es decir, se rescató el nudo central del sistema político: producir decisiones vinculantes;
- c) Se inició un proceso de reforma y modernización estatal y económica, cambiando las relaciones entre el Estado y la economía que, esta vez se orientan hacia una liberalización explícita;
- d) La estabilidad democrática reorganiza el espacio político, desprendiendo lo social de lo político, pues se instaura una mediación entre el Estado y la sociedad a través de un sistema de partidos pluralista pero con tendencias hacia la formación de coaliciones de gobierno, favoreciendo la lógica de los pactos de gobernabilidad;
- e) La vieja lógica de guerra terminó desgastando a las fuerzas armadas que se repliegan hacia un rol contemplativo; al mismo tiempo que el movimiento obrero, aglutinado en la Central Obrera Boliviana (COB), pierde centralidad fracturándose la identidad colectiva del proletariado minero, antaño poderosa;
- f) La conciencia cotidiana en Bolivia logra convencerse de que existen solamente dos formas de gobierno: la democracia y la dictadura, escogiendo finalmente a la primera;

g) La salida popular o izquierdista de una democracia como autodeterminación de las masas se ve rebasada por la democracia como representación.

Estas fueron las consecuencias indiscutibles del plan de ajuste estructural en favor de la democracia boliviana. Sin embargo, como todo acto humano y político, tuvo sus efectos no deseados e imprevistos, entre los que destacan: la excesiva concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos, el aumento creciente de la pobreza urbana y rural, la informalización aberrante de la economía, la imposibilidad de construir un aparato productivo competitivo en el ámbito internacional debido a las condiciones recesivas de la economía, y la debilidad de un actor social que, hasta la fecha, no ha demostrado su voluntad de contribución, arriesgándose en medio de las incertidumbres del mercado: los empresarios privados.

A su vez, el orden político democrático echó raíces sobre la base de instituciones políticas obsoletas que todavía impiden al sistema político articular las demandas sociales y responder eficazmente a la deslegitimación progresiva que lo acompaña, prácticamente desde el regreso de los gobiernos civiles en 1982.

Surgen así diversas interrogantes acerca de las posibilidades y dilemas de la consolidación democrática: ¿cómo conciliar la legitimidad democrática con una efectividad económica que pueda demostrar nuestro régimen político en el largo plazo? ¿La población está dispuesta a sacrificar las enormes desigualdades sociales, solamente en beneficio de la democracia como valor en sí? ¿Cómo producir, progresiva y democráticamente, un nuevo patrón de reconversión de la estructura productiva; una distinta pauta de intercambios con el exterior; vigorosas reformas del Estado y de sus relaciones con la sociedad civil; y diferentes modalidades, menos desigualitarias, de integración social?

A pesar de todo, la democracia en Bolivia – navegando contra el viento – trata de alcanzar el llamado “umbral de regularidad” desde 1985 a la fecha; es decir, desenvolver todas las condiciones políticas necesarias para su consolidación progresiva, en vista de que se implantaron tres objetos de consenso político con los cuales la democracia funciona: a) la aceptación de valores fundamentales como la libertad, igualdad y ciudadanía que nos diseñan todo un sistema de creencias para convivir dentro de un Estado de Derecho; b) las elecciones generales y municipales como el conjunto de reglas de juego o procedimientos dentro de las cuales se definen los límites y la titularidad del poder; c) la instauración de diferentes gobiernos consecutivos y de políticas gubernamentales específicas.

De cualquier manera, la fascinación por el nuevo orden político nos puso cara a cara con una evidencia: fundar la democracia no es lo mismo que aprender a preservarla y comprenderla día a día en su dinámica cotidiana tratando de resolver los principales problemas del país, entre los que se destacan: el constante aumento de la pobreza y la incapacidad para reformar al Estado en las actuales condiciones de globalización y mercado mundial.

Por lo tanto, ha aparecido una caja de pandora que fue destapando las chispas del desencantamiento de la población con el sistema político que está acosado por el desprestigio progresivo del Congreso Nacional, por una endémica inercia institucional y por los resabios de prácticas políticas que remozan una cultura política intolerante todavía presente en el sistema de partidos.

De esta manera, no hay duda de que la estabilidad de un sistema depende, en gran medida, de la naturaleza de los problemas que debe enfrentar. Iniciemos, entonces, un análisis del sistema político identificando dos elementos: la deslegitimación de los partidos políticos y el Parlamento y el impacto que ésta trae sobre la inestabilidad de la democracia en Bolivia.

Parlamento y partidos: el nudo de la crisis

Las encuestas de opinión y cultura políticas realizadas desde 1990 hasta la fecha han aportado mucho acerca de la profunda interpelación que la sociedad lanza contra al sistema político, la democracia y la crisis del país. Las condiciones de pobreza muestran que de 1985 a 1990, el 50% del total de los desocupados participa del 17% del ingreso total en el país. En 1989 la diferencia entre el más rico y el más pobre en Bolivia era de 52 a 1; de 1990 a 1992 el 20% de los más ricos lograba concentrar en sus manos el 37% del ingreso, además que cada ciudadano boliviano gasta, en promedio, 111 dólares por año en su alimentación, lo que significa poco más de un boliviano con 50 centavos diario (menos de 50 centavos de dólar americano)⁶¹.

Una encuesta sobre opinión política realizada en 1990⁶² señalaba que un 55% de los entrevistados no estaban de acuerdo con la democracia en Bolivia, aunque también asumían, en un 79%, que sólo la democracia resolverá los principales problemas del país. Además, un 78% de los encuestados creía que es posible juntar democracia con justicia social. Por lo tanto, la percepción civil de la democracia se mueve en dos planos: uno, el del *deseo* (la democracia sí puede ser mejor) y otro, el *evaluativo* con el que es calificada la democracia de acuerdo con resultados concretos alcanzados, sobre todo en materia de pobreza y crisis económicas.

⁶¹ Cfr. **Primer seminario sobre gestión legislativa** organizado por la Vicepresidencia de la República del 30 de agosto a 3 de septiembre de 1993. "El boliviano gasta \$u.s. 111 por año en alimentación", LA RAZON, 4 de octubre de 1993.

⁶² **Encuesta de opinión política sobre democracia, partidos y reforma del sistema político**, encargada por la Subcomisión de Reforma Política del Honorable Congreso Nacional, La Paz, 1990.

Esta misma tendencia se mantuvo casi invariable en la encuesta sobre coyuntura nacional ejecutada por el Instituto de Investigaciones Sociales (ILDIS) en 1992⁶³, donde 47% de la población asumía que Bolivia marchaba por mal camino en relación con un 35% que declaraba lo mismo en 1991. En 1992, 38% pensaba que viviría peor de lo que estaba en los próximos dos años (en 1991 este dato representaba el 17%). Asimismo, los grupos de menor nivel socio-económico, educacional y ocupacional son quienes evaluaban la situación de manera más pesimista, arrastrando un buen grupo de clases medias hacia posiciones más críticas. Finalmente, 54% de los encuestados en 1992 afirmaba no estar satisfecho con la democracia que vivía.

Ahora bien, si el objeto político *democracia* es valorado en términos de *resultados objetivos*, así también son tomados en cuenta los actores políticos del sistema: los partidos políticos. Según la encuesta de 1990, 77% de los entrevistados pensaba que los partidos no defendían los intereses del país. A su vez, también otro 77%⁶⁴ consideraba que los partidos sólo protegían los intereses de grupo, mientras que sólo un escaso 16% afirmaba que sí abogaban por los intereses del país.

El resultado inmediato es una total desconfianza de la sociedad hacia los partidos que se atribuyen el rol de expresión de los intereses generales al interior del sistema político como instancias de articulación y combinación de intereses. Además, cuando la población fue consultada sobre dónde se canalizaban mejor las demandas regionales, 27% de la misma respondió “en ningún lugar”, seguido de otro 23% que decía que los Comités Cívicos son quienes canalizaban mejor las demandas regionales.⁶⁵ Si sumamos ambos resultados (27 y 23%), se obtiene un 50% que afirma

⁶³ ILDIS. **Encuesta de coyuntura nacional. Informe final**, 25 de mayo de 1992.

⁶⁴ Cfr. **Encuesta de la subcomisión de reforma...** ob. cit.

⁶⁵ Idem. ob. cit.

que ninguna de las estructuras institucionales del sistema político cumple a cabalidad el rol decisivo de canalizar demandas.

Por otro lado, cuando los partidos intentan responder a las demandas de la población, su comportamiento muestra de inmediato un efecto de “fragmentación” en la medida en que los partidos ofrecen alternativas conflictivas, muchas veces polarizadas y una combinación perversa de *lobbying* y presión corporativa para satisfacer intereses restringidos de pequeños grupos, o caer víctimas de condenables casos de corrupción e impunidad cuando importantes líderes de los partidos con representación parlamentaria comenten delitos.

Definitivamente, los partidos y el propio Parlamento son las instituciones peor vistas por la sociedad que demuestra su molestia por medio de actitudes de desobediencia civil⁶⁶. En 1990, de una lista de nueve instituciones, cuatro fueron calificadas de 1 a 7 con los más bajos puntajes: Poder Judicial 3,5; Corte Nacional Electoral 3,37; partidos 3,33; Parlamento 3,2.

La encuesta del ILDIS en 1992, con la misma escala de calificación, dio resultados más pesimistas: Gobierno (de Jaime Paz Zamora entonces) 3,1; Justicia 2,8; Parlamento 2,7; partidos 2,5⁶⁷. La democracia sufre problemas de consolidación en la medida en que el aparato organizativo del sistema político atraviesa su peor momento y, por lo tanto, “está presente el riesgo de que muchos sectores de la población puedan pasar el desafecto por los comportamientos

⁶⁶ Cuando algunas estaciones de radio y canales de televisión realizan consultas y sondeos de opinión por teléfono sobre las labores del Legislativo y la conducta de los parlamentarios, no es una sorpresa escuchar adjetivos en contra de los parlamentarios como: "vagos", "vividores", "tragadevaldes", "ignorantes", "sólo saben engordar como chanchos", "van a sentarse, fumar y bostezar"... Cfr. "El Congreso quiere cambiar su imagen y trabajar más", LA RAZON, 29 de agosto de 1993; "Políticos: 20 pecados y una mala imagen", LA RAZON, 23 de octubre de 1994.

⁶⁷ ILDIS. **Encuesta de coyuntura...** ob. cit.

políticos, al desafecto por el sistema, rechazando uno juntamente con el otro, aquí puede verse la punta de lo que ha sido siempre la argumentación del autoritarismo”⁶⁸.

Hoy día, existen una serie de interrogantes respecto de la viabilidad y deseabilidad de la democracia por el “(...) bajo nivel de eficacia y el debilitamiento de su legitimidad ante la sociedad con todos los efectos previsibles sobre la estabilidad política (...); además, el sistema político perdería, cuando menos, su rol de espacio de mediaciones entre la sociedad civil y el Estado (...)”⁶⁹.

En este sentido, el Congreso Nacional está sometido a dos tipos problemas políticos: a) sufre una deslegitimación normativa porque no existe el aumento de su legitimidad y representatividad institucional, al mismo tiempo que el Parlamento se halla, en gran medida, constantemente rebasado por el Poder Ejecutivo, el cual lleva la mayor parte de las iniciativas en materia de legislación; y b) soporta una deslegitimación por rendimiento al no haber un aumento contundente en su capacidad de gestión y toma de decisiones de acuerdo con un criterio transparente de consensos racionales entre Congreso, Poder Ejecutivo, Judicial y organizaciones representativas de la sociedad civil.

De 1985 a 1989, el 70% del tiempo parlamentario fue destinado a la petición de informes orales e interpelaciones que no sirvieron de mucho porque nuestro Parlamento no puede emitir un voto de desconfianza constructivo para revocar en su mando a los ministros de Estado. Respecto a las labores congresales por período legislativo: del 88 al 89 y del 90 al 91, la relación entre proyectos de ley y leyes efectivamente promulgadas fue de 5 a 1. Del 91 al 92, la relación bajó a

⁶⁸ LAZARTE, Jorge. **Bolivia: certezas e incertidumbres de la democracia**, vol II, ob. cit., p. 93.

⁶⁹ Idem. ob. cit., p. 94 y ss. Ver también: MAYORGA, René. “Gobernabilidad en entredicho: conflictos institucionales y sistema presidencialista”, en: MAYORGA, René (coordinador). **Democracia y gobernabilidad, América Latina**, CEBEM-ILDIS-NUEVA SOCIEDAD, Caracas, 1992.

una confrontación de 3 a 1⁷⁰. En la legislatura de 1989 a 1990, “las sesiones se esfumaron en la aprobación de minutas y resoluciones intrascendentes, en funciones de fiscalización poco productivas y en la aprobación de convenios internacionales (...) [Durante el período 90-91] las leyes de hidrocarburos e inversiones se aprobaron en un contexto de presión ejercida por los organismos internacionales antes que por la iniciativa de las comisiones y bancadas parlamentarias”⁷¹.

Además, esta misma inercia se repitió en la primera mitad de las labores parlamentarias del período constitucional del ex presidente Gonzalo Sanchez de Lozada en 1994, porque en 46 sesiones, solamente se aprobó una sola ley de importancia nacional: la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo⁷². Actualmente, Bolivia es el país de América Latina que más parlamentarios tiene en relación con la cantidad de habitantes; si se toma en cuenta a los 314 congresales incluyendo los suplentes, en Bolivia hay un legislador por cada 25,477 habitantes, proporción más alta que en Brasil, Argentina, Perú e inclusive Estados Unidos. Un solo senador cuesta al Estado 2 millones de bolivianos (Bs) y un diputado 930,000. El total de 130 diputados titulares significan un gasto de Bs. 31,2 millones, mientras que los 27 senadores gastan 6,4 millones. A su vez, los parlamentarios suplentes se llevan Bs. 18,8 millones al año, según el presupuesto programado para el año 2001; finalmente, el costo de una sola ley, en Bolivia cuesta \$u.s. 270,000 dólares⁷³. Los costos para el

⁷⁰ Cfr. **Primer seminario sobre gestión legislativa, vicepresidencia de la república**, del 30 al 3 de septiembre de 1993.

⁷¹ MAYORGA, René. "Gobernabilidad en entredicho: conflictos institucionales y sistema presidencialista", ob. cit., p. 45 y ss.

⁷² La evaluación ineficiente fue reconocida por el ex presidente de la Cámara de Diputados, Guillermo Bedregal. Cfr. "Cámara de Senadores: entre duras autocríticas y defensas de lo hecho". "Muchos diputados no van a las sesiones: ¿qué hacen?". "Aprobación de la Ley de Ministerios del Ejecutivo", muy poco para 46 sesiones", LA RAZON, informe especial, La Paz 24 de octubre de 1993.

⁷³ Cfr. "Los parlamentarios son muchos y muy costosos", LA RAZON, La Paz 1 de diciembre de 2000.

funcionamiento del Congreso en Bolivia no corresponden para nada, ni con su efectividad, ni con los pobres beneficios que el país recibe del Parlamento, ni con la posibilidad de que el sistema de partidos enfrente con responsabilidad los problemas de la democracia.

A esto se suman las interrogantes sobre cómo hacer la democracia más participativa a escala local y regional, cómo hacer que los partidos se modernicen por medio del ejercicio de democratización interna, o cómo y cuándo efectivizar, operativamente, una agresiva reforma y modernización del Estado. En consecuencia, los problemas de consolidación de nuestra democracia se caracterizan por dos elementos: a) bloqueo del funcionamiento o mal funcionamiento, sobre la base de normas existentes, de algunas estructuras y mecanismos o procesos cruciales del régimen democrático; por ejemplo, crisis de gobierno o crisis en las relaciones legislativo/ejecutivo; b) alejamiento o mal funcionamiento de las relaciones entre la sociedad, los partidos y las estructuras del régimen democrático que se manifiestan en forma de demandas, expresadas por la sociedad civil, que no se traducen o no pueden traducirse en decisiones efectivas, valederas y responsables, tomadas por el régimen democrático en Bolivia.

Se construye democracia al andar

El tiempo nublado por el que atravesamos, no quiere decir que el sistema político y la democracia no hayan demostrado una poderosa influencia en los parámetros de acción política, que cambiaron drásticamente desde 1985 con relación a nuestro pasado histórico de 1952. Uno de los datos más sobresalientes es la instauración de *consensos y pactos políticos* para cimentar la gobernabilidad; es decir, posibilitar la sintonía, comunicación y equilibrio políticos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, lo cual nos dibuja la matriz del nuevo orden político que rompe

definitivamente con las polarizaciones ideologizadas de carácter absolutista que venían desarrollándose del 52 al 85. Todo con un solo objetivo: recuperar poder y autoridad para el sistema político democrático; esto resalta, sobre todo, en la elección del presidente de la república que, según la Constitución Política del Estado (art. 90), exige que el Congreso elija al primer mandatario entre los tres candidatos más votados cuando ninguno de ellos haya alcanzado la mayoría absoluta en las urnas.

Esto fortalece enormemente el parlamentarismo que permite obtener soluciones negociadas para la estabilidad política, eficacia (entendida como la capacidad de tomar y ejecutar decisiones), y efectividad (entendida como la capacidad de lograr objetivos y metas trazadas) del Poder Ejecutivo, lo cual da como resultado inmediato un sistema de gobierno presidencialista parlamentarizado⁷⁴.

Los consensos políticos promueven la despolarización “mediante la cual los partidos de derecha tienden a su izquierda y los partidos de izquierda tienden a su derecha alejándose de sus ideologías tradicionales”⁷⁵; lo cual conduce a un nuevo tipo de paradigma ideológico en el sistema político: la democracia representativa como modelo de gobernabilidad, que descarta una lógica de enfrentamiento militar entre oponentes para favorecer estrategias y valores utilitaristas de transacción política negociada, evitando que los socios se dividan y practiquen una mezcla de tolerancia recíproca y aceptación pragmática. Esto hace que se genere una suerte de fuerza

⁷⁴ Cfr. GAMARRA, Eduardo. "Presidencialismo híbrido y democratización", en: MAYORGA, René (comp.). **Democracia y gobernabilidad**, ob. cit.

La teoría del parlamentarismo es defendida, sobre todo, por una buena parte de los intelectuales bolivianos preocupados por la gobernabilidad, quienes sugieren que la necesidad de ejecutar pactos sea introducida como un precepto constitucional en las reformas a la Constitución Política del Estado.

⁷⁵ SAN MARTIN, Hugo. "Desplazamiento ideológico en el sistema político boliviano: del nacionalismo revolucionario al modernismo democrático", en: ANALISIS, Revista de la Escuela de Altos Estudios Nacionales, año 1 No. 1, octubre-diciembre de 1992, p. 160.

centrípeta para la creación de un centro político que acerca a las principales fuerzas del país hacia los pactos de gobernabilidad perdurable.

La constatación empírica nos muestra una tendencia única desde la creación del Pacto por la Democracia entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1985 para solidificar el gobierno de Paz Estenssoro; el Acuerdo Patriótico entre el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y ADN en 1989 favoreciendo el gobierno de Paz Zamora; los acuerdos políticos del 5 de febrero de 1991 y del 9 de julio de 1992 entre el MNR, MIR, ADN, Conciencia de Patria (CONDEPA) y el Movimiento Bolivia Libre (MBL) para la democratización y modernización de sistema electoral, reformas judiciales, reformas a la Constitución, reforma educativa, descentralización, ley de la coca y ley de partidos políticos; el pacto de gobernabilidad entre el MNR, MBL y Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que nace el 6 de agosto de 1993 sustentando el gobierno de Sánchez de Lozada; y la denominada megacoalición, nacida en 1997 para llevar a la presidencia al ex dictador Hugo Banzer de ADN.

La democracia en Bolivia consigue aproximar a los actores y afecta los comportamientos políticos, posibilitando:

- Conformar la Corte Nacional Electoral y las Departamentales con miembros imparciales, respetables, y de reconocida trayectoria profesional⁷⁶.
- Instaurar un Padrón Nacional Electoral que evita las inscripciones múltiples.
- Depurar las listas de ciudadanos inscritos para cada elección nacional o municipal.

⁷⁶ Según la ley electoral de 1980, la Corte Nacional estaba conformada por representantes de los tres poderes del Estado y delegados de partidos políticos, de manera que se facilitaba una serie de operaciones perversas para manipular los votos y la asignación de bancas parlamentarias.

- Evitar la anulación masiva de votos a través del principio de intangibilidad del voto que es válido en la mesa de sufragio, impidiendo su revisión en las cortes departamentales o en la nacional.
- Realizar los cómputos electorales con procedimientos informáticos más especializados.
- Distribuir los escaños parlamentarios a través de métodos que favorezcan la representación de los partidos pequeños.

La confianza en las reglas de juego que orientan la conducta de los actores en democracia, permite que ésta sea entendida por medio de la brillante reflexión del profesor de la Universidad de Chicago, Adam Przeworski, para quien la democracia significa certeza en las normas e incertidumbre en los resultados. Ama la incertidumbre y serás demócrata, sentencia Przeworski. La incertidumbre a la cual están sometidos los políticos dentro del juego de poder, debe combinarse con la seguridad de que las reglas de juego funcionan y son obligatorias para todos. Estos son los saldos positivos dentro de nuestro orden político que aún tiene un largo trecho por recorrer en pos de su consolidación.

Colofón: democracia gobernante o democracia gobernanda

Después de 15 años de relativa estabilidad política en Bolivia (1985-2000), lo que aprendimos en este lapso de tiempo, no sólo permitió cambiar distintos gobernantes sin derramamiento de sangre, sino también inaugurar una nueva forma de pensar la realidad boliviana desde sus potencialidades y desde sus límites. Esto nos obliga a reflexionar sobre la disyuntiva entre democracia gobernante y democracia gobernada.

Para muchos, sólo puede ser factible la democracia gobernada, es decir, un régimen donde los ciudadanos entregan la facultad del ejercicio del poder a un grupo de representantes elegidos en comicios generales. Estos representantes constituyen una élite que asume para sí todo el derecho y privilegio de decidir por los demás. Los defensores de la democracia gobernante, contrariamente, confían en una voluntad popular omnipotente que se impone sobre el Estado.

Surgen así muchas interrogantes: ¿puede un grupo de representantes imponer sus decisiones sin contemplación alguna, por el hecho de concentrar factores de poder y colocarse encima de la sociedad? ¿Las élites tecnocráticas gozan de un saber perfecto que no admite refutaciones? ¿El saber especializado y la eficacia en la administración del Estado, sin intromisión de las masas, son suficientes para consolidar una democracia? ¿Puede el pueblo autogobernarse directamente sin mediación alguna? ¿La voluntad popular omnipotente es compatible con los principios mínimos de gobernabilidad? ¿Cuál es el equilibrio, y cómo se modifica, entre los gobernantes y los gobernados?

La actual resistencia de algunos sectores del país a la ejecución de una serie de reformas como las Leyes de Participación Popular, Capitalización, Reforma Educativa y a las últimas reformas constitucionales; así como la actitud de los gobiernos por imponer sus decisiones a como dé lugar, empleando el rodillo parlamentario o cooptando intelectuales y líderes de oposición en busca de una hegemonía total, ilustran claramente las tensiones entre democracia gobernante y gobernada.

Hoy, todavía persisten comportamientos que reclaman para sí valores absolutos, pues las élites políticas y la sociedad civil van buscando, por su lado, sus propias certezas, sin comprender que la democracia no es sólo una forma de gobierno, sino también una forma de actitud humana individual, la cual es, sencillamente, una reserva de inseguridad, el sentimiento permanente de la posibilidad del propio error; y, si no del propio error, sí de la probabilidad de que el contrario tenga

la razón. De ahí que la política democrática se convierta en el difícil arte del consenso y del reconocimiento permanentemente tolerante de los otros.

Por lo tanto, la democracia es el ensayo de una determinada actitud que tiene conciencia de una situación en la que no es posible resolver la disyuntiva entre democracia gobernante o democracia gobernada, pero que tampoco plantea renunciar a la democracia como valor en sí. En este sentido, la democracia en Bolivia debería ser entendida como un proceso de maduración indefinido.

Una democracia gobernada no puede subsistir sin la lealtad de las masas ciudadanas que transmiten un requisito de estabilidad política de largo aliento: la legitimidad. A su vez, la democracia gobernante con su vigorosa fiscalización pública requiere de un principio de orden, el cual descansa en un sistema de mediación entre el Estado y la sociedad, de tal manera que se logren amplios márgenes de gobernabilidad; es decir, que el Estado no sea constantemente asediado por la sociedad generándose situaciones de violencia.

En consecuencia, la comunicación entre los actores sociales y políticos será la condición fundamental para cultivar mutua tolerancia en Bolivia. Dicha comunicación permitirá obtener tres beneficios de vital importancia para la democracia: poder entender a los demás; expresar lo que uno quiere y siente, libre de toda distorsión amenazadora; y, finalmente, poder comprender el mundo que nos rodea, y al cual todos contribuimos a crear.

3. La Utopía De No Ser Pobres:

Cómo Las Políticas Sociales Se Someten Al Ajuste Liberal

La década económicamente perdida en Bolivia, tiene lugar con la recuperación de nuestra institucionalidad democrática en octubre de 1982. El gobierno del entonces presidente Hernán Siles Suazo que encabezó la Unidad Democrática y Popular (UDP), pese al apoyo masivo de todos los sectores sociales, pronto fracasó por ingobernabilidad económica y política. La crisis hiperinflacionaria estuvo a punto de estrangular a las recientemente plantadas raíces democráticas. El camino a tomar fue: recortar un año de gobierno a Siles y rearticular los partidos políticos grandes como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN), y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) para que, junto a representantes de la empresa privada, convocaran a elecciones generales en junio de 1985. El presidente electo fue Víctor Paz Estenssoro, quien ejecutó acciones drásticas de control económico mediante *reformas estructurales*, las cuales habían llegado a Bolivia, tanto a través del voto –el pueblo optó por solucionar la hecatombe provocada por la UDP, exigiendo estabilidad y control–, como por intermedio de programas monetarios con la participación de técnicos internacionales. Así nació el programa de ajuste estructural (P.A.E.), cuya característica central fue su integralidad.

En una primera fase, el ajuste se relacionó con el freno a la hiperinflación, pues la posibilidad de recuperación del crecimiento económico dependía de dos componentes centrales: reforma estructural y estabilización⁷⁷.

El desenlace al que llegó el desastre del gobierno de Siles fue las elecciones y la ejecución del Decreto Supremo 21060. Si se hace una periodización del ajuste estructural en Bolivia, son reconocibles las siguientes fases:

- a) Primera fase: estabilización, de 1985 a 1986.
- b) Segunda fase: posible reactivación económica y prosecución de la estabilidad, de 1987 a 1989.
- c) Tercera fase: promulgación del Decreto Supremo 22407 durante el gobierno de Paz Zamora y permanencia de una estabilidad sin crecimiento económico.
- d) Cuarta fase: reformas socio-políticas ambiciosas con Gonzalo Sánchez de Lozada, 1993-1997, capitalización de empresas estatales estratégicas y difusión masiva del discurso denominado: desarrollo humano y sostenible.
- e) Quinta fase: incertidumbre sobre el desarrollo económico y estancamiento propositivo para las reformas sociales, 1998.

El siguiente análisis verzará sobre los rumbos que tomaron las políticas sociales para enfrentar a la pobreza y el cauce que recorrió la teoría sobre el desarrollo humano, considera que

⁷⁷ Cfr. AGUIRRE, Alvaro; ARZE, Carlos, et. al.. **La intencionalidad del ajuste en Bolivia**, CEDLA No. 3, La Paz, 1993. El CEDLA publicó una serie denominada: Programa de Ajuste Estructural en más de diez tomos, entre los cuales figuran: DORADO, Hugo; GREBE, Horst y VILLEGAS, Carlos. **Economía mundial y organismos multilaterales**, CEDLA, No. 1, La Paz, 1992; LAZARTE, Jorge y PACHECO, Mario Napoleón. **Bolivia: economía y sociedad 1982-1985**, CEDLA, No.2, La Paz, 1992; MONTAÑO O., Gary y VILLEGAS, Carlos. **Industria boliviana, entre los resabios del pasado y la lógica del mercado**, CEDLA, No. 4, La Paz, 1993; ARZE, Carlos, et. al. **Empleo y salarios, el círculo de la pobreza**, CEDLA, No. 5, La Paz, 1994. Consultar también: BEDREGAL, Guillermo. **Dialéctica de la hiperinflación en Bolivia**, Juventud, La Paz, 1987.

todos los esfuerzos emprendidos para atenuar la deuda social de los ajustes económicos, constituyen una bien montada estrategia de legitimación de gobiernos y del sistema democrático. La legitimidad o legitimación, tiene que ver bastante con la idea de una creencia arraigada y claramente con temas de opinión pública; es decir, se trata de una forma muy particular de consentimiento que la sociedad civil dio y está dando a las políticas sociales en condiciones de libre mercado, con la esperanza de que el Estado pueda, en algún momento, recuperar su papel protagónico para otorgar subsidios, seguridad social y otras prestaciones que reduzcan la pobreza.

Con esta intención de legitimar y proteger el régimen democrático, diferentes gobiernos instauraron un aparato de asistencia social como el Fondo Social de Emergencia (FSE) que primó entre 1986 y 1989, o el actual Fondo de Inversión Social (FIS), para convencer a la sociedad civil que la privatización de empresas estatales y las medidas rigurosas de adaptación a una economía de mercado, pueden convivir y poner en marcha tareas precautorias de mejoría a la pobreza y un sentido de sacrificio con severidad. Solamente así se podría explicar que el enorme costo social traído por los ajustes todavía permita subsistir a la democracia en Bolivia.

Primera fase: la estabilización

Durante esta fase, la aplicación del Decreto Supremo 21060 frenó el ritmo hiperinflacionario provocado por el déficit fiscal del sector público. Las medidas fiscales, monetarias, cambiarias y de ajustes administrativos en el sector estatal, no solamente reordenaron la economía nacional, sino que fueron acciones políticas imprescindibles para devolver el poder al Estado y cierta eficacia de gobierno.

De acuerdo con investigaciones del Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que publicó toda una colección sobre el programa de ajuste estructural en Bolivia, a partir de 1985 la reducción del gasto público estuvo instrumentada mediante la eliminación de los subsidios que promovía el Estado desde la década de los años cincuenta, la relocalización de trabajadores mineros y el congelamiento temporal de las remuneraciones. El incremento de los ingresos se operó a través de la elevación de los precios y tarifas públicas, así como de las transferencias financieras de las empresas públicas, sobre todo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). La política de contracción monetaria se asoció con las medidas de restricción fiscal que fueron puestas en marcha mediante el control de los coeficientes de liquidez⁷⁸.

El reordenamiento político y económico producido por el 21060 dio resultados satisfactorios. Se controló la hiperinflación, el Estado dejó de ser acosado por presiones sociales que amenazaban destruir su institucionalidad y se inauguró un estilo de consenso político entre los partidos que mayor número de parlamentarios obtuvieron en 1985: MNR y ADN. Éstos viabilizaron un pacto de gobernabilidad (Pacto por la Democracia) que permitió la prosecución eficiente del ajuste. Ambas organizaciones políticas, a su vez, se autoatribuyeron la paternidad legítima en el diseño y ejecución del 21060 como una forma para transmitir que el ajuste, no sólo representaba un conjunto de acciones reformadoras, sino, sobre todo, una especie de nueva etapa histórica de transformación nacional.

Desde 1985, el discurso económico que aparece en diferentes medios de comunicación está cargado de tecnicismos y mucha especialización. Su objetivo es, justamente, impresionar a la sociedad para explicar poco los detalles. De ahí que, durante el gobierno de Paz Estenssoro,

⁷⁸ Cfr. AGUIRRE, Alvaro, et. al., ob. cit., p. 11, 1993.

proliferaran los foros económicos y las declaraciones de analistas donde aparecían dos posiciones extremas: un polo de franco rechazo al 21060 o, en todo caso, un polo de apoyo ciego e incondicional.

Finalmente se impuso el discurso económico especializado a favor de los ajustes para adoptar medidas políticas sin justificación exhaustiva. Esto evitó que el PAE fuera negociado con sectores sindicales politizados como la Central Obrera Boliviana (COB). Desde este momento se construyó una espiral de opiniones donde las explicaciones económicas recortan cada vez más las obligaciones del Estado respecto de la sociedad y respecto de su papel como dinamizador de la economía. El discurso económico neoliberal busca destruir cualquier compromiso que abra la alternativa para que el Estado vuelva a subvencionar prestaciones sociales⁷⁹.

Los tecnócratas económicos estuvieron bien acorazados por un discurso especializado que es difícil de entender para el ciudadano común. El abanico de explicaciones tecnocráticas va y viene en relación con: control de los índices de inflación, indexación de precios, déficit del sector público, coeficientes de liquidez, tasa Líbor, capitalización, reconversión de los fondos de pensiones y fideicomisos, sistemas de regulación por sectores, etc. ¿Cómo se solucionó este problema de lenguaje alambicado y, por demás, especializado que buscaba atemorizar cualquier oposición? Se elaboró un discurso compensatorio: la teoría del desarrollo con rostro social para aminorar la pobreza.

El nuevo discurso compensatorio justificaba acciones que sí eran más comprensibles: el mejoramiento de la calidad de vida, la satisfacción de necesidades básicas, el respeto a la

⁷⁹ Cfr. CARIAGA, Juan L. **Estabilización y desarrollo. Importantes lecciones sobre el programa económico de Bolivia**, Fondo de Cultura Económica, Economía Latinoamericana, Los Amigos del Libro, La Paz, 1989.

dignidad de seres humanos, la equidad, la justicia social y la protección del medio ambiente. Sin embargo, también se difundió la idea que planteaba un desarrollo humano sostenible para superar la pobreza, sin ir en contra o fuera de los moldes de mercado porque, en todo caso, las reformas sociales debían exigir más de los mercados. Por ejemplo, que sigan brindando sus ventajas pero de una forma más equilibrada, combinando la eficiencia con equidad y sostenibilidad, ya que después de todo, "(...) los mercados libres constituyen el mecanismo más eficiente ideado hasta ahora para el intercambio de bienes y servicios"⁸⁰.

En materia de reordenamiento institucional, se prestó especial atención a la desburocratización del Estado, a la reducción del tamaño del sector público en la economía y "(...) al propósito de canalizar las acciones para el tratamiento de los problemas de la deuda y el crédito externos, así como para atender los asuntos sociales. Respecto a esta cuestión, fue importante la decisión [política] de crear el Fondo Social de Emergencia (FSE), en noviembre de 1985 (...) y el Consejo Nacional del Empleo"⁸¹.

Como lo expresa apropiadamente el economista Juan Antonio Morales, la Nueva Política Económica (NPE) del 21060 trajo consigo las reformas más radicales del Estado y la sociedad boliviana, prácticamente desde la Revolución Nacional de 1952, "(...) sin exageraciones se puede afirmar que la NPE es la gran revolución liberal, que ha sacudido completamente el patrón de desarrollo, fuertemente centrado en la inversión pública y con un sistema de reciprocidades, no intermediadas por el mercado, entre el sector público y el sector privado (...). Con la NPE se produce también una reducción muy significativa del tamaño del gobierno central en la economía. Este, en el área de producción de bienes se reserva para su administración directa

⁸⁰ PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). "El público y los mercados"; en: **Informe sobre desarrollo humano 1993**, PNUD-CIDEAL, Madrid, 1993, p. 36.

⁸¹ AGUIRRE, Alvaro, et. al., ob. cit., p. 12, 1993.

solamente YPFB y las minas rentables, o con potencial comprobado, de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)"⁸².

Una visión global sobre los efectos del PAE en el empleo, permite afirmar que la intención fue cambiar radicalmente el mercado laboral, a objeto de sembrar las mejores condiciones para la llegada de inversiones privadas. Por lo tanto, la estructura del empleo de acuerdo con parámetros competitivos, prevé introducir nuevos procesos de trabajo y relaciones contractuales que sustituyan los antiguos procesos productivos intensivos en el uso de la fuerza de trabajo, por otros nuevos intensivos en capital, estimulándose la innovación tecnológica como una medida central para elevar la productividad y minimizar costos. Dentro de este panorama, el PAE dio lugar a las siguientes consecuencias:

- a) Inestabilidad laboral.
- b) Movilidad de la fuerza de trabajo.
- c) Preeminencia del trabajo eventual y a destajo.
- d) Subcontratación.
- e) Trabajo a domicilio.
- f) Proliferación de la informalidad y de las estrategias autogestionarias de los trabajadores independientes, sobre todo en los ámbitos del comercio y las pequeñas empresas.

Antes de que se ejecutara la NPE, el peso del sector público en la inversión y empleo era el rasgo más preponderante de la economía boliviana, puesto que existía una enorme fracción de la Población Económicamente Activa (PEA) urbana en el sector público. Durante el primer año

⁸² MORALES, Juan Antonio. "Nueva política económica y modernización del Estado"; en MAYORGA, René Antonio (coord.). **Democracia y gobernabilidad, América Latina**, CEBEM-ILDIS-Nueva Sociedad, Caracas, 1992, pp. 99-100.

de la NPE (1985-1986), el empleo público se redujo en más del 10%, pasando de 246.000 en 1985 a 221.000 en 1986. El empleo del sector público representaba la elevada cifra de 47% en 1985, mientras que cuatro años más tarde, en 1989 el porcentaje había declinado drásticamente a 39,7% ⁸³. Las medidas de hecho que asumió el gobierno de Paz Estenssoro fueron los despidos o la llamada *relocalización*, sobre todo en COMIBOL. Posteriores gobiernos, como el de Paz Zamora y Sánchez de Lozada, continuaron realizando esfuerzos para reducir el sector público, donde los trabajadores fueron abandonando sus empleos, fruto de las bajas remuneraciones y dando cabida a los siguientes resultados:

- a) Un proceso de presión indirecta para expulsar empleados.
- b) Procesos de autoselección negativa, a través del cual los funcionarios más competentes en el mercado laboral abandonan una carrera de servicio en el sector público.
- c) Mayor informalización del empleo público, recurriéndose a personal calificado pero con contratos de corta duración y con elevados salarios, financiados a través de la cooperación internacional.

Después de 15 años de ajustes estructurales, los trabajadores en Bolivia todavía consideran que los riesgos para sus empleos crecen y se complejizan; sin embargo, también se dan cuenta que movilizaciones y presiones políticas con viejas demandas a través de la COB, ya no responden a sus exigencias. En algunos casos, existe el peligro de que los trabajadores pierdan sus empleos o empeoren sus condiciones de vida, a causa de la competencia internacional y la libre circulación del capital.

⁸³ Cfr. MORALES, Juan Antonio, ob. cit., 1993.

Los trabajadores reconocen también que la influencia liberal es hegemónica y, hoy día, temen quedar excluidos de los mercados internacionales en permanente expansión; los trabajadores informales, como aquellos comerciantes mayoristas y minoristas, quieren gozar de un buen colchón económico con créditos necesarios que efectivicen su diversificación, incorporándose en nuevos espacios dentro del mercado.

Ya no es posible pensar sólo en que el Estado sea el principal proveedor de empleo; al mismo tiempo, la flexibilización laboral y desregulación del mercado de trabajo exigen también una cualificación de la fuerza de trabajo para responder a los retos de una economía globalizada. Ésta necesita que los trabajadores estén preparados para hacer frente al cambio, desechando viejas costumbres como la comodidad de esperar sentados todo tipo de prestaciones sociales, subvenciones y asistencia social gratuita desde el Estado filantrópico o desde una economía centralizada.

La COB y los sindicatos de todo tipo necesitan discutir profundamente, sin prejuicios, ¿cuál será su papel para aprovechar algunas ventajas del mercado? Sus estrategias de presión y reclamo de pliegos petitorios con los que se enfrentan a diferentes gobiernos, no son más que piedras en sus mismos zapatos, pues siempre acaban desgastando a los trabajadores y con una lista enorme de derrotados. Es importante que el viejo pliego petitorio se convierta en un programa nacional para la cualificación del empleo, ligado a diferentes tácticas de pacto y concertación entre el Estado y los empresarios privados, entre los trabajadores y las nuevas condiciones de competencia que requiere una economía dependiente como la boliviana. La COB debería convertirse en el eje de una cultura de la eficiencia y en la supervisora de una reforma del Estado boliviano en función de su reconversión productiva.

Las condiciones globales para mejorar el trabajo en nuestra economía, dependiente pero finalmente conectada al mercado mundial, tienden a requerir lo siguiente⁸⁴:

- Inversiones en infraestructura, transferencia de tecnología y mejoramiento en la calidad de la gestión que contribuyen a aumentar la productividad de los trabajadores.
- Consolidar algunos resultados ventajosos que Bolivia alcanzó respecto a hidrocarburos, agricultura y minería.
- Producir bienes de nivel tecnológico más alto.

Al mismo tiempo, es fundamental que los mercados laborales en el país sean adaptables a los siguientes objetivos:

- a) Facilitar la movilidad de la mano de obra.
- b) Aumentar la flexibilidad de los salarios relativos.
- c) Romper el vínculo entre los servicios sociales y los contratos laborales.
- d) Aumentar la adaptabilidad del mercado de trabajo.
- e) Reducir los desincentivos para cambiar de empleo.
- f) Preparar a los trabajadores para hacer frente a los cambios, a fin de poder reaccionar inmediatamente a las modificaciones sorpresivas que surgen en las economías de mercado.
- g) Fomentar políticas públicas específicas en la búsqueda de empleo.
- h) Fomentar el readiestramiento.

⁸⁴ Cfr. BANCO MUNDIAL. **Informe sobre el desarrollo mundial 1995. El mundo del trabajo en una economía integrada**, Washington D.C., Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial, junio de 1995.

Paralelamente al establecimiento de nuevas características económicas del trabajo, debe darse importancia a las condiciones subjetivas que podrían producir crecimiento. Se trata de la generación de confianza y pactos sociales de largo plazo entre:

- El capital y los trabajadores.
- El Estado y la sociedad civil.
- Los partidos políticos y los empresarios.
- Los sindicatos y los responsables de políticas públicas.

Los ajustes estructurales en Bolivia demandan que el mundo del trabajo produzca mayores niveles de confianza para que, en conjunto, el capital y los trabajadores puedan aumentar la productividad y la eficiencia, exigiendo al Estado la ampliación de la ciudadanía política y la generación de igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos laborales.

En otros escenarios laborales como el área rural, el PAE provocó la concentración de recursos, incluida la tierra, que terminaron en manos de grandes empresas agroindustriales con aptitudes para adaptarse al modelo de mercado. Los efectos de este fenómeno en el plano de las relaciones y procesos de trabajo, son semejantes a los que suceden en la industria capitalista de las ciudades: empleos eventuales y a destajo. Otra de las características fue la creciente migración de pequeños productores hacia diferentes ciudades como: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

Economistas rurales como Miguel Urioste Fernández de Córdova, afirman que las consecuencias de las políticas de ajuste en el campesinado fueron extremadamente negativas en la medida en que se produjeron los siguientes efectos:

- a) Disminución de la inversión pública en el sector agropecuario campesino.
- b) Reconcentración latifundaria improductiva de la tierra.

- c) Reducción de la oferta crediticia para los pequeños productores agropecuarios. Aquí radica tal vez uno de los obstáculos más grandes para orientar procesos productivos en condiciones de mercado, porque el campesino no es visto como actor económico o buen sujeto de crédito, sino como grupo de riesgo dependiente, ya sea de las organizaciones no gubernamentales o del Estado, debiendo asistírsele debido a sus condiciones de miseria.
- d) Apertura indiscriminada al comercio de importación de productos agropecuarios alimenticios provenientes de otros países.
- e) Disminución relativa de los presupuestos de educación y salud en el sector rural, comparativamente con los asignados a otros sectores.
- f) Desconocimiento de la legislación laboral para los trabajadores agrícolas asalariados.
- g) Nuevas formas de tributación para los campesinos incorporándolos al régimen del impuesto al valor agregado.
- h) Políticas arancelarias uniformes que encarecen insumos, equipos y herramientas para el sector agropecuario.
- i) Aumento substancial de los programas de asistencia alimentaria, especialmente por la vía del PL-480 de Estados Unidos, en sus diferentes proyectos.
- j) Promoción de políticas agropecuarias de exportación exclusivamente basadas en empresas intensivas en capital.

Urioste considera que los campesinos se convirtieron en consumidores netos de alimentos, pues se estima que en 1992 no produjeron ni siquiera el 50% de lo que consumieron⁸⁵. A esto debe agregarse que la situación del área rural está fuertemente ligada al deterioro de los bosques y al conflicto que surge entre desarrollo económico para el campesinado y la ecología, porque las posibilidades de superar la pobreza aumentando los niveles de productividad agrícola podrían atentar contra las mínimas condiciones para un medio ambiente seguro.

Respecto a los ingresos es donde el ajuste tuvo características inequitativas. Por ello, es importante destacar que “(...) el PAE no prevé el uso de políticas destinadas a modificar la distribución primaria o factorial del ingreso, dejando al mecanismo del mercado la determinación de la remuneración para el trabajo y los demás factores productivos”⁸⁶. Con el objetivo de motivar el despliegue del sector privado, el PAE tendió a concentrar el ingreso, excluyendo a amplios sectores laborales de los posibles beneficios de las políticas económicas y sociales.

Cabe recordar que los análisis realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por el Banco Mundial (BM) sobre la pobreza a partir de los efectos del PAE, señalan que las “(...) áreas geográficas pobres están, hoy en día, peor que en 1976, en relación con el promedio nacional (...). Si bien entre 1976 y 1992, la población que vive en extrema pobreza habría disminuido en términos relativos, en términos absolutos habría alcanzado a un millón de habitantes (...), [asimismo] la tesis que postula que la pobreza se ha incrementado casi exclusivamente como consecuencia de la aplicación de la política de ajuste estructural, muy divulgada por sectores de la izquierda tradicional, no tiene suficientes

⁸⁵ Cfr. URIOSTE F. De C., Miguel. **Fortalecer las comunidades. Una utopía subversiva, democrática y posible**, AIPE-PROCOM-TIERRA, La Paz, 1992.

⁸⁶ AGUIREE, Alvaro, et. al., ob. cit., p. 66.

evidencias. En todo caso, parece ser más correcta la afirmación utilizada por funcionarios del BM sobre que las causas estructurales de la pobreza en Bolivia tienen un origen anterior”⁸⁷.

Inclusive el propio Estado Benefactor del 52 ya era débil para solucionar la pobreza estructural. Los PAE se acomodaron a exigencias económicas de urgencia en Bolivia y a ciertos parámetros internacionales pero aprovechando también la debilidad del Estado del 52, razón por la cual los ajustes se aplicaron rápidamente aunque agudizando sus efectos negativos en los sectores más pobres, quienes recibieron al PAE de súbito y sin mayor capacidad de adaptación.

Segunda fase: estabilidad sin crecimiento e incertidumbre

Las consecuencias sociales de los ajustes estructurales no tardaron en aparecer, el desempleo se incrementó considerablemente y la economía informal fue reproduciéndose como una estrategia de los sectores depauperados para autoasignarse un salario a través del comercio ambulante o la inversión en pequeñas empresas. La economía informal estalló como consecuencia de un desarrollo más acelerado de todo el sector económico frente a la incapacidad del Estado para extender su control sobre diferentes agentes económicos quienes transgredieron los límites que el Estado mismo consideraba formales, pasando a convertirse automáticamente en actividades al margen de su control⁸⁸.

Sin embargo, el 21060 llevaba implícita una nueva estrategia de desarrollo, pues planteó también un proceso de reconversión productiva, encaminado a fortalecer nuevas áreas como el

⁸⁷ VAN NIEKERK, Nico. “La economía va cada vez mejor, pero ¿qué pasa con la gente? ¿deuda o beneficio social?; en: CID-COTESU-MCTH. **Políticas sociales y ajuste estructural, Bolivia 1985.93**, CID-COTESU-MCTH, La Paz, 1993, p. 13 y ss.

⁸⁸ Cfr. DORIA MEDINA, Samuel. **La economía informal en Bolivia**, EDOBOL, La Paz, 1986.

sector exportador, "(...) cuestión que se remarca insistiendo que se debe reconstruir la estructura productiva del país, priorizando el crecimiento y la diversificación del comercio externo"⁸⁹.

Es importante agregar que la reconversión productiva estaba pensada, en este primer momento, como un impulso afincado en la inversión pública, antes que en la fuerza estratégica de la inversión privada, cuyo papel fue central entre 1993 y 1997 con la capitalización de empresas estatales. Asimismo, la cooperación internacional cobró una importancia crucial a partir de esta segunda fase, pues a lo largo del ajuste, "(...) la política que se asumió en torno a la inversión pública fue que ésta sea financiada con créditos externos y que los recursos así obtenidos se destinen a obras de infraestructura, en menor medida a programas de desarrollo en los sectores agropecuario, minero e hidrocarburos y en los procesos de reforma estructural del sector financiero y de administración pública"⁹⁰. Adicionalmente existieron fuentes de financiamiento que otorgaban donaciones para atender la demanda de alimentos y una serie de programas de cooperación técnica. Sin embargo, los ajustes arrastraron una fuerte dosis de incertidumbre, una vez alcanzadas las metas de control sobre la hiperinflación y estabilidad económica, resultado muy difícil imaginar alternativas reales y efectivas para una reactivación económica sostenida en el largo plazo.

La cooperación externa resultó un tanto ambigua pues no contribuyó a dilucidar escenarios posibles para ir más allá de la estabilización. En muchos casos, varios cooperantes europeos establecieron su residencia permanente en el país, instaurando inclusive organizaciones no gubernamentales, convirtiéndose en intermediarios para capturar financiamiento externo o, simplemente, fundando sus propios negocios como una serie de hoteles y otros servicios. Las

⁸⁹ AGUIRRE, Alvaro, et. al.: p. 15.

⁹⁰ Ibidem., p. 17

condiciones de pobreza del país tiñeron de depresión a muchos hogares pero en otras situaciones, resultaron brindando un espacio apto para que muchos cooperantes pudieran pescar en río revuelto.

Los donantes internacionales mostraron – y todavía lo hacen – un gran entusiasmo por trabajar con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sobre todo en programas de alivio a la pobreza; sin embargo, “(...) no está claro si en este campo las ONG tienen más éxito que las agencias del Estado. Aún más, hay evidencias de que la combinación entre la reorganización del Estado y el surgimiento de las ONG como implementadoras de la ayuda para el desarrollo ha contribuido a minar las organizaciones populares que representan los intereses de los pobres”⁹¹.

De la estabilización, se pasó a una desesperada discusión sobre las posibilidades que tenía el país para lograr una reactivación económica que permitiera recuperar cierta prosperidad, similar a la que habíamos tenido en la década de los setenta. No sucedió tal cosa, la segunda fase se caracterizó por el mantenimiento de la estabilidad sin crecimiento; si en algún momento éste apareció, fue lento e insuficiente para estimular la formación de capital humano y reducir drásticamente la pobreza.

Las reformas estructurales exigieron, al mismo tiempo, la necesidad de un despliegue gradual cuya continuidad debía estar garantizada; todos los esfuerzos se orientaron hacia la atracción de inversiones extranjeras como una posibilidad para abrirse hacia el mercado mundial y hacer que éste estimule el desarrollo económico.

El cambio de gobierno en 1989, dio paso a la administración de Jaime Paz Zamora, quien durante toda su campaña electoral expresó vivamente la intención de suspender los ajustes

⁹¹ ARELLANO-LOPEZ, Sonia y PETRAS, James. “La ambigua ayuda de la ONGs en Bolivia”, NUEVA SOCIEDAD, No. 131, mayo-junio de 1994, p. 72 y ss.

estructurales del 21060. Una vez en el poder, solamente dio continuidad a los ajustes con el Decreto Supremo 22407, que en sus disposiciones más relevantes intentaba alentar la expansión de la inversión extranjera para relacionarse, en particular, con las políticas de los sectores de minería e hidrocarburos; así diseñó la aparición de condiciones favorables para la privatización de empresas públicas. Como parte de su estrategia política con miras a legitimar su gobierno, se difundió una contradictoria consigna: “Bolivia país de ganadores”, no obstante eran claros los indicios de haber llegado a la cúspide de una década (la de los ochenta) realmente perdida.

En la orientación del supuesto “país de ganadores”, se crearon el Fondo de Inversión Social (FIS), que reemplazó al FSE, los fondos de desarrollo como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC)⁹².

El sector sindical, a través de la COB y diferentes organizaciones campesinas, se opusieron y todavía se oponen a los procesos de ajuste estructural; sin embargo, también están conscientes que éste es irreversible. Sus expectativas giran en torno a la estabilidad y, asimismo, exigen que los costos sociales puedan ser atendidos con un mínimo de seguridad humana. En consecuencia, tanto las élites políticas, sindicales como empresariales, asumieron que el modelo económico de mercado sepultó para siempre al Estado de bienestar y al patrón de acumulación que reinó entre 1952, después de la Revolución Nacional, y 1985.

En Bolivia, las consecuencias más importantes del ajuste que se expresan desde la aplicación del 21060, son:

- a) Un aumento del desempleo, el cual ya no es solamente cíclico, sino que asume formas de exclusión, creando barreras crecientes a la movilidad y al ascenso

⁹² En medio de la discusión sobre el alivio a la pobreza campesina, al final de la gestión presidencial de Jaime Paz, 1993, se desató un escándalo por la denuncia que hiciera el diputado del MBL, Miguel Urioste, al revelar una

social. Este es uno de los núcleos que mayor descontento causa en la población, expresándose por medio de opiniones pesimistas en la mayor parte de Encuestas de Opinión Política realizadas.

- b) Una concentración del patrimonio y del ingreso, que se traduce en una profundización de la inequidad porque solamente un 30% de la población puede ser considerada rica o con necesidades satisfechas ampliamente, mientras que el otro 70% está atrapado en la supervivencia o en la indigencia, sobre todo el campesinado y los pueblos originarios.
- c) Una adicción prácticamente morbosa al financiamiento externo, en la medida en que el ahorro interno se considera insuficiente para financiar la reconversión productiva y la reactivación económica.
- d) Una intervención y regulación directa de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), para viabilizar créditos y avales que el país necesita si pretende acceder al mercado internacional de capitales, previo cumplimiento de condiciones o metas específicas que acompañan a todas las políticas económicas desde 1985.

La meta de estos organismos internacionales se orienta más hacia la posibilidad de ayudar a que los países pobres se inserten, competitivamente, en el mercado mundial, antes que a promover la equidad social al interior de cada país y a fortalecer reformas sociales mediante políticas redistributivas de riqueza y excedentes económicos. Aquí radica una de las principales contradicciones para hacer coincidir elementos como:

- Democracia política
- Ajustes estructurales
- Justicia social
- Equidad

Con estas características, resultan muy pertinentes las siguientes interrogantes:

- ¿Por qué la estabilidad no basta para dinamizar la economía?
- ¿Cómo se explica una estabilidad tan prolongada, desde 1985 a la fecha, que carece de autosustentación?
- ¿Bajo qué condiciones se lograría elevar substancialmente el coeficiente de inversiones?
- ¿Cuáles son las condiciones imprescindibles para la concertación de un pacto social que haga sostenibles el desarrollo humano y la reforma social en Bolivia?⁹³

Al mismo tiempo, el economista Horst Grebe López afirmó que si se hace un análisis económico e histórico respecto a las tasas de crecimiento en el país, pueden advertirse cuatro fases coincidentes con ciclos de crisis y expansión:

- Una primera de crisis entre 1951 y 1958;
- Una segunda de expansión entre 1960 y 1978 con tasas de crecimiento ascendentes que alcanzaron su máximo desarrollo en el período de 1972 a 1978;
- Una tercera fase de 1978 a 1987 con una caída en la tendencia del crecimiento;
- Una última fase hasta 1997, donde la tasa de crecimiento experimenta una tendencia ascendente, lenta e incierta.

Desarrollo Campesino, Hugo Lozano Simons, actual diputado por el MIR.

⁹³ Cfr. GREBE LOPEZ, Horst. "La estabilidad sin crecimiento económico ni desarrollo humano"; en: FUNDACION MILENIO, PNUD, VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, ILDIS. **Buen gobierno para el desarrollo humano**, ILDIS, Vicepresidencia de la República, La Paz, 1994.

A partir de la aplicación de los ajustes estructurales, pueden destacarse variables motrices como la inversión, con un crecimiento de la inversión privada y un papel importante de la inversión extranjera. La inversión pública cayó en la ponderación total, la inversión privada se contrajo mientras que la inversión extranjera aumentó. Entre 1987 y 1991 la economía creció lentamente, la curva inflacionaria demostró una baja, pero la economía no se dinamizó, siendo frenada por los términos de intercambio. Por lo tanto, si bien la estabilidad financiera y monetaria son necesarias no son suficientes para lograr un crecimiento mayor; finalmente, Grebe también considera que el aumento desenfrenado de la inversión privada extranjera puede provocar un excesivo grado de extranjerización de la economía nacional, peligroso para el ámbito de las decisiones políticas internas⁹⁴.

El ex Ministro de Finanzas durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, y después Vicepresidente de la República en el gobierno de Banzer, Jorge Quiroga, afirmó en diversas declaraciones que si se busca obtener buenos resultados en materia de alivio a la pobreza y una respuesta eficaz para los costos sociales del ajuste, la economía nacional debería crecer entre 4 y 5% anual. Para llegar a un crecimiento entre 5 y 6%, es imprescindible una inversión que alcance a, por lo menos 18 ó 20% del Producto Interno Bruto (PIB) lo cual, en términos absolutos, significa alrededor de 1,300 millones de dólares anuales y en forma sostenida para despegar de manera clara y notable; paralelamente, esto también implica una inversión pública de, aproximadamente 8% en infraestructura y desarrollo humano y 12% de inversión privada concentrada en servicios y producción.

⁹⁴ Cfr. FUNDACION MILENIO. **Diálogos de Milenio No. 66**, "Análisis del crecimiento económico y de las perspectivas de la economía nacional en 1998", La Paz, 22 de diciembre de 1997, mimeo.

Sin embargo, actualmente la inversión total del PIB no supera a los 800 millones de dólares, razón por la que nuestra tasa de crecimiento anual fluctúa generalmente entre 3,6 y 3,8%⁹⁵.

La desregulación de los mercados para apoyar el dinamismo empresarial, produjo la reducción de las funciones del Estado como productor de bienes y servicios, abonando el terreno económico para la privatización. En consecuencia, las acciones dirigidas a enfrentar la pobreza, en la visión liberal no dependen de una intervención estatal en la distribución del ingreso, sino del efecto rebalse que, supuestamente, debería ocurrir al reestructurarse el aparato productivo y ejecutarse un crecimiento económico sostenido. Asimismo, las políticas sociales fruto del ajuste son entendidas como acciones focalizadas, colocándose la inversión social entre los sectores más vulnerables que, además, arrastran necesidades básicas insatisfechas estructuralmente.

Dejando atrás las funciones asistencialista y benefactora del Estado

Luego de la victoria económica y política del 21060, se ejecutaron acciones destinadas a templar los impactos sociales provenientes de las medidas de estabilización. De esta manera, el gobierno de Paz Estenssoro difundió los argumentos y el convencimiento de que el nuevo rol estatal en el ámbito social había cambiado radicalmente, pues dejaba de responsabilizarse por el financiamiento de pulperías mineras, por sistemas de seguridad social cuyos costos y déficits eran pagados por el Estado a como dé lugar, y por acciones en las que todo el país esperaba de aquél medidas de carácter filantrópico para sobrevivir o para trabajar.

⁹⁵ Declaraciones vertidas en PRESENCIA, La Paz, 27 de septiembre de 1995.

Desde 1985 se establece que las políticas sociales de compensación deben estar focalizadas; es decir, apuntar su atención solamente a los grupos más pobres de la población en un momento determinado, a través de programas que sean funcionales al proceso de reforma estructural. Por lo tanto, el Estado prestaría asistencia, simplemente en las áreas de salud y educación para que la población beneficiaria se incorpore, productivamente, en la economía de mercado. Si se lograba esta meta, la supervivencia correría, después, por cuenta y riesgo de cada persona, considerada como individuo que se lanza al mercado en igualdad de condiciones y oportunidades.

La realidad fue totalmente diferente. De acuerdo con estimaciones realizadas por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el 97 % de la población campesina en Bolivia está sumida en la pobreza absoluta. Nuestra pobreza es un fenómeno estrictamente rural⁹⁶. A su vez, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) afirma, según estudios, que el 70% de la población nacional no está, ni en condiciones de adaptarse al mercado de trabajo flexibilizado y competitivo, ni tampoco posee igualdad de oportunidades, sobre todo cuando se habla de encontrar alternativas para la cualificación profesional o técnica.

El precio que debió pagar nuestro país – en términos de costo social – para viabilizar y hacer exitosos los ajustes económicos, fue asumir, reforzar y presenciar cotidianamente que la economía de mercado tiende a reproducir una ciudadanía desechable. Para Bolivia fue importante recuperar la democracia y establecer condiciones de participación o ciudadanía políticas, pero los hechos demostraron que los ajustes estructurales podían, fácilmente, pasar por alto tales condiciones políticas subordinándolo todo a las premisas del mercado.

⁹⁶ PRESENCIA, La Paz, 18 de noviembre de 1992. Consultar también: CALDERON, Fernando y LASERNA, Roberto. **La fuerza de la equidad. El desarrollo humano en Bolivia**, Colección CERES de Ciencias Sociales, Los Amigos del Libro, La Paz, 1997.

Como parte de las políticas sociales, Paz Estenssoro creó el Fondo Social de Emergencia (FSE) en 1986, cuyo carácter compensatorio consistió en que los programas de alivio, financiados mediante donaciones y créditos externos concesionales, debían cumplir un período de ejecución no mayor a tres años, contribuyendo a paliar la pobreza de las regiones más afectadas. En consecuencia, el FSE se planteó una acción asistencial focalizada, discrecional y funcional a la Nueva Política Económica.

A partir de la experiencia institucional del FSE, se creó más tarde el Fondo de Inversión Social (FIS) al calor del D.S. 22407 en 1989, con la finalidad de continuar asignando financiamiento para implementar proyectos de infraestructura y servicio en áreas como atención primaria de salud, saneamiento básico y educación primaria. Se fundaron también el Consejo Nacional de Política Social (CONAPSO), como la instancia encargada de programar los recursos para que el Estado invierta en el área social, y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO) como el brazo técnico y especializado para el diagnóstico y la formulación de políticas de intervención.

Muchos analistas criticaron la falta de agilidad, excesiva burocratización y costosos gastos administrativos del FIS. “Si bien los montos de los proyectos aprobados [fueron] mucho mayores, los montos totales desembolsados llegaron a 12 millones de dólares (hasta octubre de 1992). Uno de los principales problemas que explica esta diferencia [fue] el lapso que [transcurrió] entre el momento de aprobación de un proyecto y el de desembolso efectivo”⁹⁷. Al mismo tiempo, debe llamarse la atención respecto a que durante los tres primeros años del gobierno de Jaime Paz (1989-1992), la capacidad de gasto en el sector social representó menos del 50% programado.

⁹⁷ VAN NIEKERK, Nico, *ob. cit.*, p. 23.

En la gestión gubernamental de Paz Zamora (1989-1993), surgieron los primeros problemas relacionados con las políticas sociales focalizadas. A partir de tal focalización, la inversión social solamente se concentra en aspectos específicos y en un momento determinado porque después se evapora; por ejemplo, al adoptarse acciones en la educación primaria, es posible que cuando la población vulnerable –en este caso los niños- ingrese a otra fase de su ciclo vital, deje de contar con las facilidades para proseguir con su educación, quedando igualmente incapacitada para incorporarse adecuadamente al mercado laboral, cada vez más competitivo; por lo tanto, “(...) la inversión social en capital humano generaría una potencialidad que puede o no efectivizarse en el futuro”⁹⁸. La *incertidumbre* carcome el núcleo de las políticas sociales focalizadas, pues no existe continuidad ni acompañamiento hasta verificar que la inversión social realizada en un sector pobre haya cumplido con las expectativas en el largo plazo.

Además, dicha focalización exige decidir si debe privilegiarse la lucha contra la pobreza relativa o, por el contrario, el alivio a la pobreza absoluta. En última instancia, todo depende de una decisión política o técnica y, finalmente, es la coyuntura que determina aquella decisión política. Por lo tanto, las estrategias de reforma social representan, una vez más, solamente iniciativas precautorias para contrarrestar descontentos y estabilizar gobiernos.

De acuerdo con los principios doctrinarios liberales en materia de políticas sociales, la inversión social debería capitalizarse en el tiempo, a través del surgimiento de mayores y mejores capacidades productivas para la población; de otro modo, solamente se estaría incurriendo en meros gastos sociales. Justamente esto es lo que pasó, las medidas bolivianas de

⁹⁸ EGUINO, Huáscar. “Notas sobre la inversión social en el marco de la aplicación del Programa de Ajuste Estructural”; Serie Avances de Investigación, CEDLA, La Paz, septiembre de 1993 (mimeo.), p.5.

alivio a la pobreza con carácter focalizado, aún en rígidas condiciones liberales, tendieron a traducirse en el fomento de mayores niveles de consumo, como por ejemplo el gasto en subsidios o simplemente en saneamiento básico. Dicho gasto social, por otra parte, también buscaba satisfacer ciertas necesidades sólo en cierto momento y de acuerdo a consideraciones que estén *subordinadas* a las políticas económicas.

Desde 1989, los efectos de las políticas sociales focalizadas presentan una manifiesta incapacidad para capitalizarse efectivamente. Además, la mayor cantidad de recursos provenientes de la inversión social fue orientada hacia saneamiento básico, mientras que un porcentaje ínfimo se destinó al sector educación, ámbito donde debería proyectarse la formación de nuevo capital humano que enriquezca a la sociedad y a la economía.

Entre 1987 y 1990, la inversión social *per cápita* en Bolivia fue de \$u.s.12.14 dólares; para 1991 había caído a \$u.s. 8.27. En el período que va de 1987 a 1991, llamado por algunos economistas como el intervalo de estabilidad económica con estancamiento e inseguridad sobre el futuro, la inversión social representó el 18.3% de la inversión pública total. Durante la gestión 1992, subió relativamente a 21%. Este mismo año, del total del presupuesto ejecutado en la inversión social, 44% se canalizó hacia saneamiento básico; 25% se trasladó a salud y seguridad social; 21% fue destinado a urbanismo y vivienda, mientras que solamente el 9,8% se orientó a educación⁹⁹. Al mismo tiempo, debe resaltarse que en el lapso de 1987 a 1992, existe un bajo nivel de ejecución presupuestaria en la inversión pública, debido a la enorme incapacidad gerencial y al retraso en algunos planes de privatización programados por el gobierno, lo cual dio lugar a que la administración de Paz Zamora incumpliera con una serie de compromisos para atenuar la deuda social del Estado boliviano.

⁹⁹ Cfr. EGUINO, Huáscar, ob. cit. P. 6 y ss.

Con motivo de su participación en la *Conferencia Internacional sobre Desarrollo Social, Democracia y Crecimiento Económico*, el ex Ministro de Planeamiento y Coordinación de Paz Zamora, Samuel Doria Medina, defendió tajantemente los ajustes y la economía de mercado porque, en su opinión, “(...) es un miopía pensar que el modelo de libre mercado genere pobreza, [pues ésta] se ha acumulado desde hace muchos años (...). Se precisa de una política decidida del Estado para atacar y así reducir los niveles de extrema pobreza. Esta política debe dedicarse a levantar las barreras que impiden a sectores importantes de la población incorporarse a la economía de mercado”¹⁰⁰.

En consecuencia, toda acción de alivio, en el fondo, se convierte en una táctica política de consolidación de la cultura liberal, tanto en el plano económico, como en el social y político. La trayectoria que siguieron las políticas sociales desde agosto de 1985, hasta las acciones desenvueltas en el marco de la Estrategia Social durante el gobierno de Paz Zamora, muestran dos fases:

- La primera, claramente caracterizada por los esfuerzos para reducir el impacto sorpresivo y rígido de la NPE, a través de programas compensatorios.
- La segunda fase estuvo determinada por la concentración del gasto social en los sectores identificados como más necesitados y por el apuntalamiento de la estabilización.

Desde el punto de vista social, el resultado inmediato – conscientemente buscado – fue lograr que la sociedad civil asuma para sí todos los costos y sacrificios del ajuste. Las reformas sociales estimularon a que la población se ocupe de su propia reconversión laboral y encuentre sus propias opciones de manera autónoma. Más allá de los indicadores económicos, es en las

¹⁰⁰ Declaración de Samuel Doria Medina citada en: VAN NIEKERK, ob. cit., p. 18.

políticas sociales donde más se aprecia el contenido liberal del Programa de Ajuste Estructural en Bolivia. Los pilares de aquéllas se asientan, de manera esquemática, en lo siguiente:

- a) La liberalización de la economía y el abandono estatal de las viejas prestaciones sociales de hace tres décadas es algo irrefutable e inmodificable.
- b) En el largo plazo, las políticas de focalización y alivio a la pobreza tienden a construir una cultura individualista donde los mismos actores sociales pobres y los grupos con desventajas asumen de forma directa los problemas de supervivencia, inserción y adaptación a las condiciones competitivas del mercado.
- c) Debe contribuirse a una reforma del Estado y a una reforma laboral, cuyas acciones tiendan a evitar que el sindicalismo articule políticamente a sectores sociales radicales.
- d) Todos los individuos, no sólo pobres, son actores de su propio desarrollo, sin otro deseo que el interés de llevar adelante sus propias capacidades. De esta manera se elimina la intervención de fuerzas extrañas e ineficientes como las del Estado Benefactor, el cual ya no es capaz de producir riqueza y gobernar la economía porque sus funciones se han reducido a la creación de marcos regulatorios globales, y a la promoción de una gran variedad de formas de cooperación que vayan más allá de la intervención estatal.

De esta manera, las políticas sociales de alivio a la pobreza, funcionales a las estrategias económicas y a las políticas de gobernabilidad, terminaron por justificar que el viejo Estado del 52, destruido durante la UDP, ya era, definitivamente, inútil.

El balance político

Existen palpables indicios para afirmar que en Bolivia, el ajuste económico sustituyó la política por el mercado como instancia máxima de regulación social. De hecho, el actual avance del mercado significa fortalecer el ámbito de la coordinación entre privados, recortándose el espacio público. Esto hace que el Estado se desligue de cualquier compromiso social y que la política también abdique de sus responsabilidades en beneficio del interés colectivo o de una mayor equidad generalizada.

La gran mayoría de las decisiones políticas en materia de desarrollo humano o reforma social, están delimitadas por los equilibrios macroeconómicos que se han convertido en verdaderos principios normativos que fijan límites estrictos a la intervención política.

Por otra parte, la política trata de equipararse y confundirse, cada vez más, con la gestión pública. Así nace la importancia y el prestigio social o político que adquieren los técnicos en políticas sociales durante estos últimos diez años. Es decir, la política estatal terminó convirtiéndose en una gestión competitiva similar a la que tiene una gran empresa de cara a los desafíos imprevistos, y donde importa más el corto plazo que los objetivos de largo alcance.

El inmediatismo en política social y económica es el nuevo tatuaje para las gestiones de gobierno en circunstancias neoliberales, y viene de aquí la imposibilidad de pensar en un nuevo orden social al margen de, o contra las, estructuras de mercado.

Cuando se trata de discutir problemas de reforma social y seguridad humana, los asesores del ex Ministerio de Desarrollo Humano o de las Secretarías de Inversión Social y Pública, tienden a percibirse a sí mismos como administradores (managers) que negocian sus ofertas con

los mejores postores sociales a fin de legitimar gobiernos y controlar los conflictos provenientes de las situaciones de pobreza, a cambio de recibir más cuotas de poder en el Estado.

Estas concepciones se clavan como dardos en la agenda de los gestores de política social. Sin embargo, todavía está pendiente cómo es posible compatibilizar la integración a la economía mundial, generadora de persistentes desigualdades sociales, con la equidad y una seguridad humana armónica e integral.

Las políticas sociales quedan sometidas a decisiones económicas y, a su vez, fomentan la percepción de que los gobiernos están haciendo “algo” para que la aplicación del PAE sea menos dolorosa entre los grupos pobres. De otro modo no se explica cómo algunos efectos de las políticas macroeconómicas orientadas hacia el mercado como la dependencia, la precariedad de las condiciones de vida, el desempleo, la inequidad y la impotencia de grupos sociales marginales convivan, bajo una relativa tranquilidad, con la lógica de expectativas crecientes del desarrollo humano y la reforma social, cuyos objetivos buscan la justicia social, la seguridad familiar, personal, educacional, alimentaria y laboral; es decir, un conjunto de bienes que son el núcleo de la política social actual.

Los conflictos que ocasionan pobreza e inequidades sociales, promueven intensos debates sobre cómo evitar que el régimen político democrático se resquebraje. En democracia, la pobreza cuestiona los alcances e insuficiencias que el Estado tiene respecto de la ampliación o profundización de la ciudadanía, entendida como el conjunto de derechos civiles, políticos y éticos para formar parte de una comunidad donde se respete la humanidad de hombres y mujeres, reconociéndoseles un estatus de seres dignos, capaces de tener satisfechas sus necesidades materiales y con un apreciable margen de igualdad de oportunidades y derecho a la participación política para decidir sobre su destino como individuos y como parte de una sociedad.

La pobreza no solamente plantea problemas al estilo de desarrollo liberal, sino también al tipo de democracia que se está construyendo en la práctica, donde las carestías y privaciones se convierten en deficiencias de ciudadanía. El descontento político con la democracia boliviana y el tipo de ciudadanía que tenemos, se expresa en varias encuestas de opinión y cultura políticas realizadas desde 1990, donde existe una creciente interpelación de la sociedad hacia el sistema político y a la crisis de pobreza que sufre el país.

Por ejemplo, el Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), dependiente de la Vicepresidencia de la República, junto con el PNUD y el ILDIS realizaron una consulta nacional sobre la seguridad humana en Bolivia entre junio y agosto de 1995¹⁰¹. Dicha encuesta mostraba que 79% percibía que el país, después de diez años de ajuste estructural, estaba igual o peor. Un elevado porcentaje, 44%, declaraba exclusivamente que Bolivia estaba mucho peor. Asimismo, cuando se pidió a los entrevistados que comparen la situación actual con 1985, el 75% entendía que el gobierno (de Sánchez de Lozada, 1996) estaba igual o peor que en aquel año 85. “Es posible que, al remitirse a 1985, la gente no [pensaba] en la UDP, sino únicamente en la implementación de la Nueva Política Económica. A su vez, también [fue] perceptible que las respuestas de las personas [tomaban] en consideración fundamentalmente la *situación económica*”¹⁰². Otro elevado porcentaje juzgaba críticamente el modelo económico afirmando, en un 89%, que la situación respecto a los empleos e ingresos era igual o peor en los últimos 10 años de democracia. La encuesta expresa también con preocupación, que 54% de los entrevistados percibían a las categorías *igual* o *peor*, sencillamente como *peores*.

¹⁰¹ PRONAGOB-PNUD-ILDIS. **La seguridad humana en Bolivia. Percepciones políticas, sociales y económicas de los bolivianos de hoy**, PRONAGOB-PNUD-ILDIS, La Paz, 1996.

¹⁰² Ibidem., ob. cit., p. 43.

Los redactores del documento afirmaron que “una primera conclusión plantea, por un lado, el reconocimiento de los límites y frustraciones que del país, de sus instituciones y sus personas tiene la población. Y, por otro, dadas estas tendencias, una suerte de sentimiento arraigado de fatalismo acerca de las posibilidades del país”¹⁰³. Así pues, la “democracia” es y fue valorada en función de sus resultados objetivos.

Todos estos datos contradicen aquellas afirmaciones en las que, supuestamente, todavía no es posible tener claridad sobre el impacto de la nueva política económica en los grupos pobres, no sólo por falta de información científica y eficaz, sino también por la pugna entre diferentes tendencias ideológicas e intereses políticos dentro de la sociedad boliviana. Por el contrario, las encuestas dan lugar a pensar que en democracia, la pobreza y el desarrollo plantean serios problemas de ciudadanía, dignidad, integración social y equidad, puesto que, paralelamente al pesimismo con que los bolivianos juzgan la democracia, también se considera que las estructuras políticas son fuertemente excluyentes. Después de 15 años de ajuste estructural y del ensayo de políticas sociales compensatorias con raíz liberal, el sistema democrático está enfrentado a una insoportable convivencia entre democracia y mercado, entre seguridad humana y ajustes económicos.

También es importante aclarar que cuando se realiza el cálculo de la pobreza, surgen miradas críticas respecto a los procedimientos metodológicos. Un primer problema se refiere al cálculo del ingreso o del consumo en términos monetarios, lo cual tiende a excluir múltiples elementos no monetarios en el bienestar individual o familiar. En la medida en que miles de personas participan en una economía no monetaria, por ejemplo, campesinos de subsistencia o trabajadores del sector informal de la economía urbana, resulta difícil fijar ingresos monetarios

¹⁰³ Ibidem., ob. cit., p. 44.

en forma sistemática. Los cálculos de la pobreza en términos de una equis cantidad de ingreso mensual o su equivalente, con frecuencia se reducen a juegos estadísticos que están alejados de la realidad social.

Estos problemas metodológicos no son sólo un obstáculo para los responsables de las cuentas nacionales o para los expertos en estadística, sino que se convierten en problemas políticos porque los pobres o grupos de escasos recursos carecen de posibilidades reales para mejorar su calidad de vida y, al mismo tiempo, tampoco tienen representación y poder político. De ahí el malestar y el profundo fatalismo de las personas manifestado en las encuestas. Por lo tanto, la pobreza puede definirse como una condición de discriminación que las estadísticas, muestreos o matrices de cálculo no exhiben. En muchos casos, sobre todo en los ámbitos del campesinado y los pueblos originarios, la exclusión es económica y política porque existe una total ausencia de ciudadanía democrática con derechos equitativos.

Los conflictos ocasionados por la cooperación internacional: la sociedad dependiente

Dentro de los esfuerzos por llevar adelante las reformas sociales de alivio a la pobreza, los diferentes gobiernos desde 1985 recurrieron a la cooperación internacional como una fuente de ingresos, tanto para equilibrar la balanza de pagos, como para cubrir otros déficits en la inversión pública. Sin embargo, estas medidas, no solamente aumentaron una fuerte dosis de dependencia hacia países amigos y organismos internacionales, sino que tendieron a socavar la eficiencia para superar efectivamente la pobreza. Muchas organizaciones estatales y no gubernamentales, se valen de la cooperación extranjera para engrosar las filas de una burocracia que tejió sus propios intereses alrededor de la deuda social.

Gerardo Berthin, quien fuera director de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad Católica Boliviana (UCB), hace una crítica muy precisa sobre la adicción del país a la cooperación internacional. En su opinión, Bolivia no podría superar su deuda social para vencer a la pobreza porque se estaría convirtiendo en una sociedad asistida y dependiente, caracterizada por una excesiva pobreza estructural, desnutrición alimentaria y de conocimientos, bajos niveles de cobertura de elementos indispensables de supervivencia y muy poco acceso a necesidades estratégicas como educación, crédito, ingreso y tierras.

En una sociedad asistida, el Estado incide negativa y regresivamente en la capacidad de distribución de la riqueza, creando una falsa dependencia en exportaciones primarias que tienen poco valor agregado y tecnológico para un mundo competitivo. “Finalmente, las sociedades asistidas tienden a crear una dependencia viciosa hacia recursos externos o ayuda internacional; la cual (...) debilita y atrofia las fortalezas de una sociedad y acentúa sus debilidades”¹⁰⁴. La cooperación internacional se convierte, entonces, en un arma de doble filo: por un lado, busca poner en práctica una serie de programas orientados a las reformas sociales pero, por otro, evita que el país pueda salir adelante por sí mismo.

Según Berthin, Bolivia es el segundo país en toda América Latina que recibe el monto más alto en materia de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). Basándonos en el monto *per cápita*, nuestro país ocupa el tercer lugar en todo el continente después de Haití y Nicaragua; “(...) el monto de AOD que recibe Bolivia, representa aproximadamente entre el 11 y el 16% del PIB boliviano; [por lo tanto], la AOD se ha convertido en la *principal industria boliviana* de los últimos tiempos, superando inclusive en valor a las principales exportaciones del país y a la

¹⁰⁴ BERTHIN SILES, Gerardo. “Repensando y reflexionando sobre el desarrollo de Bolivia a 18 meses del siglo XXI”, artículo inédito, p. 1. Una versión resumida se publicó en un artículo del mismo autor: “La industria de hacer dinero”, VENTANA, LA RAZON, La Paz, 5 de julio de 1998.

producción sectorial (...)”¹⁰⁵. Así se logró generar una estabilidad macroeconómica para cubrir dos brechas importantes: la brecha entre inversión y ahorro interno, así como la brecha comercial de la balanza de pagos; adicionalmente, permitió cubrir el déficit del presupuesto en el sector público, generando algunas fuentes de empleo.

Sin embargo, es importante aclarar que la ayuda internacional está compuesta en su mayoría por préstamos que el país adquiere a mediano y largo plazo. Así apuesta a que en un futuro próximo se tendrá la capacidad económica para responder a dichos compromisos financieros. Solamente un porcentaje ínfimo corresponde a donaciones no reembolsables porque el grueso de los montos provenientes de la cooperación se acumula en nuestro portafolio en calidad de deuda externa.

El resultado inmediato de estas influencias es el siguiente. La asistencia para el desarrollo por sí misma no contribuye a erradicar la pobreza y a promover el desarrollo. La evidencia muestra que son las sociedades quienes generan sus propias agendas de políticas públicas sobre la base de la demanda local, y no aquellas sociedades que someten sus políticas públicas a la voluntad e injerencia de la cooperación internacional como lo que sucede actualmente en Bolivia.

Esta situación es uno de los grandes obstáculos escondidos que nos impide salir del circuito de la pobreza, además de que tampoco podemos discutir abiertamente este problema para criticarlo porque ha crecido una burocracia enorme de clase media profesional que vive de la pobreza y la cooperación para el desarrollo en Bolivia.

Por lo tanto, la cooperación internacional, que vino al país con mayor convicción a partir de los efectos sociales del ajuste en 1985, jugó un papel importante para dinamizar el

¹⁰⁵ Ibidem, art. cit., p. 2.

crecimiento económico pero, paralelamente, el Estado demostró no tener fortalecidos sus mecanismos institucionales para mejorar la distribución de recursos provenientes de la ayuda externa. Sin muchas vueltas, Berthin asegura que cada año, millones de ayuda oficial para el desarrollo se insertan en un vacío institucional que muestra muy poca capacidad y agilidad para utilizar estos recursos de una manera más óptima y efectiva. Sólo cabe preguntarse si, efectivamente, la ayuda externa llega a los que más necesitan o se queda como fondos extra presupuestarios en niveles burocráticos y centralizados del Estado. Las tendencias estadísticas nos muestran claramente que la mayoría de los recursos se destinan a actividades operativas y no productivas.

La pobreza conformó un entramado burocrático con conexiones importantes hacia la cooperación internacional, al mismo tiempo que desarrolló intereses que se mueven y viven a partir de la asistencia a los pobres. Estos intereses instrumentalizan las políticas sociales y de desarrollo humano, exagerando la situación de crisis y recortando la capacidad del Estado y de los propios actores sociales para no superar sus limitaciones.

Una de las principales diferencias entre los países desarrollados y los países pobres, es una capacidad desigual para generar ahorro, transformarlo en inversión y convertirse en una sociedad autónoma no subordinada a la ayuda internacional en magnitudes enormes de hoy día en Bolivia.

Otra de las diferencias entre sociedades asistidas y sociedades autónomas, parece descansar en los gastos que se destinan a la educación y formación de capital humano. En este rubro, la ayuda para el desarrollo que Bolivia recibe tiene importantes montos orientados hacia la Reforma Educativa; sin embargo, comparativamente, el monto para la educación es mucho

menor que lo utilizado para contrarrestar el déficit fiscal y las brechas económicas que se generan de gobierno a gobierno.

La llegada del desarrollo humano

Las políticas sociales y cualquier discusión sobre la pobreza, adquirieron una nueva identidad propositiva durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) quien mantuvo la orientación de libre mercado en la economía y ensayó un mecanismo novedoso de inversión extranjera, por intermedio de la capitalización de empresas estatales.

Al asumir el mando, Sánchez de Lozada reestructuró el Poder Ejecutivo en el que, al margen de los despachos que tradicionalmente apoyaban la conducción política del gobierno, modificó los sectores económico y social, para crear tres “superministerios”: Desarrollo Económico, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Humano.

El 12 de octubre de 1993 fue creado oficialmente el Ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de nueve secretarías nacionales: educación, salud, asuntos urbanos, desarrollo provincial y rural, asuntos étnicos, de género y generacionales, cultura y deporte, inversión social y, finalmente, instituciones ejecutoras. Tenía, a su vez, una secretaría general y una asesoría, responsable de formular, coordinar y controlar las estrategias y políticas de desarrollo humano.

Este armazón institucional fue presentado ante el Banco Mundial en noviembre de 1993. El objetivo central del nuevo ministerio, fue lograr que todas las personas dispongan de la ampliación de oportunidades y opciones, sobre todo en lo que se refiere a tener una vida larga, saludable, poder acceder a los conocimientos y códigos de la modernidad, así como disponer de

un ingreso estable que garantice una vida digna libre de carestías reñidas con los derechos humanos más elementales.

Horst Grebe, su primer asesor general, afirmaba que “la gestión del desarrollo humano fue concebida desde sus inicios en términos de descentralización (...)”¹⁰⁶, porque así se buscaba vincular los asuntos de política social, con las Prefecturas, planificación regional y ejecución de obras de infraestructura. A partir de 1993, el núcleo doctrinario de las políticas de desarrollo humano consideraba que la economía debía estar al servicio del bienestar social y de la seguridad humana.

Sin embargo, la administración de Sánchez de Lozada también fue fiel a un enfoque liberal cuando definía que el desarrollo humano necesitaba de un modelo de desarrollo económico que rompa con un sistema paternalista y deseche la posibilidad de que el Estado boliviano asuma la responsabilidad total para resolver los problemas del individuo.

Como bien lo atestiguan los documentos oficiales del Ministerio de Capitalización y Desarrollo Económico durante el gobierno de Sánchez de Lozada, en este enfoque existe una correlación entre dos objetivos:

- Integrarse al sistema de librecambio y al mercado; y
- Compatibilizar dichos esfuerzos con aquellos donde el único camino para salir de la pobreza sea el que pase por el trabajo, la familia y la fe. El Estado no cumplirá ningún papel preponderante al respecto.

Simultáneamente, las instancias públicas debían dejar el paso libre para el accionar de las agencias privadas y la responsabilidad directa de los propios actores sociales respecto a sus

¹⁰⁶ GREBE LOPEZ, Horst. **La propuesta del desarrollo humano en Bolivia**, Fundación Milenio, Serie: Estudios de Milenio No. 7, La Paz, 1997, p. 16 y ss.

condiciones de vida. Esto implica que cada cual logre el desarrollo de sus capacidades potenciales y asuma la responsabilidad de su propio destino.

Las cinco áreas operativas sobre las que funcionó el nuevo ministerio fueron:

- 1) La participación e intervención en los ámbitos político, social y económico
- 2) El acceso a servicios básicos
- 3) La gestión social, reconociendo la necesidad de instituciones eficientes para aplicar las políticas sociales
- 4) La supuesta eliminación de sesgos; es decir, tratar de suprimir la discriminación
- 5) El acceso a los mercados de todo tipo donde se reivindicaba nuevamente un enfoque liberal.

De esta manera se intentó transitar de las políticas compensatorias, al desarrollo a escala humana con fuertes argumentos de corte ético que intentaban minimizar el impacto de los ajustes estructurales en su etapa ampliada.

Si bien se incorporaba una perspectiva más integral que articule diferentes niveles, en criterio de Fernando Illanes, ex Ministro de Desarrollo Económico del MNR entre 1993 y 1995, también se trataba de devolver al mercado los recursos del desarrollo para evitar el despilfarro administrativo que creaba dependencia en los beneficiarios. Aunque el desarrollo humano tomaba en cuenta valores morales, durante el gobierno de Sánchez de Lozada, el peso de toda la estrategia tendía a dar prioridad a un espíritu de empresa que hiciera eficientes las inversiones en cualquier rubro. El discurso sobre desarrollo humano era más proclive a otorgar una primacía de la sociedad civil y de sus derechos por encima del Estado, en una posición liberal donde la lógica del mercado era incuestionable, se llamaba la atención sobre sus efectos perversos a través de los valores morales propugnados por funcionarios internacionales, y los esfuerzos políticos para ampliar la legitimidad del nuevo gobierno.

En la práctica, el Ministerio de Desarrollo Humano descubrió que todas las instituciones que luchaban contra la pobreza en Bolivia entre 1989 y 1993 (el FIS, el FNDR o el FDC) habían ingresado en una crisis de efectividad. Si bien se suponía que todas estas instituciones actuaban como instrumentos de canalización de recursos, mientras que los Ministerios formulaban las políticas de cada sector, aquellas instituciones, al contar en los hechos con más recursos que los Ministerios, estaban usurpando de éstos una serie de funciones normativas y políticas, llegando a generar conflictos con los Ministerios, debilitándolos. La falta de coordinación conducía a mucha dispersión de objetivos, reduciendo el impacto de sus acciones. Sobre todo, fue muy notoria la ineficiencia del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que llegó a ejecutar dos o más proyectos de igual o similar naturaleza.

Al incursionar en campos de diversa índole, las instituciones ejecutoras habían ampliado su estructura administrativa al punto de inflar una burocracia y un costo de administración excesivamente alto. Así había nacido un estrato de técnicos y profesionales que administraban la pobreza a partir de restringidos intereses burocráticos.

El Ministerio de Desarrollo Humano trató de solucionar estos problemas porque asumía un estilo de desarrollo que, en teoría, no sólo iba a generar crecimiento económico, sino, además, intentaría una distribución más equitativa de los beneficios del modelo, regenerar el medio ambiente y capacitar a las personas en lugar de marginarlas. Sin embargo, quienes evaluaron las políticas sociales al final de la gestión de Sánchez de Lozada en 1997, consideraban que no se logró un equilibrio entre el ministerio de Desarrollo Humano y sus relaciones con el área económico-financiera del gobierno, lo que representaba uno de los requisitos básicos para su desempeño como una auténtica instancia de coordinación del desarrollo y seguridad humana.

A consecuencia de la renovación de ministros y demás funcionarios de jerarquía, fruto de la entrega de cuotas de poder o clientelismo estatal, se fue transfiriendo competencias y funciones dentro del propio Ministerio de Desarrollo Humano, las cuales debilitaron el enfoque integral original de una entidad centralizada para la gestión de las políticas sociales. Por ejemplo, se suprimieron las secretarías encargadas de la planificación y la gestión integrada del gasto y la inversión sociales. Al concluir el gobierno de Sánchez de Lozada se hizo desaparecer la Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO). Durante todo su gobierno hizo falta una instancia de coordinación global de las políticas económico-sociales. Por otra parte, si bien un rasgo político del desarrollo humano es la redistribución del ingreso, en la práctica fue también algo difícil de conseguir debido a la preeminencia de las políticas económicas de mercado.

De forma paralela, el gobierno puso en marcha otro tipo de reformas sociopolíticas como la Ley 1565 de Reforma Educativa, con el objetivo de construir un capital humano que, a mediano y largo plazo, tenga incidencia en la productividad y en la renovación tecnológica de Bolivia. Así, el desarrollo humano trataba de vincular los cambios en la estructura educativa, sobre todo primaria, con un impulso a la participación política a través de la Ley 1551 de Participación Popular, sancionada el 20 de abril de 1994.

La Participación Popular establecía las bases para “(...) una distribución racional y coordinada, que permita la gestión unificada de las políticas sociales, determinando la distribución per cápita de los recursos de coparticipación con miras a corregir la gran desigualdad en la asignación pasada de recursos de gasto e inversión”¹⁰⁷.

¹⁰⁷ GREBE LOPREZ, Horst. **La propuesta de desarrollo humano en Bolivia**, ob. cit., p. 18. Sobre los problemas de la Reforma Educativa como política de Estado sin consenso, consultar: GAMBOA, Franco. **Contra viento y marea, tras las huellas de la Reforma Educativa en Bolivia**, CEDOIN, La Paz, 1998.

Finalmente, las políticas de desarrollo humano fueron colocadas en un segundo plano, debido a la decisión gubernamental de incorporar a la inversión privada extranjera, por intermedio de la Ley 1544 de Capitalización, del 21 de mayo de 1994. Este fue el núcleo de una posible reconversión productiva durante la gestión del MNR entre 1993 y 1997, porque se ponía a la venta las principales empresas estatales estratégicas. El Estado gozaba, entonces, de un mecanismo novedoso que consistía en aportar, a manera de capital inicial, con los activos de dichas empresas, a fin de invitar a socios estratégicos privados para que aporten con montos frescos de capital. A su vez, la parte correspondiente al Estado boliviano debía distribuirse bajo la forma de acciones a toda la población boliviana mayor de 21 años, utilizando un almacén específico: los Fondos de Pensiones, administrados también por empresas privadas.

Una evaluación crítica

Una vez más, a pesar de que la administración de Sánchez de Lozada buscó conjugar políticas económicas, deuda social y apoyo al desarrollo humano, pudo constatarse que ninguna política social es ajena a la constitución de una sociedad, de manera que el desarrollo humano en Bolivia tuvo que enfrentarse con la pobreza estructural del país. Al mismo tiempo, las políticas sociales tampoco fueron ajenas a la idea que buscaba, con un sentido liberal, otorgar mayor capacidad a los actores sociales para que ellos sean agentes de su propio desarrollo. Esto significa que llegó un momento en que la gestión de las reformas sociales debía armonizar con una cultura liberal que reconociera la autonomía de los individuos y fortaleciera sus facultades para contrarrestar su pobreza, dejando atrás, sin embargo, la intervención estatal en materia de compensaciones y subsidios.

La fuerza con que se robusteció la discusión sobre políticas sociales a partir del desarrollo humano, no pudo combatir los efectos negativos y disgregadores del ajuste estructural, y tampoco pudo plantear la posibilidad de construir otra sociedad que rompa con las visiones liberales en la gestión económica. En todo caso, el desarrollo humano volvió a demandar un sentido sacrificial en los sectores pobres.

De acuerdo con una encuesta realizada entre junio y julio de 1997 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre percepciones respecto a educación y desarrollo humano en 311 secciones municipales de Bolivia, “(...) un tercio de los municipios indicaron que los pobres no se están beneficiando económicamente de sus municipios [a pesar de los alcances de la Participación Popular]; en este caso los pobres son por lo general gente con poca educación, campesinos de comunidades alejadas que no son propietarios de tierras, sectores indígenas que se encuentran aislados y los migrantes y jornaleros”¹⁰⁸.

En la misma encuesta, cuando se preguntó qué sectores sociales o quiénes se estarían beneficiando económicamente fuera del municipio, los resultados fueron:

- a) El 75% de los municipios afirmó que las élites son quienes más se benefician. En este grupo incluía a políticos, grandes empresarios, agroindustriales, banqueros e industriales exportadores.
- b) El 9% de los municipios mencionó a la clase emergente: comerciantes y transportistas.
- c) El 7% nombró a la clase media: profesionales, maestros y empleados públicos.

¹⁰⁸ “Primer informe DELPHI para el informe nacional de desarrollo humano BOL/97/005 (borrador). El sistema político local boliviano: percepciones sobre la educación y el desarrollo humano”, PNUD, La Paz, 16 de julio de 1997, p. 11 y ss.

- d) El 3% de los municipios dijo que las tres ciudades del eje son las principales beneficiarias en lo económico.

A pesar de que los municipios encuestados tenían una percepción positiva de las leyes de Participación Popular y de Descentralización, reconocieron que las instituciones municipales todavía no tienen la capacidad suficiente para resolver las demandas de la población con eficiencia. Los resultados de la encuesta del PNUD mostraban que existe una enorme duda sobre la capacidad de los municipios para promover actividades productivas y para ayudar a los más necesitados.

Por otro lado, cuando se consultó solamente a los alcaldes municipales qué porcentaje del presupuesto municipal destinaban hacia actividades productivas entre 1996 y 1997, los resultados señalaron que en 1996, dos tercios de los municipios no invertían más del 20% de sus recursos en actividades productivas; 18% de los municipios en el mismo año no invirtieron absolutamente nada en tareas productivas. Para 1997, las cifras habían mejorado un poco, pues sólo 4% de los encuestados decían no haber invertido nada, mientras que 46% afirmó haber destinado entre 1 y 20% del presupuesto para actividades productivas. Sólo un 8% de los alcaldes dijo que más del 51% del presupuesto municipal se invertía en la producción.

Esta situación obliga a pensar que una cosa fue postular el desarrollo humano ligado a otras reformas sociopolíticas importantes como la Participación Popular o la Descentralización administrativa en Bolivia, y otra muy distinta poner en marcha el desarrollo humano en beneficio de los más pobres. ¿Se quiso hacer desarrollo humano en Bolivia? o ¿qué se quiso hacer con el desarrollo humano?

Lo mismo podría decirse del mercado, ¿realmente se buscó impulsar una expansión liberal en Bolivia? o ¿con su defensa se trató de fortalecer la vieja estructura clientelar de siglos

que todavía impera en el Estado, donde sólo una élite se hace cada vez más rica, con fuertes conexiones en la economía transnacional, y dos cuartas partes de la población se hacen más pobres y se marginan de los cambios socio-políticos mundiales?

Hoy día, nuestros indicadores sociales se alejan en 30 años de los de Chile, 49 años de los de Argentina y 134 años lejos de los de Estados Unidos. “Según el Informe de Desarrollo Humano más reciente, Bolivia ocupa el puesto 111 de un total de 174 países. Con un índice de desarrollo humano (IDH) de 0,584, el país está catalogado en un *nivel medio inestable*, (...) cinco de los nueve departamentos tienen un IDH superior al promedio nacional. Ellos son Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y La Paz, en ese orden. De los otros cuatro departamentos, tres tienen un nivel inferior al promedio nacional pero superior a 0,500, que es el umbral que separa el desarrollo humano medio del bajo. Esos departamentos son Cochabamba, Oruro y Chuquisaca. El IDH de Potosí no solamente lo coloca en el último lugar, sino que lo ubica como el único de desarrollo humano bajo en el país. Todos los demás se clasificarían en el nivel de desarrollo humano medio”¹⁰⁹.

Dentro del país existe una heterogeneidad profunda, pues Bolivia tiene indicadores preocupantes que se acercan a los niveles dramáticos del África, como por ejemplo el norte de Potosí, mientras que, en otro contexto, los indicadores sobre desarrollo humano en Santa Cruz se aproximan más bien a los promedios de América Latina. Es más, dentro de las mismas ciudades y en sectores urbanos más delimitados, podemos encontrar indicadores que varían mucho y se mueven en el péndulo que va de lo aceptable a lo degradante.

¹⁰⁹ Ver: PNUD. **Desarrollo humano en Bolivia 1998**, La Paz, 1998.

Sin embargo, una cosa es clara de entrada. La población marginada posee una potencialidad: su capacidad para seguir demandando la satisfacción de sus necesidades. Parece ser que las políticas sociales produjeron dos efectos en Bolivia:

- Por un lado, la legitimación de los gobiernos para que puedan aplicar los ajustes económicos de forma regular y sin distorsiones.
- Por otro, un escenario donde los grupos que podrían acceder a mayores beneficios, también tendrían que convertirse en los actores de su propio desarrollo, exigiendo más oportunidades al mercado y al sistema democrático.

Sin embargo, esto tiene limitaciones muy fuertes en la estructura de poder y en las posibilidades reales del país. Nuestra estructura de poder limita la acción de los pobres y, al mismo tiempo, las circunstancias objetivas como la estabilidad sin crecimiento económico suficiente, presentan serios obstáculos donde los pobres no pueden, por sí mismos, revertir la inequidad estructural que cae sobre sus espaldas. A su vez, un punto positivo en la teoría del desarrollo humano que escapó a la influencia liberal, fue haber alentado un sistema de valores como el punto de partida para encarar el potenciamiento de los pobres. Este sistema de valores reivindicó la transformación y la disminución radical de la pobreza en Bolivia, mediante la búsqueda de justicia social y equidad como valores nucleares.

La pobreza estructural y el desarrollo humano

También es importante hacer notar que la pobreza no se entiende sin los patrones de exclusión social, ni la débil integración social en Bolivia. A comienzos del siglo XXI, la pobreza constituye un problema profundamente arraigado en las relaciones sociales; es decir, nos obliga a

preguntarnos cómo se han estructurado históricamente aquéllas relaciones y cómo dicha estructuración produjo la exclusión. Desde este punto de vista, la pobreza no es ajena, ni a la política, ni al proceso histórico o económico y tampoco a las relaciones sociales. La pobreza es un producto histórico que responde a las circunstancias en que se desarrollaron los estilos de desarrollo en el país en la Revolución Nacional del 52, la estabilización económica de 1985, o el presente.

Ahora bien, ¿será posible imaginar una estrategia de desarrollo humano, al interior de un escenario que posibilite otorgar diversas alternativas de poder a los pobres? O ¿sólo debemos entender a la pobreza como un fenómeno al que debe responderse mediante una compensación? A partir de estas interrogantes es posible esbozar cuatro factores que habrían marcado la evolución de las políticas sociales y de desarrollo humano en Bolivia para enfrentar la pobreza estructural.

En primer lugar, las políticas sociales originadas en los ajustes estructurales transformaron las mentalidades y convencieron a la sociedad de que lo pobres debían hacerse cargo de su pobreza, que no la rehuyan ni tampoco la asuman como una fatalidad inalterable. Este es el sustrato que orienta el criterio para transformar a los pobres en actores responsables por su propio destino sin contar con el Estado.

Por lo tanto, desde 1985 no existe en Bolivia nada que pueda llamarse reforma social que esté más allá de lo que quieran o puedan alcanzar los individuos. Éstos tendrían que asumir por sí mismos la responsabilidad de superar sus carestías y limitaciones, desechando la posibilidad de intervención estatal y tratando de ganarse un lugar en el mercado.

Simultáneamente, las estrategias de reforma social lograron convertir las necesidades de los sectores desposeídos en demandas que se expresaran plenamente en el sistema político

institucional. En este sentido, el gobierno de Sánchez de Lozada ejecutó también otras reformas como la Participación Popular, para responder a esas demandas de manera descentralizada, facilitando la estabilidad de su régimen y del sistema democrático.

En cierto sentido, durante el régimen del MNR (1993-1997), a través de las políticas compensatorias de alivio y del discurso sobre el desarrollo humano, la pobreza se politizó dentro de una lógica democrática que hizo gobernables los conflictos producidos por las desigualdades que generan las estrategias económicas.

En el marco de la Participación Popular, el desarrollo humano sostenible quiso abrir “(...) la posibilidad de impulsar un programa de incentivos para que la propia población transforme sus necesidades en demandas a fin de que puedan hacerse presentes en los sistemas institucionales de toma de decisiones, tanto a escala municipal como regional y nacional”¹¹⁰. Con esta orientación, algunos consultores en desarrollo humano recomendaron introducir en los programas sociales, políticas que estimularan la participación ciudadana y estrategias de concertación entre los diferentes agentes de la participación local en los municipios. Sin embargo, toda esta estrategia también deberá funcionar al interior de estructuras liberales de mercado.

En segundo lugar, para convertir a los pobres en actores de su propio desarrollo, fue importante que esta concepción se transformara en un tema nacional estratégico. La pobreza se convirtió en un eje de la gobernabilidad política y, al mismo tiempo, en un elemento constitutivo para la negociación de créditos ante los organismos internacionales.

En tercer lugar, las políticas sociales y de desarrollo humano identificaron actores privilegiados que debían ser los núcleos claves de intervención, como sucedió con el

¹¹⁰ CALDERON, Fernando y LASERNA, Roberto. **La fuerza de la equidad. El desarrollo humano en Bolivia**, CERES-Los amigos del libro, La Paz, 1997, p. 85.

potenciamiento de las mujeres. Se difundió ampliamente la necesidad de poner mayor énfasis en la mujer, porque en el país, sus roles en la organización y reproducción de la familia son fundamentales. Lo mismo podría decirse de los pueblos originarios que fueron otro núcleo donde había que ejecutar acciones.

En cuarto lugar, sobre todo con la llegada del desarrollo humano desde 1993, el potenciamiento de las políticas sociales dio lugar al cruce de dos dinámicas: la económica y la política. Se mantuvo intocable el carácter liberal de la estructura económica, combinándola con una apertura hacia la participación de la población, sobre todo en los municipios rurales para acceder a la toma de decisiones a través de la Participación Popular. El desarrollo humano evidenció que no era suficiente la satisfacción de necesidades materiales, sino también simbólicas, como la representación política, la participación y la auto-organización. Durante el gobierno de Sánchez de Lozada, la Participación Popular en el marco del desarrollo humano tendió a integrar a los excluidos, a pesar de que subsistieron las inequidades estructurales.

Finalmente, el debate actual sobre la deuda social y el alivio a la pobreza, obliga a que el país se decida, de una vez, por redefinir su perfil productivo y económico, tanto para poder enfrentar la globalización, la modernización económica y cultural, o para mejorar la calidad de vida en todo el país. Es importante determinar cuál va a ser la “calidad” del nuevo perfil económico con los dividendos de la capitalización de sectores estratégicos, junto con la incorporación de patrones de integración social.

Gobierno de Banzer: insuficiencia propositiva e incertidumbre

Hugo Banzer Suárez es el primer presidente latinoamericano que, después de haber sido dictador militar en la década de los 70, llega nuevamente al poder a través de elecciones constitucionales en agosto de 1997. Su gobierno está fuertemente marcado por tres influencias decisivas:

- a) La administración política de una coalición de gobierno demasiado heterogénea.
- b) El diagnóstico que Banzer hizo de las condiciones en que recibió la administración gubernamental del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
- c) La lógica de su estilo de liderazgo para tomar de decisiones, donde se aprecia una insuficiencia propositiva y mucha incertidumbre sobre el rumbo de las reformas sociales.

La articulación política de su coalición entre ADN, MIR, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Conciencia de Patria (CONDEPA) (este partido fue invitado a abandonar el gobierno después del primer año), no permitió que Banzer alcanzara un consenso político sobre la dirección de las principales metas en el plan de gobierno. Como es una coalición tan grande, existen muchos problemas para controlar el reparto de cuotas de poder. La pugna por acomodar a los militantes de uno y otro partido en la administración pública, cobró buena parte del tiempo en la agenda política durante todo 1997.

Para contrarrestar estos conflictos, el Presidente Banzer quiso impresionar a la sociedad con la publicación de un decálogo ético en su primera sesión de gabinete. Este decálogo buscaba dar legitimidad a la imagen de Banzer en tanto hombre público con una meta de servicio cívico y con el claro ánimo por disolver su pasado autoritario. La ética que Banzer transmitió, no fue otra

que una nueva señal para hacer ver que será fiel al Estado de Derecho y al imperio constitucional de las normas que rigen nuestra democracia.

Asimismo, durante los primeros seis meses de gestión se habló bastante de un decreto para luchar contra la pobreza. Éste jamás se hizo realidad. Banzer disolvió el Ministerio de Desarrollo Humano, con lo que las políticas sociales aplicadas en la gestión de Sánchez de Lozada quedan en *estatu quo* y carentes de un impulso evidente hacia una nueva concertación nacional para superar la pobreza.

La segunda característica influyente es la percepción y diagnóstico que Banzer hizo sobre las condiciones en que recibió la presidencia de manos del ex mandatario Sánchez de Lozada. En su primer mensaje presidencial del 7 de septiembre de 1997, Banzer no hizo sino descartar, de golpe, la anterior administración con adjetivos que descalificaban absolutamente lo realizado por su antecesor. “Yo no edifico sobre basura”, había declarado cuando era consultado insistentemente por los medios de comunicación sobre el rumbo de las reformas. Desde entonces, Banzer no cesa de acusar a Sánchez de Lozada como el origen de todo problema social y económico. Para Banzer, el MNR es la expresión de aquello que siempre debe menospreciarse.

En su primer año de gobierno, la gestión de Banzer está encandilada por el rencor hacia la imagen de Sánchez de Lozada, a quien se lo asocia con un obstáculo perverso cuya destrucción es una prioridad. Por lo tanto, las reformas sociales quedaron atrapadas en medio de intereses políticos que priorizan las acciones para neutralizar la oposición del MNR, en detrimento de un programa de gobierno con capacidad propositiva y concertadora como lo exige una reforma social de alivio a la pobreza.

Banzer y su coalición se unieron para desconocer los aportes del anterior gobierno. De esa manera evitaron presentar un plan estratégico con plateamientos claros sobre la reorientación

o, en su caso, el mejoramiento de las principales reformas ejecutadas por Sánchez de Lozada. Esto es un hecho importante en la medida en que refleja lo siguiente: Banzer jamás esclareció cómo orientar su papel hacia la elaboración de políticas públicas de desarrollo humano, ni tampoco cómo regir su ejecución tratando de equilibrar las acciones económicas con reformas sociales efectivas.

Juan Cariaga, uno de los directores del Banco Mundial y ex Ministro boliviano de Finanzas, anunció que dicho organismo internacional desembolsará 400 millones de dólares para luchar contra la pobreza en los próximos cinco años. Sin embargo, esta posibilidad dependerá de que Banzer continúe lo ya realizado en la Reforma Educativa y en la Participación Popular, lo que implica que los municipios presenten sus planes anuales operativos y realicen esfuerzos para incrementar la productividad y la distribución de recursos entre los grupos sociales más pobres. Cuando Banzer rediseñó el Poder Ejecutivo, no justificó por qué decidió clausurar el Ministerio de Desarrollo Humano y tampoco supo explicar cómo el aparato público fue víctima de tanta fragmentación, fruto del reparto de cuotas de poder entre los partidos socios del gobierno.

El tercer aspecto que marcó buena parte de la gestión gubernamental de Banzer, fue la lógica en que se toman decisiones en democracia para evitar los conflictos sociales causados por la inequidad y las medidas económicas. Para su gobierno nunca estuvo claro cómo convertir su estrategia presidencial de control sobre los procesos políticos, en instituciones democráticas con capacidad de gestión y gobierno, ni tampoco cómo generar consensos con los principales actores de la sociedad civil: sindicatos obreros, campesinos, etnias, empresarios, maestros o universitarios para la ejecución de políticas específicas sobre reforma social.

Sin embargo, fue importante que en el mes octubre de 1997 Banzer convocara al llamado “Diálogo Nacional: Bolivia hacia el Siglo XXI”, donde se reunieron intelectuales, expertos

internacionales y las principales fuerzas políticas. Esto posibilitó clarificar una agenda pública para el mediano y largo plazo, y discutir temas relacionados con la pobreza, la equidad, las fuerzas armadas, la seguridad laboral y el desarrollo económico a partir de múltiples perspectivas. Si bien muchas de las conclusiones no fueron ninguna novedad, pues se repitió mucho de lo ya conocido, el esfuerzo fue positivo porque se aglutinó lo disperso y se presentó a toda la sociedad boliviana, análisis y propuestas que hacían el esfuerzo por mirar un panorama conjunto.

En consecuencia, Banzer estuvo cara a cara con uno de los problemas más punzantes para la democracia representativa: el difícil tránsito a un proceso donde la eficacia en la administración de gobierno y en la toma de decisiones, no sólo exige elementos técnicos y conocimiento, sino mucha discusión y consensos públicos. La pobreza es justamente un tema crucial donde la concertación entre diferentes sectores de la sociedad y del Estado, reclama discusión y participación.

Hasta ahora no está claro lo que Banzer piensa proponer en materia de reformas sociales, que a su vez rindan frutos en el largo plazo, tomando en cuenta también amplios procesos de concertación político-social entre empresarios privados, sindicatos, partidos políticos, poderes locales municipales y etnias, todos ellos relacionados con lo substantivo de las políticas sociales y económicas en ejecución, que representan, a su vez, una base de apoyo durable y sólida para las decisiones tomadas.

En medio de esta carencia propositiva e incertidumbre sobre las reformas sociales, un aspecto importante a destacar, fue la decisión del Presidente Banzer para suspender el pago del Bono Solidaridad (Bonosol) aprobado durante la gestión del MNR. Al mismo tiempo disolvió la

Superintendencia de Pensiones y planteó otro esquema para extraer beneficios del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), a través del Bolivida y de la Ley de Crédito Popular.

Las oscuras discusiones gubernamentales para llevar adelante el Bolivida y anular el Bonosol, dejaron abierto un enorme boquete de dudas sobre las intenciones reales del gobierno respecto a las inversiones sociales para superar la pobreza. El gobierno de Banzer liquidó también el Fondo de Vivienda (FONVI) y está acosado con 54 juicios que enfrenta el Estado boliviano, por más de 90 millones de dólares, lo cual hace peligrar muchos proyectos regionales o los destinados a la inversión pública. El Presidente enfrentó procesos laborales interpuestos por ex y actuales trabajadores de las empresas capitalizadas: Lloyd Aéreo Boliviano, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y las empresas nacionales de ferrocarriles y telecomunicaciones. En el primer caso los juicios vencieron al Estado y, por lo tanto, las alternativas de éste para financiar el pago a dichos trabajadores produjeron un déficit que afectó seriamente a las reformas sociales, porque el dinero para pagar los procesos salió del Tesoro General de la Nación, y postergó una serie de desembolsos para proyectos regionales o para los destinados a la inversión pública. A su vez, las crisis económicas latinoamericanas influyen también en Bolivia, razón por la que constantemente se generan recortes en la partida de gastos corrientes del sector público y la posible amenaza del aumento de la deuda pública.

Finalmente, el gran error de Banzer fue gastar mucho esfuerzo y dinero en la erradicación total de los cultivos ilegales de hojas de coca en la región del Chapare entre 1998 y 2000. Su gobierno asumió un costoso compromiso político con los Estados Unidos en materia de lucha antidroga, que desde su inicio postergó la posibilidad de dar prioridad a las políticas sociales de alivio a la pobreza.

Conclusiones

El alivio a la pobreza en Bolivia, no sólo demanda el diseño de políticas y reformas sociales viables y efectivas, sino que también exige un nuevo esfuerzo por plantear acuerdos socioculturales y políticos entre diferentes sectores: gobierno, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, empresarios, sindicatos, pueblos originarios, iglesia y especialistas en políticas públicas. Sin un proceso de diálogo para producir consensos, articular demandas y estimular solidaridad, no será posible alcanzar resultados que favorezcan a los más necesitados.

La convivencia de políticas sociales y de desarrollo humano, con medidas económicas liberales, si bien posibilitaron frenar los descontentos para aplicar con rigidez el modelo económico, también demostró que las insuficiencias de la estructura económica en Bolivia no pueden responder a las demandas por equidad y seguridad humana. A pesar de la estabilidad, la estructura económica es débil y no consigue retener y orientar productivamente el excedente económico generado, postergándose las reformas sociales que requieren ser introducidas en los ajustes estructurales.

Después de 15 años de ajuste estructural, las reformas sociales en Bolivia no pueden cumplir con la reducción de la pobreza, porque todavía tienen las siguientes características:

- a) Una creciente desigualdad social que se amplifica por la incapacidad de lograr un crecimiento económico sostenido.
- b) El papel del Estado como eje de las prestaciones sociales, decayó absolutamente, contrayéndose el gasto social al máximo.

- c) Las medidas de fomento a la equidad social se ejecutaron en medio de intentos por combinar una cultura de libre mercado, donde el individuo pobre asuma para sí los costos de su supervivencia, junto con políticas sociales dispares y focalizadas que no se enmarcan en estrategias orgánicas de largo plazo. El Desarrollo Humano intentó corregir estas falencias, pero pronto fue opacado por la nueva gestión gubernamental de Banzer.
- d) El apoyo tímido a la reconversión productiva, debido a la falta de dinamismo de nuestra economía y a la precaria situación fiscal, hizo que los recursos de hidrocarburos y minería aún se utilicen para financiar gastos corrientes del Estado, sin permitir inversiones productivas de gran escala.
- e) La economía boliviana presenta una enorme insuficiencia dinámica de las exportaciones, lo que nos hace depender mucho del financiamiento externo, y se dejan para el final las políticas en materia de desarrollo humano.

Todo este marco de influencias se desarrolla dentro de una lógica inflexible en cuanto a la política económica: la economía de mercado. Con este panorama, todo indica que las brechas sociales persistirán durante el siglo XXI. Al mismo tiempo, hay argumentos para repensar diferentes formas donde sea el Estado quien asuma ante sí la posibilidad de regular, sino superar y contrarrestar, la contradicción entre democracia y mercado, entre políticas de ajuste estructural y equidad social, entre deuda social debido a las políticas económicas liberales y el hecho de afrontar una obligación humana y ética: reconocerles a los pobres el estatus de individuos dignos con derecho a la seguridad humana.

El estilo de desarrollo abierto hacia el mercado demanda también que el Estado se convierta en garante de la seguridad para toda persona frente a la autoridad política, garante de la

seguridad frente a cualesquiera formas de opresión, arbitrariedad y desigualdades que atentan contra la expectativa de todo ser humano para llegar a ser digno. Paralelamente, las dificultades de los procesos de modernización y reforma están demostrando que se necesita de gobiernos fuertes y sólidos; es decir, la misma modernización parece requerir más y no menos gobierno. Un Estado eficiente y justo, no uno atrofiado por el mercado.

Un Estado eficaz sin miedo al mercado deberá cumplir con algunas funciones elementales, como la eficacia de la ley y los esfuerzos por ganarse una buena credibilidad ante la sociedad civil, para hacer ver que sus decisiones están cargadas de cierta concepción del bien común y de una preocupación por los sectores depauperados, víctimas de la pobreza estructural.

Con la persistencia de la deuda social la democracia en Bolivia puede tambalear. Sin embargo, también es esencial que la democracia se corrija constantemente a sí misma, manteniendo siempre abierta la posibilidad de cuestionar de distintas maneras sus tareas pendientes, entre las que destaca nuestra pobreza, hasta ahora, sempiterno motivo de nuestra frustración.

4. El Katarismo: Mitos, Utopías y Preguntas Sin Respuestas

En los últimos 15 años (1980-1995), el Katarismo se ha convertido en una especie de presencia enigmática, innovadora y especial en la política y en la sociedad boliviana, no sólo por sus reivindicaciones de una sociedad más justa, pluricultural, respetuosa y tolerante con los pueblos indios originarios, sino también por su acción política que llevó a esta corriente ideológica a la palestra de las elecciones presidenciales con candidatos propios; es decir, de cuna india: Víctor Hugo Cárdenas, representante del Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL), nacido en Huatajata, fue candidato a la Vicepresidencia en 1993, acompañando a un importante partido dentro de la política y la historia bolivianas: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Cárdenas llegó a ser Vicepresidente y motivó un intenso debate sobre las posibilidades del movimiento indígena para llegar al poder.

También está el viejo dirigente Katarista, natural de la provincia Aroma, Genaro Flores, uno de los más importantes fundadores de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que se postuló como candidato a la Vicepresidencia de la República por la Izquierda Unida (IU) en 1993. El indio de Huayllamarca, Fernando Untoja Choque, también fue candidato a la Presidencia por el Movimiento Katarista Nacional (MKN) el 93, y luego elegido diputado por Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1997. No olvidemos la presencia quechua de Lidia Flores, destacada dirigente campesina del oriente boliviano que, en su momento, fue nominada como candidata a la Vicepresidencia de la República por la IU. En fin, se pueden nombrar muchas más personalidades de raigambre indígena como Alejandro Véliz y la presencia del indianismo radical expresado en el nuevo liderazgo indígena de Felipe Quispe, llamado *Mallku*.

Ahora bien, la presencia del Katarismo es enigmática, justamente porque incorpora en el horizonte del debate democrático y del sistema político, dos elementos: primero, la tolerancia cultural y política a la que se hace referencia cuando se reclama un sistema pluriétnico que dé cabida a la participación democrática de las mayorías indígenas; y, segundo, es una presencia protagónica que presiona por mayor democratización criticando la actuación de los políticos tradicionales, ya que los dirigentes Kataristas lograron ganar sitial de prestigio en el debate político. El Katarismo es la invasión de lo diverso como fuente renovación para la democracia.

El Katarismo como corriente ideológica, movimiento cultural y político, data de la década del 60, época en la cual se emprendió una lucha importante y, por demás, histórica para el campesinado boliviano por autonomizarse de los tentáculos del Estado de la Revolución del 52, y del pacto militar campesino que tomó las riendas del dominio político sobre los campesinos, luego de la caída del MNR en 1964.

Esto no quiere decir que las raíces teóricas de un pensamiento indigenista e indianista, no se hayan deseminado desde comienzos del siglo XX, con la llamada generación de los “novecientos”, donde destacan intelectuales indigenistas importantes como José Carlos Mariátegui, Luis Valcárcel y Gamaliel Churata en el Perú; Tristán Maroff, Carlos Medinaceli y Franz Tamayo en Bolivia. Este último consideraba que el indio era el depositario auténtico de la energía y del carácter nacional.

El Katarismo se nutrió del indigenismo y del indianismo, dos corrientes opuestas pero de gran fuerza para el desarrollo de ideas políticas y fuertes posiciones culturalistas que rigen hasta hoy. Por su parte, el intelectual indigenista peruano José María Arguedas, consideraba que la narrativa llamada indigenista alcanza el valor, no sólo de documentos acusatorios, sino de revelaciones acerca de las posibilidades políticas de la población indígena. El indigenismo no es ni podía ser una narrativa circunscrita al indio sino a todo el contexto social al que pertenece. La

doctrina indigenista describe al indio en función del señor, es decir del criollo (*q'ara*) que tiene el dominio de la economía y ocupa el más alto status social, y en función del mestizo, individuo social y culturalmente intermedio que casi siempre está al servicio del señor, pero algunas veces es aliado de la masa indígena.

Aunque los intelectuales indigenistas no son de raíz india, apoyan todo lo que pudiera ser una propuesta cultural, social y política que provenga de los pueblos originarios. Esto es lo que ocasiona la crítica radical de verdaderos representantes intelectuales de origen aymara o quechua para autonomizar sus ideas, proyectos societales y acciones políticas a través de la fundación de partidos indios.

Así nace la otra vertiente Katarista: el indianismo cuyo máximo exponente boliviano es Fausto Reinaga, para quien el indigenismo es la doctrina espúrea de los criollos, mestizos y blancos que sólo buscan alienar al indio, confundirlo, colonizarlo y absorberlo a la cultura y costumbres occidentales copiadas burdamente por los blancoides. El indianismo, según Reinaga, es la verdadera doctrina del indio porque recupera la esencia del ser social nacional: el hombre inca que forjó la sociedad del *ama sua*, *ama llulla* y *ama qhella*. Rescata la naturaleza humana del mundo aymara y quechua, para convertirse en una doctrina especial donde el indio es la misma tierra que piensa. Este caudal doctrinario ve dos Bolivias: la Bolivia criolla, mestiza y *q'ara* que oprime el sistema social y cultural indio, reproduciendo un colonialismo interno; y la Bolivia india de los aymaras y quechuas que esperan liberarse sin intermediarios, por medio de una revolución india para refundar la sociedad justa del Tawantinsuyu.

Este proceso de progresiva independencia en el pensamiento, da lugar a la independencia política en la década de los 60 para fundar el Katarismo como movimiento político de liberación y lucha sindical. La investigadora Silvia Rivera, retomando el primer manifiesto katarista,

denominado Manifiesto de Tiwanacu, afirma que en 1973 el katarismo aparece como un movimiento ideológico con manifestaciones institucionales y organizativas en La Paz, Oruro, Potosí y zonas aymaras. Así se reivindica la cultura y el pasado indio, la crítica al control y manipulación del Estado nacionalista del 52 y del pacto militar campesino, y se esclarece la conciencia de nuevas condiciones de explotación que sufre la masa campesina. Su máxima acusación contundente contra la Bolivia criolla y mestiza expresa: “hemos sido situados en lo más bajo de la pirámide social que ejecuta una superposición y dominación de culturas; somos extranjeros en nuestro propio país”.

La fuerza contestataria del Katarismo descansa en el rescate de propuestas ideológicas que provienen de indígenas aymaras, quechuas, amazónicos, del universo rural boliviano y urbano mestizo. Al mismo tiempo, la CSUTCB, con clara influencia Katarista, dentro de su lucha sindical ejerce una serie de presiones para imponer la mayoría indígena en la Central Obrera Boliviana (COB), con la que confronta discusiones sobre la plataforma política de esta organización; es decir, la CSUTCB siempre planteó que la liberación del país y la revolución deban estar acaudilladas por los pueblos originarios, planteamiento que ha sido asumido por el Katarismo para convertirse en una reivindicación étnico-social porque sus defensores consideran que no se puede tratar lo étnico y lo social como elementos excluyentes en el proceso de liberación en Los Andes.

Según Víctor Hugo Cárdenas, el Katarismo del MRTKL postula, a través de su “teoría de los dos ejes”, la articulación de lo nacional y lo social pero con un desvío en el orden estrictamente económico y clasista. Es decir, el Katarismo mira dos horizontes, por un lado, la nación boliviana como país fragmentado en muchas etnias, las mismas que deberán estar liderizadas por el poder indio; y por otro lado, el eje social en el que se visualiza al colonialismo interno y al capitalismo como sistema mundial que oprime a todos los países pobres, razón por la que también reconoce una

lucha de clases. El MRTKL sostiene que en Bolivia impera un capitalismo irracional, y bastaría con que el Katarismo dé su verdadera racionalidad para que alcancemos el mejor de los mundos.

Por otra parte, el Katarismo de Untoja y su MKN trata de entender el proceso de liberación social por medio de un proyecto globalizante de sociedad, proponiendo convertir en una categoría de estudio la noción de “ayllu” para después plantear el Modelo Social del Ayllu (MSA) que intenta expresar una relación de fuerzas entre las naciones aymara, quechua y amazónica. Untoja considera que frente a la racionalidad capitalista es necesario un proyecto de sociedad basado sobre el MSA, donde las naciones originarias y todos los grupos sociales en Bolivia se organicen en un ayllu económico y político para conformar un Estado Nacional Constituido que exprese absolutamente a todas las etnias y naciones del país. El MSA quiere recuperar la economía de reciprocidad que se practicaba en el Incario, combinada con la tecnología social contemporánea. Esta doctrina defiende la idea de un ayllu con raíces ancestrales pero con computadoras y el aprovechamiento de la ciencia actual.

El indianismo está cargado de elementos míticos que se expresan a través de tres canales: primero, asumiendo la forma partido como el intento de Reinaga en 1971 con el Partido Indio de Bolivia; segundo, asumiendo la forma Katarista con raíces fuertemente sindicales desde la fundación de la CSUTCB; y, tercero, planteando una neofolclorización de la realidad como el Modelo Social del Ayllu de Untoja.

El Katarismo abstrae, esquemáticamente, símbolos y términos del universo andino para proponer modelos como el caso de Untoja que, en el fondo es un indianista con tendencia hacia la solución pacífica de los problemas del país. El MSA es algo parecido al Consejo de Amautas planteado por Reinaga hace dos décadas; sin embargo, así se tiende a la folclorización de la realidad andina para hacer de las palabras un conjunto de símbolos míticos que se usan con el fin de

conformar un proyecto social y político. En los proyectos Kataristas hay una fuerte carga de romanticismo por medio de la recuperación de una realidad con esquemas ideales y ancestrales. Un claro ejemplo es el MSA que posee una reducción ideológica y simplista para proyectar un futuro incierto en Bolivia.

Muchos investigadores del mundo andino afirman que no existe un único modelo de ayllu, pues existen muchos tipos y variedades, razón por la cual no hay coordenadas que permitan universalizar el concepto de ayllu o de Estado Pluricultural que reúna completamente a todas las etnias de Bolivia. Siempre estaremos, nos guste o no, ante de una sociedad fragmentada cuyas astillas nos muestran miles de caminos. Bolivia está sometida a un universo social polifacético.

La doctrina Katarista rescata un tipo de memoria histórica en el juego de mitos andinos y propuestas utópicas como el retorno al ayllu o al sistema social de un Tawantinsuyu que puede reinstaurarse como Estado y alternativa de cambio social. En este proceso, surgen dos concepciones mesiánicas que toman la forma de consignas políticas:

- 1) El Katarismo como simbiosis entre un orden ético perfecto, encarnado en el código moral incaico (*ama sua, ama llulla, ama q'ella*) y la lucha anticolonial que busca restaurarlo. Aquí, lo central es la percepción de la continuidad de una situación colonial de más de 500 años, que justifica la vigencia de las consignas del establecimiento del orden prehispánico.
- 2) El Katarismo como conciencia del retorno del héroe Tupac Katari quien, antes de morir, juró retornar convertido en millones para vengarse del sistema colonial. Aquí, lo central es la percepción de la cualidad política del número, la noción de mayoría étnica nacional, asociada a la noción de despertar del gigante dormido: las naciones indias.

Si bien el Katarismo representa un empuje democratizante para el sistema político democrático en Bolivia, queda anclado en una postura milenarista que exalta un pasado histórico en

el largo plazo, sin proponer soluciones operativas a problemas concretos en el corto y mediano plazo. Además, se exige un mejor nivel de vida para el campesino, tecnología e industrialización modernas para el país; es decir, un conjunto de valores occidentales de modernización que son, a la vez, condenados e invocados en el discurso político Katarista.

Las preguntas sin respuestas del Katarismo

Ante este retumbar de mitos y proyectos neoandinos, el Katarismo contempla retos y problemas muy específicos. ¿Cómo solucionar la pobreza rural que afecta a cerca del 90% de los campesinos? ¿Será que éstos tienen que esperar la instauración del MSA para salir de la pobreza o, en su caso, deberán, primero, estudiar la teoría de los ejes? ¿Podemos recuperar hoy día la organización de un consejo de amautas para restablecer la naturaleza del hombre Inca que postulaba Reinaga? ¿Podrá sustituirse el Congreso de la República y el régimen democrático representativo, por una asamblea de las nacionalidades sin atentar contra los principios del consenso y la gobernabilidad del sistema político? ¿Los partidos políticos deben subordinarse completamente a las nacionalidades? ¿Cómo sería posible gobernar una sociedad compleja sin la mediación de partidos políticos? ¿Qué sugerencia viable y con solidez técnica ha propuesto el Katarismo con referencia a la modernización del Estado para hacerlo más representativo y eficiente?

Desde el punto de vista político, estas interrogantes se hacen mucho más complejas y preocupantes porque un Parlamento elegido de acuerdo con criterios de raza o cultura, equivaldría a fundar un Estado basado en una relación estrictamente étnica con ciertos grupos que se convertirían en dueños originarios y absolutistas del Estado. Si se aplicara la ideología del Estado plurinacional, que en el fondo tiene una gran carga de disociación y confrontación, el argumento de identidad

cultural y autodeterminación política étnica traería consigo el desmantelamiento del territorio nacional en Bolivia, llegando, en la práctica, a una verdadera disgregación de Bolivia como Estado. ¿Estamos preparados para una Confederación de Estados aymaras, quechuas, guaraníes, amazónicos, chiriguano y mestizo-occidentales? ¿Cómo se podrían conciliar las instituciones de la democracia representativa con los mecanismos de poder local de las culturas indígenas?

El reto no sólo exige que los proyectos Kataristas respondan a estas preguntas que todavía están ausentes en su discurso indianista, sino que también se propongan mecanismos operacionales, responsables y factibles para la ejecución de aquellas ideas. Es decir, un método, lo suficientemente plural, tolerante y desmitificado, sin lugar a fetiches que puedan convertirse en estandartes de guerra, confrontación y violencia.

5. Víctor Hugo Cárdenas: El Indio Cartesiano

Durante todo el proceso electoral que el país vivió entre enero y junio de 1997, se advirtió, con cierta extrañeza, una gran ausencia: la del Katarismo, que desapareció de la escena en las elecciones presidenciales mientras hace siete años, desde abril hasta agosto de 1993, ocupaba las páginas centrales de todos los periódicos y constituía el corazón de todo comentario periodístico en la televisión y la radio. El Katarismo, a través de su alianza con el MNR para conformar el binomio ganador Sánchez de Lozada-Víctor Hugo Cárdenas, se levantaba como ave Fénix sobre las cenizas de una sociedad colonialista que mostraba sus rupturas para presentar al Katarismo de Cárdenas como el gran boquete renovador de la sociedad y la política. Las bienaventuranzas del Katarismo iban a abrir la senda, según los análisis de la época, de una nueva revolución: la reforma de la educación mediante el sello intercultural-bilingüe, y el fortalecimiento de las organizaciones originarias para una democratización auténtica de la cultura y el Estado boliviano.

La presencia de Víctor Hugo Cárdenas como Vicepresidente de la República y presidente nato del Congreso nacional, no sólo encandiló la atención de otros países y líderes del mundo, sino que sembró la semilla de la utopía en muchos intelectuales y políticos de oposición: para unos, el Katarismo de Cárdenas y el voto campesino en favor del frente MNR-MRTKL no fue solamente algo instrumental fruto de una picardía criolla, sino el resultado de una aspiración a la integración nacional y la modernización del sistema político. Para otros, el Katarismo iba a revitalizar las ilusiones doradas de autodeterminación política del movimiento popular, pues un auténtico líder indio estaba en, y con, el Poder.

Después de aquellas ensoñadoras épocas, ¿cómo puede evaluarse el papel político desempeñado por el Katarismo después de cuatro años de gobierno (1993-1997)? ¿Víctor Hugo Cárdenas es el mismo líder político? Después de que el Katarismo de Cárdenas ejerció el poder, ¿en qué situación se encuentran las contradicciones del colonialismo interno y la pugna entre la modernización de la sociedad, la descolonización de la historia y la diversidad étnico-cultural?

La visión cartesiana de Víctor Hugo

Para el Katarismo, y particularmente para el Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación (MRTKL) que lideriza Víctor Hugo Cárdenas, la interpretación de la política, cultura e historia de Bolivia pasa por la teoría de los “dos ojos” que se expresa en una particular mirada¹¹¹: por un lado se encuentra la visión del “ojo étnico-cultural” que reivindica el papel de las culturas originarias: aymara, quechua, guaraní,... en la historia, dentro de una lucha por romper el colonialismo que le impuso la opresión de una sociedad occidental, mestiza y criolla. Este ojo étnico-cultural, en manos de Víctor Hugo Cárdenas como Vicepresidente, enfocó, además, la combinación entre democracia representativa y construcción de una sociedad multiétnica, buscando la descolonización del Estado para reorientarlo hacia su modernización.

Al otro lado del ojo étnico-cultural se encuentra la visión del “eje social” que observa las clases explotadas y las desigualdades sociales, sin cuestionar, empero, la vigencia de la economía de mercado y las reformas económicas puestas en marcha por las élites políticas y una burguesía modernizante.

¹¹¹ Cfr. ALBO, Xavier. **¿Y de kataristas a MNRistas? La sorprendente y audaz alianza entre aymaras y neoliberales en Bolivia**, CEDOIN-UNITAS: La Paz, 1993.

Esta operación cognitiva para comprender la sociedad, cultura y política a través de dos ojos que miran la realidad exterior y la interiorizan después hacia la mente, representa un ejercicio “cartesiano” de conocimiento. El célebre filósofo y matemático francés, Renato Descartes, estableció las bases del racionalismo a través de una forma de conocimiento que se asienta en el “ojo mental”. De esta manera, curiosamente el Katarismo deja de utilizar una operación cognitiva empleando los mitos y las visiones cíclicas del mundo andino, empleando más bien una operación de corte occidental: los ojos mentales que miran, entienden racionalmente y después actúan conforme a lo percibido por medio del atisbo étnico-cultural y social.

Las consecuencias políticas de esta forma “occidental” de conocer, se revelan con especiales características. Por una parte, el Katarismo de Víctor Hugo Cárdenas en el poder entre 1993 y 1997 se expresó como una fuerza política sin mucho protagonismo, comparando su comportamiento con las acciones del MNR. Sin embargo, dejó de expresar sus ribetes indigenistas de oposición radical e intransigente que en algún momento postularon destruir la cultura y Estado *q'aras*, como aquellas tendencias de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), los ayllus rojos o las utópicas versiones de un supuesto retorno a los orígenes intocables del Tawantinsuyu.

Por otra parte, el Katarismo de Cárdenas intentó desplazar la vieja lógica del conflicto entre Estado y etnias, o entre colonizadores y colonizados, hacia la confrontación entre modernización e integración social, entre desarrollo del país de acuerdo con una versión occidental, y una apertura e inserción en la economía mundial. Esta pretensión se expresa en los planes del Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB) que estuvo inserto en la Vicepresidencia de la República bajo la égida de Víctor Hugo Cárdenas, y cuyos principales ejes

de trabajo fueron: gobernabilidad, desarrollo humano, competitividad económica, seguridad humana, fortalecimiento del sistema de partidos y gestión gubernamental con racionalidad y eficiencia, problemáticas totalmente ajenas al núcleo teórico e ideológico del Katarismo original.

Para Cárdenas, el proceso de modernización del Parlamento, la sociedad y la democracia en Bolivia, se enmarcan en un mapa donde “lo importante es convertir nuestros sueños en realidades, nuestros planteamientos anteriores en políticas gubernamentales y públicas. Para eso se hace un partido político, no solamente para tener un valor testimonial [que denuncie las contradicciones coloniales] o para hacer un movimiento culturalista o etnicista, sino para transformar el país en sentido positivo”¹¹².

Estado multiétnico y sujeto indio

La visión cartesiana de Cárdenas está desembarazada de toda interpretación etnicista o mesiánica que defienden otras inclinaciones indianistas; al mismo tiempo, moderó su vieja interpretación del país durante los años ochenta, en la que veía una sociedad dual polarizada entre culturas originarias que se hallan colonizadas por agresores blancos y racistas. Esta visión dual con una enorme carga de enfrentamiento y guerra, se expresó en la teoría del colonialismo interno que, para Víctor Hugo Cárdenas, pasaría después a manifestarse, ya no como colonialismo, sino como la construcción de una “sociedad multicultural” donde pugnan la modernización inconclusa del país, con esfuerzos por alcanzar mayor integración social junto a una efectiva integración económica dentro de la globalización mundial.

¹¹² Declaraciones de Víctor Hugo Cárdenas a LA RAZON, La Paz, 14 de octubre de 1996.

La metamorfosis del Katarismo de Cárdenas después de los cuatro años de gobierno es clara: interpretó la realidad más con el ojo de la nación oprimida (defensa del multiculturalismo y de la diversidad) que con el de clase explotada. El problema de la explotación de clases es reorientado hacia otro ojo que percibe más bien la visión de una burguesía modernizante. Ya no se incluye el antiguo interés específico por la problemática social y económica de la clase explotada. El partido Katarista queda redefinido por sólo uno de sus ojos: la nación multicultural que pacta con una fracción de las élites políticas y empresariales blancas en función de la modernización. Ésta se asienta en las tres principales reformas puestas en marcha por la administración del ex Presidente Sánchez de Lozada: Reforma Educativa, Participación Popular y Capitalización, una lanza de tres puntas que pretende homogeneizar Bolivia y atenuar las contradicciones.

La acción de Cárdenas en el poder y en la conducción de algunas reformas, como la Educativa y la de Participación Popular, fue mediante el desenvolvimiento de dos racionalidades: una racionalidad normativa, es decir, de observación, refuerzo y continuidad de las reglas de juego democráticas; y otra racionalidad técnica e instrumental que se expresó a través de un fluido diálogo con tecnócratas internacionales y visiones ingenieriles de la política y la sociedad. En su trabajo legislativo para modernizar el Parlamento, Cárdenas se refirió permanentemente a “cómo encontrar estrategias de reforma haciendo uso de una ingeniería política saludable y con largo alcance”.

Durante los cuatro años como Vicepresidente, Cárdenas jamás cuestionó los procesos de capitalización de las empresas estatales, los debates con organizaciones transnacionales sobre inversiones extranjeras, o los procesos en los que el Estado deja de responsabilizarse por mayores inversiones públicas.

Su papel en los momentos críticos de conflicto social, como las movilizaciones campesinas en protesta por la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la reforma de los Fondos de Pensiones o algunos hechos luctuosos como las masacres de Amayapampa y Capasirca, estuvo marcado por la actitud discreta, una medición milimétrica de sus palabras y la defensa incondicional de toda medida gubernamental. Su compromiso con el programa de gobierno y el apoyo al ex Presidente Sánchez de Lozada fue total y absoluto.

Aunque el Katarismo no puede analizarse como una ideología y un movimiento homogéneos, es importante decir que el Katarismo de Cárdenas adquirió notoriedad más que cualquier otro, logró acceder a funciones de gobierno y puso en práctica algunos postulados ideológicos, aunque siempre con la venia y detrás de otros partidos de la coalición de gobierno el 93 como el MNR, UCS o el propio MBL.

Antiguas posiciones como el indianismo radical de Fausto Reinaga que buscaba la revancha histórica del sujeto indio revolucionario, hoy han desaparecido. Otros ideólogos como el sociólogo Javier Hurtado, algún momento vieron en la Central Obrera Boliviana (COB) el embrión de un nuevo Estado popular, proponiendo la katarización de la COB como una posibilidad para alumbrar un socialismo andino.

Las ideas de otros teóricos como Silvia Rivera que defendían al Katarismo porque representaba la instancia fundamental en la autodeterminación política del movimiento popular para descolonizar la historia, nunca propusieron ¿cómo podía sustituirse el Congreso de la República y el régimen democrático representativo, por una asamblea de nacionalidades sin atender contra los mínimos principios de gobernabilidad del sistema político?, ni ¿cómo sería posible gobernar una sociedad compleja sin la mediación de partidos políticos? Estas corrientes utopistas del Katarismo que soñaron llegar a un Estado postcolonial, quedaban sin argumentos

cuando se les pedía sugerir las formas viables y con solidez técnica para modernizar el Estado y hacer de la democracia una forma de gobierno más representativa y eficiente.

No, nada de esto tuvo cabida, sino todo lo contrario. El sujeto indio se evaporó para dar lugar al debate sobre un Estado multiétnico con democracia representativa, a los esfuerzos por conquistar la modernización, competitividad y ampliación de la ciudadanía.

La figura de Víctor Hugo Cárdenas aparece como la aldaba que cierra el paso a todo tipo de posiciones fundamentalistas, atenuándose las contradicciones entre identidades étnico-culturales y modernización occidental-capitalista. La presencia del MRTKL en una coalición de gobierno junto con el MNR, UCS y MBL, reforzó la lógica de los pactos para lograr gobernabilidad, solidificando el actual sistema de partidos y dejado sin alternativas a las ideologías indianistas y Kataristas antiguas que buscaban destruir un supuesto Estado segregador junto a sus partidos de raíz colonial.

El Katarismo de Cárdenas en el poder representó una nueva ola reformista para la sociedad, cultura y política de nuestro país, enarbolando el discurso de lo plurinacional, intentando superar las contradicciones entre colonizadores y colonizados, así como tratando de reubicar al mundo indio en una perspectiva histórica contemporánea que reconoce los procesos de modernización, y de reinsertar las perspectivas de la democracia representativa en el contexto de la diversidad étnico-cultural de Bolivia.

La destrucción del Estado o su desaparición que caracterizó a las posturas del Katarismo extremista y de la extinta izquierda revolucionaria, es reemplazada por la visión de un Estado nacional multiétnico inserto dentro de la modernización democrática y del sistema de partidos actualmente vigente.

La redefinición del Katarismo

La llegada de Víctor Hugo Cárdenas al poder hizo que la sociedad boliviana tome conciencia de los grupos étnicos, estigmatizados como marginales, o incluso como inferiores. El Katarismo moderado y modernizador de Cárdenas hizo que la democracia incorpore identidades aymaras, quechuas, guaraníes, etc. multiplicando así los signos positivos de pertenencia a una tradición y a prácticas culturales diferentes de la sociedad occidental mestizo-criolla.

La visión cartesiana de Cárdenas movilizó recursos culturales para acceder a la modernidad a través de una doble vía: económica (libre mercado) y cultural (multiculturalismo), acogiendo la posibilidad de gestionar técnicas sobre políticas públicas, gobernabilidad política, procesos financieros complejos y la aceptación de una concepción del mundo racionalista, liberal y laica.

Al hacer esto el Katarismo de Cárdenas quedó redefinido, pues sus dos ejes: el eje étnico-cultural y el eje social, fueron convertidos en una nueva ojeada: la relación entre “modernidad y multiculturalismo”, vistazo donde las propuestas políticas deberán responder a cómo construir un proceso modernizador donde se perfeccione la articulación entre reformas económicas, superación de la pobreza, democracia representativa, junto a la

diversidad, multiplicación de las alternativas, y capacidad de asociar pasado con porvenir, pues la modernización, hoy día, parece llevarnos de lo homogéneo a la heterogéneo.

El diálogo entre Cárdenas, el poder y la democracia liberal representativa, cumplió el mismo papel que la relación de hace 500 años entre España y la cultura del Tawantinsuyu. En ambos casos, el horizonte de conocimiento y las prácticas indígenas desarrollaron el ejercicio de la asimilación. Para algunos autores, la democracia pone en marcha procesos de asimilación similares a los del cristianismo, pues tal asimilación es una versión modificada del bautismo¹¹³.

La experiencia de Víctor Hugo Cárdenas ha enseñado, a través de su paso por el poder y después del cambio de brújula acaecido en las venas del Katarismo, que las posturas ideológicas de otros líderes indígenas como Alejandro Véliz o Marcial Fabricano, no deben repetir las mismas palabras del viejo Katarismo en sus discusiones sobre problemas étnico culturales, sino presentar opciones políticas para la difícil convivencia entre modernidad y multiculturalismo.

¹¹³. Cfr. FEHÉR, Ferenc. "La multiculturalidad", VUELTA, Año XVII, No. 194, México, 1993.

6. Declive y Caída De La Izquierda En Bolivia: La Imposibilidad De Alternativas Revolucionarias

Con su libro *Perestroika*, Mijail Gorbachov desató una tormenta de cambios históricos irreversibles a partir de 1987. La desaparecida Unión Soviética (URSS) nunca más fue la misma, ni Europa del Este, ni la izquierda latinoamericana. Como en Rumania, también en Bolivia *¡la mentira se vino abajo!*; consigna que no solamente fue gritada al unísono en la plaza Timisoara después del derrocamiento del dictador y genocida Nicolás Ceasescu, sino que también señalaba la inviabilidad de toda utopía marxista.

Nuestro país vio caer todo emblema izquierdista, no como producto de masacres, sino fruto de la implantación del régimen democrático y del mercado mundial. Muchos comunistas radicales que proclamaron la guerra popular o la democracia como autodeterminación de las masas, no tardaron en lucir un puesto burocrático en los gobiernos del Acuerdo Patriótico (1989-1993), del MNR (1993-1997), e incluso llegaron a compartir, muy cómodos, posiciones con el gobierno de Banzer en 1997, después de haberlo combatido como dictador entre 1971 y 1979.

La izquierda boliviana siempre obedeció ciegamente todo postulado enlatado que enviaban los marxistas europeos. Asimismo, se autoasignaba un lugar privilegiado para dirigir la revolución que jamás llegó. Este criterio radical de autenticidad revolucionaria reprodujo posiciones aristocráticas en las diferentes fracciones de izquierda; es decir, cada fragmento creía ser el mejor (aristos) en relación con los otros, pagando, además, un alto precio por su cohesión: la rigidez en la distinción y una intransigencia en las negociaciones.

La izquierda no se dio cuenta de que toda pureza teme la contaminación. Sin embargo, cuanto mayor es la consistencia ideológica de un grupo político, más tiende a la demonización y a la destrucción del adversario.

Dos tendencias: la comunista y la trotskista, fueron lo más notorio de la izquierda en Bolivia. Versiones más recatadas y, en cierto sentido, vergonzantes del marxismo, representaban el PS-1 y las proclamadas fuerzas de izquierda nacional como el MIR y el MBL, cuya estrategia tenía sólo dos alternativas políticas: insistir en la transformación violenta de la sociedad o asumir posturas pragmáticas que les permitiera ubicarse en puestos de poder, pactando con partidos grandes.

Los programas políticos de izquierda siempre desconfiaron o no comprendieron los alcances y significados de la democracia representativa. Según Filemón Escóbar, Guillermo Lora, Juan Lechín, Marcos Domic y el mismo Marcelo Quiroga Santa Cruz, la democracia sólo era formal; es decir, acorazada de los vicios burgueses.

Estas concepciones hicieron que la izquierda acabara fuera del juego del poder, pues su desempeño electoral resultó siendo una incapacidad para convocar a sectores estratégicos de la sociedad civil o para plantear alternativas viables que enfrenten la crisis económica y modernicen el sistema político.

La izquierda comprobó que es imposible conciliar una política reformista con una óptica global que no renuncie a ser revolucionaria. Todo lo contrario, verificó la sentencia de John Kenneth Galbraith para quien “las circunstancias están por encima de las ideologías”. Así, la izquierda vio inservible su discurso incendiario y optó por ganar puestos oportunistas con aquellos partidos que aceptaban ciertas candidaturas útiles para su proyección nacional y popular, como el caso de la candidatura del ex comunista y ex secretario ejecutivo de la COB, Oscar Salas, quien llegó a ser diputado por el MIR.

Estas actitudes ubícuas de la izquierda boliviana expresan una grave crisis de identidad. Como bien lo expresa el sociólogo argentino Emilio De Ipola, “la clave de esta crisis de identidad es la pérdida de una imagen de lo que puede ser una sociedad socialista y de cómo avanzar hacia ella”. De nada sirve una rearticulación intelectual y política de izquierda. Discutir si pueden regenerarse opciones marxistas más humanistas en contra de la economía de mercado y del régimen democrático, es inútil.

Sólo un ejemplo; sobre medidas económicas no es posible escuchar ideas nuevas. La propuesta izquierdista sigue siendo el desarrollismo en el ámbito económico, combinado con redistribucionismo en el plano social para favorecer a sectores empobrecidos mediante servicios públicos. Se defienden las nacionalizaciones satanizando a la inversión privada. La izquierda todavía piensa en el incremento de los ingresos públicos por vía fiscal y en la planificación estatal para controlar la economía.

El resultado es la ausencia de un programa realista con instrumentos confiables para tomar medidas en la práctica. Sus ideas son sólo un esbozo global para criticar a la tecnocracia y a los programas de ajuste estructural. ¿Cuál era la carta de presentación de cualquier revolucionario de izquierda? Básicamente dos pares de elementos: la combinación de izquierda y negación, junto a la pareja entre utopía e izquierda.

Ser de izquierda equivalía a negar la realidad existente para construir otra sin desigualdades sociales y sin Estado, a través de la revolución sangrienta. Por lo tanto, la izquierda viene definida por la negación y, en gran medida, por la destrucción de los otros: adversarios capitalistas o enemigos ideológicos. La destrucción definía también el carácter de su utopía. Esta era un instrumento para influir sobre la realidad y planificar una jornada de ajusticiamiento.

El filósofo español José Ortega y Gasset decía que “las ideas se tienen y en las creencias se está”. Este es el pésame de la izquierda: carece de ideas y sólo convive con sueños y creencias donde está suspendida sin poder acercarse a la realidad. De tanto creer ya no piensa y de tanto estar levitando, es incapaz de entender que en la política y en la sociedad, la vida debe ser simplemente soportable, pues su afán por destruir y negar convierte a la izquierda en la razón perversa de toda intolerancia.

7. El Valor De Criticar y El Apocamiento De Los Intelectuales

Discutir sobre la crítica en Bolivia representa, sin lugar a dudas, una oportunidad para analizar los espacios donde se tejen las hebras del poder intelectual, los compromisos escondidos que manejan ciertos grupos de élite, así como el marco institucional que cobija una serie de ventajas ligadas a relaciones de dinero.

El debate incondicional de ideas, hoy día es casi inexistente. En Bolivia, como en la mayoría de los países de América Latina, hemos llegado a una infeliz convivencia que evita criticar demasiado por miedo a perder la confianza de los amigos, el compadrazgo con socios del negocio e inclusive el apoyo de algunos parientes. En este marco, los medios de comunicación contribuyen por demás a trivializar las ideas, sobre la base de distintos pretextos. Todo es vanidad y, al mismo tiempo, miseria en el debate público.

Uno de los críticos más lúcidos como el politólogo norteamericano James Petras, considera que el fracaso de los países socialistas de Europa del Este, así como la debacle mundial de las ideologías marxistas o socialistas a finales de los ochenta y noventa, trajo consigo el advenimiento de una raza especial de intelectuales: los *intelectuales institucionalizados*. Éstos fueron izquierdistas en algún momento, sufriendo el exilio o hasta la tortura durante regímenes militares. Sin embargo, tal exilio sirvió, en muchos casos, para conseguir becas y relaciones de financiamiento con distintas fundaciones europeas y norteamericanas.

El resultado: dichos intelectuales, que antes eran radicales apostadores por el cambio social, terminaron convirtiéndose en revolucionarios de escritorio mientras instalaban Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para luchar contra la pobreza y se adscribían al proceso democrático, trabajando además según los intereses impuestos por

distintos entes financieros. Ya no importaba la conciencia de clase o el compromiso con el movimiento popular.

Esto mismo sucede en Bolivia, donde muchas fundaciones europeas, ONGs y consultoras, protegen a centenares de viejos marxólogos, ex militantes comunistas y rebeldes timoratos que archivaron la crítica para embeberse de pragmatismo frente a las relaciones de mercado, tiñendo también sus conciencias con relaciones de poder y de dinero para atarse a la miseria del debate, o practicar una proverbial afasia ante la autoridad, porque así es más fácil recibir la senda consultoría, ser asesor de presidentes, ministros y organismos internacionales.

Este tipo de influencias determina también la producción de conocimientos sobre diferentes problemas sociales y políticos, así como las orientaciones de nuevos profesionales ligados a la producción de ideas. Si los intelectuales institucionalizados convirtieron el debate en una práctica endeble, qué se puede decir sobre la formación institucional del saber científico.

En palabras del sociólogo chileno Fernando Mires, “el pensamiento científico de una institución no tiene mucho que ver con la científicidad pura, sino también con relaciones de poder (y de dinero) que se establecen al exterior y al interior de ella”. En este caso, caemos en el uso instrumental del conocimiento donde muchos escriben o investigan, según ciertos cálculos para establecer una vinculación orgánica con determinados intereses. Esto es lo más importante: intereses para la conformación de élites concentradoras de autoridad y privilegios, lo que no necesariamente se complementa con actitudes democráticas.

Esta situación hace que el debate desinteresado sea poco menos que inútil. Mires también es tajante al afirmar que para asegurar el éxito institucional donde hoy día se

produce conocimiento en ciencias sociales o en humanidades, es casi imprescindible “articularse ideológicamente a relaciones de poder establecidas al exterior de la institución misma, en la medida que su discurso es parte de relaciones sociales y económicas muy concretas. La institución científica, además crea jerarquías, otro tanto de relaciones internas de poder, rituales y cultos en muchos casos autoritarios, que a su vez afianzan sus vinculaciones de dinero, principalmente con organismos estatales e instituciones financieras internacionales. De este modo, la creación científica va siendo articulada no independientemente a esas relaciones sino, en muchos casos, determinadas por ellas”.

Por lo tanto, aquella lluvia densa de intereses enredados nubla la posibilidad de criticar el orden establecido o los atropellos del poder. Para muchos, es más importante ser prudentes antes que mordaces; sin embargo, ¿dónde termina la prudencia y dónde nace la confabulación? ¿Cuándo es posible reconocer una actitud silenciosamente sabia y cuándo es posible distinguir cualquier banal cobardía que tiene miedo a perder privilegios ofrecidos por el poder clientelar?

Otro espacio que destruye la vigilancia crítica son los medios de comunicación. En nuestro país, por lo general, muchos periódicos dan la palabra incondicional, no a las ideas bien pensadas o a la reflexión detenida, sino al político reluciente que quiere mantener una notoriedad vanidosa. Las columnas de muchos renombrados periódicos suelen dar mucha cobertura a todo calibre de verborragia espectacularizante. No les basta con noticias que normalmente giran en torno del poder y la oposición que mira cualquier cosa para maniobrar adhesiones de cara a futuras elecciones. Tampoco es suficiente el *show* eterno de corrupción irremediable. ¡Más encanto! Porque a los poderosos e influyentes hay que darles una palestra donde también oficien como letrados.

Todos los juegos de lenguaje en que nos encierran la televisión y la prensa están condicionados por divisiones o asimetrías de poder que, estimulados por intereses comerciales para vender figuras antes que el debate constructivo, obstruyen el flujo plural de ideas críticas. Lo que interesa es una audiencia embotada o despierta solamente para consumir.

La autoridad debe ser referida a aquella élite política que monopoliza la opinión, ejerciendo una función de centro fulgurante cuyo objetivo es, justamente, el monopolio del poder para representar la realidad. Representar es controlar los medios discursivos, imponiendo lo que es y no es crítica, lo que puede y debe decirse sobre la pobreza, el Estado, economía y cultura, subordinando las ideas contrapuestas a un único ritmo que, además, es declarado superior: los medios de comunicación junto a sus relaciones con el poder.

Lo que está fuera del encanto de los medios queda condenado al silencio y a una triste marginalidad. Pero estamos en democracia y todos tienen derecho a expresar su opinión. Sin embargo, no todos pueden escapar a la espiral del silencio construida por los medios. Los discursos disonantes u opuestos a las élites políticas e intelectuales, por más valiosos que sean, serán aplastados por la trivialidad que abunda en las declaraciones de prensa, o por la manipulación de quienes acaparan la palabra.

El 20 de septiembre de 2000, el periódico *La Razón* de la ciudad de La Paz publicó cinco entrevistas con distintos periodistas latinoamericanos que veían en Bolivia a una nación portentosa que está derrotando la pobreza y se lanza hacia el éxito económico. ¡Quiénes son los responsables de vender esta imagen, sino falaz, extremadamente parcial respecto de nuestra realidad! Los intelectuales institucionalizados, así como aquellos políticos que, a su turno, usufructuaron el poder para anclarse en el modelo de

estabilización, pero donde el Estado todavía sigue patrimonializado y donde el abuso que desata la corrupción impune, solamente está para hacer noticia, pero no para decir la verdad completa sobre todos los culpables.

Actualmente hemos llegado a una situación donde tan solo cabe repetir las palabras que Shakespeare puso en boca de Hamlet: “la verdad nos hace a todos unos cobardes”. La verdad sobre pobreza en Bolivia, dependencia económica, presiones internacionales sobre el narcotráfico, extorsiones y contubernios entre políticos e intelectuales consultores, nos pone la carne de gallina y, finalmente, hace brotar la misma sonrisa de satisfacción idiota. El valor de criticar se está muriendo.

8. Poniendo En Escena La Dramatización Política:

Los Medios De Comunicación Como Nuevos Actores Políticos

El escritor uruguayo, Mario Benedetti, relata, en su conocido cuento *La Expresión*, cómo Milton Estomba había llegado a ser un niño prodigio que a sus siete años era capaz de interpretar la Sonata No. 3, Opus 5 de Brahms o asombraba a sus maestros por la magnificencia con que tocaba lo más difícil de Bela Bartok.

Sin embargo, al cumplir los 20 años de edad, el joven pianista reveló un cambio fundamental. Había empezado a preocuparse, desmesuradamente, por el gesto ampuloso, por la afectación del rostro, por el ceño fruncido, por los ojos en éxtasis y otros tantos efectos especiales en su manera de presentarse ante sus seguidores. Estomba llamaba a sus actitudes dramáticas: sus expresiones.

Poco a poco, Estomba fue especializándose en expresiones. Tenía una para tocar la Patética y otra para la Polonesa. Antes de cada concierto ensayaba frente al espejo aquellos gestos. El público, frenéticamente adicto, tomaba aquellas expresiones como espontáneas y las acogía con vehemencia, ruidosos aplausos y bravos pataleos.

De pronto, el primer síntoma. El público advirtió que algo raro pasaba en sus interpretaciones. La verdad era que Estomba había tocado la Catedral Sumergida con la expresión de la Marcha Turca, todo un revoltijo. La catástrofe llegó poco más tarde pues los médicos diagnosticaron amnesia lagunar. Las lagunas correspondían a las partituras. En el lapso de veinticuatro horas, Estomba se olvidó para siempre de todos los nocturnos, preludios y sonatas. Lo asombroso fue que no olvidó, para nada, ninguno de sus gestos ampulosos y afectados que acompañaban a cada una de sus presentaciones.

No, nunca más pudo ofrecer un concierto de piano. Para su consuelo, algunos amigos íntimos todavía iban los sábados por la noche a presenciar su mudo recital de expresiones, vacías ya de música y teñidas de un manto teatral dramáticamente absurdo.

La comunicación política y el accionar de los medios masivos de comunicación como la televisión y la radio, operan como un gran escenario en el que los protagonistas-intérpretes, a la manera de Estomba: políticos de toda índole, líderes de opinión y dirigentes sindicales, ponen en marcha estrategias de *teatralización* a través de expresiones dramáticas cuyo objetivo no es otro que el *impresionar* a la sociedad civil para cautivar su adhesión o, en su caso, construir una opinión pública en la que todo gire alrededor de la nueva santísima trinidad democrática: información, comunicación política y técnica.

En Bolivia, durante los últimos 17 años, desde 1983 cuando empiezan a transmitirse las primeras señales de los canales de televisión privados, el fenómeno de la comunicación política ya escribió su propia historia; empero, ¿cuáles son los rasgos centrales que permitieron convertir a los medios de comunicación en nuevos actores políticos? ¿Qué características resaltan para la formación de opinión pública en Bolivia a través de la acción ejecutada por la televisión, la radio y la prensa escrita? ¿En qué circunstancias se producen las adhesiones sociales a los partidos y programas políticos durante los procesos electorales, tanto municipales como presidenciales?

Este ensayo responderá estas interrogantes a partir de la formulación de hipótesis interpretativas sobre la construcción de liderazgos a través de los medios de comunicación y la acción que éstos desarrollan dentro de un sistema político democrático, así como dentro de los procesos electorales. El marco teórico conceptual está orientado por dos

trabajos del sociólogo y antropólogo Georges Balandier, quien estudia los rasgos más problemáticos de lo que viene a ser una teatocracia en la política.¹¹⁴

Los cambios en la forma de ejercer el liderazgo y la irrupción de un nuevo actor político

A pesar de los pocos estudios sobre el fenómeno de la comunicación política en Bolivia, la fuerza de los hechos muestra que en nuestro país existe, por lo menos, un canal de televisión por cada 70.000 habitantes. Al mismo tiempo, el auge de la comunicación social como profesión asciende a 10 centros de enseñanza, sean éstos facultades o carreras pertenecientes a universidades públicas o privadas, concentradas principalmente en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Además, tenemos también 100 estaciones de televisión legalmente establecidas en todo el país desde su instalación en 1983; solamente entre La Paz y El Alto contamos con 11 canales para una población que asciende al millón y medio de habitantes; ambas ciudades acceden a la emisión permanente de 186 radios, 7 periódicos y 5 semanarios. Por lo tanto, las tendencias muestran que en Bolivia existen, por lo menos, una radio por cada 12,000 ciudadanos y un medio escrito diario por cada 300,000 personas. A esto se suma, según estimaciones, que entre el 70 y el 85 por ciento de toda la información que circula en el país es, ante todo, información política.

Esta explosión de medios de comunicación tiene su razón de ser en las condiciones democráticas con que contamos desde octubre de 1982. Durante las dictaduras militares, la

¹¹⁴ BALANDIER, Georges. **El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación**, Paidós Studio: Barcelona, 1994; **Modernidad y poder**, Júcar: Gijón, 1990.

radiodifusión estuvo acostumbrada a ser el baluarte para la libertad de expresión y la denuncia sobre vejámenes a los derechos humanos. En este sentido, es paradigmático el camino recorrido por radio Pío XII en los centros mineros de Oruro y Potosí. Una vez fenecidos los traumas autoritarios, los comunicadores sociales seguían autopercibiéndose como los protagonistas fundamentales de la libertad de opinión e información, pues están acostumbrados a decir que, si no fuera por ellos, el poder y sus consecuencias quedarían ocultos detrás de sus prerrogativas.

La comunicación y el periodismo en Bolivia están convencidos de que han hecho visible al poder e iluminan la ruta por donde camina nuestra democracia; además, no es raro escuchar a los reporteros de los periódicos, radios y canales de televisión, decir que los futuros líderes políticos del país habrán de ser reclutados de los medios de comunicación. Esto, para algunos no es sólo convencimiento, sino un requisito de legitimidad para los liderazgos democráticos.

La instauración de un régimen político de democracia representativa desarrolla, al mismo tiempo, las condiciones necesarias para implantar cuatro objetos de consenso político con los cuales funciona nuestra democracia:

- a) La aceptación de valores fundamentales como la libertad, igualdad y ciudadanía que nos diseñan todo un sistema de creencias para convivir dentro de un Estado de Derecho.
- b) Las elecciones generales y municipales como el conjunto de reglas de juego o procedimientos dentro de las cuales se definen los límites y la titularidad del poder, razón por la cual cobran resonancia las estrategias para influir en la opinión pública y orientar a los votantes mediante procesos de comunicación política.
- c) La instauración de diferentes gobiernos consecutivos y de políticas gubernamentales específicas.

d) La formación de un sistema de partidos como las instituciones democráticas por excelencia que hacen de intermediarias entre la sociedad y el Estado.

De cualquier manera, fundar la democracia no es lo mismo que aprender a preservarla y comprenderla día a día en su dinámica cotidiana. Es aquí donde hacen su entrada los medios de comunicación, amplificando los problemas irresueltos de la democracia boliviana, condenando a los políticos y dramatizando los conflictos sociales.

Los canales de televisión como el Sistema de Radio y Televisión Popular (RTP), junto con Radio Metropolitana, tienen una programación de noticieros con rasgos eminentemente políticos, pues RTP perteneció al desaparecido comunicador y líder de Conciencia de Patria (CONDEPA), Carlos Palenque. En sus programas como la *Tribuna Libre del Pueblo* y diferentes noticiarios, se pone en marcha la producción de imágenes a través de la manipulación de símbolos y el ordenamiento de un cuadro ceremonial para favorecer al partido y al líder que aparece ante las cámaras.

No es novedad el hecho de que el nacimiento y fortaleza de CONDEPA desde 1988, está fuertemente ligado al poder comunicacional de RTP. Lo llamativo es que Palenque se ha convertido en el paradigma de la teatralización y la dramaturgia a seguir, tanto para los políticos como para algunos líderes de opinión que quieran sobresalir en la comunicación. Su estilo de liderazgo era el espectáculo, pues con su medio de comunicación puede permitirse el hacer ver, más que pensar. Es decir, tal estilo dirigía una política de la imagen que se inspiraba, inevitablemente, en el arte dramático. El poder de CONDEPA todavía se asocia a una elaboración comunicacional que otorgaba a Palenque y a su cúpula, presencia y celebridad, haciendo de ellos personajes capaces de atraer hacia sí mismos la más amplia adhesión y confianza a través de una exhibición afectiva; por lo general, importaba la presentación de actuaciones correctas en función de un sacrificio (beneficencia o estar al

lado de los débiles) para mantener una fachada. Una vez construida la imagen con signos adecuados y después de haber ganado experiencia en su manejo, la teatralización comunicacional describe un favorable estilo político en el liderazgo.¹¹⁵ Este estilo lo heredaron también dos ex miembros de la familia RTP-CONDEPA, los ex-alcaldes de La Paz: Julio Mantilla y Mónica Medina viuda de Palenque.

Lo que se critica en este tipo de comunicación política y en el papel que juegan los medios de comunicación es, tanto el carácter perverso con el que se producen noticias o se monta ciertas imágenes, como la amplificación o banalización de los hechos noticiosos según los intereses políticos del partido y del mercadeo comunicacional.

El estilo periodístico de Palenque para ayudar a la comunidad o polemizar los hechos agrandándolos, ha sido emulado por otros medios de comunicación, ya no con fines políticos, sino con fines comerciales de competitividad por los *ratings* de audiencia y la espectacularidad.

Junto al liderazgo político forjado al calor de la comunicación social, están los líderes de opinión encarnados en analistas periodísticos como Carlos D. Mesa Gisbert, célebre por sus noticias comentadas y su programa televisivo *De Cerca*, donde el *show* y la teatralización afloraron hasta la risa durante una entrevista con el diputado Mario Rueda Peña en 1991, llegándose a banalizar de tal manera los problemas de la democracia que fue necesario publicar un libro para aclarar los hechos sobre dicha entrevista¹¹⁶.

¹¹⁵ Sobre la relación entre fachada, expresiones, escenarios, realización dramática y mistificación, ver: GOFFMAN, Erving. **La presentación de la persona en la vida cotidiana**, Amorrortu: Buenos Aires, 1971.

¹¹⁶ Curiosamente, el título del libro era **Debate entre Gitanos**. Un debate ambiguo, superfluo, casi inexistente a no ser por el espectáculo que propició: un debate entre gitanos, prestidigitadores, adivinadores, seres enigmáticos y dotados, por una noche, de una fuerza sapiencial que solamente el set de la televisión puede construir.

Otro líder dramático es Eduardo Pérez Iribarne, director de Radio Fides, experto en la grandilocuencia, los gestos ampulosos y afectados ante las cámaras cuando era conductor del noticiero nocturno *Perspectiva*, de canal dos en 1995; así también resaltan otros periodistas como Cayetano Llobet, Cristina Corrales, Oscar Peña Franco, los hermanos Limpias en Santa Cruz y muchos otros jóvenes que gozan de credibilidad, aceptación, una aureola de admiración y fuertes cualidades dramáticas para desenvolver expresiones teatrales. Muchos de ellos fueron, o son, considerados como fichas potenciales en la candidatura a la presidencia o vicepresidencia de la república, candidatos a la Alcaldía y, hoy por hoy, a diputados uninominales.

En Bolivia, parece ser que el liderazgo está transitando del *liderazgo épico*: racional, revolucionario, testimonial y heroico, que impregnó nuestra historia desde las jornadas de abril de 1952 y se acentuó con la acción política de la izquierda revolucionaria, al *liderazgo lírico-comunicacional* de los 80 y 90, para quien el drama, espectáculo y apariencias son las condiciones de conversión en el actor político democrático. El gran actor político forjado dentro de los medios de comunicación dirige lo real por medio de lo imaginario.

El universo comunicacional: los discursos, el clima de opinión y las campañas políticas

El universo comunicacional está teñido de dramaturgia en la que se diferencian dos registros; por un lado, la teatralización que tiene lugar en el sistema político: en los partidos con sus denuncias de complots o sabotajes, en el Parlamento a través de enfrentamientos, riñas, huelgas de hambre en el hemiciclo, interpelaciones a ciertos Ministros de Estado o escándalos de corrupción, en las sesiones de gabinete y las conferencias de prensa oficiales

del gobierno, donde se reclama, permanentemente, la ejecución imprescindible de una política comunicacional; por otro lado aparece el registro dramático que la propia sociedad civil ejerce ante los medios de comunicación para provocar compasión: marchas de protesta, mitines de sectores sindicales con línea ideológica dura, acciones de violencia, declaraciones y burlas de la ciudadanía hacia el poder oficial y, por supuesto, los sondeos de opinión por hilo directo que los medios de comunicación desenvuelven para descubrir los grandes problemas nacionales. Es posible que la sociedad civil oriente también su cultura política, de acuerdo con rasgos teatrales, amplificadas por la televisión o la radio.

En ambos registros: la dramaturgia que sucede en el sistema político y la que emana de la sociedad civil, los argumentos y las razones para exponer sus posiciones son opacas o, muchas veces, inexistentes pues prima la teatralización y alarma ante las cámaras y la radio emisión. De esta manera, los conflictos sociales y políticos quedan subordinados y se hacen visibles, según lo que muestran e interpretan los medios de comunicación. De esta manera, la realidad reproducida en la noticia es un conjunto fragmentario que depende de las condiciones perceptivas del periodista, de la significación informativa intrínseca del dato noticiable, de la disponibilidad espacial en el medio, de las pautas marcadas explícitamente o no por la línea editorial que se defiende y por otros factores exógenos¹¹⁷. Lo noticioso, en

¹¹⁷ En la presentación de los resultados finales de una encuesta importante: **La seguridad humana en Bolivia, percepciones políticas, sociales y económicas de los bolivianos de hoy**, el 27 de septiembre de 1996, el periodista Carlos D. Mesa, al comentar el documento afirmó, sin reparos, que la mayoría de las opiniones políticas parecen ser más la posición de los medios de comunicación antes que lo que **realmente** piensa la ciudadanía; pedía revisar las noticias de los cuatro primeros meses de 1997 y, según él, existirá un paralelo entre la interpretación de los hechos por los medios, y los datos de esta importante encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y el Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB) de la Vicepresidencia de Bolivia.

los medios de comunicación, es, de manera similar a lo que ocurre con un guión teatral, una construcción con intensas dosis de imaginación.

Durante la información de los acontecimientos, la radio y televisión emplean cortinas musicales de películas para dar a los hechos noticiosos un aire dramático, alegre o incierto. Esto da la impresión de que los medios de comunicación cubren el escenario político, lo digieren y lo muestran a la opinión pública según los cánones de un horizonte ceremonial. Muchas veces, es por su fuerza dramática por lo que los líderes políticos o cívicos son reconocidos, o por lo que los antihéroes son ridiculizados en el universo comunicacional.

No es una exageración afirmar que el periódico *La Razón* y muchos canales de televisión, satirizaban sistemáticamente al desaparecido líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Max Fernández durante las elecciones presidenciales de 1993, al mismo tiempo que ensalzaban la justeza y novedad encantadora del binomio entre Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas. Fruto de la influencia de los medios de comunicación, los líderes partidarios obtienen su calidad de héroes o antihéroes, no del nacimiento, el programa político o la formación recibida, sino del arte de actuar, aparecer ante la prensa, provocar adhesión, recibir el poder o fingir recibirlo. Por lo tanto, la sorpresa, la organización de una conferencia de prensa montada, y el presentar éxito en las encuestas prefabricadas, son las tres leyes del drama que otorgan notoriedad a la política y al liderazgo comunicacional en democracia. Ahora bien, este fenómeno no solamente resalta en Bolivia, pues el drama y teatralización de lo grotesco tuvieron, en el destituido presidente del Ecuador, Abdalá Bucaram, su más pulida expresión ante la prensa.

Por otra parte, mucho se dijo que en medio del desprestigio y la deslegitimación de los partidos, son los medios de comunicación que se han convertido en los nuevos actores

políticos, no solamente por su credibilidad, sino porque establecen una conexión entre las demandas de la sociedad y el Estado. Al respecto, es importante decir que, en efecto, los medios de comunicación sí son capaces de articular demandas sociales, pero no de agregarlas; es decir, de hacer una síntesis de aquéllas y convertirlas en decisiones gubernamentales o en políticas de Estado.

Sin embargo, incluso al articular las demandas, los medios las reinterpretan, simplifican y, en no pocos casos, las banalizan pues lo que les importa es dramatizar los discursos sociales y políticos; en consecuencia, existe la posibilidad de que las demandas sociales, en manos de los medios de comunicación como nuevos actores políticos, terminen siendo algo diferente y difuso de lo que originalmente fueron. En las noticias sobre capitalización de empresas estatales, la Ley de los Fondos de Pensiones, la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), o en los datos sobre la elección de diputados por circunscripciones uninominales, existe tal cantidad de información con diferente perspectiva y énfasis, que los medios de comunicación contribuyen a crear un clima de opinión confuso y, en gran medida, turbio.

Finalmente, es durante los procesos electorales donde el papel de la comunicación política y de los medios masivos de comunicación, alcanzan un tono teatral al rojo vivo. Durante las elecciones presidenciales o municipales se requiere el arte de la persuasión, del debate con guirnaldas, de la capacidad para crear efectos que favorezcan la identificación del votante con el candidato. Se dramatizan los procesos electorales donde las campañas proselitistas por televisión muestran una tendencia de la comunicación política hacia la *personalización*. El juego pirotécnico de colores, enfoques de primer plano y poses estudiadas de los candidatos, conducen hacia la personalización; es decir, hacia la identificación del poder con quien lo encarna o busca encarnarlo.

Los resultados inmediatos de la personalización en las campañas, entretejidas de candidatos-personajes, llegan a convertirse en lo que algunos sociólogos de la comunicación han denominado la *vedettización* de los políticos y el surgimiento de la democracia como espectáculo. El objetivo central de toda puesta en escena durante las propagandas electorales es aparecer, lucirse, seducir, hacer creer; en suma, lograr una detallada y relampagueante fotogenia electoral.¹¹⁸

El liderazgo personalista del *marketing* político hace que, deliberadamente, se busque el toque de humor y se cultive la característica. La consecuencia es la reducción de la política a las anécdotas; en medio, el elector-televidente se pronuncia menos sobre la orientación política, la ideología de los partidos o el grado de solvencia de los programas y ofrecimientos, que sobre los actores-fetiches.

Evitando las cuestiones de fondo o las discusiones racionalmente respaldadas, ingeniándose para simplificarlo todo, los *kitchen cabinet*, como diría Mario Vargas Llosa durante su experiencia como candidato, de las oficinas de campaña pretenden estimular sentimentalmente a los electores adormeciendo su sentido crítico, y preparándolos a su vez para reaccionar instintiva e irracionalmente frente al líder.

Los asesores en comunicación política harán estudiar al candidato las poses durante las proclamas, los gestos durante los discursos, el tipo de ropa a lucir en los mitines, agregando también una dosis de slogans, frases hechas a medida y, sobre todo, adiestrándolos acerca de cómo y cuándo huir de los debates en público, de acuerdo con las

¹¹⁸ Cfr. DADER, José Luis. "La personalización de la política" y ROSPIR, Ignacio Juan. "Comunicación política y procesos electorales"; en: MUÑOZ ALONSO, Alejandro. **Opinión Pública y Comunicación política**, EUDEMA Universidad: Madrid, 1990.

tendencias de las preferencias electorales que previamente se recogieron en las encuestas diseñadas por cada partido político.

A esto se suman las cifras multimillonarias que los partidos invierten en los procesos electorales de comunicación política. Una de las estimaciones más modestas considera que en las elecciones presidenciales de 1993, el costo total de todas las campañas llegó a los cinco y medio millones de dólares. Hoy día, hacer política es relacionarse con una actividad sumamente cara, sin control estatal sobre la procedencia de los fondos para solventar las campañas, y con peligrosas inyecciones de dinero que podrían venir del narcotráfico o la extorsión.

Colofón: Hacia una democracia reflexiva o cómo evitar los efectos no deseados de la dramatización política

Los medios de comunicación en Bolivia son, efectivamente, un nuevo actor político con mucha influencia y poder. Sin embargo, sus perfiles espectaculares y teatrales hacen correr el riesgo de que la sociedad y sus líderes olviden los problemas de fondo que debe afrontar nuestra democracia para consolidarse, congelándose en un mar abierto de estrategias tendenciosas para confundir a la opinión pública. Los sondeos de opinión y las previsiones electorales difundidas por los medios, llevan el drama de los problemas sociales a un punto álgido de intensidad, muchas veces exagerado e inexistente.

En otras ocasiones, la capacidad de hacer proliferar imágenes políticas ampulosas, declaraciones alarmantes y la búsqueda frenética de notoriedad para poner en movimiento todos los recursos con que cuenta la dramaturgia política: aprovechar los efectos sorpresa, las confrontaciones entre políticos, los sondeos para expresar variaciones de popularidad o

las conferencias de prensa donde se hacen públicas revelaciones reales o aparentes, traen consigo el debilitamiento de la credibilidad en la información y la noticia; es decir, que la ciudadanía espectadora acabe aburrída y desafecta con un enorme agujero negro de incertidumbre comunicativa.

Al enfrascarse en la bóveda dramaturgica de la política, salta la conclusión de que no hay verdad que sea considerada buena para ser dicha. Enfatizar solamente las apariencias, hace que los medios de comunicación se conviertan en escenarios de doble filo, donde, antes de clarificar y despejar las ambigüedades, algunas ilusiones que enmascaran los políticos tienden a convertirse en verdades mostradas bajo la forma de espejismos. De esta manera, los medios de comunicación provocan una especie de neblina en la vida política que no puede transformarse en lluvia; es decir, en una opción organizada con estrategia política para la democracia.

¿Quién dice la verdad, cómo confiar en un argumento o en una declaración, si cada cual, opositor y oficialista, líder político y líder de opinión, busca dramatizar y teatralizar, trivializando los hechos y confundiendo a las audiencias? Los actores políticos massmediáticos utilizan con frecuencia la profusión en la palabra y la confusión, el exceso y la desmesura, lo grotesco y la idealización, cayendo en su propia trampa, porque, lejos de llegar a la verdad de los problemas políticos irresueltos, el horizonte se va convirtiendo en un vaho espeso y sofocante, tanto para la sociedad civil, como para los propios medios de comunicación, donde nos descubrimos a nosotros mismos, al mismo tiempo, como manipuladores y manipulados.

Goerges Balandier afirma que “en un régimen democrático, lo que está en juego en relación con el lenguaje político es la opinión pública. Pero ésta aparece cada vez menos como libremente formada y cada vez más como resultado de la lucha entre intereses,

convicciones y expectativas”¹¹⁹, fruto de la acción teatral y del mercadeo comunicacional en los medios.

De cualquier manera, los medios de comunicación “difunden las cartas geográficas de nuestro mundo, tan inexactas e hipotéticas como las que portaba Marco Polo en sus fabulosos viajes. Pero son las únicas que tenemos”¹²⁰. Además, la democracia no es solamente un régimen de palabras o técnicas comunicacionales. Cuentan también las acciones y las voluntades para revertir procesos perversos.

Sí, el resorte más prometedor que tienen los medios de comunicación son su capacidad para fundar esferas públicas: espacios en los que la participación política se lleva a cabo mediante la conversación y el diálogo. Este es el terreno de la interacción discursiva, una arena que es conceptualmente diferente de otros espacios destinados al desenvolvimiento del Estado y de la economía. No es una arena de transacciones comerciales, sino un espacio para el debate y la comunicación. Los *mass media* nos obligan, justamente, a comunicarnos y a hablar.

La deliberación permanente puede ayudarnos a construir una *democracia reflexiva*, donde se opte a favor de una visión del mundo que nos abra las perspectivas para hacer coincidir elementos difíciles de conciliar: coraje sin fanatismo, inteligencia sin desesperación y esperanza sin ceguera.

¹¹⁹ BALANDIER, Georges. **El poder en escenas...**, ob. cit., p. 156.

¹²⁰ ROJAS RIOS, César. "Las sirenas tecnológicas", en: CLAVES DE RAZON PRACTICA, No. 67, Madrid, noviembre de 1996, p. 76.

9. La Travesía Del Desencanto:

Los Jóvenes Frente a La Política y Al Escepticismo

Música rock, fiestas, actividades en grupo, sexualidad y sensualidad a flor de piel. El mundo joven representa un microcosmos a través del cual podemos ver un caudal de ensueños, así como los perfiles de la transgresión y el rechazo a cualquier imposición de las normas. De los jóvenes, cualquiera sea su origen social, se espera que se rebelen un poco, en especial los varones, y que sean irresponsables, incluso desaforados, antes de sentar cabeza. La espontaneidad, los deseos por experimentar el placer en todas sus expresiones, conforman las expectativas habituales de, y sobre, la juventud.

Alrededor de los jóvenes se ha construido eslóganes que endiosan sus cualidades o, en todo caso, condenan su conducta de rebeldía sin causa. Empero, en la década de los 90 parece que todos los investigadores y expertos en políticas sociales para la juventud se han puesto de acuerdo en una sola idea: la juventud de los noventa en América Latina representa un actor social emergente, al mismo tiempo que atraviesa por serias limitaciones para encontrar alternativas futuras que le permitan un desarrollo con equidad y una posterior inserción en el mundo adulto, pues existe una tendencia preocupante, según la cual, los jóvenes del continente están en camino de constituirse en una generación bloqueada y carente de opciones de futuro.

Paralelamente, las relaciones entre la juventud de los noventa y la política constituyen una interacción ambigua y casi excluyente. Los jóvenes de hoy no son más aquél ejército de combate dispuesto a sublimar sus pasiones para conquistar el socialismo, derrotando la alienación represiva del capitalismo a través de un compromiso con la clase obrera o con utopías colectivistas.

La juventud constituye un grupo social profundamente segmentado y heterogéneo; sin embargo, a pesar de tal heterogeneidad, es probable que la tendencia preponderante de hoy día permita afirmar que los jóvenes de las clases populares y de sectores medios en Bolivia y América Latina contemplan, impasibles, la evaporación de las esferas públicas, desarrollando así comportamientos apolíticos o antipolíticos que favorecen más bien un culto hacia la privacidad individualista. Por lo tanto, ¿qué puede ofrecer hoy día la política a los jóvenes? ¿Qué esperarán éstos de la democracia? ¿Hasta qué punto la juventud tiene interés de participar en la política? ¿Será posible comprometer nuevamente a los jóvenes con ideales mágicos de transformación absoluta, a través de acciones políticas heroicas? ¿En qué consiste la posibilidad de forjar una sociedad libertaria e igualitaria con ayuda de los jóvenes?

El escenario del tiempo nublado

¿Qué significa ser joven? Es una etapa de la vida en que cristalizan la personalidad del individuo adulto, su autoimagen (identidad) y la mayor parte de oportunidades importantes. La juventud significa también aquel período de transición entre el hogar de la casa paterna y la formación de un hogar propio, transición que, además, es el momento donde definitivamente se abren para unos, y se cierran para otros, los cauces de ascenso y descenso social. El tránsito más o menos exitoso, en términos de educación, experiencias formativas y primeras incursiones en el mercado de trabajo, define para los jóvenes la gama de posibles identidades socio-ocupacionales adultas.

En tal sentido, son muy importantes las condiciones de rigidez o fluidez que se manifiestan en las estructuras de estratificación socio-ocupacional, aspecto importantísimo

cuando se discute la equidad en el desarrollo económico y social para Bolivia. Por lo tanto, la transmisión intergeneracional de oportunidades de vida del mundo adulto hacia los jóvenes, es uno de los principales procesos por los cuales se reproduce un tipo de condición social, económica, cultural y política. ¿Qué pasa con la transmisión intergeneracional de oportunidades de vida en los noventa y comienzos del próximo milenio?

Al iniciar el siglo XXI asistimos a un nuevo proceso de ruptura generacional. Las diferencias entre aquellas generaciones de los gloriosos años 60 y estas de los 90 se manifiestan con vivo esplendor. Por una parte, los jóvenes latinoamericanos en general, y bolivianos en particular, enfrentan hoy proporciones de paro o desempleo en la sociedad como nunca antes, razón por la cual se ven obligados a prolongar su estancia en la casa paterna, o enfrentar situaciones de pobreza y carestías permanentes como las que se viven en los países más desaventajados.

Los jóvenes rebeldes de los 60 que pensaban tocar el cielo con las manos de la revolución mundial, pronto terminaron desencantados porque los intentos políticos para transformar las estructuras sociales, finalmente fracasaron o construyeron regímenes autoritarios totalmente diferentes a lo imaginado por sus ideales juveniles. Ante el desplome de los socialismos de Europa del Este, se comprendió que la mejor alternativa viable era defender la democracia representativa, los procesos de globalización mundial de la economía y la libertad de empresa como el antídoto contra cualquier iniciativa que intente, vanamente, socializar la producción.

Empero, la juventud de los 90, testigo de la hecatombe comunista, asume nuestra democracia contemporánea con enorme escepticismo, debido a que reniega por la herencia de incertidumbre y desconcierto que hoy día recibe de sus padres. Los jóvenes revolucionarios de hace dos décadas se atragantaron con dogmas ideológicos como el

marxismo y las teorías sobre la revolución, esto hizo que se encerraran en una jaula de cristal donde sólo vivían del delirio mas no de reales esfuerzos por construir un futuro viable que ofrecer a quienes venían después.

Como diría el filósofo francés Albert Camus, célebre crítico de los excesos por rebelión con utopías cargadas de violencia, “la gran lección aprendida por las generaciones rebeldes de los sesenta fue presenciar cómo degenera un intento revolucionario, puesto que la rebelión abandona poco a poco el mundo del parecer por el del hacer, en el que va a empeñarse enteramente; lo que caracteriza a cualquier revolucionario es la afición al apocalipsis y a la vida frenética. El aparato de los procesos, el juego terrible del juez de instrucción y del acusado, la escenografía de los interrogatorios dejan adivinar a veces una trágica complacencia en el viejo subterfugio por el cual el rebelde romántico, negando lo que era, se condenaba provisionalmente a la apariencia con la desdichada esperanza de conquistar un ser más profundo”. Los campos de concentración soviéticos, los horrendos crímenes de Pol Pot en Cambodia y la crisis inevitable del sistema socialista a finales de los 80, echaron por tierra la tormenta desquiciada por transformar la sociedad al estilo comunista.

En consecuencia, planteamos la hipótesis donde se afirma que nuestra cultura de la modernidad junto a los ideales de transformación absoluta en América Latina, fue el sueño dorado de la juventud de los años 60. Tales ideales de modernidad y revolución crearon un sobredimensionamiento de expectativas que acabaron frustrándose al no encontrar su correspondiente realización efectiva para las actuales generaciones. La modernidad latinoamericana – de la cual es parte la modernidad boliviana – y toda posibilidad de ofrecer una herencia respetable para los jóvenes, se mueve en un escenario donde permanecen sin resolver los problemas de pobreza, exclusión, cultura autoritaria,

dependencia, falta de competitividad de las estructuras productivas y el bombardeo de estereotipos de la sociedad de hiperconsumo, donde los modelos del goce inmediato y el dinero fácil inundan las expectativas de pobres y ricos.

De acuerdo con algunos estudios del *Programa Regional de Empleo para América Latina y El Caribe (PREALC)*, en las tendencias del empleo y del ingreso en los sectores formal e informal hacia el año 2000, llama la atención que el factor determinante de las perspectivas de empleo productivo e ingreso, es la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar en cada país, integrada en su mayor parte por jóvenes entre los 16 y 29 años. Se estima que entre 1980 y fines de siglo habrán ingresado anualmente al mercado de trabajo, 4.1 millones de jóvenes.

Como el mercado de trabajo se enfrenta a un enorme deterioro, además de ser hoy en día fuertemente competitivo, la prolongación de los estudios parece ser una alternativa para los jóvenes, con la esperanza de ingresar con mejores calificaciones a un futuro mercado de trabajo más amplio, dinámico y democrático. Sin embargo, uno de los problemas más grandes que debe enfrentar América Latina en medio de los ajustes estructurales, es la disminución del tiempo disponible para los estudios que tienen aquellos jóvenes provenientes de hogares humildes, problema que, por lo general, termina en la deserción temprana del colegio o el abandono de la formación universitaria; en estas condiciones, una juventud sin formación suficiente opta por ponerse a trabajar de lo que sea y cuanto antes. A su vez, la falta de calificación mínima probablemente dificultará la integración productiva de tales jóvenes en la fuerza de trabajo, arrinconándolos hacia el desempleo, subempleo o la vagancia.

En el caso de jóvenes pertenecientes a la clase media que logran concluir los estudios universitarios, se puede comprobar que éstos también deben alargar su

permanencia en la casa de sus padres, intentando probar mayor suerte con cursos de postgrado para cubrir las serias deficiencias en su formación universitaria, la cual se convierte en una sarta de conocimientos enciclopédicos, obsoletos y, por demás, inservibles para la práctica profesional cada vez más exigente. Varias investigaciones de la *Comisión Económica para América Latina (CEPAL)*, realizadas entre 1991 y 1992 testimonian que muchos empleadores del sector formal se han visto beneficiados por una abundante oferta de jóvenes profesionales, dispuestos a aceptar salarios más bajos que los que hubieran aceptado otros jóvenes de su misma edad hace dos o tres décadas.

El resultado inmediato, fácilmente muestra que la sociedad actual no es capaz de heredar igualdad de oportunidades, ocupación e ingreso. Ser joven en esta década no significa casi nada, tan sólo un estigma: formar parte de lo que Douglas Coupland llamó en una de sus novelas como la generación X (equis), refiriéndose a los jóvenes nacidos entre los años setenta y noventa. Una generación tarjada, sin rostro o, simplemente, bloqueada; como quiera entenderse.

Las pautas de acción: narcisismo, facilismo, consumo y fatalismo

El imaginario colectivo de la juventud de los 90 se nutre de desesperanza y malestar con el orden existente, buscando adaptarse lo mejor posible al modelo urbano de marginación y exclusión. Es en las grandes ciudades donde el joven es la esponja absorbente de la cultura del consumo masivo, de la homogeneización en los patrones de conducta, así como del uniformamiento en los gustos y en la moda.

A comienzos del nuevo siglo XXI, los jóvenes confrontan una característica particular: son producto y encarnación de los ajustes estructurales, del individualismo y la

muerte de utopías políticas, de la democracia y la tolerancia, mezcladas con una dosis de desilusión sobre el futuro. Los jóvenes entre 15 y 29 años son el espejo de una sociedad donde la pobreza y la economía de mercado van a marcar su personalidad en las próximas tres décadas.

Es en las ciudades donde la juventud modela su identidad, bombardeada por los emblemas de la tecnología que cambia a cada instante sus patrones de conducta. El Internet, la telefonía celular, la electrónica y los medios de comunicación configuran un clima donde los jóvenes ya no expresan una inclinación revolucionaria para luchar por un nuevo orden social. Todo lo contrario, la juventud latinoamericana que ingresó al tercer milenio, está interpelada por una sociedad donde la tecnología resuelva todo y donde los momentos de ocio y placer son cada vez más atractivos. Cuando irrumpen momentos de transgresión, los jóvenes tratan de conformar grupos cuyo objetivo es poner en práctica distintos mecanismos para fugarse de la realidad, buscando determinadas fuentes de éxtasis: el orgasmo, la violencia (en particular los actos de suicidio y los enfrentamientos en pandilla) y la experiencia mística, a la que es posible acceder a través de la frondosa oferta religiosa o metafísica que el mercado también pone al alcance.

Los jóvenes de hoy han borrado de su memoria histórica todo tipo de utopías colectivistas y toda inclinación por la política como práctica epopéyica o como compromiso con un proyecto de futuro. Las épicas jornadas de la revolución cubana, las imágenes del Che Guevara, las historias sobre la masacre de Tlatelolco en México, sobre la revolución universitaria en Córdoba, o los esfuerzos para alcanzar la democracia durante los períodos dictatoriales, son un conjunto de episodios históricos cerrados al vacío. Los jóvenes no los recuerdan ni los mencionan. No los conocen ni se interesan por conocerlos. La participación política de la juventud latinoamericana se encuentra nublada por la tormenta

del narcisismo contemporáneo, en una época donde aparece el individualismo, propio de una cultura de la modernidad en crisis.

Los jóvenes podrán votar una y otra vez, o ser el centro de un discurso político que los reclame como conductores del mañana. Sin embargo, el problema radica en que la privacidad y el individualismo constituyen hoy los nuevos perfiles de la identidad juvenil. Ésta ya no se plantea la posibilidad de participar en los asuntos públicos de nuestras sociedades, y cuando lo hace, brota fácilmente un comportamiento reactivo y violento sin rumbo definido como la conducta errática y desastrosa del movimiento armado agrupado en *Sendero Luminoso* del Perú.

El individualismo juvenil de los 90 y 2000 vive absorbido por la privacidad, lo cual representa, quizás, uno de los efectos más llamativos para constatar el desplazamiento de lo público hacia lo privado. Así pues, los jóvenes de esta década están más fuertemente interpelados por los mensajes de la sociedad del goce y del individualismo posesivo, que por los valores de una doctrina igualitaria. Son escépticos en relación con las posibles virtudes de la democracia y la tolerancia políticas. Más los inspira aquellos estereotipos del *yuppie* que está dispuesto a todo para ganar dinero rápidamente, con tal de pasarla bien y evitar lo menos posible preguntarse por el sentido de la vida.

Los sujetos narcisistas jóvenes representan seres insolidarios que encaran la política, y toda esfera pública, con escepticismo, desinterés y profundo temor por lo que traiga el futuro. La conducta política de la generación equis se asemeja más a las distintas caras de un dado que al ser lanzado revela cierta ductilidad dirigiendo su voluntad en función de elegir lo que mejor convenga. El dado pragmático-individualista da vueltas y brincos manteniendo abiertas una serie de opciones posibles para probar de todo. Se deja arrastrar

por el azar, cediendo toda la responsabilidad al juego de múltiples caras quienes deciden qué personalidad debe adoptarse, y por cuánto tiempo mantener un disfraz.

Les cuesta asumir que el esfuerzo y la disciplina honesta de largo aliento puedan traer algún tipo de beneficios; están más preocupados por consecuciones inmediatas que no demanden mucha inversión de tiempo y sacrificios. Su problema es controlar los nervios de un mundo dominado por grupos de poder transnacionales cada vez más fuertes, por la prisa y la información inabarcable. Un mundo donde en el punto de llegada, se confunde la prisa con la eficacia, la información con el saber y la meta con la velocidad, como si la vida fuera una competición olímpica sin parar: más alto, más rápido, más fuerte o más astuto, así sea sacrificando una serie de valores éticos.

La generación actual tiene mayor acceso a información, tecnología, ciencia y artículos de consumo como nunca antes. Sin embargo, lo que más caracteriza a la juventud contemporánea es, tal vez, su actitud contemplativa respecto del *status quo*, pues, hoy día, los jóvenes no se interesan por cambiar la realidad social, sino aprovechar todo resquicio para adaptarse al mercado y actuar en función de satisfacer deseos y expectativas inmediatamente, dentro del marco de su situación económica y cultural. Así surge una marca decisiva: abrirse un espacio en el mercado, pelear por él y enfrentar todos los riesgos que aquello implica. ¿Significa esto que los jóvenes perdieron su sentido de rebeldía? No, todo lo contrario, la rebelión juvenil permanece para acentuar dos tipos de fenómenos: por un lado, obtener lo que quieren, así sea violando todo tipo de normas; por otro, rebelarse contra toda utopía política.

Entre el pragmatismo y la instauración del caos

La discoteca, el grupo de barrio de la esquina o el club de *joda*, se convierten en los (únicos) espacios privados donde el ritmo vertiginoso de la música y el ocio demanda de los jóvenes un constante incremento de placer a expensas de no estar jamás alegres. Estudian poco, pues de lo que se trata es de ser pícaro, todo les da lo mismo. ¿Acaso no tienen ilusiones? Por supuesto, una de ellas es esperar la noche para dar vueltas y vueltas, bailar, beber, divertirse hasta quedar hecho polvo.

La juventud del Tercer Milenio en Bolivia y América Latina no tiene un carácter subversivo como para trastocar los patrones de la sociedad actual, sino que se acomoda pragmáticamente al *stato quo*. Esto es muy perceptible en los jóvenes de estratos medios y altos, donde buena parte del despertar juvenil discurre en el seno de la familia, con relativo apego a los roles sociales y al orden establecido. En la medida en que la situación económica de las capas medias y altas no constituye un obstáculo para la satisfacción de expectativas, los jóvenes se aprovechan del estatus juvenil para librarse de los deberes, las responsabilidades y las estructuras adultas.

En los jóvenes de estratos medios y altos existe una orientación hacia la sensualidad y al consumo masivo de actividades de recreación; es en la fiesta donde la juventud de estas capas muestra sus estereotipos: las comparsas carnavalescas de Río de Janeiro que ostentan lujo y voluptuosidad, van articulando fraternidades en las que se combina el hedonismo sin restricciones, con el despilfarro de dinero. El exhibirse atractivo (a) es una oportunidad para codearse con el exceso y la ruptura de los tabúes que no solamente son tolerados, sino esperados: trasnochadas, consumo de alcohol, drogas y relaciones sexuales.

En las discotecas o fiestas de colegios acomodados ocurre lo propio. La diversión y la búsqueda de placeres, estimulados constantemente por medios de comunicación sexualizados, construyen un escenario donde la juventud pretende ensalzar el caos. No existen preocupaciones económicas o temor por el futuro, sino que aparece con fuerza el dejar hacer y dejar pasar lejos de la mirada controladora de los adultos.

Al abandonarse ante el placer de todo tipo sin pensar en límites, tampoco expresan una forma especial de protesta contra el orden existente; todo lo contrario, no interesa protestar contra nada, sino solamente agruparse y probar experiencias que rompan con lo convencional o encuentren un espacio en el que, a momentos, todo parece ser posible: conducir frenéticamente a riesgo de accidentarse en una avenida, desatar riñas sangrientas en algún bar, ver pornografía en vivo a través de Internet con tarjeta de crédito, dedicar horas de horas para el culto al cuerpo y crear toda una red de códigos secretos para explotar al máximo su diferenciación de los estratos bajos. La solidaridad es algo ajeno, pues en medio de aquella búsqueda por instaurar el caos, no hay tiempo para ponerse sentimental y nivelar las desigualdades sociales.

Entre los jóvenes de estratos bajos existe otro tanto de comportamiento pragmático para responder, a través de los medios que fueren, a la situación de carestía y pobreza. No buscan construir un espacio caótico y expuesto al placer ilimitado, sino que se conectan más temprano con el mundo adulto: el trabajo. Ambos, jóvenes y adultos de estratos bajos se enfrentan por igual al desempleo, elaborando una serie de estrategias de solidaridad, intercambio y reciprocidad para adaptarse a los cambios económicos de los ajustes estructurales.

Los jóvenes de estratos bajos tampoco son portadores de ningún proyecto que vaya a comprometerse con una sociedad nueva o que tiendan a ser reclutados por grupos

antisistema para acciones políticas violentas. Las grandes metrópolis también los encandila con la modernidad y el consumo, aunque sus aspiraciones se vean limitadas por la pobreza; por esto el pragmatismo se presenta como la mejor arma para enfrentar una situación desventajosa. No importa trabajar en lo que esté disponible, con tal de lograr una fuente de ingresos para la satisfacción de necesidades básicas, de ahí que la delincuencia o la formación de pandillas en algunos barrios bajos de El Alto, Lima, Bogotá y Caracas, sean un mecanismo para que los jóvenes hagan frente al orden existente, buscando adaptarse lo mejor posible a las estructuras urbanas de marginalidad.

La pandilla se convierte en un instrumento de defensa y, en gran medida, puede ser la posibilidad para conseguir beneficios materiales que la familia pobre o de escasos recursos no puede satisfacer. Importa muy poco la observación de códigos de conducta drásticos o una ética de renuncia y sacrificio; los jóvenes de estratos bajos también quieren gozar del consumo, por lo que sus actitudes y ambiciones se asemejan más a las distintas caras del dado pragmático-individualista.

Por esto, la juventud de estratos bajos fácilmente puede combinar su apego a raíces étnicas y populares con su aceptación del rock o de códigos culturales occidentales. Las identidades juveniles indígenas pueden darse la mano con la música *tecno* o el *trush*. Asimismo, su adaptación al mundo del trabajo los obliga a no terminar el colegio y aprender un oficio. No importan los estigmas sociales que desvalorizan una u otra ocupación, sino cómo hacer frente una situación compleja.

Los espacios para el placer y la diversión también tienen otro tipo de expresiones. Sin atender mucho al desprecio que viene de estratos medios y altos respecto a la discoteca popular o a la moda de baratijas, los jóvenes de estratos bajos concentran un conjunto de prácticas que no se rebelan contra las estructuras en ningún caso, sino que tratan de ganarse

su propio espacio, integrándose a una cultura híbrida que se alimenta de modernidad occidental, identidades indígenas como en Ecuador, Perú y Bolivia, junto al combate contra la pobreza.

En consecuencia, los sentimientos de la actual generación en Bolivia están modelados por la lógica de competencia, pragmatismo e insolidaridad. Ahora bien, esta generación tiene, al parecer, las siguientes ventajas comparativas con relación a los jóvenes radicales de los sesenta o respecto de aquellos pertenecientes a la transición democrática del ochenta. En primer lugar, la juventud de los noventa no teme competir para nada, pues desde los deportes hasta la ubicación de un puesto de trabajo, tratarán de abrirse paso a codazos. Saben que el Estado no les dará ningún beneficio o subvenciones como en su momento las recibieron sus padres.

El adaptarse a un régimen de competitividad acentúa el individualismo y, a su vez, refuerza el ego, convirtiendo a los jóvenes en seres más arrogantes pero, al mismo tiempo, más exigentes consigo mismos porque deberán enfrentar la pobreza, desempleo, marginalidad o desaliento con mayor confianza en lo que son o en lo que pueden llegar a hacer. En consecuencia, la juventud de fin de siglo o de proyección hacia el 2000 no busca la protección de instituciones supra-individuales o absorbentes como el partido político, Iglesia, comunidad cultural o patrones tradicionales de conducta que pretendan coartar expectativas. Nuestros jóvenes quieren ser más libres para pelear contra lo que venga en medio de la competencia, aunque esto, no necesariamente se relaciona con el advenimiento de una generación más responsable.

En segundo lugar, el pragmatismo cultivado por los jóvenes de hoy representa la posibilidad de ser más realistas, rechazando posiciones ideológicas que planteen cualquier utopía política o social como en los mejores momentos del comunismo. Esto es una ventaja

porque la juventud ya no se siente en deuda con ningún más allá o con un horizonte celestial, supuestamente mejor que el de ahora. Los jóvenes del dos mil defienden con mayor claridad sus intereses personales en lugar de fórmulas políticas colectivistas que cuando se pusieron a prueba, terminaron en violencia o totalitarismo. Así se abre la posibilidad para desconfiar de dogmas ideológicos, ya que el pragmatismo permite ejecutar diferentes tareas considerando su factibilidad de acuerdo con factores objetivos, en vez de ideologías metafísicas o la apelación a jornadas militares para intercambiar violencia por cambio social. Este es un elemento muy positivo, pues las actuales generaciones en Bolivia ya no valoran a la violencia o al traumatismo como instrumento para conseguir metas políticas. El aspecto negativo del pragmatismo juvenil se relaciona con la insolidaridad y aquella visión descarnada donde el bien común tiende a evaporarse porque los competidores son vistos como fichas de ajedrez manipulables; es decir, sometidos a fríos cálculos y a una racionalidad instrumental que destruye valores humanistas clásicos.

La violencia que, a su vez, caracteriza también a la juventud, se relaciona más con un conflicto de valores, donde los patrones morales del joven se oponen a la inseguridad, la incertidumbre sobre el futuro o a la indecisión de los padres que no saben cómo ayudar a sus hijos porque no pueden vivir como ellos. La vieja cohesión familiar hoy está inermemente frente a la conquista tecnológica y el atropellado cambio con que amenaza la publicidad; la influencia de los medios de comunicación es más fuerte que la acción pedagógica de las escuelas o la misma universidad. Así, los jóvenes construyen su propio mundo haciendo grupos que se rigen por normas propias y donde la violencia, precipitación o la ausencia de límites, son parte de la vida diaria. Rompen con las normas convencionales del mundo adulto pero se trata de una ruptura de carácter episódico; es decir, por un momento. En ningún momento existe la posibilidad de nuevas alternativas políticas o utópicas, sino más

bien el peligroso abuso para intercambiar valores democráticos con autoritarios, confundir medios con fines y despreciar las posibilidades de reforma que ofrece la democracia política.

El consumo es la nueva marca en el rostro de los jóvenes de hoy. Los investigadores Germán Guaygua, Angela Riveros y Máximo Quisbert, señalan que a través del consumo, la juventud, por ejemplo de la ciudad del Alto en Bolivia, cuestiona la autoridad de sus padres. “Al mismo tiempo, dicho consumo es el espacio donde se generan los cambios. Los jóvenes acuden al mercado de bienes culturales para actuar como consumidores, lo que genera conflicto generacional. En el consumo cultural existe la posibilidad de vestirse mejor (*jeans*, *zapatillas*, *walkmans*, CD, cassettes), especialmente con marcas conocidas, aunque en realidad estén comprando productos imitados. El hecho de tener cierto bien cultural mejora la imagen de uno mismo, baja la frustración y otorga la sensación de momentánea felicidad”.

Las actuales generaciones bien pueden adaptarse a lo que el famoso pensador alemán Herbert Marcuse, definió como el *hombre unidimensional*, aquel organismo precondicionado por la aceptación espontánea de lo que se le ofrece, quien trabaja por antes que contra el *stato quo*, en la medida en que la sociedad de consumo, la tecnología y la publicidad seductora promueven un mar de satisfacciones que genera sumisión, debilitando la protesta. En este contexto, la tensión entre lo actual y lo posible se convierte en un conflicto irresoluble para los jóvenes que perdieron toda posibilidad de cobrarse una revancha contra el sistema.

Vencer la antipolítica: replantear nuestra ciudadanía

La poca participación política de los jóvenes, al parecer es el fruto de tres clases de fenómenos: por una lado está la ausencia de una meta nacional de acuerdo con un proyecto de futuro viable; es decir, no habría la posibilidad de imaginar y trabajar por conseguir un orden social deseado; por otra parte, se encuentra la ya conocida deslegitimación de todo el sistema de partidos políticos, dentro de los cuales la juventud no se ve como parte integral pues prima una lógica patriarcal y no democrática al interior de las estructuras partidarias; finalmente, tenemos la ausencia de políticas públicas claras y bien delimitadas para los grupos jóvenes, lo que hace que éstos consideren a cualquier participación política como algo casi inservible.

Para el sentimiento joven, el éxito en la vida no tiene nada que ver con valores públicos y políticos, como el deseo por cambiar la sociedad de punta a canto. El individualismo antipolítico de los jóvenes privilegia la conciencia de la propia realización pues sus reivindicaciones son particularistas y defensivas. Sus actitudes son, al mismo tiempo, una mezcla entre conductas tolerantes, egoístas y políticamente desideologizadas que fácilmente pasan por alto toda demanda política de largo aliento y donde se impone la preeminencia de lo individual sobre lo universal, de lo psicológico sobre lo ideológico, de lo narcisista sobre lo heroico. En suma, los jóvenes empiezan a desarrollar una cultura antipolítica donde el reconocimiento del otro se logra desde una concentración exclusiva en lo personal y donde el individualismo se transforma, en gran medida, en un refugio de la impotencia.

¿Cómo evitar que nuestra sociedad se arriesgue a perder el capital humano de su futuro? ¿Por dónde encontrar una salida para el callejón donde ha caído esta generación de

los noventa? ¿Cuáles son los medios más aptos para que la juventud desarrolle una conciencia de cambio, no con miras hacia fines metafísicos y utopías perfectas e inviables, sino ante todo para que se ayude a sí misma y recupere un necesario sentido crítico hacia su entorno? La juventud de los 90: pragmática, narcisista y escéptica inventará, de todas maneras, el mundo adulto que está por venir; los jóvenes no son ingenuos, realmente inventan la realidad, la introducen en el mundo adulto y, al convertirse ellos mismos en adultos nos mostrarán todo lo que la sociedad latinoamericana puede o no puede hacer. Sus posibilidades o sus límites se esconden detrás de unos *jeans*.

Al tratar de plantear un nuevo papel que los jóvenes podrían desempeñar actualmente para superar una serie de limitaciones o, simplemente para asumir críticamente la realidad, se hace fundamental discutir y cuestionar el concepto de ciudadanía. De acuerdo con la investigadora argentina Laura Gingold, la transformación de necesidades y carencias en derechos puede verse como un proceso de redefinición del espacio de ciudadanía. Con los jóvenes, lo nuevo es el reconocimiento de la ausencia de ciertos derechos y, a partir del reconocimiento de ser sujeto de derechos, reclamar o exigirlos.

El desarrollo y reconocimiento progresivo de la ciudadanía en los jóvenes de cualquier estrato social, condición étnica y de género, deberá ser un proceso de doble vía. Por una parte, que sea el Estado quien reconozca a los jóvenes como actores sociales emergentes con plenas facultades para merecer un lugar en la sociedad; por otra, que la propia juventud encuentre su voz y movilización para capturar sus derechos y deberes fortaleciendo o creando organizaciones sólidas como aquellas interlocutoras responsables que propongan sus demandas y limiten aquél individualismo absolutista.

¿Qué es la ciudadanía?, sino un derecho a tener derechos sustentado por un sentimiento de pertenencia a la comunidad en un plano de igualdad. Construir una sociedad

libertaria con los jóvenes como masa crítica para no tropezar con abusos autoritarios como la dictadura o el comunismo, exige incorporar toda demanda de ciudadanía en las prácticas institucionales de nuestra democracia representativa. Significa también aceptar que los jóvenes, como actores sociales, poseen desigualdad en términos de poder económico, político, social y de género, reconociendo que, en la mayoría de los casos, se encuentran en desventaja respecto a su pertenencia como miembros de la comunidad. La juventud se repliega en el ostracismo individualista cuando no se ve integrada como parte de la sociedad y cuando ésta no le reconoce un estatus de igual a igual.

Estas concepciones no son sólo otras tantas frases muy conocidas para plantear el poder joven. En el continente, cada día estamos inundados por noticias que testimonian cuántos jóvenes pobres son asesinados en las villas miseria de Río de Janeiro, el Gran Buenos Aires, Medellín, Bogotá, Caracas y Lima, donde los policías ejecutan a miles de adolescentes por los delitos de vagancia, desempleo, drogadicción, homosexualidad y prostitución, bajo los argumentos de defender un orden público ambiguo y una moral ciudadana decadente, la cual discrimina lo que es normal y anormal con criterios cada vez más arbitrarios.

Construir la ciudadanía democrática y libertaria para los jóvenes y otros sectores excluidos de la sociedad, equivale a no mirar a estos actores sociales con desconfianza. Para el premio Nóbel de literatura, Octavio Paz, el insistir en que el control y la represión tengan siempre como blanco de disparo a los jóvenes, es porque todavía se los considera sospechosos; “(...) el fondo psicológico de esta propensión a sospechar es la suspicacia, aprovechada en épocas de crisis (...). La suspicacia es hermana de la malicia y ambas son servidoras de la envidia. Si las circunstancias públicas son propicias, todas estas malas

pasiones se vuelven cómplices de las inquisiciones y las represiones. La delación y la calumnia son alcahuetas de cualquier tiranía”.

Hoy día, siguiendo las previsiones planteadas por el teórico norteamericano de la democracia Robert A. Dahl, los mayores peligros para la libertad no los plantea la igualdad, sino la desigualdad; por lo tanto, el ampliar los criterios de ciudadanía hacia la juventud, implica no sólo abrir nuevos espacios de participación y oportunidades de vida, sino tratar de dar solución a las situaciones difíciles por las cuales atraviesan muchos jóvenes a partir de sus propias experiencias y carencias.

La resistencia de los jóvenes para desarrollar utopías políticas se relaciona con una concepción estática de la sociedad. No les interesa luchar por acceder a una educación superior o a condiciones sociales de equidad absoluta. El acceso a un mercado abierto los obliga a vivir un presente perpetuo sin motivación para imaginar algún futuro; por lo tanto, dejan de creer en la movilidad social. Por ejemplo, el no creer en la educación superior como mecanismo de ascenso social hace que los jóvenes exclamen: “¿para qué estudiar si igual no vas a conseguir trabajo, porque como comerciantes se puede ganar mejor que un profesional!”. Javier Auyero, sociólogo argentino, llamó a este proceso, la descuidadización estructural o el universo simbólico juvenil con aspiraciones de baja intensidad. Vale decir, el reproducirse dentro de un contexto con restricciones (saturación en el mercado de trabajo, baja calidad educativa, bajos ingresos, etc.), fomenta la ausencia de un sentido perseguido en la escolarización: un sentido en la vida. Asimismo la violencia institucional adulta que reclama fiel obediencia hacia lo tradicional, actualmente constituye un factor que tiende a excluir a la juventud de una serie de instancias de decisión, conformando un marco dentro del cual la identidad juvenil está siempre cuestionada, exigiéndosele valores tradicionalistas que ya no pueden funcionar como antes y que tampoco

podrán superar la descuidadización estructural. Estamos así frente a un nuevo clima cultural del 2000 donde los jóvenes, especialmente de sectores populares, lo que esperan del futuro no parece ser algo radicalmente diferente de su presente.

A los jóvenes de los noventa no les interesa la política y menos aún participar en ella, no porque sea un espacio desconocido o excesivamente complicado, sino que tal desinterés se explica porque la juventud no encuentra en lo político un referente concreto para la conformación de su identidad. Al contrario, la política es distante, construida a partir de la prebenda, clientelismo, corrupción y ambiciones personales. Su participación, más bien, aparece mediada por actitudes clientelares de los partidos hacia los jóvenes. Para la juventud, la política es una actividad poco grata y, por lo mismo, vagamente interesante.

En este tiempo de globalización, la vida entre los jóvenes aparece con otro sentido: la lucha no es por la guerra de guerrillas, sino por lograr un lugar en el mercado, luchar contra su propia desmotivación y la desilusión que entre ellos generan las instituciones adultas. Un nuevo clima se está generando entre los jóvenes, fuertemente capturado por la lógica liberal y un nuevo tipo de rebeldía pragmático-individualista.

El escepticismo como crítica de la política y apertura hacia el futuro

El magma casi apocalíptico con que la juventud mira los problemas políticos irresueltos y el fatalismo ante la complejidad de nuestra sociedad actual, no quiere decir que deba proponerse nuevamente el regreso del Estado Benefactor o la política e ideología omnicomprensivas y dogmáticas, siempre predispuestas a ofrecer alternativas autoritarias, populistas o liderazgos mesiánicos.

Todo desconsuelo moral e indignación con las actuales formas de hacer política que se convierte en escepticismo político de los jóvenes, también puede tener un perfil productivo. El escepticismo tiende a construir una actitud política iluminada por la prudencia y la crítica impenitente contra todo lo que brilla queriendo confundirse con el oro de un supuesto paraíso societal.

En esta perspectiva, hay que alimentar un escepticismo político que no trate de resolver los problemas proponiendo soluciones de la noche a la mañana, ni tampoco adormeciendo las voluntades bajo el manto del conformismo y el aburrimiento que nos clausura la existencia dentro de una vida privada y abúlica. El escepticismo sirve para destruir las ideologías del antiguo sistema de valores fundados en fines absolutos: comunismo, revolución y desarrollismo, convirtiéndose más bien en un estímulo que busca reflexionar y, sobre todo, dudar, absteniéndose de participar en las aclamaciones que rinden pleitesía a cualquier salvador o Mesías.

Desde una perspectiva manifiesta, debemos entender al escepticismo político de los jóvenes como una crítica hacia las instituciones democráticas y hacia el sistema social contemporáneo. Al mismo tiempo, el escepticismo demanda recambios ideológicos y nuevas mentalidades; en resumen, precisa una nueva moral y una política diferentes. Indaga, entonces, buscando verdades que, desde luego, no son nunca alcanzadas con plenitud. Se trata de una conducta que pretende labrar la conciencia en el campo de la curiosidad, del relativismo y del reconocimiento de las limitaciones, ya que tiene siempre en la memoria el recuerdo fresco del derrumbe de los grandes proyectos totalitarios del socialismo o el nacionalismo abstruso.

El creciente avance del escepticismo en una cultura compleja y en medio de circunstancias plagadas de incertidumbre, no es la reacción desordenada de un rebelde sin

causa, sino más bien el efecto de la democracia política que nos exige tolerancia y aceptación de valores e ideas distintos a los nuestros. El relativismo es el eje de una sociedad liberal, asegurándonos la convivencia civilizada entre las personas, grupos étnicos, religiones, filosofías y demás creencias. Al mismo tiempo, el escepticismo está fuertemente ligado — más que con los arranques de subversión entuerta — con la desmitificación de la realidad política, económica y social. El relativismo y el escepticismo democráticos inauguran inéditos momentos de escisión donde no hay verdades únicas, sino la aceptación del argumento, posición y opinión diferentes de otro.

El escepticismo liberador se alimenta de acaloradas discusiones cuestionándolo todo, pudiendo fácilmente fundar nuevas esferas públicas en democracia y contagiando los aires de la incredulidad en las charlas de café, en las discusiones familiares, en el trabajo, asambleas, la escuela o la universidad. Así, el caudal más favorable del escepticismo político es esta capacidad para construir esferas públicas, entendidas como aquellos espacios en los que la participación política se lleva a cabo a través de la conversación y del diálogo y, por tanto, en la arena institucional de la interacción discursiva. Este espacio es un teatro para el debate, la deliberación y la creación. No trata de convencer haciendo uso de una comunicación sistemáticamente distorsionada como algunos están acostumbrados a practicar, sino mediante la crítica irreverente.

Si queremos que el escepticismo no se convierta en una conducta soterrada colindante con el nihilismo, entonces debemos fomentar que los jóvenes cultiven una actitud de lucha contra todo monopolio político de la verdad, aceptando que uno puede equivocarse y el otro tener razón, pero que juntos se puede seguir el rastro de las verdades relativas. El escepticismo nos punza en un momento donde nos preguntamos ¿cómo lograr que nuestra sociedad se adapte a los cambios y a un ritmo histórico que combine el

movimiento con el reposo, e inserte lo relativo en lo absoluto a través de una vigilancia crítica?

El escepticismo que caracteriza a grandes sectores juveniles contribuye a evitar la intoxicación ideológica, defendiendo la libre concurrencia de puntos de vista, apoyando una sociedad abierta y rechazando el culto a la personalidad de cualquier líder. Así, es muy probable que el escepticismo de los jóvenes desee convertirse en antídoto para no ser víctima de aquello que tanto aterra a las conciencias despiertas como las de Octavio Paz: “que los sesos se sequen y se dibuje sobre todas las caras la misma sonrisa de satisfacción idiota con la que muchos están acostumbrados a convivir y a embelesarse ingenuamente”.

El desencanto de la juventud de fin del siglo XX y comienzos del XXI puede ser, efectivamente, muy fructífero, pues toda situación crítica fomenta cierto tipo de sensibilidades innovadoras. Una de estas sensibilidades representa la misma política entendida como el arte de lo posible. De tal manera que la revalorización de la política descansa sobre una conciencia renovada de futuro. Vista esta perspectiva, el problema no es el futuro, sino la concepción que nos hacemos de él.

Un mejor futuro no está a la vuelta de la esquina, al alcance de la mano, de la fe o de la ciencia. Pero tampoco es una uva verde que conviene olvidar. Muchas veces nos falta el valor para reconocer que las uvas están maduras y que están más allá de nuestro alcance, que son deseables e inalcanzables, que hay problemas que no podemos solucionar, pero tampoco podemos dejarnos de plantear. “A veces todo está, el surco abierto, la simiente lista, el instante propicio y el fecundo sudor cayendo gota a gota... ¿Qué falta?”, preguntaba el escritor boliviano Franz Tamayo a su generación. Sólo una cosa: intervenir y osar.

10. La Incertidumbre Actual:

Bolivia y Su Liberalismo Ambiguo

En los albores de un nuevo milenio, nuestra conciencia del presente se acopla fuertemente a un mercado libre que rige los gustos, la distribución desigual de riqueza, las relaciones labores y la lógica política de nuestra democracia que clausuró los debates ideológicos para poner en primer plano la articulación de coaliciones y el pragmatismo, en función de que los partidos aseguren su espacio en las estructuras de poder.

En Bolivia, el liberalismo penetró intensamente nuestra economía con artículos de lujo o mercancías tecnológicas. La esfera política busca compatibilizar con el mercado, a través de otro mercado como el electoral para la elección del Presidente, los diputados uninominales y los Alcaldes. Sin embargo, un obstáculo antiliberal como el clientelismo partidario, la corrupción y el abuso de poder por parte de muchos políticos, contribuyen cada vez más a la incertidumbre que tiene la ciudadanía respecto a si la democracia representativa es el mejor sistema de gobierno. De cualquier manera, la preeminencia del mercado posee un referente político donde toda acción estatal, toma de decisiones o cambio de gobernantes, se realiza mediante un sistema de normas democráticas que marcan una nueva época histórica después del fracaso de los gobiernos militares a finales de la década del 70.

Nuestra sociedad civil aprendió a convivir con amplios márgenes de tolerancia y convivencia pacífica. Las reivindicaciones regionales para evitar que todo gire en relación con La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, tuvieron una salida alternativa con la Participación Popular y el convencimiento de que las inversiones privadas son una posibilidad para salir

adelante, a partir de una sociedad regional que organice sus recursos naturales, humanos y económicos con proyectos propios.

Sin embargo, estos rasgos liberales, a momentos se orientan hacia un desorden y confusión inaceptables. La tolerancia con el mercado, la democracia representativa o el poder local al interior de cada sociedad departamental, concede muchísimo terreno hacia la irresponsabilidad de gobernar, demostrada por algunas élites políticas.

El dejar hacer y dejar pasar a la corrupción constata que Bolivia no puede construir una cultura política de control y límites, no solamente para frenar la irresponsabilidad de nuestros gobernantes, sino también para evitar que las élites económicas consideren al país como un galpón gigante en el que todo está en venta y donde la pobreza, que afecta a más del 60% de la población total boliviana, sea considerada como un efecto perverso, necesario de ser expresado en las estadísticas, pero después despreciado por las políticas concretas más elementales.

Somos una sociedad de liberalismo ambiguo; por una parte nos adaptamos a las reglas del mercado, pero por otra, tratamos de destruir al aparato estatal con niveles de corrupción y menosprecio como si todo estuviera en subasta para aprovecharse de las últimas migajas políticas. Los líderes políticos más importantes, así como grandes sectores de la sociedad boliviana, todavía no hemos hecho carne de un valor liberal fundamental: la responsabilidad individual para enaltecer una independencia, en función de nuestra autorrealización. Ser más ambiciosos equivale a conquistar metas superiores mediante el esfuerzo propio.

Estos valores liberales tienen, aunque muchos lo nieguen, una correspondencia con proyectos sociales y colectivos. Es decir, con ambiciones globales en las que cada uno asuma su responsabilidad por el éxito o el fracaso. Nuestro liberalismo ambiguo rescata el

dejar hacer y dejar pasar, pero todavía no una *responsabilidad colectiva* para sancionar a los abusivos del poder o a la negligencia económica que confunde al mercado con saqueo de cuello blanco.

11. Reconfigurando La Práctica Política:

El Nuevo Perfil Para Solucionar Problemas Concretos

En Bolivia y América Latina, las encuestas de percepción o cultura políticas muestran una afirmación insistente: los partidos políticos son víctimas de un descrédito estrepitoso. Algunas de las críticas más duras se ordenan en las siguientes variables: ineficacia, corrupción, incapacidad para representar a la sociedad, incapacidad para democratizarse internamente, intolerancia, ineficacia para reclutar nuevos liderazgos, caudillismo y, como era de esperarse, debilidad para ofrecer un proyecto de futuro que genere adhesiones en la mayoría de los estratos sociales. Por lo menos así lo describen ciertas encuestas como el Latinobarómetro o la Encuesta sobre Seguridad Humana en Bolivia de 1996.

Estas características coinciden, por una parte, con los ajustes estructurales en materia económica donde las alternativas políticas son escasas, ya que las teorías monetaristas y la economía global de mercado dominan la toma de decisiones. Pero por otra parte, el desprestigio de los partidos también se relaciona con el deseo explícito de la población de considerar a la democracia como el sistema de gobierno más pacífico para resolver conflictos de todo tipo. La Encuesta de Seguridad Humana realizada en las ciudades del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, señala que nuestra ciudadanía exige de los partidos mayor atención a escuchar la opinión de la gente.

Hoy día, la sociedad boliviana reclama a su democracia, más de lo que los mismos partidos y la propia política previeron en los últimos diez años. ¿Con la sanción de una Ley de Partidos, se resolverá aquella crisis de credibilidad y representación que enfrenta a nuestro sistema político con el despeñadero?

Pensar que el nacimiento de nuevos liderazgos y agrupaciones políticas significa proponer una nueva ideología de cambio social o ruptura absoluta con el *stato quo*, es creer que la actual sociedad boliviana todavía vive en la época de los grandes movimientos revolucionarios del 52, o en el auge de partidos izquierdistas durante los años 70. Si bien el contenido ideológico de un partido es importante, no es así la estrategia política para canalizar descontentos y mover adherentes. La sociedad boliviana exhibe mucha volatilidad electoral y el voto, antes que ser ideológico, es más bien “instrumental”; es decir, la ciudadanía demanda la combinación de ética y solución práctica a los problemas cotidianos. Este es el núcleo que fue muy bien entendido por los diputados uninominales, a quienes se calificó en algún momento como “mini-alcaldes” o diputados con carácter municipal.

En este sentido, la democracia boliviana se acercó más a las necesidades diarias de la población y devolvió cierta legitimidad al 50 por ciento de la Cámara de Diputados. En consecuencia, las diputaciones uninominales dejaron en segundo plano el debate ideológico, al menos así parecen evidenciarlo los liderazgos de Guido Capra, Juan del Granado o la práctica política de alcaldes como Mónica Medina en La Paz, Manfred Reyesvilla en Cochabamba y Johny Fernández en Santa Cruz.

Antes que el perfil ideológico de un líder, parece que la preponderancia se orienta hacia la “imagen y actitud prácticas” de un candidato ante la población. Esto, además, se relaciona con la notoriedad que adquirió en los últimos tres años el denominado poder local que, tanto con la Participación Popular como con la elección de diputados uninominales, han hecho de la acción política una pugna de soluciones específicas: el cuidado de una calle, el respeto a los derechos humanos concretos, la posibilidad de trámites de usucapión o la defensa de los derechos de las mujeres al interior de sus familias.

El poder local y la demanda de nuevos liderazgos honestos requiere, al mismo tiempo, dejar de lado un planteamiento ideológico totalizador, para dar paso a la construcción cuidadosa de una nueva imagen pragmática que puede hacer ver un líder o un partido. En este caso, la formulación de un programa político viable y realista es fundamental, en función de cumplir lo que se ofrece, porque ya no interesa el discurso en tanto paradigma o utopía, sino la ejecución de tareas específicas.

Los partidos deberán autoexigirse para cumplir lo que plantean, adaptándose a los actuales requerimientos de la política como acción y ya no como ideología. La Ley de Partidos Políticos que ahora rige en Bolivia, brinda el marco referencial para lograr el cambio progresivo. Sin embargo, éste deberá conectarse con una modificación en la acción política misma con el objetivo de alcanzar el cambio social. Es decir, la nueva ley no significará nada, sino se busca una reconfiguración de la política donde los partidos asuman el convencimiento de tener que influir sistemáticamente para transformar la sociedad a partir de soluciones específicas para problemas concretos.

El sistema político tendrá que forjar un nuevo tipo de dirigente: el “gerente social” que recoja, elabore y agregue cualquier demanda de la sociedad civil, haciéndola ver como criterio de utilidad colectiva. Este gerente social no es ni tecnócrata, ni manipulador, sino un operador político cuya función es ser eficiente al enfrentar problemas diarios y, al mismo tiempo, ser un gestor estratégico que no deja de favorecer garantías de funcionamiento democrático y renovación interna en su propio partido.

Reconfigurar la política a través de un gerente social, significa pensar en una estrategia de gobernabilidad progresiva, entendida como una función práctica para revertir las tendencias más excluyentes del sistema social en los planos económico y político-cultural. El modelo de gerente social no es tener en cuenta a un simple activista, pero

tampoco a un profesional superdotado o sabelotodo. Su principal orientación es, sencillamente, cumplir lo que el programa político oferta, y realizar las tareas que permitan construir, poco a poco, patrones de cambio social como parte de un pleno sentido de responsabilidad. En suma, el gerente social deja de ser ideólogo o burócrata modificando el estilo de hacer política, de acuerdo con las demandas cotidianas de la población.

Cualquier liderazgo político debería relacionarse con la capacidad de trabajo y la búsqueda por obtener resultados efectivos, pensando que la acción política es una gestión de responsabilidad orientada a la demanda. Así, la política no puede ser nunca más un cúmulo de sueños sin fundamento, sino la posibilidad real de crear gerentes sociales que combatan también el clientelismo partidario, la corrupción y el abuso de poder por parte de muchos políticos, haciendo carne un valor fundamental: la responsabilidad. Esta necesidad no señala el camino de una cruzada ideológica, sino más bien exige que se deje de lado la vieja confrontación entre izquierda y derecha porque la sociedad parece querer, por el contrario, actitudes de conciliación sin enfrentamientos intransigentes, pero con soluciones viables a una serie de problemas de supervivencia diaria.

12. El Mercado Mundial y Su Imprescindible

Abordaje Más Allá Del Riesgo

Los desafíos del orden liberal y de la economía de mercado en América Latina, se desenvuelven en un escenario donde resaltan, por lo menos, tres variables determinantes: democracia representativa, ajustes estructurales y acción de élites empresariales. Sin embargo, la expansión de los bloques económicos en el ámbito mundial, así como el aumento permanente de la complejidad en economías globalizadas, incorpora también a otros dos elementos que requieren ser analizados: el control de la incertidumbre y la generación de consenso al interior de cada sociedad civil respecto a las estrategias que un Estado debe considerar, tanto para lograr competitividad, como para equilibrar las amenazas de conflicto social.

El orden económico mundial acusa una seria complejidad que hoy día es difícil de entender y, por lo tanto, difícil de convertirse, inmediatamente, en políticas públicas o económicas de largo alcance. Muchos teóricos de la complejidad en un mundo globalizado como James Rosenau, profesor de asuntos internacionales en la Universidad George Washington, consideran que el “orden que sostiene a las familias, las comunidades y los países después de la debacle del socialismo, descansa ahora en contradicciones, ambigüedades e incertidumbres”.

Si las épocas anteriores se entendían en términos de comunismo contra capitalismo, economía de libre mercado contra planificación centralizada, o Estado Providencia contrapuesto a Estado Liberal. Hoy día los grandes mercados

mundiales derivan su orden de influencias donde la incertidumbre cumple un papel trascendental.

Antes se pensaba que la vida de los individuos y las sociedades se movía a partir de trayectorias lineales, pues la meta era llegar al socialismo sin clases sociales y sin Estado, o a la modernización latinoamericana con industrialización y pleno empleo. Ahora, el movimiento del mercado no es lineal, tiene equilibrios momentáneos, interrumpidos continuamente por súbitas aceleraciones o cambios de direcciones. El nuevo orden mundial revela que no todo es un solo tapete continuo y homogéneo. Nadie puede asegurar que si se adopta una medida, el resultado será exactamente igual al imaginado o previsto. La economía de mercado introduce a la complejidad que se manifiesta a través de la incertidumbre como aliciente para el riesgo.

Actuar sin *miedo* en el mercado mundial exige que la administración de políticas ya no se exprese en términos de esta opción o aquella otra, sino que incorpore la premisa: esta alternativa tanto como aquella.

Las decisiones políticas, por lo tanto, deberían aspirar a ser solamente un mecanismo de coordinación donde no hay certeza de que la evolución de los mercados mundiales pueda ser objeto de predicción mecánica. Las determinaciones que se toman deben considerar un margen enorme de incertidumbre, sin entenderla como algo negativo, sino más bien como una influencia que obliga a los gobiernos a poner en marcha reformas poco a poco, es decir, incrementales.

Así, la complejidad junto a la incertidumbre, obligan a poner en práctica una metodología por ensayo y error. Si se ejecuta una acción de cara al mercado

mundial, hay que tener conciencia de efectos no previstos y de la aparición del fracaso. Esto nos predispone, asimismo, para aprender de los errores y plantearnos nuevas alternativas.

Como afirman muchos reportes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “los países de América Latina comprenden cada vez mejor que el crecimiento y la prosperidad se encuentran subordinados a una necesidad imperiosa de incorporarse al mercado globalizado donde cada país pueda ofrecer lo que tiene, bajo el estímulo de la competencia, la calidad y la transformación productiva”. De ahí que cada país ya no deba replegarse sobre sí mismo, sino abrir sus horizontes. Por ello, América Latina está transitando de los viejos esquemas del Estado-Nación, el cual exigía un enfoque político doméstico, hacia los marcos del Estado-Región que comparte sus metas políticas, aspiraciones y mercados internos con otras naciones.

En los Estados-Región, la inversión extranjera y la propiedad son fundamentales, así como aquellas acciones innovadoras que permitan a los empresarios, nacionales o extranjeros, arriesgar estrategias que logren emplear productivamente a la población, mejorando la calidad de vida. El propósito central es que cada país logre conjurar la pobreza imperante, brindando acceso a productos mejores, más baratos y fomentando la equidad.

Sin embargo, es importante aclarar que los Estados-Región enfrentan retos, no sólo en el ámbito del mercado global, sino también al interior de las sociedades latinoamericanas. El conflicto social y la falta de consenso respecto a algunas medidas económicas y políticas se manifiestan con luz propia en Colombia, donde la represión del narcotráfico causa distorsiones que se expanden

a escala internacional. En Venezuela nadie quiere sufrir otro saqueo en masa como el que soportó durante el denominado *Caracazo* en 1990.

En Bolivia todavía subsisten sectores sindicales radicalizados que obstaculizan acciones de largo aliento. En Ecuador el sistema político sigue tambaleando por las amenazas de golpe de Estado. Todos estos problemas muestran que el *orden interno* y las particularidades específicas de cada sociedad civil en América Latina no se adaptan, automáticamente, a las influencias del sistema internacional de libre mercado.

Cada Estado-Nación debe replantear sus políticas, en términos de *equilibrio* en sus asuntos internos, promoviendo enormes dosis de consenso, así como sintonizando con el orden internacional para hacer más ágiles y óptimas sus posibilidades de éxito económico.

Las agendas de desarrollo económico y de relaciones internacionales, ponen en el tablero de la discusión las siguientes políticas: vender a la inversión extranjera una imagen de sociedad civil y orden interno donde existan pautas confiables de concertación entre diferentes actores sociales, a fin de reducir los riesgos de conflicto social. Esto contribuiría a tomar decisiones políticas que traten de controlar la incertidumbre sobre las consecuencias de las medidas asumidas, reduciendo al mínimo la complejidad.

Otro elemento central es asumir todo tipo de riesgos y adecuar los procesos internacionales al interior de las sociedades civiles, así como lograr que la gestión de los ajustes estructurales pueda combinar, con imaginación, la reducción de la pobreza, la utilización eficaz de créditos internacionales y una convocatoria atractiva para la inversión transnacional.

Solamente así es posible dar a conocer la imagen de un país que superó o hizo gobernables viejos esquemas de nacionalismo, garantizando estabilidad para mostrar que hay apertura hacia el mercado mundial. En este caso, los medios de comunicación, que muchas veces amplifican los conflictos haciendo de la sociedad un escenario teatral, pueden contribuir a la producción de consenso entre el Estado y los sindicatos, entre empresarios y partidos políticos, entre organizaciones de base e instituciones crediticias, labrando condiciones aptas de cara al escenario mundial.

Por último, es importante afirmar que el empresariado privado, al igual que los políticos, debe tener *legitimidad* ante la sociedad civil, para no ser visto solamente como un agregado de nuevos ricos. Un modelo de desarrollo original sin temor al mercado internacional, parece ser aquel que logre articular un conjunto de acciones políticas en las que se establezca un control eficaz de la complejidad, la incertidumbre y los acuerdos concertados. Sólo así se harán sostenibles las estructuras liberales y las reformas económicas con raíces profundas.

13. La Irrupción Del Nuevo Individualismo:

Enfrentando Lo Inevitable Sin Mesías Ni Utopías Colectivas

Existen circunstancias en las que fácilmente nos dejamos invadir por el desánimo y el escepticismo. La pérdida de un amor, el fracaso en algún proyecto, la decepción punzante cuando aquellos en quienes confiábamos, súbitamente se revelan como traidores o enemigos. Muchas veces, la realidad parece hundirnos en un pantano lleno de juncos de los cuales es imposible escapar, y prácticamente se ha hecho una costumbre sentirse sofocado por noticias sobre la crisis de valores o un vacío espiritual. Todo está fuera de control en medio del torbellino asfixiante con el que se alimenta nuestra sociedad contemporánea. ¿Estamos ante una encrucijada donde tenemos que escoger entre el individualismo y egoísmo a ultranza, o la solidaridad y renuncia a los intereses personales? ¿Hasta dónde es posible intervenir en la realidad que vivimos para cambiarla e influir sobre los demás? A estas preguntas es posible responder desde dos vertientes: la política y la ética.

La política, sin embargo, se mueve en aquel ámbito donde se cree que la historia puede funcionar en una dirección determinada, la cual promete una compensación última y una justicia universal. En este caso, fue Carlos Marx quien afirmaba que “los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintas maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo”. Así otorgaba a la política un rango superior para ejecutar la revolución que permitiría conquistar una sociedad sin Estado, sin clases sociales, sin explotación, sin alienación y donde el hombre, finalmente, alcanzaría una plenitud sin estar sujeto a la sociedad de consumo para desarrollar sus potencialidades hasta el infinito.

Estas visiones utópicas, mesiánicas y proféticas, hoy día están siendo reemplazadas por otro tipo de concepciones que plantean el regreso de la ética en términos

individualistas, pues todas las añoranzas por un orden colectivo igualitario, normalmente terminaron en la dominación de una élite dogmática que proclamaba justicia social para todos, pero practicaba una serie de privilegios solamente para la cúpula del partido político, supuestamente más esclarecido.

El fracaso de las utopías

Los sueños e imágenes sobre cómo superar las horribles condiciones de miseria, opresión o injusticia que se sufren en la sociedad siempre están teñidos de utopías e ilusiones por construir un mundo mejor. Toda utopía acaricia levemente nuestra voluntad para conducirnos, como un delicioso somnífero o una imperturbable hipnosis, hacia una especie de tierra prometida: el horizonte fulgurante de un *ningún lugar*. Un espacio ilusorio donde todo está en equilibrio y el tiempo se ha detenido para permitirnos, benevolente, gozar de la indulgencia de Dios en un caso, o de la gracia de un *orden político* en el que toda contradicción desapareció por completo.

Todos los proyectos para imaginar el nacimiento de una sociedad y un hombre o una mujer nuevos, están íntimamente relacionados con las utopías de un orden social perfecto o con la pretensión de alcanzar un paraíso celestial al lado de los dioses. Nada está tan hondamente arraigado en nosotros como la creencia en una ley del equilibrio entre el bien y el mal donde el Hombre nuevo beba eternamente los elixires del placer y la felicidad inacabables; es decir, el convencimiento de que el mundo en que vivimos tiende hacia un estado en el que el mérito y el trabajo, la culpa y el pecado se pagarán a un justo precio.

Las pretensiones por acariciar a un Hombre nuevo buscan que el mal sea castigado para que el bien encuentre su premio definitivo en el momento en que se ajusten cuentas

con toda injusticia. Esta búsqueda está cargada de mucha violencia y un deseo latente por cobrar *venganza* o revancha con la sociedad existente y con todos aquellos que son calificados –por razones de utopía– como herejes, rebeldes, malos o, simplemente, como obstáculos al sueño ilusorio de una sociedad perfecta.

El trasfondo de cualquier utopía o de la esperanza por una parusía que vaya a alumbrar al Hombre nuevo, está impregnado de fe y dogma en cuyo interior se transpira un solo imperativo: “Creo porque es absurdo”. De aquí nace el paralelismo y ensamblaje entre las utopías políticas y religiosas. En ambas situaciones se tiene la certeza de que el mundo fue creado *correctamente*, que el ser humano es bueno y, por lo tanto, también es correcto cumplir con los designios de Dios en la tierra, o con las metas infalibles que nos enseña el proyecto político, el partido y el movimiento social revolucionario. Las utopías políticas ensalzan a un sujeto trascendental: el Proletariado, el Desarrollo, la Modernización o la Clase social que, a la manera de un salvador justiciero, muestra el camino decisivo, limpiando todo el *estiércol* que habita en el mundo.

Lúcidos críticos de las utopías comunistas nos previenen, con acierto, que el ideal estético de toda utopía tiene su razón de ser en el encegucimiento de nuestra conciencia con los artificios de una sociedad y un proyecto político donde el *estiércol* es negado y todos se comportan como si no existiese. Este es el corazón de toda utopía: elimina de su médula espinal todo lo que en la existencia humana es, esencialmente, inaceptable desde el punto de vista de la doctrina utópica, convirtiéndose, al mismo tiempo, en un envoltorio del Poder o en una justificación para desencadenar la violencia en función de la toma del Poder.

Las utopías políticas hablan directamente al corazón, y aquel o aquellos que osen contradecirlas con la razón deberán ser sometidos a una purificación a fuerza de sangre y

fuego. Así nace el embrión intolerante de las utopías, desde las esperanzas por fundar el reino de Dios en la tierra pregonadas por una inquisición vengadora, hasta las campañas heroicas del Che Guevara o las guerrillas en Centroamérica que buscaban la destrucción del capitalismo. Éstas incluyen y reconocen a los seres humanos, solamente dentro de un *proyecto de Poder* por medio de una estrategia instrumental. Las utopías políticas son el Edén donde impera la dictadura del corazón y de las emociones intransigentes repitiendo, sin cesar, una sentencia: aquellos que no están conmigo, están contra mí.

Sí, las utopías políticas y religiosas derraman sangre a lo largo de la historia. Quienes las defendieron en su momento pensaron en liderizar a la humanidad amasándola en un solo movimiento para edificar un único Poder. Allí donde imperó un solo movimiento y un solo Poder nació, implacable, el imperio de la *utopía totalitaria*. Los ejemplos afloran fácilmente al pensar en las horrendas utopías y supersticiones de la Inquisición, el Comunismo, los cientos de Vietnam que quería reproducir el Che Guevara y los atroces genocidios del fundamentalismo islámico, tristes testimonios de aquella utopía totalitaria.

Todo lo que perturbaba la utopía o pretendía amenazar el advenimiento del hombre o la mujer nuevos era eliminado de la vida, porque en el reino de las utopías todo había que tomárselo muy en serio y poner en marcha los sacrificios más emprendedores, sobre todo a la hora de defender dogmas sagrados. Por encima de ellos nada tenía derecho de existir y, por lo tanto, los derechos humanos constituían un pretexto, tan sólo para arrastrar a las masas hacia la consecución de la Utopía Todopoderosa.

Hubo un tiempo en que la identidad de toda fuerza política de izquierda descansaba en su capacidad para forjar utopías. Una de ellas era construir la sociedad socialista donde el control de los medios de producción pasaba a manos de los trabajadores, donde el Estado

podía administrar los procesos económicos a través de una planificación centralizada y donde lo más importante radicaba en los esfuerzos por inaugurar una sociedad sin clases sociales y sin explotación.

La utopía socialista pronto aparecía estimulada por el fin histórico que iba a acabar con la llegada del comunismo, aquel momento único en el que recién comenzaría una nueva historia para la humanidad, pues todo lo demás quedaba encerrado en el sistema capitalista cuya razón de ser era entendida como una densa red de explotación. El comunismo imaginó jornadas épicas y sangrientas para las masas populares y los trabajadores.

El método político apuntaba hacia el despliegue de la violencia como partera de una nueva etapa histórica: la guerrilla revolucionaria que representaba el horizonte de los héroes como Lenin en la Rusia zarista, Mao Tsé Tung en China, Ho-Chi Min en Vietnam, Che Guevara, Camilo Cien Fuegos y Fidel Castro en Cuba, Sandino y Daniel Ortega en Nicaragua, Farabundo Martí en El Salvador, Kim Il Sung en Corea del Norte y Pol Pot en Camboya. Todos ellos capaces de lograr la destrucción del imperialismo, o convertirse en dictadores dispuestos a sacrificar los derechos humanos en nombre de la revolución mundial.

Las añoranzas de la utopía comunista tenían como fuente ideológica al marxismo, toda una teoría cargada de crítica hacia el orden existente, aspirando al mismo tiempo a reformar radicalmente al mundo humano. El marxismo fue convirtiéndose, entonces, en una forma idealizada y mistificada del cambio social. Para fundar el comunismo, la utopía debía convertirse en una táctica y en una estrategia; es decir, en un mecanismo de acción política cuyo vértice apuntaba a la organización de movimientos armados.

Cualquier movimiento guerrillero en América Latina y en Bolivia consideraba que la utopía comunista iba a pasar del terreno del pensamiento teórico y moral, al terreno del pensamiento práctico, a través de los movimientos insurgentes que marcharían hasta conquistar la revolución. La izquierda no podía existir sin utopía, así como la utopía no podía subsistir sin una acción política dirigida hacia la revolución.

Durante más de 70 años del siglo XX, las utopías guerrilleras fueron un instrumento para influir sobre la realidad, un recurso para planificar la praxis social. Sin embargo, hoy por hoy, casi nadie habla ya de revolución o comunismo, sino es para criticar los excesos y deformaciones ocasionados por el socialismo de los países del Este europeo.

La lección que se extrae de aquellos intentos por plasmar utopías políticas o religiosas apuntan hacia un solo efecto: la utopía quiere quitarnos aquello de lo cual estamos hechos: nuestra individualidad contradictoria, frágil, endeble, traicionera, a momentos despreciable y horripilante, obligándonos a ser menos hombres o mujeres, para convertirnos en semidioses que fundan los dominios de una pesadilla: una sociedad inexistente o un paraíso donde todo está acartonado por la ilusión de una imagen, una intuición, un arquetipo o una predicción, algo que nadie jamás comprobó, sino a través de los intentos comunistas e inquisidores que dieron paso a una guerra sin cuartel para destruir a los enemigos del orden nuevo. Los enemigos de la utopía jamás tenían derechos. En resumen, todo fue un engendro y una vil hipocresía donde el Hombre, como tal, desaparecía.

Los proyectos utópicos que imaginaban a un Hombre nuevo estuvieron relacionados con la equivocada idea de creer que todos nosotros tenemos, en el misterioso azar de nuestras vidas, una misión que cumplir: sea ésta la voluntad de Dios que pretende instaurar el Juicio Final para limpiarnos del pecado, las profecías ideológicas del viejo marxismo que

creía en el destino inexorable del proletariado como sujeto histórico de la revolución y el comunismo, o la victoria de Mahoma que ha de danzar sobre las víctimas rebeldes de la revolución islámica.

Sin embargo, nadie tiene una misión que cumplir y, por lo tanto, no hay razones justificadas para buscar en el mundo extrahumano utópico un sentido supremo de la existencia o una finalidad política de dudosa confiabilidad.

Tal como afirma el filósofo inglés Karl Popper, “los objetivos utópicos están destinados a ser la base de la acción política *irracional* y de toda discusión por un orden social supremo”¹²¹. Tal acción parece posible si se ha elegido definitivamente el objetivo: combatir a los enemigos. El utopista – político o religioso – debe conquistar y aplastar a los utopistas rivales que no comparten sus propios objetivos utópicos y no profesan su propia religión utópica.

Por más que los utopistas hayan tenido, al comienzo, buenas intenciones para estimular la voluntad de cambio, tarde o temprano caen en el agujero negro de la lógica de la intransigencia: maniqueísmo, simplificación extrema de posturas, ausencia de término medio entre adhesión fervorosa y radicalidad, organización de acciones militares, actitudes de desprecio a los derechos individuales. Manipulación de la información, doctrina del ojo por ojo, escalada permanente de acciones de castigo y supeditación progresiva de los representantes civiles a los especialistas bélicos.

Un crítico de los excesos políticos e ideológicos, el filósofo español Fernando Savater, expresa claramente cómo el enardecimiento de las utopías nubla toda racionalidad, “provoca una insensibilización progresiva ante la brutalidad o la muerte y enaltece un

¹²¹ POPPER, Karl R. “Utopía y violencia”; en: MUNIESA, Bernat (comp.). **Sociología de la utopía**, Hacer Editorial, Barcelona, 1992, p. 147 y ss.

drástico encomio de los valores superiores que justifican la violencia: honor, patria, hombre nuevo, revolución, etnias, cultura e identidad”¹²².

La violencia niega la respuesta y los derechos del otro. No es posible generar un diálogo ya que el enemigo de la utopía queda reducido a una cosa. Aquellos sobre quienes se ejerce violencia han de callar como muertos, sentencia el utopista.

Hoy día debemos desechar la posibilidad de abrigar utopías colectivistas y revolucionarias, sobre todo por los efectos perversos que provocaron en contra de los derechos humanos más elementales. Ya no es posible ni siquiera pensar en que el deseo por una sociedad ideal o un Hombre nuevo pueda servir para estimular la solidaridad o la piedad con los que sufren.

En todo caso, hay que trabajar para la eliminación de males concretos, antes que buscar la realización de bienes abstractos, esforzarse por acciones sociales y políticas de alcance medio. Uno (a) ya no tiene que buscar la felicidad por medios políticos o religiosos absolutistas, sino más bien tender a la eliminación de amenazas concretas hacia los derechos individuales, pensando siempre en que, de todas las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. Hay muchas situaciones inevitables y, en consecuencia, sería un absurdo intentar modificarlas a fuerza de violencia o creyendo que las utopías podrían instaurar una hermandad universal donde todos estemos de acuerdo absolutamente.

Es más saludable intentar luchar por el florecimiento del individuo libertario, por la realización de capacidades y derechos personales, antes que por utopías colectivistas. Cultivar la libertad de expresión y la tolerancia no siempre resulta fácil; solamente si abandonamos toda actitud autoritaria en el ámbito de la opinión, sólo si adoptamos la

¹²² SAVATER, Fernando. **La tarea del héroe**, Ariel, Barcelona, 1993, p. 228.

actitud de toma y daca, así como la disposición de aprender de otras personas, podemos abrigar la esperanza de refrenar los actos de violencia inspirados por el proyecto utópico del Hombre nuevo y por el falso sentido del deber hacia un Estado y una sociedad sin contradicciones que anulan el respeto a los derechos.

Lo contrario a los excesos e ilusiones ingenuas sobre el Hombre nuevo, utópico y revolucionario, es la libertad individual que busca y realiza acciones concretas para eliminar males específicos. Puede ser que no tengamos libertad completa para conseguir esto o aquello, pero sí libertad para hacer lo necesario o no hacer nada. Libertad para reconocer la igualdad entre todos los hombres, “(...) pero no por la razón supuestamente bien repartida entre todos ellos, sino por su concreción, por su personalidad, individualidad e identidad. Y así establecer que los hombres son iguales entre sí, por ser distintos. Y que es esta distinción, individualidad o identidad de cada hombre y de cada pueblo como conjunto de hombres la que ha de ser respetada y garantizada”¹²³.

Esto nos lleva a reconciliarnos con una reflexión del poeta y ensayista mexicano Octavio Paz, auténtico defensor de la tolerancia humana: “la libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de la conciencia que nos lleva en ciertos momentos, a pronunciar dos monosílabos: sí o no. En su brevedad instantánea, como la luz del relámpago, se dibuja el signo contradictorio de la naturaleza humana”¹²⁴. Esta puede ser la búsqueda de un sentido pacífico para nuestra existencia y una oportunidad abierta a la responsabilidad de seguir viviendo cueste lo que cueste.

¹²³ ZEA, Leopoldo. **Fin de siglo XX. ¿Centuria perdida?**, Fondo de Cultura Económica, Tierra Firme, México, 1996, p. 85.

¹²⁴ Citado en: SAVATER, Fernando. **Ética para amador**, Ariel, Barcelona, 1993, p.55.

El cambio de sentido en la brújula

Hoy están totalmente devaluados los proyectos políticos para cambiar la sociedad de un solo golpe. Frente a esto se abre paso un mar de alternativas individualistas que van desde la oferta de una serie de religiones, hasta la reivindicación del valor de la razón como el mejor instrumento para justificar nuestras decisiones y dialogar con uno mismo. El actual clima cultural nuevamente plantea la necesidad de regir nuestra vida por medio de códigos éticos o apelando a innumerables fuerzas trascendentales. En este caso, resulta llamativo comprobar que han regresado las viejas discusiones sobre una crisis de valores, cuyo único objetivo es encontrar consuelo para los hombres con la promesa de un final feliz hacia el que se encaminen nuestros sufrimientos y fatigas. Dicha crisis de valores desestima, sin embargo, a la política como antídoto para conseguir un *más allá* gratificante.

Por lo tanto, ya no es posible intervenir en la realidad social para cambiar las cosas o aliviar las injusticias. A lo mucho que podemos aspirar es a hacer de este mundo un espacio humanamente soportable, por lo que es importante retomar un viejo principio de la filosofía estoicista: “de las cosas, unas dependen de nosotros, y otras, no” ¡Algo muy trivial! Sin embargo, a esta aparente trivialidad deberíamos habituarnos cuanto antes. Sobre tal reflexión, el pensador Leszek Kolakowski explica que “existe un conjunto de situaciones que no somos capaces de configurar en modo alguno (...); no es posible hacerse inmortal ni lograr que el rostro del mundo se modifique en una hora. Sabemos con seguridad que hay muchas realidades inevitables, cosas dadas en la vida, condiciones que tenemos que aceptar (más de las que deseamos). Tenemos que adaptarnos a lo evidentemente inevitable”¹²⁵.

¹²⁵ KOLAKOVSKI, Leszek. **El hombre sin alternativa**, Alianza, Madrid, 1970.

De aquí viene otra vez la necesidad individual para acoger valores que tranquilicen nuestra desesperación frente a lo “inevitable en la vida”. Asimismo, quienes hablan de la crisis de valores piensan que éstos están desapareciendo vertiginosamente y, por lo tanto, parecería necesario inventar valores más portentosos para sentirse seguros. En el fondo, solamente se trata de una obsesión para entregar la vida a nuevos dogmas.

No existe una crisis de valores, tan sólo el deseo de encontrar posibles explicaciones a situaciones que aparecen frente a nosotros como inevitables. Hoy día, los valores están ahí, en una cantera inagotable a la que todos pueden acercarse y escoger según su provecho. Esto es sumamente positivo: uno puede elegir, de acuerdo con sus intereses personales y conveniencias, qué valores le vienen mejor para vivir con relativa plenitud. A su vez, sólo se puede escoger para uno mismo y no para los otros porque, definitivamente, ya no hay posibilidad de caminar colectivamente tratando de cambiar el estado de cosas.

¿Cómo puede uno, o un grupo de personas, saber a ciencia cierta lo que conviene a los otros? ¿Por qué tendríamos que estar sujetos a las ambiciones de aquellos que, supuestamente, quieren el bien para todos? ¿No será que detrás del discurso de quien pregona moralidad y justicia social, también se esconde un arsenal de egoísmos e immoralidades disfrazadas?

Al mismo tiempo, la lógica del individualismo actual provoca ciertos espejismos, como por ejemplo pensar solamente en los momentos de placer donde nos empujan los medios de comunicación y nuestra sociedad materialista. Esto no afianza una actitud racional respecto a lo inevitable, sino que favorece la pereza, conservadurismo, desidia y una profunda irresponsabilidad, de tal manera que un excesivo culto al goce y a una lascivia desordenada se convierte en un escudo detrás del cual se esconde el miedo de enfrentar nuestra vida con responsabilidad y creación personal.

Desde esta perspectiva, los principios estoicos revelan una vez más cierta utilidad: “aquellas circunstancias que en la práctica cotidiana se muestran como evidentemente rígidas, debemos afirmarlas mediante una reflexión racional, hasta que dejen de producir desesperación, sufrimiento y esperanza ciega”¹²⁶, no a través de la búsqueda de los placeres voluptuosos a como dé lugar o por medio de la irresponsabilidad con uno mismo.

La política no nos brindará nunca más un mañana mejor y la religión sólo calentará nuestra mente con un bálsamo bíblico. Lo que sí nos hace enfrentar el día a día, es una actitud para *imaginar* escenarios probables donde podríamos actuar con creatividad. En el fondo, los estoicos quieren mostrar que vale más el individuo libre y racional que el aventurero ingenuo. Por lo tanto, también aconsejan “no aceptar precipitada e irreflexivamente nada como inevitable”.

Actualmente se vive el peligro de la irresponsabilidad, el cómodo apego a responsabilizar a los otros por la pesada carga que llevamos. Se impone cada vez más la tendencia a buscar culpables porque queremos eximirnos de nuestros errores o, finalmente, arrimarnos al regazo de líderes carismáticos y autoritarios tratando de construir un mito del refugio, sin darnos cuenta que lo más saludable hoy día es desconfiar de todo aventurerismo con promesas estúpidas sobre el cambio social y descreer del sin fin de escapismos que muestran los medios de comunicación. Llegó la hora de practicar el individualismo libertario que tenga el coraje de no resignarse a vivir con lo inevitable.

¹²⁶ KOLAKOVSKI, Leszek, ob. cit., p. 224.